



# CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1852

CONSTITUCION DE 1852



Por el

Dr. EDUARDO A. IBARRA



Prólogo del

Dr. ALEJANDRO RUZO

Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  
de la Universidad de Buenos Aires



Estab. Gráf. ENRIQUE L. FRIGERIO é Hijo  
BUENOS AIRES

1933

## OBRAS DEL AUTOR

---

HABEAS CORPUS. — Tesis para optar al grado de doctor en Jurisprudencia. Año 1920.

CUESTIONES SOBRE MEDIANERÍA. — Año 1925.

INSTRUCCIÓN CÍVICA. — Año 1926.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. — Año 1930.



# PROLOGO



*ES una manifestación de sano patriotismo, especialmente en épocas de infiltración de tan difundidas y opuestas doctrinas destructoras de la nacionalidad, investigar y difundir las bases de la organización constitucional de la República. El Dr. Eduardo A. Ibarra, autor ya de otros estudios similares y de verdadero aliento, dedica este libro a exponer la organización y funcionamiento del Congreso Constituyente de 1852 de cuyas deliberaciones nació la Constitución de 1853, carta política fundamental de organización definitiva de la Nación. Con solo decir que la edición oficial de las actas del Congreso se encuentra agotada siendo frecuente no encontrar ejemplares para consulta ni aún en bibliotecas oficiales, se destaca la trascendencia y el interés público que el autor de este libro satisface, dominado por un objetivo de bien común, antes que por el anhelo del éxito, siquiera fuera espiritual, de una producción científica.*

*Las páginas de este libro tienen un vigor y un acento de verdad y sinceridad que lo impondrán a la crítica imparcial. El ambiente de la época inicial del histórico Congreso se encuentra descripto con absoluta propiedad, trascendiendo la emoción del pueblo ante la inminencia de llegar a la conquista de normas constitucionales escritas que cimentaran para siempre los principios democráticos de igualdad y libertad que guiaron la conciencia pública, alimentando el fervor patriótico desde 1810. Con razón pudo decir el general Urquiza en la proclama que al iniciar sus sesiones dirigiera al Congreso: "Constitución para la República, llevaba escrito en mis banderas y en el general D. Juan Manuel de Rosas se venció el principal obstáculo para la realización de ese voto, sofocado, pero vivo, en todo nuestro territorio, desde el litoral hasta las cordilleras". Bajo la inspiración de que no existía en el país un anhelo superior al expresado, pudo,*





asimismo, en su elocuente discurso, pletórico de patrióticas expresiones, responderle el Presidente del Congreso, doctor Facundo Zuviría: "Decidle que nuestras deliberaciones substancialmente reducidas a formular en una carta constitucional el programa de los pueblos, corresponderán, sin duda, a sus deseos, porque sus deseos hasta hoy expresados, hoy consignados en el documento que nos dirige, no son sino el resumen de los deseos, de las ideas y de los sentimientos de los pueblos que representamos."

Muchas páginas ha motivado el Congreso Constituyente en los comentarios de la historia nacional, polémicas y disquisiciones ilustrativas se han suscitado y escrito por publicistas de reputación incuestionable; pero, la obra del doctor Ibarra tiene el mérito especial de enseñar objetivamente el desarrollo de sucesos cuya documentación no ha sido entregada al juicio público. Su espíritu de investigador lo ha guiado hacia las fuentes originarias de piezas y antecedentes que obligarán en unos casos a confirmar los conceptos expuestos en libros anteriores escritos con objetivos similar al presente y en no pocos a rectificarlos para dar paso a la verdad que brilla y se impone a su mérito, desprovista de todo apasionamiento, sin otro norte que la probidad propia de los estudiosos.

Para la enseñanza de la historia constitucional de la República y la interpretación de cláusulas de la misma Constitución, el libro del Dr. Ibarra, será un auxiliar imprescindible y para la difusión de la moral política, traduciendo sus páginas el fervor patriótico de los ciudadanos que integraron aquel Congreso y de la generación de la época, será una fuente de inapreciable valor.

La Constitución, después de regir más de tres cuartos de siglo la vida del país, requiere, sin duda, reformas fundamentales y si bien el trabajo del Dr. Ibarra no es de derecho constitucional comprensivo de las nuevas orientaciones del mismo, la exposición que encierra de la elaboración formal de la carta fundamental, será de utilidad para desprender los propósitos de los constituyentes y habiendo sido éstos de tan amplios horizontes, traducidos en un liberalismo acaso no igualado en legislaciones de la época, su adaptación a los nuevos tiempos no implicaría transformaciones destructoras de las matrices del organismo inicial, sino más bien, variantes ya previstas por los patriotas que integraban el Congreso Constituyente.

*Enseñemos y defendamos, mientras tanto, nuestra Constitución, como síntesis del supremo bienestar de la nacionalidad. El gobierno de hecho que rigió los destinos del país durante un año y medio, habiendo surgido de una revolución, no llegó al extremo en que cayeron otras situaciones de "facto", de eliminar la carta política fundamental del Estado. Ella se encuentra hoy, felizmente, en su vigor integral, resguardada por la conciencia y la entereza de los argentinos. Si los gobiernos tienen también la virtud de aplicarla severamente como el catecismo institucional, los fenómenos sociales y políticos, por trascendentales que sean, pasarán como episodios propios de toda colectividad en cuyo seno no se coartan las ideas. Pero, su defensa para ser consciente, requiere su plena comprensión y es a esto a lo que tiende el encomiable trabajo del Dr. Ibarra, revelando su fuente directa y la forma como sus autores adaptaron al nuevo medio los precedentes y doctrinas de otros pueblos.*

ALEJANDRO RUZO





## CAPITULO I

Congreso Constituyente de 1852. — Antecedentes. — La ciudad de Santa Fe: su ambiente. — Sesiones preparatorias del Congreso Constituyente. — Instalación del Congreso Constituyente. — Discurso inaugural del Congreso Constituyente enviado por el general Urquiza. — Discurso del Presidente del Congreso Constituyente, doctor Facundo Zuviría.



### *Congreso Constituyente de 1852. Antecedentes.*

— El general Urquiza había manifestado que el único propósito que lo había guiado al pronunciarse contra Rosas, era el de facilitar la organización nacional. Con este fin, después de Caseros, envió una circular a los gobernadores de las provincias, invitándolos a un Acuerdo que se celebró en San Nicolás de los Arroyos el 31 de mayo de 1852, donde se fijaron las bases para la definitiva organización constitucional de la República.

La Legislatura provincial de Buenos Aires, rechazó el Acuerdo de San Nicolás, por una resistencia personal contra el general Urquiza, y no concurrió a la ciudad de Santa Fe, fijada como asiento del Congreso Constituyente, quedando, a raíz de la Revolución del 11 de septiembre de 1852, separada momentáneamente de la Federación Argentina.

El Director Provisorio dictó, en Paraná, un decreto fechado el 8 de noviembre de 1852, señalando el día 20 del mismo mes y año para la instalación del Congreso Constituyente, en la ciudad de Santa Fe. Dicho decreto establecía: "Hallándose ya reunidos los diputados de doce de las provincias confederadas, convocadas al Congreso general constituyente, con arreglo a las disposiciones del acuerdo del 31 de mayo en San Nicolás de los Arroyos. Considerando que es una necesidad urgente para la República, proceder a la instalación del Congreso general de la nación, en conformidad con el voto uniforme de todos los pueblos argentinos; y



que los diputados de la provincia de San Juan, únicos que aun no están incorporados, lo estarán a tiempo de poder tomar la parte que les corresponde en las deliberaciones de esta augusta corporación; haciendo uso de las facultades que le están conferidas por el mencionado acuerdo de todas las provincias, ha resuelto y decreta:

Artículo 1º — El Congreso general constituyente de las provincias de la Confederación Argentina, será instalado solemnemente, por el Director provisorio, en el día 20 del presente mes, en la ciudad de Santa Fe.

Art. 2º — Los diputados de las provincias presentes, serán invitados a reunirse en sesiones preparatorias, con el objeto de examinar los poderes respectivos y nombrar de entre sus miembros el que haya de desempeñar las funciones de presidente del acto.

3º Queda encargado el Excmo. señor gobernador de la provincia de Santa Fe, de ordenar el arreglo del local necesario para la instalación del Congreso y las oficinas para su despacho.

4º El día 20 del presente mes, será considerado fiesta nacional en todas las provincias. Los gobiernos de aquéllas a quiénes no pueda llegar oportunamente la comunicación de este decreto, designarán un día inmediato a su recepción que deberá considerarse como fiesta nacional, por la instalación del Congreso constituyente..

5º El Director provisorio y los diputados al Congreso, concurrirán el mismo día 20, a un solemne Te-Deum, en la iglesia matriz de Santa Fe, antes de proceder al acto de instalación.

6º Por el ministerio de relaciones exteriores, se comunicará el presente decreto a todos los diputados, a los gobiernos de las provincias confederadas y a los agentes diplomáticos extranjeros acreditados cerca del gobierno de la Confederación y a los de ésta, residentes en el extranjero."

*La ciudad de Santa Fe. Su ambiente.* — La ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de su nombre, designada en el Acuerdo de San Nicolás (Art. 11) como lugar para la convocatoria del Congreso constituyente, tenía la ventaja de ser una ciudad apacible y tranquila; su ambiente era propicio para la meditación serena, para las profundas reflexiones del



espíritu, substraída a la influencia de las agitaciones populares, al tumulto de las pasiones y a las veleidades virulentas y fugaces de la multitud.

“La ciudad de Santa Fe vivía en el aislamiento casi insular de su ubicación, gozando de las quietudes de las siestas y de los encantos de su naturaleza tropical, cuya opulencia invitaba tanto a las languideces de una contemplación perpetua, como a las sacudidas del amor en su faz sentimental y demográfica. Allá por el año 53, y según las referencias del señor Crespo, mi cronista, la ciudad no era sino un reducido damero de calles silenciosas, en cuyas calzadas de acolchonados arenales, se extendían flanqueadas por largos tapiales de adobe, sobre cuyos bordes erizados de cachos de botellas, asomaban perpetuamente su copa verdeante, los naranjos, junto con los rojos techos de teja, bajo cuya protección se deslizaba la vida de las familias, tejiendo la urdimbre moral de las costumbres patriarcales.”

“Concluídos los afanes religiosos y administrativos de la mañana, por la tarde, siestas sin jerarquías sociales, sumían a la ciudad en un silencio de tumba, sólo turbado por el confuso piar de los gallineros y el lento y apagado paso de algún caballo, cuyo jinete desafiaba los rigores de la canícula. A la oración, se abrían las ventanas, a cuyas rejías se asomaban las beldades de la época, luciendo sus clarines estivales, moteados de lunares rojos o de florecitas diminutas, manteniendo pláticas con algún galán amigo, jinete en pingo bueno para las empresas tranquilas, como para las escapadas de alguna aventura suburbana y tapialera. Después, todo el mundo acudía al Campito, clásica playa del río de Santa Fe, donde colgados de las colas de los caballos o maniobrando sobre las defensas de vejigas y porongos, señoras y caballeros, separados por públicas distancias, gobernador y magistrados, ricos y pobres se entregaban mezclados a los placeres del baño y la natación, con aquella inocente actitud de los grupos idílicos que pintaran Poussin y Vernet, para rematar el chapuzón con el ataque de alguna sandía. Rinconera lujuriosa de color y pletórica de azucarada pulpa.”

“Todo el orgullo arquitectónico de la ciudad lo constituían las casas de alto que aun se encuentran en las calles 9 de Julio y general López, 3 de Febrero y San Jerónimo, San Martín y general López, etc., mientras que el edilicio se reducía a la Plaza de Mayo, rodeada por el noble pórtico de la Merced, la Catedral, y sobre todo, por el Cabildo, cuyas gale-

rías a falta de sitios propicios, eran el punto consagrado para los corrillos de la época." (1)

Tal era el ambiente social de la ciudad fijada como lugar para asiento del Congreso Constituyente, y que tenía además la ventaja por su situación, poder sesionar bajo la égida del vencedor de Caseros. Era, por consiguiente, de esperar de él, la fórmula constitucional duradera y fecunda largo tiempo anhelada por el país. Muchos de sus hombres habían participado en los negocios públicos de la nación y de las provincias. Tenían el caudal de experiencia necesaria como para no malograr la obra grandiosa que se les encomendara, de constituir la república, darle la ley suprema que rigiera sus destinos, asegurando la paz, la libertad y el progreso de la nacionalidad argentina.

*Sesiones preparatorias del Congreso Constituyente.* — Mientras tanto los diputados que habían concurrido al Congreso de Santa Fe, celebraron su primera sesión preparatoria el día 15 de noviembre de 1852. Estuvieron presentes en esa sesión: José Manuel Pérez, Eusebio Blanco, Juan del Campillo, Pedro Díaz Colodrero, Agustín Delgado, Adeodato de Gondra, Juan María Gutiérrez, Delfín B. Huergo, Manuel Leiva, Benjamín J. Lavaisse, Manuel Padilla, José Quintana, Luciano Torrent, Clemente J. Villada, Salustiano Zavalía, Pedro Centeno y Facundo Zuvería. Se nombró presidente provisorio al padre Fray Manuel Pérez, por ser el más anciano y secretario interino al doctor Delfín B. Huergo, el más joven de los congresales. (2)

---

(1) Edmundo J. Rosas, *El Soberano Congreso Constituyente del 53*, "La Nación", Abril 30 de 1920.

(2) En las sesiones posteriores se incorporaron los demás diputados que integraron el Congreso. Los poderes de los diputados José Benjamín Gorostiaga y Juan Francisco Seguí, fueron aprobados el 18 de noviembre de 1852; los del diputado José Ruperto Pérez, el 19 de noviembre; el general Pedro Ferré se incorporó el 22 de diciembre; el doctor Regis Martínez el 5 de enero de 1853; los diputados Salvador María del Carril, Ruperto Godoy y Martín Zapata, el 9 de febrero; el doctor Santiago Derqui el 19 de febrero; el diputado Juan Llerena el 27 de abril; el diputado Gondra renunció el 19 de enero de 1853; Fray Manuel Pérez, por nota fechada el 26 de abril de 1853, comunicó al Presidente del Congreso su retiro del mismo pero por no haber sido considerada su renuncia firmó la Constitución el 1º de mayo, apesar de haber estado ausente durante la discusión y sanción de más de las tres cuartas partes de la misma.



El Presidente provisorio, nombró una comisión encargada de examinar los poderes de los diputados, compuesta por del Campillo, Zavala, Delgado, Lavaisse y Gondra y otra comisión de tres miembros encargada de dictaminar sobre los poderes de los diputados de la comisión mencionada, de la que formaron parte: Quintana, Padilla y Villada. Las expresadas comisiones se expidieron al día siguiente acerca de la tarea encomendada, pronunciándose por la aprobación de los diplomas presentados, lo que fué resuelto en ese sentido. El Congreso en esa misma sesión resolvió que el nombramiento del presidente se reservaría para la última sesión preparatoria y que el que resultara electo dispondría las medidas que creyera conveniente para el mejor desarrollo del acto el día de la instalación del Congreso Constituyente. Luego se nombró una comisión integrada por del Campillo, Gondra y Lavaisse, encargada de redactar la fórmula del juramento que deberían prestar los diputados. En esa ocasión, el doctor Zuviría, expresó su concepto acerca del mismo para que la referida comisión lo tomara en consideración si lo creía oportuno, dijo: "Que hoy más que nunca, en los momentos solemnes en que se halla la República, y cuando una provincia había dado el escándalo de la desunión, convenía que el juramento no fuese una vana fórmula repetida. Que el diputado, al tomar posesión de su cargo, debía jurar sostener a toda costa la integridad del territorio contra toda usurpación, sostener la unión y la nacionalidad argentina, desprenderse de todo sentimiento mezquino de toda nacionalidad y al tomar posesión de su cargo, dejar de ser representante de una provincia, para ser representante de la nación. Que esos eran sus sentimientos y que estaba dispuesto a jurar así, con la mano puesta sobre la cruz, y sacrificar los leves días que le quedaban de vida, por sostener ese juramento."

En la sesión del 18 de noviembre se aprobó la fórmula del juramento que deberían prestar los diputados el día de la instalación del Congreso Constituyente. Se procedió luego a nombrar el presidente del cuerpo, recayendo la elección en el Doctor Facundo Zuviría; Vicepresidente fué elegido el Doctor Manuel Leiva y Secretarios: Juan Francisco Seguí y Delfín B. Huergo.

El 19 de noviembre, el Congreso celebró su última sesión preparatoria. El presidente informó haber recibido una nota del gobernador de Santa Fe, don Domingo Crespo en la que le comunicaba haber sido autorizado por el general





Urquiza, para hacer al día siguiente la instalación del Congreso Constituyente. Agradeció luego el doctor Zuviría, a los miembros de esa corporación la confianza y el honor que en él depositaban al encargarlo contestar el discurso del representante de Urquiza, el día de la constitución del cuerpo, invitándolos con ese objeto a concurrir al día siguiente, a las 10.30 de la mañana, al salón del Congreso para prestar juramento, recibir al gobernador de Santa Fe y concurrir después a la misa con Te-Deum que iba a celebrarse en acción de gracias.

*Instalación del Congreso Constituyente.* — El 18 de noviembre de 1852, el general Urquiza, en Paraná, dictó un decreto en el cual decía que debiendo partir al frente del ejército de las Provincias para repeler la invasión de las tropas de Buenos Aires, y a fin de que no fuera retardada la instalación del Congreso Constituyente, haciendo uso de las facultades que le habían sido conferidas en el Acuerdo de San Nicolás, delegaba en el gobernador de Santa Fe, don Domingo Crespo, la facultad de hacer la solemne instalación del Congreso, el 20 de noviembre. Ese día el Presidente, doctor Zuviría, con la mano puesta sobre los evangelios prestó juramento de acuerdo con la fórmula sancionada, diciendo: "En presencia de Dios, juro a la patria por estos Santos Evangelios, desempeñar, según los dictados de mi conciencia, el cargo de diputado al Congreso Nacional Constituyente, emplear todos mis esfuerzos para dar a la Nación, la Constitución más conforme a las necesidades y a sus votos con arreglo a los pactos existentes y sostener la nacionalidad argentina, propendiendo al mismo tiempo, a consolidarla, por la fraternidad de todas las provincias, por el amor recíproco de sus hijos, por la conservación de su libertad interior, independencia exterior e integridad territorial y por el progreso moral, intelectual y material que caracteriza la civilización." En seguida prestaron juramento sucesivamente los diputados.

Se procedió, luego, a la recepción del representante del general Urquiza, don Domingo Crespo, quién entró al recinto del Congreso acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores del Director provisorio, doctor Luis J. de la Peña.



*Discurso inaugural del Congreso Constituyente enviado por el general Urquiza.* — En seguida el delegado del general Urquiza pidió permiso al Congreso para encomendar al Ministro de Relaciones Exteriores, la lectura del discurso que el vencedor de Rosas dirigía a los representantes del pueblo, y que decía así:

Augustos diputados de la Nación:

Saludo en vosotros a la Nación Argentina y la felicito en vosotros, con toda la efusión de que es capaz mi alma.

El deseo de muchos años se cumple en este día. Los gobiernos del litoral descansan hoy del peso de sus compromisos contraídos desde 1831.

Tributemos nuestra gratitud a la Divina Providencia, por tan señalados beneficios!

En este día solemne para todo argentino, delante de vosotros, ante el país de que sois la personificación, me es un deber grato hablaros de los antecedentes que han preparado vuestra instalación en el Congreso. Diré algunas palabras de mí mismo. Ellas serán mi defensa y lo serán también, en parte, del país de nuestro nacimiento. Los que no me han comprendido, me calumnian. Los enconos de partido, ofuscan la verdad. Mientras tanto, yo he sido un soldado leal a mi bandera, un patriota de conciencia, y, por fortuna también, a pesar de muchos errores y desgracias, hoy, en el seno de la paz y en la necesidad de amarnos como hermanos, yo el primero, puedo adelantarme a reconocer que los argentinos, si han podido equivocarse y extraviarse, no han dejado de ser patriotas nobles y valientes. Yo, el primero, acato todas nuestras glorias, venero todos nuestros mártires, respeto todos los talentos, sea cual fuere la bandera de división doméstica en que se ilustraron.

Vosotros vais a reconstituir la patria, a restablecer el pacto de la familia dispersa, y yo, el primero, me adelanto a abrazar a mis hermanos y a venerar a mis antepasados.

Como gobernador de Entre Ríos, he quitado el lema de ¡Muerte! a las nobles divisas federales desde el 1º de mayo de 1851. Como Director del estado, he abolido la confiscación de la propiedad y reservado a Dios y a la justicia ordinaria, el derecho de disponer de la vida de nuestros compatriotas.

Mi conciencia me ha dictado siempre estos consejos, pero la guerra tenaz que nos ha dividido, alejaba de la República



el reino de la justicia, que sólo impera cuando las pasiones se aquietan.

El título de gobernador de la provincia de Entre Ríos, me impuso una obligación sagrada, la de constituir la nación bajo el sistema federal, tan luego como la pacificación de ella lo hiciese posible.

Esta era la voluntad expresada por los gobiernos. Los sucesos han demostrado después, que también era la voluntad de los pueblos.

Esa larga lucha que hemos sostenido entre hermanos, lucha heroica, embellecida con actos sublimes de valentía y desprendimiento, no era una lucha insensata y al acaso; era la pugna de los principios políticos que no acertaron a capitalizar y se disputaron el triunfo.

Un hombre astuto y favorecido por su posición, quiso monopolizar el triunfo de una de estas ideas. Usurpó el lustre de victorias ajenas y, mal hermano, como gobernante egoísta, se negó con malicia a darnos participación de sus ventajas, exageró en realidad, el principio unitario, rechazado por la mayoría, y pretendió con dilaciones y dificultades que él mismo creaba, apartar el cumplimiento del pacto federal a que estaba inmediatamente comprometido por el tratado de 4 de enero de 1831.

El 1º de mayo de 1851, hice palpable a la nación esta falsía del gobernador de Buenos Aires. Yo le quité la máscara hipócrita, y anuncié a mis compatriotas que era necesario cortar, con la caída de su poder, la raíz de nuestros males, de nuestra miseria y nuestro descrédito.

La providencia favoreció mi designio. La bondad de mi causa dió persuasión a mi palabra y valor a mis soldados. Suscitó alianzas, alcancé empréstitos y me capté la confianza de todos los argentinos. A mi rededor, se juntaron los buenos y los libres de todas las opiniones. Resolví por las armas, en el sentido de la libertad y de la justicia, la larga y ensagrentada cuestión pendiente delante de Montevideo, y de buen éxito en buen éxito, llegué hasta las puertas de Buenos Aires, al frente del grande ejército aliado. Honorables diputados del Congreso Constituyente: Permitidme que no explique como militar ni como general en jefe, las operaciones y el resultado final de estas campañas, coronadas con la jornada del 3 de febrero último, en los campos de Morón y Monte Caseros.



Los vítores y los aplausos entusiastas de los pueblos argentinos, no pueden obligarme a violentar la modestia de mi carácter.

Pero la razón y la práctica de las cosas públicas, me han demostrado que la espada de un militar honrado debe ser el instrumento de una idea y el apoyo de un principio político.

El pronunciamiento del 1º de mayo, que hice a las márgenes del Paraná, tuvo su cumplimiento el día 3 de febrero, a las orillas del Plata.

“Constitución para la República”, llevaba escrito en mis banderas, y en el general don Juan Manuel de Rosas se venció el principal obstáculo para la realización de ese voto. sofocado, pero vivo en todo nuestro territorio, desde el litoral hasta las cordilleras.

Otros obstáculos quedaban que vencer, obstáculos morales, fruto del aislamiento, de la división armada de las opiniones, de la ignorancia de los verdaderos intereses, de los instintos locales y de una administración corrompida y tiránica. La fuente de estos vicios había manado con mayor abundancia su veneno bajo la mano inmediata de Rosas.

Antagonista de su política, tomé un rumbo opuesto, para dar uniformidad a los espíritus y a los intereses. La intolerancia, la persecución, el exterminio, fueron la base de su política; y yo adopté por divisa de la mía, *el olvido de todo lo pasado y la fusión de los partidos*.

No quise hacer ostentación de un triunfo sobre hermanos, sino hacerme garante de una capitulación entre miembros de una misma familia. Yo no he juzgado durante mi residencia en Buenos Aires, las opiniones, ni medido los hombres por sus antecedentes políticos. La sangre derramada en Caseros, en nombre de la libertad, era demasiado noble para que sirviese a otro objeto que el de redimir a los argentinos de sus pasados errores.

Cuando la calumnia interpreta mal mis hechos, es mi obligación vindicarlos, no tanto por mí, cuanto por vosotros, cuanto por la República, cuanto por vuestros gobiernos, que me invistieron con el carácter de Director provisorio.

Loco y traidor me llamó el tirano, y yo le contesté con el silencio del desprecio. No puedo ahora sino contestar con el mismo lenguaje, a los que me llaman sanguinario y ambicioso.



El movimiento subversivo del 11 de septiembre en Buenos Aires, desmoralizó una parte del ejército victorioso que llevé a aquella provincia.

Hombres a quienes llené de honores y recompensas, en nombre de la patria salvada, ciudadanos oprimidos, expoliados, expatriados, a quienes mis esfuerzos habían restituído la libertad, la propiedad, el hogar de la familia, se han hecho cómplices de aquel motín, lo han excitado, y para justificarse, me calumnian.

No, soberanos representantes de los pueblos; mi conciencia está tranquila y os afirmo, bajo mi palabra de honor, que no he contradicho ni por un momento mis intenciones. He sido, lo soy, y seré argentino antes que todo.

Yo he dejado libre de toda influencia la voluntad de los pueblos que representáis. Ellos se gobiernan según sus instituciones y a medida de sus deseos. ¿Por qué había de querer hacer una excepción con el pueblo de Buenos Aires, tanto más simpático para mí, cuanto que era el más inmediatamente favorecido con mi buena fortuna?

Al derrotar a su tirano, puse las riendas de su gobierno en manos de las mismas personas que el pueblo mandó a implorar mi clemencia, creyendo que tendría la flaqueza de tratarlo como a vencido.

Yo, federal en principios, no quise mirar sino patriotas en los primeros consejeros del gobierno provisorio de Buenos Aires, aunque salidos de las filas que había combatido.

¿Por qué?

Porque en decreto dado por mí, como gobernador de Entre Ríos, había dicho "que el sistema unitario podía considerarse como inadecuado al país, pero no como criminal, y que los herederos de la gloria de una misma revolución, debían cubrir con un denso velo los pasados errores". Así se realizaba el principio de la fusión y se armonizaban los pareceres contrarios sobre el modo de entender la organización, objeto principal de mis designios.

Porque he querido y quiero que no formemos sino una sola familia, para que todos a una levantemos la patria a la altura, grandeza y prosperidad a que está llamada.

No fui comprendido como hubiera deseado. Tan asustadizo y vivo estaba el espíritu de partido, que confundió la divisa federal de mis armas con el lema sangriento del tirano. No castigué como un preboste, y se me creyó tolerante del crimen. Ocupado exclusivamente de crear y de ayudar a cons-



tituirla nación, se me hizo distraer de esta obra y de comprometer lo ya hecho en ella, con susceptibilidades provinciales, representadas por un cuerpo no sujeto a ley alguna orgánica, y que ha sido juzgado por sus propios parciales como una dictadura.

La legislatura provincial de Buenos Aires se apartó de la voluntad argentina, formulada en la ley por el acuerdo de 31 de mayo, y negándome sobre infundadas sospechas, una confianza provisoria, atizó el fuego de la anarquía, tan fácil de prender en nuestras llanuras.

Le ví venir y quise sofocarlo, interpretando mis atribuciones por la urgencia del peligro y llenando con mi responsabilidad, el vacío que tienen todas las instituciones provinciales en nuestro país y que tendrán siempre, mientras no se amolden a la Constitución general que vais a sancionar.

La sinceridad de mis intenciones respecto al pueblo de Buenos Aires, está demostrada con mi conducta. Al asumir el mando el día 26 de julio, despojé la autoridad de todas aquellas prerrogativas cuyo abuso habría causado tantas desgracias.

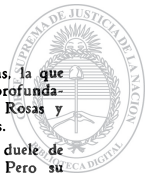
Dicté una *ley de olvido* en favor de todos los ausentes de la patria, sin excluir a nadie. Anatematicé el derecho de confiscación, librando de sus crueles efectos al gobernante mismo que lo había practicado como venganza de partido, y abolí la pena de muerte por delitos políticos.

En el régimen interior de la provincia introduje muchas mejoras; tomé disposiciones para garantir la propiedad, para fomentar la labranza, para ayudar el comercio y dicté una ley de municipalidades, que puesta en práctica, levantaría la capital al rango de una de las más cómodas y mejor administradas ciudades de la América meridional.

Quería prepararla para grandes y lucidos destinos, porque presumía que el soberano Congreso Constituyente, en consonancia con la tradición y con el parecer de nuestros más distinguidos publicistas, la elegiría capital de la República.

Abrí los ríos a todas las banderas, habilité sus puertos, abolí las aduanas interiores y reconocí como un hecho consumado la independencia del Paraguay. Medidas todas que no necesitarían sino de tiempo y de realización, para que se palpara su influencia en bien de aquella provincia y de la República entera.

La situación actual de la provincia de Buenos Aires y la ausencia de sus representantes en vuestro seno, la perju-



dicen sobre manera. Es ésta, entre todas las hermanas, la que más hondas heridas recibió de la administración profundamente inmoral y egoísta de don Juan Manuel de Rosas y la que más reclama reparación de gravísimos males.

Por que amo al pueblo de Buenos Aires, me duele de la ausencia de sus representantes en este recinto. Pero su ausencia no quiere significar un apartamiento para siempre, es un accidente transitorio. La geografía, la historia, los pactos, vinculan a Buenos Aires al resto de la nación. Ni ella puede existir sin sus hermanas, ni sus hermanas sin ella. En la bandera argentina hay espacio para más de catorce estrellas; pero no puede eclipsarse una sola.

Sin embargo, la República puede y tiene todos los elementos para constituirse durante esa ausencia temporal de Buenos Aires.

Tiene puertos en contacto con el extranjero, aduanas que le dan rentas, fuerza para defenderse de la violencia o para obligar a que se le haga justicia. Tiene unión en las ideas y en los intereses y la resolución, la necesidad vital de descansar en la fe de un código.

Este es el sentimiento de los gobiernos y de las legislaturas que han ratificado su adhesión al pacto celebrado en San Nicolás, tan pronto como han tenido noticia del suceso del 11 de septiembre y de las consecuencias de él para la política general del país.

Os hablo como ciudadano y como hombre que tiene derecho a pensar en las cosas serias de su patria; pero ni como guerrero, ni como funcionario, ni como político, tendré más acción que la que las leyes me conceden.

No pretendo que mis opiniones ni actos anteriores os sirvan de base para arreglar a ellos la obra de vuestra conciencia y de vuestro corazón. Seré el primero en acatar y obedecer vuestras soberanas resoluciones. Mi crédito personal está comprometido en la libertad y en el acierto de vuestras deliberaciones. La ventura de la nación, está en vuestras manos.

Aprovechad, augustos representantes, de las lecciones de nuestra historia y dictad una Constitución que haga imposible para en adelante la *anarquía y el despotismo*. Ambos monstruos nos han devorado. Uno nos ha llenado de sangre; el otro de sangre y de vergüenza. La luz del cielo y el amor a la patria os iluminen.



Terminada la lectura del discurso, el gobernador de Santa Fe, dijo: "El Soberano Congreso Constituyente de la Confederación Argentina está instalado"!

*Discurso del Presidente del Congreso Constituyente doctor Facundo Zuviría.* — Contestó el discurso el Presidente del Congreso Constituyente, doctor Facundo Zuviría, quien dijo:

Señor delegado:

Acabamos de jurar solemnemente, llenar las condiciones de nuestro mandato, consignadas en la fórmula de este juramento, que será la eterna acta de nuestra acusación, en caso que infrinjamos la menor de sus cláusulas, que traicionemos el menor de nuestros compromisos.

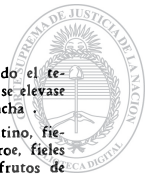
Hemos provocado los castigos del Dios del Universo, las maldiciones de la patria, la execración del género humano, si abusando de sus sagrados nombres pretendiésemos cubrir con ellos nuestra infidelidad o traición. A nombre del honor, de la virtud, de la gloria personificadas en el inmortal héroe de Caseros, habéis declarado que en los representantes de las provincias argentinas reunidas en este augusto recinto, queda instalado el soberano Congreso general constituyente de la Confederación Argentina.

Desde este momento, señor, los destinos de nuestra patria se engrandecen, sus esperanzas se dilatan, y el porvenir de nuestros hijos no será ya el problema que amargue nuestros últimos días ni nos arrastre al sepulcro sin el consuelo de legarles una patria libre, feliz y gloriosa. No. Si a la sombra de los laureles de Caseros pudimos descansar del peso de la tiranía y respirar el aire de la *libertad*, bajo la misma sombra meditaremos en el reposo, sobre los medios que nos convenga adoptar para consolidarla, salvándola de sus funestos extremos.

Estimando las felicitaciones y aceptando las patrióticas protestas del vencedor en Caseros, consignadas en el solemne documento que acabáis de presentarnos:

*Decidle* que el poder y las armas que el voto nacional le habían confiado, sean el garante del orden público y derechos del pueblo argentino; nulos fueran en Morón y Caseros, el espanto del tirano y sus *seides*, y muy poco habrían





hecho para la dicha pública, derrocando y sepultando el terror, si sobre sus ruinas, sobre su misma tumba, no se elevase el edificio inmortal de una libertad pura y sin mancha.

*Decidle* que los representantes del pueblo argentino, fieles a la gloria de Caseros, fieles a la gloria de su héroe, fieles a los principios por él proclamados, como únicos frutos de la más espléndida victoria que ha ilustrado nuestro suelo, no le traicionarán jamás; sino que asociados a él, a su gloria y a sus principios, sabrán consolidarlos, consolidando el programa de *unión, orden, libertad, olvido y confraternidad*, inscriptos en su bandera como el único lema digno de la época y de los pueblos Argentinos.

*Decidle* que la Confederación Argentina confiada en los antecedentes gloriosos con que él ha sabido ilustrar su nombre y el de su patria, espera que la energía de su brazo, las inspiraciones de su genio, los consejos de su virtud, sabrán dominar la *situación*, triunfar de la *crisis* que ofrece toda transición de épocas y hacer surgir de ellos la *justicia, la libertad, el orden y la paz*.

*Decidle* también, que la general y entusiasta adhesión de los pueblos a su persona, no es el resultado de una profunda e indiscreta gratitud a sus servicios, sino el efecto de sus íntimas convicciones, porque en él han visto el digno representante de sus ideas, el sonoro eco de sus sentimientos, el más fiel intérprete de sus necesidades; porque *en él han visto* el primero, el único quizá entre nuestros más esclarecidos varones, que no haya osado dar a los pueblos su programa escrito con la punta de su espada victoriosa, sino tomándola de ellos y de la voluntad nacional, elevando a principio y realidad la idea y sentimientos de la nación.

*Decidle* que nuestras deliberaciones substancialmente reducidas a formular en una carta constitucional el programa de los pueblos, corresponderán, sin duda, a sus deseos, porque sus deseos hasta hoy expresados, hoy consignados en el documento que nos dirige, no son sino el resumen de los *deseos*, de las *ideas* y de los *sentimientos* de los pueblos que representamos. Si así no fuera, podía contar con nuestra gratitud, mas no con nuestra confianza.

*Decidle*, finalmente, que desprecie los tiros de la calumnia, porque si ella salva desde su oscuro rincón, la gloria recorre toda la tierra, pagando la deuda que el género humano contrae en favor de los bienhechores de los pueblos y



legando a la fama sus hechos, para que los transmita a las generaciones venideras.

Que no tema a la calumnia, porque después de la gloria de salvar a su patria y hacer la dicha de sus compatriotas, no hay otro mayor que la de ser calumniado y ultrajado, por haberlo hecho y serlo por los mismos a quienes haya salvado.

Que la sola gloria sirve de contrapeso a la ingratitud transitoria de los hombres, a la hiel que las pasiones destilan sobre los que se sacrifican por su patria, por la felicidad de sus semejantes.

Que si aspira a la gloria contemporánea, no la busque en los aplausos que le tributen la gratitud, la justicia o la lisonja de los hombres, sino en la paz y libertad de su patria. en la oración secreta que al pie de los altares, eleva el padre de familia, levantando sus manos al cielo en acción de gracias por la conservación de una vida que ha salvado la de sus hijos y compatriotas y dádoles paz, libertad y un dichoso porvenir.

Que aspire, en fin, a la sólida e inmarcesible, de llenar sus compromisos de cumplir sus juramentos, de garantizar la libertad de nuestras deliberaciones, de respetarlas y hacerlas respetar con el primero y último de la Confederación.

Por lo demás, señor, no hay que temer de la anarquía. Terminada su evolución, ella muere y la nación queda, porque es inmortal. No hay que temer, porque ella asoma, menos para atacarnos que para espiar nuestra posición. Si esta es imponente por la unión de sentimientos, por la uniformidad de ideas y de principios, no hay que temer de sus impotentes esfuerzos. Ellos son como las últimas convulsiones de un moribundo, cuya naturaleza robusta y vigorosa las hace más fuertes y prolongadas; son las últimas olas de un mar agitado por la tempestad que ya pasó; el movimiento de las aguas aún cesado el viento que las agita.

Como no hay que temer que los pueblos acaten un tirano, si sus representantes no les dan el ejemplo de la degradación y servidumbre, tampoco hay que temer de la *anarquía* si los mismos no le dan el ejemplo de ella, con la demagogía en los principios, con la desunión en ideas y en sentimientos, con el choque de intereses mezquinos y egoístas. Los representantes son la verdadera avanzada de los pueblos, ellos le dan el ejemplo de lo que deben hacer.

Pues bien, señor, desde que nosotros, como acabamos de jurar, demos a los hombres el de la *unión*, de la *libertad*,



del orden, de un patriotismo sin mancha, de una consagración heroica, no hay que temer que ellos traicionen nuestra fe, ni se desvíen de la línea que les marquemos con nuestro ejemplo. Toda otra conducta en los representantes de un pueblo, sería asumir sobre sí la soberanía del desorden o la soberanía de la esclavitud, y nosotros no aceptamos ni la una ni la otra: no seremos los *lictors* de aquél ni los *seides* de ésta.

El soberano Congreso general constituyente que acabáis de declarar instalado, fiel a su mandato y a la confianza de los pueblos que representa, no los traicionará: fiel a la gloria del héroe de Caseros, no la empañará ni permitirá que la empañen la injusticia, la calumnia o la ingratitud, porque es gloria nacional, y su depósito le está confiado por el voto de los pueblos. Fiel a la libertad que acaba de jurar, no la traicionará, sino que, colocado en torno del gobierno que la sostenga y consolide, ofrecerá a los pueblos el espectáculo del heroico sacrificio de los representantes.

Nuestra marcha, señor, juramos que responderá a los deseos, a los sentimientos, a la dignidad, a la gloria inmarcesible de la Confederación Argentina.

Si el presente año ha ofrecido lo que hay de extremo en la esclavitud, en la gloria, en la libertad, y aún, triste es decirlo, en la anarquía, justo será que al terminar, ofrezca también lo que hay de extremo y aún más sublime en el orden, en el respeto a la ley, en la fe de los pueblos a sus compromisos, en la majestad de sus representantes por llenar el mandato que les han impuesto, por corresponder a la confianza con que los ha honrado su patria. Hemos jurado servirla hasta salvarla; y si nos faltasen fuerzas para combatir, no nos faltarán para morir por ella. No hay más que la vida que se pueda sacrificar con brillo.

No terminaré, señor, esta impremeditada contestación, sin aceptar, por mi parte, las consolantes ideas, los nobles y elevados sentimientos que al respecto de nuestra hermana, la heroica provincia de Buenos Aires, contiene el discurso del excelentísimo señor director, que acaba de ser leído en este sagrado recinto.

Sin prejuzgar la opinión del soberano Congreso, sin comprometer sus ulteriores resoluciones, permitidme, señor, que os exprese francamente, que sin el más profundo dolor no puedo ver aquellos asientos vacíos, que con tanto júbilo y gloria de la Confederación debieran estar ocupados por los representantes de la primera de nuestras hermanas, la inmortal provincia



de Buenos Aires. Ese vacío deja otro igual en todo pecho argentino: deja otro igual en el júbilo de este día.

Al emitir estas ideas, no creo contrariar los votos de algunos de mis dignos colegas, lejos de ello, los creo dominados de los mismos sentimientos de confraternidad que animan a toda la nación, que animan al excelentísimo señor Director provisorio, que los consigna en el solemne documento que acaba de leerse. Si, pues, lo dominan simpatías con el gran pueblo de Buenos Aires, si lo ama, si desea que todos formemos una sola familia, si conoce que siendo la primera víctima de la tiranía y del terror, es el que más reclama la reparación de sus males, si se duele de la ausencia de sus representantes en este sagrado recinto, ausencia que él cree un accidente transitorio, si por fin, declara, que "la provincia de Buenos Aires no puede existir sin sus hermanas ni sus hermanas sin ella", justo es, pues, que no omitamos medio, que no excusemos sacrificios por satisfacer tan patrióticos votos, por llenar deseos tan generalmente expresados, sentimientos tan uniformes en todo el pueblo argentino.

Si ha habido extravíos, errores y aun crímenes, si se quiere, forzoso es confesar que los extravíos, los errores y los crímenes nunca son colectivos, si no actos individuales, de cuya responsabilidad los pueblos están exentos ante la justicia y la razón ilustrada. Los hombres podrán ser criminales uno a uno mas no las *masas*, porque su sentimiento es siempre por la virtud. Una constante experiencia acredita que aún en el más desfavorable de los casos, ellas son las víctimas, nunca los causantes de las desgracias. Los pueblos jamás abusan de su razón y fuerza, sino son arrastrados a ello.

¿Y por qué lo será nuestra hermana, la provincia de Buenos Aires, de los errores extraños o exageración de algunos de sus hijos? No. Pero . . . basta . . . Vamos al templo a poner nuestros actos bajo los auspicios de la religión; ella proteja nuestras puras intenciones.



## CAPITULO II

**Sesión extraordinaria del Congreso Constituyente. — Nombramiento de dos comisiones especiales.**—Contestación del Congreso Constituyente al general Urquiza. — Comunicación del general Urquiza al Congreso Constituyente agradeciendo la ley sancionada el 1º de diciembre de 1852 y la nota de su referencia. — Proyecto del diputado Gondra proponiendo la mediación del Congreso para resolver la cuestión de Buenos Aires. — Despacho de la comisión nombrada para informar sobre el proyecto del diputado Gondra. — Discusión del despacho de la comisión. — Proyecto del diputado Leiva autorizando al general Urquiza para que en nombre de la Confederación ofrezca su mediación en la cuestión de Buenos Aires. — Informe de la comisión encargada de dictaminar sobre el proyecto del diputado Leiva. — Lev autorizando al Director provisorio para que haga cesar la guerra civil en la provincia de Buenos Aires. — Minuta de comunicación. — El Director provisorio comunica al Congreso el envío de una comisión para resolver la cuestión de Buenos Aires. — Tratado del 9 de marzo de 1853. — El Director provisorio comunica al Congreso la imposibilidad de ratificar el tratado del 9 de marzo de 1853.

***Sesión extraordinaria del Congreso Constituyente. Nombramiento de dos comisiones especiales.*** — Instalado el Congreso se reunió al día siguiente para escuchar la memoria informativa de los actos del Director provisorio, presentada por el Ministro de Relaciones Exteriores, y que fué leída por uno de los secretarios del Congreso.

Luego el presidente del cuerpo procedió al nombramiento de dos comisiones especiales, una encargada de presentar una minuta de contestación a la nota del Director provisorio en que exponía los motivos por los cuales no concurrió personalmente a hacer la instalación del Congreso, sobre su discurso inaugural y sobre la memoria y documentos justificativos que había presentado el Ministro de Relaciones Exteriores. Dicha comisión fué integrada por los diputados Pérez (F. Ma-



nuel), Gorostiaga, Gutiérrez, Gondra y Blanco. La otra comisión tenía por objeto presentar un proyecto de reglamento y la formaron Delgado, Villada y Torrent. Esta última comisión se expidió acerca de su cometido el 25 de noviembre de 1852, presentando un proyecto de resolución por el cual se adoptaba el reglamento de debates dado el 25 de enero de 1825, por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con las modificaciones que se acompañaban. El diputado Delgado, miembro informante expresó que la comisión había creído conveniente la adopción del referido reglamento, porque había servido a varios cuerpos deliberantes y por que en su concepto servía para regir las deliberaciones del Congreso. Comenzó la discusión en particular del proyecto de Reglamento el 6 de diciembre de 1852 y terminó el 24 del mismo mes, en que fué aprobado.

*Contestación del Congreso Constituyente al general Urquiza.* — El Congreso Constituyente de Santa Fe, reunido bajo los mejores auspicios, quiso hacer público su reconocimiento al general Urquiza, sancionando a tal efecto una ley, el 1º de diciembre de 1852, dándole un voto de gracias y de confianza. En esa misma sesión el Congreso aprobó la minuta de contestación al Director provisorio y que dice así: "El Congreso general constituyente tiene el honor de contestar a tres documentos que V. E. le ha dirigido, en su carácter de Director provisorio. 1º La alocución en el acto de la solemne instalación de este cuerpo. 2º La memoria explicativa de la conducta pública de V. E. desde el día 3 de febrero hasta la fecha. 3º La nota en que V. E. comunica los inesperados sucesos que le obligaron a salir a campaña, estando ya en el Paraná, en vísperas de instalar personalmente el soberano Congreso. El segundo de estos documentos viene acompañado de piezas justificativas y de tratados con gobiernos extranjeros; circunstancia que impone al Congreso la obligación de meditarle maduramente, para resolver con acierto. Pero este mismo documento se ocupa, en su mayor parte, de la política observada por V. E. en las circunstancias en que la nación se ha hallado, y bajo este aspecto la memoria explicativa es, en concepto del Congreso, de la misma naturaleza que la alocución y la nota, y se apresura a contestarlas, porque así lo demanda la conveniencia y la justicia. El Congreso se apresura a contestarlas, para que la publicidad de su palabra haga saber a



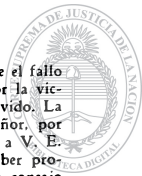
los pueblos que el primer paso dado por V. E. ha sido el más claro reconocimiento de la soberanía nacional; para que la nación y V. E. sepan de qué manera el Congreso entiende e interpreta los principios políticos sentados y practicados por el vencedor del tirano y por el Director provisorio; para que sepa V. E. cuál es la actitud de los pueblos, cuáles son sus deseos y cuáles las esperanzas que fundan en los que están al frente de sus destinos. El Congreso no llena una vana fórmula con esta contestación. En este caso, como en todos, la representación de la Confederación Argentina se propone emplear el lenguaje que corresponde a las ideas prácticas de un pueblo maduro por largos años de infortunio. La conducta pública de V. E., desde el 1º de mayo de 1851 hasta el 31 de mayo último, no tiene jueces; no puede reconocer otro tribunal que el de la opinión, ni otro fallo que el que la historia pronuncie. Pero, ya que V. E. se ha dignado explicarse sobre los hechos efectuados durante este período, el Congreso dirá a V. E. en qué estima los tiene y cuál es la cosecha de principios y de ejemplos que en ese mismo período ha recogido el país, para no enajenarlos jamás. La palabra más simpática para la democracia argentina es la de libertad. En la guerra extranjera como en la civil, siempre el pabellón azul y blanco llevó escrita esta palabra mágica. Pero nuestras instituciones y nuestros hábitos heredados no nos habían permitido comprender que no hay cosa más práctica que la libertad, y que para ser libres es necesario que los hombres se doblen sumisos al despotismo santo de la ley. En busca de esa libertad que les huía, excelentísimo señor, han andado los pueblos argentinos desde que son independientes. Estaban ciegos por falta de educación social; no vieron que en las luchas domésticas era sangre hermana la que corría, y que cada combatiente caído dejaba en el despoblado territorio un vacío que debía llenarle indispensablemente la barbarie. La Confederación Argentina ha existido en anarquía y en perpétua guerra civil. La tiranía misma del exgobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, no era una dominación de paz, sino una resistencia materialmente fuerte, sostenida diariamente con sangre de argentinos. V. E., al ponerse en campaña en 1851, ha merecido bien de la patria, ha merecido bien de la humanidad, porque se movió por la consecuencia de tres fines justísimos: destruir la causa perenne de las querellas domésticas en el suelo argentino, arrojando a don Juan Manuel de Rosas de la silla de su poder; evitar que esos males se produjeran por el some-





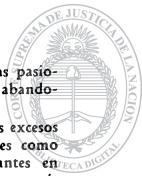
timiento de las voluntades y de la fuerza pública, a una ley general, a un código, a una Constitución; cumplir con la religión de las promesas hechas a los pueblos por los gobiernos del litoral en el tratado de 4 de enero de 1831. El Congreso, en nombre de la nación, reconoce en V. E. un hábil guerrero, un experimentado hombre de estado, porque ante los ojos de los pueblos argentinos ha marchado V. E. venciendo obstáculos, ganando prosélitos y aliados, triunfando en todas partes, dando solución a antiguas y encarnizadas cuestiones, con prudencia y magnanimidad. Pero lo que con profunda gratitud agradece a V. E. el Congreso, es el ejemplo de lealtad a los pactos nacionales que espléndidamente dió, cuando al pronunciarse contra el gobernador de Buenos Aires, lo hizo V. E. para que se cumpliese el tratado de 1831, que por actos posteriores a él, era una ley de la nación argentina."

"Dichoso es V. E. que puede unir en su persona al prestigio de la victoria el mérito más sólido de reconocerse obligado a las leyes dictadas por la razón y por el interés de los pueblos. Era tan horrible el espectáculo de la tiranía del ex-gobernador de Buenos Aires, que bien hubiera podido V. E. levantar por bandera de sus miras el instinto de libertad que distingue a nuestros compatriotas. Pero el pueblo argentino está hoy en el caso de comprender que es más glorioso para él que el triunfo se haya conseguido bajo los auspicios de la justicia y del derecho, que no al embate de una pasión, por generosa que ella fuese. No hubo encono personal, no hubo odio de partido en el corazón de V. E. cuando dirigió sus armas contra don Juan Manuel de Rosas. Por eso es que la política adoptada por V. E. después del triunfo fué tal, que merece hoy la gratitud y la aprobación del Congreso, como merece la de los pueblos que representa. Fueron los principios de esa política: *olvido de todo lo pasado, fusión de todas las opiniones, organización nacional bajo el sistema federativo.* Aceptaba V. E. en este programa de regeneración, el que tenían escrito y oculto en el corazón, los pueblos, débiles para manifestarlo, porque sus desgracias les mantenían en desunión y aislamiento. Era indispensable el olvido de todo lo pasado, porque todos los partidos, todas las entidades gubernativas, los pueblos mismos necesitaban de recíproco perdón para entrar en paz a componer una familia durable. Todos habían cometido errores; todos habían derramado sangre de hermanos, unos a otros se procesaban con encarnizamiento, no sin alguna porción de justicia, y a falta de un tribunal de paz (porque



para tales cuestiones no conocen otro los hombres que el fallo de la victoria por las armas), V. E.; dominando por la victoria y por el yugo de la gratitud, nos aconsejó el olvido. La providencia y la patria os premian, excelentísimo señor, por este pensamiento. La patria y la providencia aborren a V. E. la amargura de tener jamás que arrepentirse por haber pronunciado estas palabras, tan dignas de dirigirse por consejo a un pueblo de cristianos y de valientes. El opinar en política no es un crimen. Es el ejercicio de la razón aplicada a los intereses públicos. Todo ciudadano de una república tiene el derecho de manifestar lo que piensa y de contribuir con el tributo de su pensamiento a la felicidad común. Si las autoridades entre nosotros han restringido este derecho, han hecho mal y han faltado al primer deber de toda autoridad humana, que consiste en conceder al hombre lo que Dios mismo no le niega."

"Pero los condenados al silencio han tenido gran parte en la pena sufrida, porque no siempre acertaron a ejercitar el derecho de la censura, con razón fría y con intenciones ilustradas. Los sabios y los prudentes tienen con frecuencia que sellar el labio en nuestro país, excelentísimo señor, porque se hallan envueltos en las prevenciones que contra la libertad de la palabra levantan los frívolos y los ambiciosos. Los argentinos aceptan entre sus dogmas políticos, excelentísimo señor, la fusión de todas las opiniones y aceptan, por consiguiente, los medios únicos de conseguir esa fusión, para eternizarla en sus hábitos. Todas las capacidades, todas las glorias, todas las virtudes argentinas, son honra de la patria, y la patria les dará su destino y su recompensa, sea cual fuere el color o la forma de la divisa conque obraron en algo para la utilidad del país. Las grandes divisiones que nos han empobrecido, son las de unitarios y federales. V. E. hizo luz en medio de nuestra noche, y los pueblos han visto que unos y otros eran hombres, que unos y otros eran argentinos, que unos y otros, por caminos diversos, propendían a nacionalizar los elementos que nos constituyen como pueblo. V. E. ha propagado esta doctrina con la palabra y con el ejemplo: los pueblos deben propender a que se inocule en las costumbres. El Congreso lo aconsejará así en su manifiesto a la nación. Una era nueva comienza para la República Argentina. Ella se levanta de un verdadero letargo y quiere reparar con el trabajo y el bien obrar, los años perdidos en la indolencia y el error. Pero el olvido de lo pasado, la fusión de todos los partidos, son, ex-



celentísimo señor, un vano sueño, un imposible, si las pasiones y los intereses políticos quedan como hasta aquí, abandonados así propios."

"De la manera que hemos existido hasta aquí, los excesos del poder, en nombre del orden, son tan justificables como las revoluciones de los pueblos contra sus gobernantes en nombre de la libertad. Las instituciones calculadas para equilibrar estas dos tendencias, de cuya armonía resulta el bienestar social, son tan imperfectas, que en el término de pocos meses hemos visto a la sala de representantes de Buenos Aires autorizando con su sanción y su retórica los iracundos y despóticos arranques de don Juan Manuel de Rosas y firmando el manifiesto de la revolución del 11 de septiembre. Le hemos visto divinizar el crimen, absolver la maldad, convertir en ley la extravagancia, hasta el 3 de febrero, y desde el día siguiente de su reinstalación, echarse en el camino peligroso de la demagogía y de la adulación a la muchedumbre. Y aquello que ha pasado en grandes dimensiones en la provincia de Buenos Aires, ha tenido lugar en otras provincias de la Confederación, manifestándose así claro el vicio radical de nuestras leyes políticas. El olvido de lo pasado; la fusión de los partidos no puede tener lugar, excelentísimo señor, sino al amparo de una Constitución que subordine todos los intereses y pasiones al interés común de la República. La paz de la patria, la verdadera libertad por que ansiamos, no nos han de bajar del cielo hasta que hallen el trono de la Constitución para imperar desde él. Por eso es que V. E. completó su programa consagrando en sus banderas libertadoras el deseo de los pueblos formulados en la palabra *Constitución*. La nación sentía y V. E. era el eco de ese sentimiento. V. E. explica en los documentos a que contesta el Congreso, las medidas tomadas y los medios empleados para realizar la reunión de los representantes de los pueblos. A este respecto, el Congreso se limita a recordar a V. E. que el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, explanación más práctica del tratado del litoral de 1831, es hoy una ley de la nación, por cuanto trece legislaturas provinciales le han reconocido y aceptado como pacto obligatorio en todos sus efectos y consecuencias. El Congreso se unirá a esos pueblos, para decir a V. E. que aquel acuerdo, hoy ley, fué dictado por el patriotismo y aconsejado por la prudencia. En el aislamiento en que se encontraban los pueblos, federalizados hasta la exageración y predominante en ellos el influjo de los ejecutivos, fué muy acertado reunir a los gobernadores

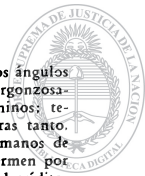


y sus ministros respectivos, como a otras tantas influencias y consejos prácticos, para acordar los medios de echar las bases de una organización nacional. Se organizó el estado de una manera provisional y transitoria, mientras el Congreso constituyente le diera una organización definitiva. El poder que ese acuerdo puso en manos de V. E. era una necesidad, era una urgencia de la situación; porque, conmovido el país con el gran suceso de febrero, en hervor las pasiones, mal ajustados los intereses, comprendidos mal los derechos, en anarquía las cosas y las ideas, era muy de esperar que durante la expectativa de una Constitución, fuera necesario influir con acción poderosa sobre tanto elemento de desquicio y de revolución, para que la tierra argentina no se ensagrentase de nuevo. Obras como la que inició V. E. y estamos consumando, se realizan, excelentísimo señor, con la idea y con la fuerza, con el pensamiento y con la acción. ¿Qué sería hoy de nuestra República si los movimientos domésticos que hemos presenciado no hubiesen tenido en el pacto de San Nicolás un punto hacia donde dirigirse? Nuevas elecciones de representantes provinciales, nuevos nombramientos de gobernadores han tenido lugar en varias provincias, sin que hayan conmovido las bases del acuerdo y sin interrupción de los trabajos preparatorios de la organización nacional. ¿Qué más elogio para ese acuerdo; qué mayor satisfacción para la conducta observada por V. E., que el recuerdo de esos hechos? Buenos Aires, excelentísimo señor, es el único pueblo argentino que puso su veto a algunos de los artículos del acuerdo de San Nicolás, y todavía se resiente la República de la negativa y mala voluntad de los representantes de aquella provincia, que por su localidad y antecedentes, ocupa un lugar de excepción en la familia argentina. Allí debe resolverse la parte principal del problema de nuestra organización futura, porque allí está la capital de la República Argentina. Deber glorioso del pueblo de Buenos Aires es hospedar en su seno a las autoridades nacionales, dando así al país participación de sus ventajas de posición con respecto al mundo."

"El Congreso está persuadido que así lo quiere aquél pueblo, porque no podrá jamás dejar de ser argentino y porque así se lo aconsejan sus verdaderos y más positivos intereses. Y si así lo quiere, aceptará también — cuando la fría razón lo guíe, — todas las consecuencias que una ley de capitalización trae consigo. Lo que V. E. ha practicado en este sentido, durante su gobierno transitorio de aquella provincia, es de la



completa aprobación del Congreso; del Congreso, excelentísimo señor, que no permitirá, por consideración alguna, se infiera el más leve daño a los derechos ni a los intereses de pueblo alguno de la Confederación, que representa con amor y por cuya dicha vigilará como un padre. V. E. ha allanado gran parte del camino, destruyendo no sólo el poder egoísta y abusivo de don Juan Manuel de Rosas, sino su política interior también. El puerto de Buenos Aires no es ya el único, el exclusivo de la República. La división hecha por el hombre contra la voluntad de Dios, entre las aguas del Plata, del Paraná y Uruguay, no existe ya desde el día en que V. E. habilitó los puertos interiores para todas las banderas civilizadas y mercantes de la tierra. Este es uno de los grandes derechos conquistados en Caseros; conquistados para no perecer jamás, porque tiene por sostenedores a todos los gobiernos del mundo, que en el presente siglo reconocen como ley anterior a toda otra, la de comerciar libremente. Como corolario de esta ley, dictó también V. E. la de aduanas generales, aboliendo las interiores, es decir, destruyendo un sistema bárbaro y abusivo, que hacía imposible la riqueza y alejaba a mercados extraños la satisfacción de las necesidades materiales de los pueblos confederados. Una y otra medida, excelentísimo señor, despiertan nuestra gratitud, no sólo por las razones apuntadas, sino porque ellas son otros tantos vínculos para nuestra nacionalidad, completamente rota por el lado de los intereses positivos. Los intereses, señor, la riqueza, el bienestar por que hemos hecho tan poco hasta aquí, deben ser en adelante el conato y la ocupación muy principal de los gobiernos argentinos. Nada habremos hecho en dar un código escrito, si de él, como de una fuente vivificante, no brotan la prosperidad, el comercio y la industria. Para ésto será impotente el Congreso, será impotente la Constitución, los pueblos quejosos y huérfanos de ventura material se echarán por el camino de la novedad, en el mal apagado volcán de los trastornos pasados, que amenazan reproducirse. La Constitución hará de manera que las autoridades nacionales, que las leyes orgánicas, que las tendencias que nazcan de ella, se dirijan a su anhelado fin; pero, mientras esta Constitución no funcione, es necesario que el Director provisorio continúe en el sendero en que se puso al dictar la libre navegación de los ríos y abolición de las aduanas de tránsito. Los pueblos están impacientes, el tiempo urge, porque muchos años se han malgastado para la patria. Ella reclama, excelentísimo señor, la



presencia de V. E. en todas partes, su voz en todos los ángulos del territorio argentino. Nuestras relaciones son vergonzosamente lentas; el desierto está despoblado y sin caminos; tenemos deudas cuantiosas y rentas reducidas. Mientras tanto, excelentísimo señor, tenemos pingües territorios en manos de los bárbaros, producciones exquisitas, riquezas en gérmen por todas partes, sobre cuyos elementos podíamos basar el crédito, y, dar a la acción del gobierno un alcance y una fuerza saludable y salvadora. La iniciativa de estas grandes cosas podría nacer del Congreso; pero pudiera también venir del Directorio, poder nacional, aunque de transición, que se hará más aceptable a los pueblos cuanto mayor sea el bien que derrame con su influencia. El Congreso da las gracias a V. E. en nombre de la nación, por los esfuerzos que ha hecho para realizar su instalación, en cumplimiento de las leyes que se dictaron al efecto, bajo el patrocinio generoso de V. E.: V. E. ha estado con nosotros en el acto solemne del día 20, ha estado con nosotros de la manera más elevada, dirigiéndonos palabras que han hecho saltar nuestros corazones con esperanzas y con entusiasmo. La patria y la historia pedirán cuenta a los malos argentinos que llamaron en aquellos momentos la atención de V. E. en protección de poblaciones pacíficas atacadas a fuego y por asalto. La patria y la historia dirán que V. E. en circunstancias amargas y difíciles, procedió, siempre como un patriota ilustrado y magnánimo. El Congreso cuenta con las virtudes y la entereza de V. E. para obrar el bien, y tiene la satisfacción de poner en manos de V. E. un ejemplar autógrafo de la ley que ha sancionado con esta fecha."

\* *Comunicación del general Urquiza al Congreso Constituyente agradeciendo la ley sancionada el 1º de diciembre de 1852 y la nota de su referencia.* — El general Urquiza, se dirigió al Congreso Constituyente, agradeciendo la ley sancionada por éste el 1º de diciembre de 1852 y la nota de su referencia en una comunicación fechada el 23 de febrero de 1853 y que dice: "El infrascripto ha tenido el honor de recibir la ley autógrafa sancionada el 1º de Diciembre de 1852, y la nota de su referencia que el Soberano Congreso ha tenido la dignación de hacer llegar a sus manos, por conducto del Honorable Diputado de Santiago Dr. D. José Benjamín Gorostiaga."



“Al aceptar el infrascripto ese soberano testimonio que le consagra el Congreso Nacional de su Patria, y con la convicción íntima de que él es dictado por la generosidad y patriotismo de los argentinos que componen esa augusta corporación, no puede menos su más profunda gratitud y declarar a la faz de sus compatriotas que lo acepta reconociendo la magnitud de la ofrenda, y la pequeñez de los servicios con que el infrascripto haya podido hacerse acreedor a tan señalada demostración, con la que vé suficientemente recompensados los pocos sacrificios que ha hecho en obsequio de su patria y de sus libertades, cuando empuñó la espada con el fin de derrocar la tiranía que en Caseros quedó pulverizada para gloria de la Nación Argentina, que hoy marcha bajo los auspicios de la Providencia, al brillante porvenir que le depara la sabiduría del Congreso Nacional, en la Carta Constitucional que debe afianzar la paz, el orden, las libertades y los derechos de las Provincias Confederadas.”

“La aprobación que el Soberano Congreso ha dado a los actos públicos del infrascripto, desde el 1º de Mayo de 1851 y la ley con que le tributa un voto de gracias y un voto de confianza, lo obligan demasiado para que deje de asegurar al Honorable Congreso, que al través de los inconvenientes y dificultades que hasta hoy se han opuesto a la Constitución de la República, él debe contar con que el infrascripto como Magistrado, como Ciudadano o Soldado, le prestará el apoyo de su autoridad, de su obediencia y de su brazo, hasta conseguir la organización Nacional.”

*Proyecto del diputado Gondra proponiendo la mediación del Congreso para resolver la cuestión de Buenos Aires.* — El 30 de diciembre de 1852, el diputado Gondra, presentó un proyecto proponiendo la mediación del Congreso para resolver de un modo pacífico la cuestión de Buenos Aires. Dicho proyecto establecía:

Artículo 1º—Amonéstese a entreambos partidos beligerantes en la provincia de Buenos Aires, que depongan las armas y terminen sus diferencias por la vía de las negociaciones, como conviene a los hijos de un mismo suelo y al más alto interés de la nación.



Art. 2º — Al efecto, marchará sin pérdida de tiempo una comisión mediadora, llevando al teatro de la guerra las palabras de paz, unión y nacionalidad, que por el presente decreto pronuncia el Congreso de la Confederación Argentina.

Art. 3º — Esta comisión se compondrá de dos diputados del seno del Congreso, elegidos a mayoría de sufragios.

Art. 4º — La comisión no llevará otro fin que el expresado en este decreto, y dará cuenta al Congreso, con la posible prontitud, del éxito de su misión.

Art. 5º — El Director nacional dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo aquí decretado.

Art. 6º — Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.

El autor del proyecto expresó los fundamentos del mismo, diciendo: Que, al presentar al soberano Congreso la moción que acaba de leerse, no aspiraba a gloria personal alguna; que no hacía más que cumplir un deber como argentino y como representante. "Hay, señores, continuó, una provincia que por su cercanía casi la miramos, donde la sangre argentino corre día por día, tal vez con la misma ferocidad que nos han legado cuarenta y dos años de discordia y tiranía. Y cuando hasta los extranjeros más indiferentes no pueden mirar impasibles esa cruel situación, menos podrían verla, señores, los patriotas que se sientan en este recinto. Aquí está el soberano, aquí está el padre de los argentinos; ¿cómo dejar que éstos se degüellen dando nuevos escándalos al mundo, sin hacer oír en medio de ellos siquiera una palabra de paz, sin dar un solo paso para estorbar esa matanza? La misión que propongo no lleva un fin político; es puramente de humanidad, de patriotismo, de fraternidad, y aún la llamaré evangélica, porque lleva una prueba de amor a hombres que alguna vez se declararon enemigos del Congreso, sin que el Congreso lo sea de nadie". El señor diputado prosiguió diciendo que la moción que hacía, era conforme, de todo punto conforme, al programa del ilustre vencedor de Caseros, que había proclamado la libertad y la organización nacional sobre la firme base del olvido de todos los agravios, de la fusión de todos los partidos, y de la fraternidad de todos los argentinos. Que su proyecto estaba, pues, dentro de ese programa, sus palabras se conformaban a esa noble política, y la misión que estos pedían sería una prueba más





del triunfo de un gran principio entre nosotros. Que rogaba al soberano Congreso la aceptara sin mirar quién la proponía, atendiendo únicamente al fondo de ella, que es humanitario y santo, y a su objeto, que es únicamente nacional, y que prometía explicar a su tiempo los fundamentos graves en que se apoyaba esta medida.

El presidente del Congreso nombró una comisión especial encargada de informar sobre el proyecto del diputado Gondra, formada por los diputados Pérez (Fr. M.), Colodrero y Campillo.

*Despacho de la comisión especial nombrada para informar sobre el proyecto del diputado Gondra. —*

La comisión especial encargada de dictaminar sobre el proyecto del diputado Gondra, se expidió el 12 de enero de 1853, aconsejando su rechazo, por considerar imposible que él pudiera cumplir los fines que se proponía. El despacho de la comisión es el siguiente: “La comisión encargada de informar al Soberano Congreso sobre el proyecto presentado por el Sr. Diputado de San Luis don Adeodato de Gondra proponiendo el envío de una misión mediadora entre los partidos que hoy encienden la guerra civil en la desgraciada Provincia de Buenos Aires, después de haber meditado profundamente cuanto le ha sugerido su ardiente amor a la nacionalidad, paz y confraternidad entre los Argentinos y cuanto ha podido inspirarles el horror de una guerra fratricida que ha prolongado por cerca de medio siglo la desolación y exterminio de nuestra patria, presenta al Congreso por resultado de sus trabajos, las siguientes consideraciones.”

“El Congreso no debe economizar su presencia en los casos en que lo reclame el interés de la nación y la humanidad. Encargado por los pueblos para darles una constitución que fije definitivamente sus destinos, y que estreche los vínculos tantas veces rotos por el furor de la guerra civil nunca cumplirá mejor sus empeños que cuando arroje todo el poder de su influencia en favor de la paz y de la extinción de los odios; nunca, se mostraría más fiel a sus pacíficos fines que cuando no usara su ingerencia allí donde sería más a propósito para enconar los ánimos y encender una guerra interminable, por que las mismas razones que le aconsejan su intervención donde la salud de la patria la reclaman, le imponen el sagrado deber de una absoluta prescindencia en



los casos en que su autoridad fuese absolutamente desconocida y hostilizada y sin otro resultado probable que el descrédito del Congreso, aún en aquellas partes donde fuese la única esperanza de la Nación."

"El Congreso carece de conocimientos oficiales sobre la verdadera situación y carácter de aquella lucha pero la notoriedad de los hechos que allí han tenido lugar pueden suministrar alguna luz para estudiar sus tendencias y la clase de influencias que el Congreso pudiera ejercer sobre ellos."

"El Gobierno de Buenos Aires se alzó en 11 de Septiembre contra la autoridad directorial creada por el acuerdo de 31 de Mayo último, negó su adhesión a este acuerdo y desconoció sus consecuencias, pero protestó sus intenciones de paz con todos los pueblos de la República. Estas promesas de paz alentaron la esperanza de los Diputados de la Nación para ofrecer a sus hermanos disidentes una invitación a estrecharse de nuevo, que entonces era oportuna, necesaria y hubiera obtenido los mejores resultados, por que la paz es el más fecundo elemento de buena inteligencia, amor y nacionalidad. Pero los actos posteriores de aquel Gobierno, los de su sala de R. R., el espíritu de su prensa periódica, todos en fin, revela no aceptará el acuerdo de San Nicolás ni reconocerá el presente Congreso ni la autoridad directorial que en defensa de estas ideas aceptará todo género de sacrificios, derramará la sangre de sus hijos y no omitirá medio alguno, por reprobado que sea, por el triunfo de su causa. Fiel a este sistema no ha economizado el oro, la seducción y la guerra misma que ha provocado al presente Congreso. Finalmente para expresarlo de una vez, sólo la disolución del presente Congreso y la deposición del General Urquiza de la patria que él ha libertado podría apagar la sed de guerra y sangre que se derrama tan dolorosamente en aquella desventurada Provincia. En tal estado de exaltación ¿qué mediación puede oponerse? ¿ni como interponerla el Congreso?"

"La Comisión cree por tanto que la conducta inofensiva y circunspecta que hasta hoy ha observado este cuerpo debe continuarla en adelante sin afectarse por los tiros que le ha dirigido las calumnias y las animosidades de los partidos; deplorará en el fondo de su alma la funesta guerra, que ni ha provocado ni puede evitar. Esta noble y prudente reserva ha sido bastante poderosa para producir una reacción en aquella Provincia en favor de los intereses nacionales y de la



reputación del Congreso, porque nos arrepentiríamos de una conducta que altamente justifican los resultados?"

"Mientras tanto el acuerdo de San Nicolás ha conferido al Director el derecho de intervenir en otros negocios, él ha aceptado esta obligación cuyo cumplimiento ha jurado solemnemente ante la Nación ¿qué sabemos de los pasos que haya consagrado a este fin? ¿o queríamos desligarlo de sus compromisos entrometiéndonos en asuntos de su competencia excediendo los límites de nuestro mandato y tratando quizá sus resoluciones? ¿o queríamos causar un conflicto entre el Congreso y el Director por la adopción de un recurso desesperado e ineficaz para el objeto que se propone?"

"Por otra parte la comisión juzga impracticable esta mediación. Los documentos que están en el dominio de la publicidad explican el motivo y objeto de aquella guerra, de modo que su punto culminante se reduce a que: Los sitiadores exigen de la Ciudad su adhesión al acuerdo de San Nicolás y envío de sus diputados al Congreso y los sitiados los resisten porque han declarado que jamás reconocerán semejante Congreso. El Congreso, pues, no puede dejar de parecer una parte muy interesada en la lucha, ni podrá jamás hacer realmente el papel de mediador".

"No podría rebajar las exigencias de los sitiadores relativas al Acuerdo de San Nicolás sin parecer refractario de sus juramentos a la nación ni las relativas al envío de diputados a este Congreso sin caer en un contrasentido, no podría tampoco ofrecer a los sitiados ningún arreglo sobre las bases ya desechadas, sin parecer parcial en favor de los sitiadores y por tanto sospechosa de los sitiadores y finalmente no conseguiría ni la aceptación de esta misión por parte de la plaza porque esto supondría el reconocimiento del Congreso que resisten con las armas y con todo encono de una guerra civil."

"Esta última consideración nos suministra la suposición de un caso que la comisión juzga posible: los recuerdos de la alevosa invasión a Entre Ríos y la que se preparaba a esta Provincia, sin precedente declaración de guerra y bajo las más encarecidas protestas de paz y amistad, nos autorizan a ser posible el caso de ser desairada la mediación del Congreso llevando el desaire hasta el insulto y el vejamen contra una misión emanada de una autoridad no reconocida y a cuyo nombre se les hace la guerra. El juicio prudente de los Sres. Diputados sabrá graduar la posibilidad en un caso en que puede influir la exaltación de los espíritus durante



una guerra que se hace con el fuego, el hierro y el hambre. Llegado ese caso o el Congreso devoraría su afrenta en silencio desprestigiando su nombre y su autoridad soberana o declararíamos una guerra en desagravio de su dignidad ultrajada. He aquí como tendríamos que mancharnos con la sangre argentina por habernos arrojado imprudentemente a esta extremidad, he aquí que nos veríamos en la dura necesidad de decretar la sangre por no haber conservado la prudente reserva que nos impone nuestra misión y la ley de nuestra existencia."

"Finalmente la Comisión no encuentra en el presente proyecto sino un cúmulo de dudas y dificultades cuya solución viene siempre envuelta en el desprestigio y disolución del presente Congreso, sin que quede en el fondo ni una sola esperanza ilusoria de que los partidos beligerantes hayan de deponer las armas a la voz del Congreso. Por consiguiente juzga la comisión que debe ser rechazado en todas sus partes el proyecto presentado. Pero si, no obstante estas consideraciones, creyese oportuno el Soberano Congreso adoptarlo, cree la comisión que en este caso sería indispensable escuchar los informes del Ministerio Directorial, sin este requisito sería seguramente muy aventurada la resolución que se adoptaré."

*Discusión del despacho de la comisión.* —La discusión del despacho de la comisión dió lugar a un prolongado debate en el seno del Congreso. El señor Pérez (Fray Manuel), expuso: que al oír en una de las sesiones anteriores la lectura del proyecto presentado por el señor diputado de San Luis, lo había apoyado por estar en armonía con sus sentimientos y con su carácter de ministro de paz.

Pero que después del detenido examen que se había hecho sobre él en la comisión, se había adherido al parecer de los otros miembros de ella, que lo rechazaban por considerarlo ineficaz e inconducente al noble objeto que se proponía. Pero que, si la luz que debía hacer sobre él la discusión, hiciese variar sus convicciones a este respecto, se reservaba la libertad de votar a favor del proyecto, aun cuando era uno de los miembros de la comisión que aconsejaba en su informe que fuese rechazado.

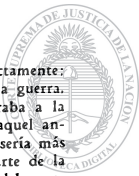
El señor Gondra dijo: que, antes de fundar su proyecto, desvanecería ligeramente las objeciones en que se apoyaba el dictamen de la comisión, dirigido a aconsejar al



Congreso una prescindencia total en las desgracias de la patria, bajo el nombre de *prudente reserva*, como si pudiese darse este nombre a la conducta aconsejada al Congreso en el informe; que le parecía notable el exordio de esta pieza parlamentaria, por cuanto se le da al Congreso facultades que en el curso de ella se le niega. Pero, fuese de eso lo que fuese; que la comisión se fundaba en que la modificación propuesta en el proyecto podía ser desairada y aún vejada en Buenos Aires; que eso no debía esperarse de ese ilustrado pueblo, ni que la repulsa de una mediación infería, según el derecho internacional, un agravio, ni ponía, por consiguiente, al Congreso en el caso de declarar la guerra. Pero que, aún en el caso de que la mediación fuese desairada, el congreso habría cumplido un deber y demostrado a la República que toda la culpa y responsabilidad estaba de parte de los que no habían querido oír su voz. Que se alegaba también en el informe, que el Congreso ultrapasaría sus facultades, abrogándose lo que era de competencia de otro poder, porque la misión del Congreso era más elevada que lo que la comisión la suponía, porque aquella no debía limitarse únicamente a la sanción de una Constitución, sino también a preparar el terreno y pesar los elementos que debían influir sobre ella, lo que no podría jamás conseguirse, si el Congreso no fuese el único juez para valorar las circunstancias y penetrar en el porvenir que los acontecimientos preparasen a su obra.

Que el Congreso, y no otro poder distinto, era quién debía examinar la oportunidad y prevenir los riesgos a que podía hallarse expuesta la obra que se la había confiado; porque de otro modo, no sería responsable de la buena o mala organización que diese al país. Que el Congreso así lo había entendido sancionando una contestación al mensaje del Director, en que aprobaba su actos, sancionando también un manifiesto a la nación, actos que no estaban prescriptos en el acuerdo de San Nicolás, ni tenían tampoco nada que ver con la obra de la Constitución y de las leyes orgánicas.

Que sentía ver a la comisión tomar posición atrás de S. E. el Director, al establecer que el proyecto entorpecería su marcha, porque el proyecto no controvertía ninguna de sus altas prerrogativas; pero que, si con esto quería hacer referencia a las fuerzas que habían marchado de Entre Ríos, a engrosar las filas de los sitiadores, a pesar de haber ignorado esta circunstancia al presentar el proyecto, lejos de estar en



oposición estos dos hechos, se armonizaban perfectamente: porque el ir una comisión mediadora al teatro de la guerra, al mismo tiempo que una fuerza imponente aseguraba a la misión mayores probabilidades de buen éxito, por aquel antiguo principio: *si vis pacem para bellum*, y porque sería más fácil que desapareciese el recelo de tenacidad por parte de la plaza. Que el proyecto estaba dentro del programa del general Urquiza, el informe de la comisión fuera de él, porque la mayor gloria del general Urquiza era haber terminado la campaña oriental sin efusión de sangre, y haber abierto sus brazos victoriosos al amigo y al enemigo; y que sería hacer una injuria al general Urquiza el suponer que no desease conseguir en su país el mismo bello resultado que había conseguido en el extranjero; que, por último, no quería pasar en silencio una aserción falsa de la comisión, cuando decía "que los sitiadores de Buenos Aires hacían la guerra en nombre del Congreso", porque no había ni uno solo de sus actos que diese mérito para que así se creyese o se dijese.

Que en cuanto al proyecto presentado que él y sus amigos vnían a sostener, era conforme a la ley y a los juramentos prestados. *Conforme a la ley*, porque, según el tratado de la liga litoral, se exige la pacificación completa de las provincias, antes que el Congreso empiece a funcionar, y que este era el objeto que el proyecto se proponía. *Conforme también al juramento de los diputados*, porque se había prometido en él, sostener la nacionalidad argentina, por la fraternidad de todas sus provincias y por el amor recíproco de todos sus hijos; y que el proyecto era el cumplimiento exacto de ese juramento. Que, por último, el proyecto era conducente a la solidez de la Constitución, y que a este respecto no necesitaba recordar que las constituciones de los años 13, 19 y 26, habían fracasado por la guerra y la discordia que assolaban las provincias, y que las leyes impuestas por la fuerza no podrían ser jamás duraderas. Que a una Constitución a que no hubiese concurrido la provincia de Buenos Aires, donde estaba la mitad o tercera parte de la población argentina, no se necesitaba mucha previsión para asegurarle una existencia efímera. Que el proyecto era conforme al voto de las provincias; pero, según cartas que había recibido de muchas de ellas, todas deseaban que el Congreso asumiese esa honrosa iniciativa, y que el mismo Director provisorio, revelaba ese deseo en los sentidos conceptos de su discurso de



instalación, y que esperaba, por último, que el Congreso adoptase una resolución tan universalmente deseada.

El señor Campillo, miembro informante, contestó: que no era extraño que la comisión en su informe hubiese aducido, como el autor del proyecto al fundarlo, las mismas razones de paz, amor y confraternidad entre argentinos, por que estos eran los sentimientos de todos.

Pero que los buenos sentimientos no eran bastantes razones para la adopción de la mediación propuesta, porque los mejores deseos no eran siempre los mejores consejos en los graves asuntos de estado; que la idea de una mediación revelaba la de una entidad neutral, sin interés en los resultados de la lucha, y en relaciones de buena inteligencia con las partes beligerantes; y que el Congreso no podía considerarse esa entidad neutral y desinteresada. Que uno de esos partidos invocaba la nacionalidad, la adhesión al acuerdo de San Nicolás y el envío de sus diputados al presente Congreso, y que el otro resistía con furor estas exigencias; que el Congreso no podría negar sus simpatías en favor del partido que apoyaba la unión de Buenos Aires con las provincias y aparecer parcial, y aun cuando así no fuese, no se creerían sus protestas de neutralidad, ni podría haber buena inteligencia con el gobierno de la plaza, únicas prendas en que pudieran fundarse las negociaciones.

Que la comisión no establecía que el Congreso tuviese derecho a declarar la guerra, porque fuese desechada su mediación; que a este respecto, decía únicamente: "Que tal podía ser el desaire que se le hiciese que fuese llevado hasta el agravio y vejamen", cosa que le traería la alternativa de su desprestigio o el de declarar la guerra contra sus sinceros sentimientos de paz. Que no creía esta extremidad del pueblo de Buenos Aires, con quién no sería menos galante que el diputado preopinante, en hacerle justicia de su cultura; pero que la comisión no sería recibida por esa cultura o pueblo ilustrado, sino por su gobierno, que estaba reproduciendo hoy todas las escenas de la mazorca, con las confiscaciones, proscripciones y otras exageraciones de furor.

Que la comisión no había negado al Congreso el derecho de intervenir en este negocio, sino que había asegurado únicamente que el Director estaba en el mismo derecho de hacerlo por sí, y aún en la obligación de mantener la paz, por el artículo 14 del acuerdo de San Nicolás; y que no sabiendo los pasos que hubiese dado a este respecto, era qui-



zá exponerse a trabar las resoluciones del Directorio, y causar un conflicto entre ambas autoridades; y que por esto, la comisión había dicho en su informe, que el Congreso en caso de intervenir, debería hacerlo después de oídos los informes del ministro del Director.

Que cuando la comisión había dicho que esta guerra se hacía a la plaza, a nombre del Congreso, no quería decir que se hacía por su orden, sino que se había invocado su nombre para pedir como era de justicia, su reconocimiento y el envío a él de los diputados de Buenos Aires. Que estos eran los únicos puntos que recordaba de la impugnación que se había hecho anteriormente.

Pidió la palabra el señor Huergo y dijo: que él reduciría la cuestión a términos prácticos, porque en este caso los hechos, y no la ostentación de sentimientos de paz, que todos abrigan, eran las que habían de manifestar la verdadera situación, y la política que, en vista de ella, conviniese adoptar. Que después de la revolución de septiembre, la provincia de Buenos Aires había quedado, por la aplaudida resolución del general Urquiza en San Nicolás de los Arroyos, dueña y señora de sus destinos.

Que el gobierno revolucionario de Buenos Aires había empleado todos los medios a su alcance para anarquizar y encender la guerra civil en la República.

Que la provincia de Entre Ríos había sido el teatro de una invasión armada, lanzada por ese gobierno que había ensagrentando las calles de la ciudad del Uruguay; y si el gobierno de Santa Fe no hubiese acudido a su frontera, amenazada por otra invasión armada de ese mismo gobierno, la soberanía nacional de la República hubiese sido hollada en su mismo recinto. Que el Congreso, a pesar de estos atentados, había asumido una actitud reservada y pacífica, había lamentado en silencio la sangre vertida en Entre Ríos y no había querido dirigirse siquiera a los pueblos ofendidos en sus derechos, para excitar con su palabra la indignación que esos hechos habían producido en toda la República. Que la provincia de Buenos Aires, cuyo nombre se había comprometido en esos sucesos, había protestado después contra la mala política de su gobierno, y exigido de él, con las armas en la mano, la paz con la República y el reconocimiento de los pactos nacionales. Que el Congreso no tenía conocimiento oficial de esos sucesos ni de cuál fuese sobre ellos el pensamiento del Director provisorio; que sabía únicamente, por





documentos que estaban en el dominio del público, que el jefe que encabezaba el movimiento reaccionario de la campaña de Buenos Aires, proclamaba el reconocimiento de las autoridades nacionales, y que el gobierno de la plaza se negaba tenazmente a ella, siendo la guerra civil el resultado inevitable de esa negativa. Que, en presencia de estos hechos desearía saber cual era el objeto de la misión propuesta. Que no creía que el Congreso mandara una misión evangélica, determinada únicamente a predicar la paz, sino que debía munirse de las bases necesarias para un arreglo recíprocamente honroso. Que la primera de esas bases debiera ser el reconocimiento previo de la autoridad del mediador, y que, siendo esa la manzana de la discordia entre los dos partidos y el motivo de la guerra, ¿cómo podía creerse que el gobierno de Buenos Aires concediese a la palabra sola de dos diputados, lo que no quería conceder a la fuerza armada que lo cercaba y el voto de la República que se lo demandaba? Que, si el gobierno de Buenos Aires accedía a esa demanda, cesaba de hecho la efusión de sangre, porque era la condición impuesta de la fuerza armada, para su sometimiento; porque si no accedía a ello como aparecía de sus actos oficiales, desearía saber cómo se evitaba la efusión de sangre, a no ser que se quisieran romper los pactos nacionales, anular el Directorio y disolver el Congreso, para quitar a los partidos todo pretexto y motivo de guerra; que no había más que ese medio aceptable para el gobierno de la plaza. Que lamentaba como el primero, la última gota de sangre argentina que se derramase, porque harto se había derramado ya en cuarenta años de incesante lucha; pero que la meditación, tal cual se aconsejaba en el proyecto, no tendría ningún resultado, porque la plaza de Buenos Aires se hallaba bajo presión de un gobierno dictatorial, de un gobierno que no declinaba ante la inmensa responsabilidad de la sangre, y que falseando los bellos instintos de una juventud entusiasta, la condenaba impasible a un sacrificio inútil. Que estaba seguro que el ilustre pueblo de Buenos Aires protestaba contra la lucha fratricida provocada por ese gobierno; pero, desgraciadamente, ese gobierno que no era el verdadero órgano de la voluntad del pueblo, era el único órgano con quien el Congreso podría entenderse.

Que ese gobierno rechazaba su autoridad, primera base en que debía fundarse la negociación; y concluyó diciendo que se le presentasen las bases de un arreglo cualquiera, acep-



table para ese gobierno, después de todas sus declaraciones oficiales contra el Congreso, el Directorio y el acuerdo de San Nicolás y conciliable con la dignidad y los deberes del Congreso, y que él votaría entonces por esa mediación con la misma sinceridad con que votará en contra, desde que no viese en el proyecto presentado sino una mediación efímera, sin bases de arreglo de un éxito probable y que no daría por resultado sino obligar al Congreso por una negativa insultante de ese gobierno, a salir de la actitud pacífica y reservada que hasta hoy haya observado.

El señor Seguí dijo en seguida: Que principiaría tributando un merecido elogio al honorable diputado de Salta, a quien había oído por vez primera, a pocos días de instalado el Congreso, manifestar los sentimientos generosos y nacionales formulados hoy en el proyecto del señor diputado de San Luis, al cual se adhería con todo su espíritu y corazón, porque resumía sus ideas en política y sus más íntimas afecciones a aquella porción querida de la gran familia argentina, que se llama Buenos Aires.

Que no se ocuparía de las aberraciones del gobierno de Buenos Aires, ni tampoco del programa político que aparecían suscribiendo las fuerzas sitiadoras; que se contraería sólo a probar que, cualquiera que fuese el resultado de la mediación, no podía ni desvirtuar el influjo ni ofender la dignidad del Congreso.

Que era un principio de derecho internacional muy conocido, de que ninguna mediación desechada ofendía al mediador, y que, como era éste el principal argumento de los adversarios del proyecto, iba a acumular en su abono la tradición histórica de la República Argentina.

En 1820, dijo, las provincias de Santa Fe y Buenos Aires continuaban en la lucha fratricida a que años antes se había dado principio. La provincia de Córdoba envió al distinguido patriota doctor Allende en misión especial, ofreciendo su mediación a las partes beligerantes, y contra todas sus esperanzas, obtuvo aquella diputación el mejor éxito y la provincia mandante tuvo la satisfacción de ver restablecida la paz entre dos pueblos hermanos.

Se dirá que la provincia de Córdoba era un poder reconocido, y que en su virtud no es aplicable ese incidente histórico al caso que nos ocupa, y para satisfacer a esta réplica iba a mencionar otro hecho histórico.



En 1816 el Congreso nacional de Tucumán consagraba con su voto la independencia de las provincias unidas, en el momento en que el general Artigas dominaba varias de entre ellas. El general Artigas desconocía la autoridad del Congreso de Tucumán y sin embargo, aquella augusta asamblea no creyó indigno de ella enviar al señor Corro en comisión especial, para hacer valer entre él las nobles exigencias de las provincias unidas. Esa diputación no produjo resultado alguno favorable; pero aquella célebre asamblea llenó un deber sagrado, salvando su responsabilidad ante sus contemporáneos y ante la historia.

Se diría que el Congreso de Tucumán no tenía datos anticipados de que su diputación sería desairada, y para responder a esta objeción iba a completar mi pensamiento con el recuerdo de un hecho reciente.

En 1847 o 48, el general Urquiza ofreció su mediación en la prolongada lucha de los ejércitos de Rosas y de Oribe con la plaza sitiada de Montevideo. El general Urquiza comprometía en esa época su porvenir y hasta la suerte de la provincia de su mando, al presentarse a un hombre como Rosas en el carácter de mediador, sabiendo, a no dudarlo, que éste la rechazaría, indignado de la mediación, y que, sin embargo, la propuso, porque sobre el furioso desdén de un tirano como Rosas, se elevaba el concepto de la opinión pública, que le recompensase de un desaire inmerecido, y porque los intereses de la humanidad debían sobreponerse siempre a las sugestiones del amor propio; y concluyó diciendo que la aplicación fácil y sencilla al caso en cuestión de los hechos referidos, le relevaba de ocupar por más tiempo la atención del Congreso.

El señor Lavaisse pidió la palabra y dijo: que el señor diputado por San Luis, al presentar el proyecto, había dicho entre otras cosas: que a la misión de paz aconsejada en el proyecto, la llamaría también evangélica y santa, que él había de votar contra el proyecto, y como su silencio había de interpretarse desfavorablemente, desde que se había invocado el Evangelio, quería declarar como ministro del Evangelio, que el proyecto no sólo era antipolítico, sino que nada tenía de evangélico. Que estaba cansado de oír invocar el Evangelio para apoyar las malas causas; porque no había fanático en religión o en política, que no se hubiese escudado en su nombre. Que en nombre de la religión alzó su bandera un caudillo y derramó torrentes de sangre. Y en épocas poste-



riores, se había lanzado desde la tribuna sagrada un anatema de reprobación contra todo un partido político.

Que el Congreso había observado hasta hoy la conducta más circunspecta y había respondido con el silencio de su moderación a los ultrajes que le habían dirigido, y que no se había dejado oír una sola palabra en este sagrado recinto que no fuese de fraternidad y de paz para la provincia de Buenos Aires; que, cuando una expedición armada contra la provincia de Entre Ríos ensangrentaba su suelo y se preparaba otra para disolver por la fuerza la soberana representación nacional, el Congreso no había protestado siquiera contra esos atentados, ni había inculpado jamás al ilustrado pueblo de Buenos Aires por los actos vandálicos de su gobierno.

Que entre los dos partidos políticos beligerantes que luchaban en Buenos Aires, el uno proclamaba el reconocimiento del Congreso y el otro lo resiste con las armas; que la mediación en este caso, no podía ser imparcial, porque sus simpatías deben naturalmente inclinarse al partido que proclama la paz y la nacionalidad, y que, además de esto, todos los documentos públicos y oficiales del gobierno de la plaza, probaban claramente que su misión sería estéril y sin resultado. Que una mediación intempestiva podía desprestigiar al Congreso y hacerle perder la respetabilidad con que es mirado por los pueblos.

Que, si es verdad que el Evangelio aconsejaba, después de haber recibido un golpe en la mejilla presentar la otra, no podía ese consejo aplicarse a un cuerpo político, para quien la conservación de su dignidad es la primera ley de su existencia. Que con respecto a la relación hecha por el señor diputado de Sante Fe, sobre mediaciones de paz, debía decirle que la comisión del doctor Corro, cerca del caudillo Artigas, no tuvo efecto, según se lo había oído al mismo comisionado, porque no quiso perder tiempo en discusiones inútiles, y no quiso tratar con él; que no hubo, por consiguiente, ninguna clase de desaire hecho al Congreso. Que con respecto a la mediación ofrecida por Córdoba entre Buenos Aires y Santa Fe, por medio del doctor Allende, el caso era muy diferente, porque Córdoba se hallaba en perfectas relaciones de amistad con estas dos provincias, y que las mediaciones anteriores no podrían, por último, servir de modelo a la conducta que actualmente debiera observar el Congreso.



El señor Zuviría: Que había dejado su puesto para emitir algunas ideas que salvarsen su responsabilidad sobre la grave cuestión que ocupaba al Congreso, — cuestión de paz o de guerra, — por más que se le disfrazase con los nombres de mediación y prescindencia sobre la cuestión de la provincia de Buenos Aires; que emitiría muy pocas ideas, porque estaba convencido de que, cualquiera que fuese el éxito y luz de la discusión, el proyecto sería rechazado en la votación, por una mayoría de tres contra uno, como el resultado lo haría ver. Que no siempre se combatía por la victoria sino también por el honor y por el deber; y que, a pesar de contar con esta derrota, contaba también con el triunfo de las víctimas.

Que la misión del Congreso era esencialmente de paz: que ésta era la primera cláusula de nuestro mandato y el voto de toda la República. Que este era el sentimiento de todas las provincias, de Tucumán, Santiago y Córdoba, en donde había estado en contacto con las clases más prominentes de la sociedad, y no había oído proferir sino palabras de paz, de conciliación, de mediación y mil arbitrios librados a la sabiduría del soberano Congreso y a las virtudes del general Urquiza; y que desde su llegada a esta provincia de Santa Fe, no había oído una sola palabra de adhesión a la guerra, sino un lamento constante por las desgracias de su hermana la provincia de Buenos Aires; todo sin perjuicio de hallarse prontos a la guerra, si sus autoridades la llamasen a ella.

Que los documentos oficiales del gobierno nacional no le habían dado motivo sino para creer que ese mismo era el sentimiento del Director de la República. Que después de la pérfida invasión a Entre Ríos, la opinión de las provincias no había variado; pero no había recibido una sola carta de todas ellas, en que no se le conjurase a trabajar por la pacífica solución de esa lucha.

Que era sensible que sólo en el Congreso, donde no se debían oír sino palabras de amor y de paz, se encontrase oposición a la pacífica mediación anhelada por todos, aun por el mismo pueblo de Buenos Aires, víctima inocente de esa guerra; que los ministros extranjeros, sin temor a ese desaire, habían interpuesto en favor de extraños esa misma mediación, que el soberano Congreso rehusaba interponer en favor de sus propios hermanos. Que no importaba que nosotros no derramásemos esa sangre ni mandásemos derramarla, porque demasiado sanguinario era el indiferente a la sangre



de los demás. Que en los 42 años de nuestra emancipación, no ofrecía la República sino un continuado espectáculo de sangre, y que corría aún hoy en las calles de Buenos Aires, bajo del mismo Congreso encargado de restañarla. Que, exento de odios y pasiones en pro o en contra de los beligerantes, lloraba por todos, porque todos eran argentinos, y porque de todas las desgracias acaecidas, la verdadera víctima era la patria común.

Que, ya que todas nuestras glorias estaban trozadas, era preciso aspirar a la gloria virgen aun, de resolver un problema político por otros principios que la lanza y el sable; que se aspirase a pacificar a Buenos Aires, por la mediación y no por la fuerza; porque, si tal sucedía, nunca sería presidida por magistrados sino por conquistadores, cuyo dominio siempre sería efímero, porque siempre sería violento; que, por último, la misión del Congreso era de paz, y que sin ella no podía haber Constitución, porque jamás Constitución alguna se edificó sobre ruinas y cadáveres; y que era necesario empezar por que nuestros hermanos de Buenos Aires nos escuchasen y se escuchasen entre sí, sitiadores y sitiados.

Se pasó a cuarto intermedio.

Vueltos los señores diputados a sus asientos, el señor Campillo expuso:

Que cualquiera que hubiese oído el anterior discurso, sin estar en los antecedentes de la discusión, habría creído que el Congreso trataba de formular una declaración de guerra contra una provincia hermana; que, si la comisión aconsejaba que se rechazase el proyecto, no era por que contuviese un pensamiento de paz, sino porque el Congreso no se viese envuelto en la necesidad de una guerra, por las eventualidades de la mediación proyectada. Que al cuadro trazado por el señor diputado de Salta, sobre la opinión de los pueblos de Tucumán, Santiago, Córdoba y Santa Fe, sobre la conveniencia de un arreglo pacífico con Buenos Aires, él añadiría una pincelada más, agregando que tal era también la opinión de todos los diputados reunidos aquí en aquel tiempo, y que esta opinión fué inalterable hasta que los actos hostiles del gobierno de Buenos Aires los convencieron, a pesar suyo, de la inoportunidad e insuficiencia de esa medida.

Que no veía una relación lógica entre la necesidad de una mediación y los profundos sentimientos de paz; del mismo modo que, aun cuando el Congreso deseara la ilustración



del pueblo. no había por esto de dividirse en liceos o academias para ilustrarlo. Que rechazaba la mediación, porque la encontraba impracticable, porque las bases sobre que debía establecerse para que fuese aceptada por Buenos Aires, serían el desconocimiento del acuerdo de San Nicolás y del Congreso; exigencia que no podía admitirse sin cometer un contra sentido.

Y, finalmente, el deseo de ilustrar la discusión, y no el de salvar su responsabilidad, era el que debía conducir a los diputados que tomaran la palabra; porque ninguno podía excusarse de la solidaridad de los actos del Congreso, y que el diputado que hubiese votado según su conciencia, ese habría salvado su responsabilidad.

El señor Ferré: que diría muy pocas palabras; que había oído cuanto se había dicho en apoyo del proyecto en discusión, pero que también había oído que habían marchado fuerzas sobre Buenos Aires; que no conocía cuál era el objeto de esta medida, que, si ella llevara el carácter de intervención para establecer la paz en aquel pueblo hermano, como era de desearse, diría que era infeliz pensamiento; pero si por desgracia era cooperar con algunas de las partes beligerantes, sería un consejo funesto, y que el tiempo comprobaría esta aserción.

El señor Gutiérrez: Que nadie podía poner en duda que los sentimientos del Congreso no fuesen por la paz y por la Confraternidad general, porque ella era el voto de todos y también la palabra escrita en la bandera que había levantado el coronel Lagos contra un gobierno que había puesto todos los medios para alejarlos de su provincia y de la República. Que todos los argumentos de los sostenedores del proyecto presentado se habían contraído a excitar la sensibilidad y los afectos, sin hablar a la razón fría del hombre de estado y sin curarse de las razones prácticas y políticas que se habían aducido en oposición. Que todos sentían la necesidad de poner término a una guerra desastrosa, pero que no estaban conformes y que no lo estaba él tampoco, en la eficacia y en la oportunidad del remedio. Que, en su concepto, la mediación era impracticable en las actuales circunstancias, porque el gobierno de Buenos Aires, con quien tendría que entenderse la comisión, rechazaba por documentos oficiales todas las bases sobre las que únicamente podría hacerse un arreglo recíprocamente honroso. Que el gobierno de Buenos Aires vería la misión del Congreso con la misma desconfianza con que las



provincias habían visto la misión pacífica encomendada al general Paz por ese gobierno, y que no era otra cosa, como se la había clasificado muy bien, que una verdadera *revolución en coche*, destinada a sembrar la anarquía. Que el gobierno de Buenos Aires no había de creer ni en la imparcialidad ni en las buenas intenciones del Congreso y había de considerar esa misión como un caballo de Troya, que escondiese en su seno más de lo que ostensiblemente llevaba.

Porque, efectivamente, no podía haber verdadera imparcialidad por parte del Congreso, desde que el partido que había enarbolado la bandera de la paz y de la nacionalidad, debía merecer sus simpatías. Que él, por su parte, lo confesaba francamente, y que aceptaba y deseaba el triunfo del programa que sostenía el coronel Lagos. Que no sería tan modesto como otro señor diputado, para creer que sus palabras y las razones que adujese no tendrían peso alguno en el ánimo del Congreso; pero que no comprendería tampoco que pudiese tomarse la palabra sino con ese objeto. Que, por último, la mejor prueba de la insuficiencia de la medida proyectada, estaba consignada en los documentos oficiales de los periódicos de Buenos Aires que presentaba y que pedía fuesen leídos por el señor secretario.

Después de una ligera oposición del señor Seguí a esta lectura, por ser contraria al reglamento, se acordó por la sala como lo pedía el señor diputado de Entre Ríos, y se hizo la lectura de los editoriales de dos números del *Progreso*, de 4 y 18 de diciembre y una carta del coronel Lagos al gobernador de Santa Fe, publicada en el "Boletín", número 9. Concluida la lectura, el señor Gutiérrez añadió que El *Progreso*, en que se registraban esas declaraciones, era el diario oficial del gobierno de Buenos Aires y el órgano de sus pensamientos.

Pidió la palabra el señor Huergo, y fué interrumpido por el señor Seguí, reclamando la observancia del reglamento. El señor Huergo continuó diciendo: Que sabía muy bien que el Reglamento sólo acordaba a un Diputado la facultad de hablar una sola vez en la discusión general; pero que al mismo tiempo le acordaba la facultad de dar o pedir explicaciones sobre lo que se había dicho, y que para esto había pedido la palabra.

Que en su discurso anterior había dicho que él votaría por la mediación, siempre que se le presentasen bases aceptables para un arreglo pacífico, y que quería, para ilustrar su





juicio y decidirse con maduro examen en pro o en contra del proyecto, que se le manifestasen cuáles serían las bases de esa mediación.

Pidió la palabra el señor Villada y dijo: Que él sostenía la indicación que acababa de hacerse, y que antes de tomar la palabra para entrar a la discusión, pedía que se le manifestasen las bases en que debía fundarse la mediación, y que tomaría en seguida la palabra para manifestar su conformidad o disconformidad, según el juicio que formase de ellas.

El señor Zuviría dijo: Que, si el proyecto se sancionaba, entonces sería, llegado el caso, de pedir las bases de la mediación. Fué interrumpido y llamado al orden por el señor Villada.

El señor Gondra, autor del Proyecto, dijo: Que, si el proyecto merecía la aprobación del Congreso, se publicarían entonces las bases de mediación proyectada y todo lo necesario para su mejor acierto.

El señor Delgado dijo: Que no era después, sino antes de sancionar el proyecto, que debía explicarse la forma en que debía hacerse la mediación y las bases en que debía fundarse; que él insistiría, como los otros señores Diputados, en que se hiciese sobre este particular una explicación franca, porque no podría arribar a un arreglo en este negocio con el Gobierno de Buenos Aires, sin acceder a alguna de sus exigencias sobre el Directorio, el Congreso, o el acuerdo de San Nicolás. Que se manifestasen cuáles eran los medios de conciliación sobre estos puntos, porque de otro modo el votaría en contra del proyecto, por considerarlo ineficaz.

No habiendo en seguida ningún señor Diputado que hubiese tomado la palabra, se dió el punto por suficientemente discutido, y se puso a votación el Proyecto en general. Fué desechado por 14 votos contra 6.

*Proyecto del diputado Leiva autorizando al general Urquiza para que en nombre de la Confederación ofrezca su mediación en la cuestión de Buenos Aires.* — Cinco días después de haber sido rechazado el proyecto del diputado Gondra, es decir el 17 de enero de 1853, volvió a reunirse el Congreso en sesión ordinaria, presentando en esa oportunidad el diputado Leiva, un proyecto de ley concebido en los siguientes términos:



Artículo 1º — Se autoriza al Director provisorio de la Confederación para que, en nombre de ésta, ofrezca su mediación en las cuestiones civiles que agitan a la provincia de Buenos Aires, emplee los medios que le aconseje su prudencia y procure traerlas a una solución pacífica.

Art. 2º — Comuníquese al Director provisorio, explicando en la nota de remisión el pensamiento del soberano Congreso.

El señor Leiva fundó su moción invocando los principios generales de la humanidad, de la paz y del orden público. Se detuvo en los íntimos vínculos que ligaban a las provincias argentinas con su hermana la de Buenos Aires.— en el interés que inspiraban las desgracias de ésta y en la posibilidad de remediar esos males. Dijo que, si bien el generoso pensamiento contenido en el proyecto del señor diputado por San Luis, había sido desechado por su inoportunidad e insuficiencia, no militaba igual razón en el que acababa de presentar, por las circunstancias de la persona que debía ofrecer su mediación a las partes beligerantes de Buenos Aires. Que esta provincia no podía haber olvidado tan pronto los valiosos servicios de que era deudora a su libertador, y que el nombre del general Urquiza, prestigioso todavía en una gran parte de ella, era el indicado para resolver la dificultad y restablecer la buena inteligencia y armonía entre los habitantes todos de aquella desgraciada provincia.

Los señores Zenteno y Gondra apoyaron la moción, manifestando el último que aun cuando su proyecto había sido rechazado, él no trepidaría en prestar su cooperación a éste, desde que su pensamiento dominante era la paz, objeto principal de todas sus disposiciones.

El presidente procedió al nombramiento de una comisión especial encargada de informar sobre el proyecto del diputado Leiva, recayendo la elección en los diputados Torrent, Villada y Martínez, a quienes recomendó la brevedad en el despacho, en consideración a la urgencia del asunto.

*Informe de la comisión encargada de dictaminar sobre el proyecto del diputado Leiva.* — El 19 de enero de 1853 el Congreso aprobó el dictamen de la comisión especial encargada de informar sobre el proyecto del diputado Leiva y que es el siguiente: “La Comisión encargada por el Soberano Congreso de informar sobre el proyecto presentado



por el señor Diputado de Santa Fe, el señor Leiva, conforme en su objeto, cual es la pacificación de la Provincia de Buenos Aires, y completa desaparición de la encarnizada guerra civil de que se halla devorada; para expedirse respecto de los medios expresados en dicho proyecto, y en razón de la importancia y trascendencia que él envuelve, necesita indispensablemente antecedentes oficiales de que carece sobre las medidas y política observada por S. E. el Sr. Director en este asunto y aun su respectable juicio en el modo de obtener el resultado importante de la paz y tranquilidad de aquella provincia hermana."

"La Comisión llama la atención del Soberano Congreso sobre los funestos resultados que traería al fin deseado, marchando quizá en completo desacuerdo con el Directorio por la omisión de pedir los datos necesarios a la ilustración de su juicio."

"Esto supuesto, como medio más prudente para expedirse, la comisión juzga de absoluta necesidad sea llamado S. E. el Sr. Ministro del Directorio para que en sesión secreta ilustre al Soberano Congreso con los antecedentes indispensables a fin de que la comisión pueda emitir su juicio."

*[Faint signature or stamp]*

*Ley autorizando al Director provisorio para que haga cesar la guerra civil en la provincia de Buenos Aires. Minuta de comunicación.* — El Congreso aprobó en la sesión secreta del 22 de enero de 1853, la ley autorizando al general Urquiza, para que haga cesar la guerra civil en la provincia de Buenos Aires. Dicha ley establece:

Artículo 1º — Se autoriza al Director Provisorio de la Confederación, para que empleando todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le sugieran haga cesar la guerra civil en la Provincia de Buenos Aires, y obtenga el libre asentimiento de ésta al pacto nacional del 31 de Mayo de 1852.

Art. 2º — Se recomienda la realización de lo dispuesto en el precedente artículo, con la brevedad y urgencia que demanda la actual situación de Buenos Aires.

Art. 3º — Comuníquese al Director Provisorio.

El 25 de enero el Congreso aprobó una minuta de comunicación para acompañarla a la ley precedente explicando



las razones que habían obrado en su ánimo al sancionarla. La minuta dice así:

El infrascripto tiene el honor de adjuntar a V. E. la ley que en 22 del corriente ha sancionado el Congreso General Constituyente, y de exponer sumariamente a V. E. las razones que ha tenido para dictarlas.

La misión del Congreso, Excmo. Señor, no puede llevarse dignamente sino a condición de una perfecta tranquilidad en la República, y por esta razón su anhelo más vehemente es y será, en tanto dure su mandato, la paz de todos los pueblos argentinos.

Pero los hechos no van desgraciadamente de concierto con este anhelo, y la guerra civil, una enconada lucha entre hermanos aflige a la Provincia de Buenos Aires, parte tan importante del territorio de nuestra república. Mil razones han militado para que la anarquía haga allí imposible el respeto al Gobierno, el ejercicio de la industria y la seguridad del ciudadano, inútilmente se derrama una sangre que tan necesaria es para restablecer nuestro país, extenuado por los males sufridos. Los elementos de reorganización se aniquilan, la moral social sufre profundamente y la República entera temerosa de los efectos del mal ejemplo se resiente con infinito menoscabo de sus intereses de la amenaza que la tranquilidad hace diariamente el estado de extravío en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires.

El Congreso, Excmo. Señor, no ha sido insensible a este doloroso estado de cosas.

Con asiduidad y reflexión ha buscado los medios más convenientes para dar solución a las cuestiones domésticas de aquel pueblo hermano.

Convencido de que su voz, poderosa e influyente en la Confederación, no había de tener eco en el teatro de las pasiones donde el ruido de las armas sofocaría las intenciones de persuasión y de fraternidad que abriga este cuerpo constituyente, no ha aceptado la idea de autorizar una comisión compuesta de miembros suyos, cerca de los partidos en armas que se batían en las calles mismas de Buenos Aires y acampan frente a frente en el corazón de su territorio.

Pero la Providencia no quiere que los deseos humanos y patriotas del Congreso sean condenados a permanente impotencia. La Nación al prepararse para constituirse puso en las manos victoriosos de V. E. una autoridad tutelar cuya im-



portancia sólo puede medirse por la confianza que en las virtudes cívicas de V. E. supone la concesión de esa misma autoridad cuyas facultades son tan altas.

A esa autoridad, Excmo. Señor, al Director creado por la espontánea voluntad de los Pueblos Confederados, es a la que hoy vuelve el Congreso sus esperanzas confiándole una tarea no menos ardua y gloriosa que la de derrocar al Famoso tirano tan satisfactoriamente cumplida ya por el valor y la prudencia de V. E.

La ley adjunta autoriza al supremo Director Provisorio para establecer la paz en la Provincia anarquizada de Buenos Aires, y para inducir la sin violencia a participar la obra constitucionl a qué está obligada por pactos antiguos que no le es dado desconocer.

Ningún antecedente, Excmo. Señor, debe ser más poderoso que el sentimiento de la paz; los pactos mismos no deben ser inflexibles ante esa necesidad nacional. El Congreso por su parte, acatando todas las obligaciones contraídas por la Nación, de cuyas cuestiones es Juez Soberano, no está distante de reconsiderar el espíritu de esos pactos, no para alterarlos, sino para modificarlos en algunos accidentes, en caso que esta modificación contribuya a producir la paz, y el arreglo fraternal de las cuestiones domésticas de la República.

Para evitar la ruina de la Provincia de Buenos Aires, la Nación entera responderá al llamamiento de V. E. para transar y dirimir las cuestiones que el interés, el derecho o las pasiones han hecho nacer, el Congreso se siente con la suficiente imparcialidad y patriotismo; él las presentará rendidas como ofrendas de paz en el altar de la Patria.

La elección de los medios más convenientes para conseguir los objetos de la ley dictada por el Congreso, quedan enteramente fiados a la experiencia y cordura de V. E.

El Congreso no tiene hoy motivo alguno para debilitar el voto de confianza que acordó al Director Provisorio, cuando examinando su conducta pública, halló que había sido la de un hombre recto, y la de patriota verdaderamente argentino. V. E. ama las leyes, y se desvela por establecerlas en la República. V. E. es magnánimo una y cien veces con sus enemigos. V. E. ha dicho en ocasión solemne que ama el pueblo de Buenos Aires, por ser éste el más inmediatamente favorecido por la buena suerte que acompañó a su espada al dirigirla contra el ex Gobernador Don Juan Manuel de Rosas. V. E. en fin ha demostrado que acata la voluntad de



aquel Pueblo y que no quería, pudiendo, violentarlo cuando a la cabeza de un numeroso ejército declaró que abandonaba la Provincia de Buenos Aires a sus propios destinos. Dotado de semejantes antecedentes ¿a quién mejor que a la persona de V. E. pudiera el Congreso confiar la misión de poner término a los dolores de una porción hermana de la noble y desgraciada familia argentina?

¿A quién sino a aquél que al prestigio de su nombre une el poder de la Nación?

V. E. que redimió a la República de una tiranía insoportable, no trepidará en libertarla del mal no menos funesto de la división intestina. La estrella de V. E. es demasiado venturosa y brillante para que no le guíe otra vez, cuando de nuevo intente dirigir sus sanos propósitos hacia la ciudad hoy asediada.

Allí, Excmo. Señor, en esas mismas calles que vió populosas y llenas de júbilo V. E. el día 19 de Febrero último, no se vé más que ciudadanos distraídos de sus tareas pacíficas, para entregarse, tal vez a su pesar, a las ocupaciones del soldado. Los hospitales de sangre ocupan el lugar de los talleres. El hambre se padece por los ricos como por los menesterosos, y la ciudad que V. E. volvió al goce de la propiedad y a la paz con el mundo, ha caído de nuevo bajo el peso de la bárbara ley de confiscación y las armas del extranjero son la única garantía de las familias y de los haberes.

En la campaña están suspendiéndose las faenas, la ganadería sin pastores, y las pingües sementeras de este año en vez de riqueza para el labrador le dan esperanzas frustradas y gastos inútiles. Uno de los bandos armados amenaza a sus contrarios con el bárbaro aparato de dos mil salvajes llamados a los campos de los cristianos con el halago de la rapiña y del saqueo, despertándose así en todas las tribus del interior del desierto la sed instintiva de violencias que caracteriza a los bárbaros.

Ante este cuadro presentado con pálidos colores, V. E. participará, sin duda, de los sentimientos que abraza el Congreso. El Congreso que no trepidaría en sacrificarse por ver restituída la provincia hermana al bien de la tranquilidad y de la paz. Esta es la primera necesidad de la República; la primera necesidad de Buenos Aires, porque en ausencia de la paz, se anula el decoro, la pobreza todo lo esteriliza y los pueblos solo sirven de espectáculo de escándalo y de humillante compasión a los extraños.



El Congreso desea de V. E. el mejor acuerdo en los medios que se digne emplear en consecución de los objetos para que por la presente ley es autorizado, y ofrece a V. E. su cooperación en el límite de sus atribuciones con toda decisión y con las más puras intenciones.

*El Director provisorio comunica al Congreso el envío de una comisión para resolver la cuestión de Buenos Aires.* — En la sesión del 19 de febrero de 1853 se dió lectura en el Congreso Constituyente de una nota enviada por el general Urquiza, en la que le comunicaba haber nombrado en comisión al doctor Facundo Zuviría y al general Pedro Ferré, para negociar una solución pacífica entre los partidos que se hacían la guerra en la provincia de Buenos Aires.

La referida nota dice:

El deseo de que la guerra civil cese completamente en la Provincia de Buenos Aires, y de no omitir para ello, medio alguno que pueda conducir al restablecimiento de la unión de esa Provincia, con las demás de la Confederación, conforme a la Ley del Soberano Congreso del 22 del pasado Enero, me han decidido a enviar una comisión competentemente autorizada, para que interponiendo la alta mediación de la autoridad Nacional, se esfuerce en traer todas las cuestiones, que desde el mes de Setiembre agitan aquella Provincia, a una solución pacífica y razonable.

He considerado que el Sr. Dr. D. Facundo Zuviría, Presidente del Soberano Congreso y el General D. Pedro Ferré, <sup>(1)</sup> Diputado por la Provincia de Catamarca, son dignos por su acendrado patriotismo y por las demás calidades que los distinguen, de desempeñar esta alta misión.

En este concepto espero que el Soberano Congreso se dignará prestar su aquiescencia, a fin de que los mencionados Diputados puedan desempeñar una misión que indudablemente traerá grandes ventajas a la paz y a la Organización de la República.

---

(1) Fué nombrado también para integrar la comisión el Doctor Luis J. de la Peña.



*Tratado del 9 de marzo de 1853.* — Los representantes de la Federación y los de Buenos Aires firmaron el 9 de Marzo de 1853 el siguiente tratado:

El Excmo. Señor Director Provisorio de la Confederación Argentina, en uso de sus facultades y a nombre del Ejército en armas en la Campaña de Buenos Aires: y el Excmo. Señor Gobernador y Capitán General Provisorio de la misma Provincia de Buenos Aires, animados de igual deseo de poner término a la guerra civil, y que las cuestiones que se han suscitado, queden resueltas por los medios que las leyes e instituciones de la misma Provincia tienen establecidos: y que la Nación quede cuanto antes organizada, bajo el sistema federal, que los pueblos han proclamado, concurriendo todos libre y espontáneamente a la formación de un Congreso General, han nombrado sus Comisionados a este efecto, a saber: El Excmo. Señor Director Provisorio de la Confederación Argentina, a los Ciudadanos Dr. D. Luis J. de la Peña. Brigadier General D. Pedro Ferré y Dr. D. Facundo Zuviaría: y el Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires, al Dr. D. Lorenzo Torres, Brigadier Gral. D. José María Paz, Don Nicolás Anchorena, Doctor Don Dalmacio Vélez Sársfield; los cuales después de haber canjeado sus respectivos plenos poderes y hallarlos en buena y debida forma, han acordado y convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1º — Queda restablecida la más completa y perfecta paz en la Provincia de Buenos Aires. Ninguna autoridad o persona podrá ser perseguida, ni censurada, ni tener responsabilidad de ningún género ni en sus personas, ni en sus bienes, por su conducta política, ni por ninguno de los actos que tengan tal carácter, y que hayan sido ejercidos desde el 1º de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, hasta el día en que el presente Tratado sea ratificado por ambas partes; pudiendo en consecuencia, regresar todos los ausentes, y debiendo ser puestos en libertad los que estuvieren detenidos.

Art. 2º — El Gobierno de Buenos Aires, reconoce como deuda de la Provincia todos los auxilios prestados para el sostén de las fuerzas de Campaña, y arbitrará su pago a los acreedores, legitimadas que sean sus acciones.

Art. 3º — El Ejército de la Provincia quedará reducido al pie que fijan las leyes, para tiempo de paz. En consecuen-





cia, todos los cuerpos de Milicias serán licenciados, y su armamento será puesto a disposición del Gobierno de la Provincia.

Art. 4º — Los Jefes y Oficiales de Línea y de Milicias, conservarán los grados y destinos que tenían antes del 1º de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, bajo la autoridad del Gobierno de la Provincia, sin que esto obste a las reformas generales que el Gobierno propietario considerase conveniente hacer.

Art. 5º — Cesando la guerra por el presente Tratado, las leyes de la Provincia de Buenos Aires, relativas a sus poderes públicos, tendrán el debido efecto, y en conformidad a ellas, su Sala actual de Representantes se pondrá en receso, sorteando los Diputados que deban salir; y la elección de los que deban reemplazarlos, se hará tan pronto como esté restablecida la paz en la Campaña, para que las sesiones de la Legislatura del presente año puedan abrirse el primero de Mayo próximo.

Art. 6º — Instalada la nueva Legislatura, procederá inmediatamente a la elección del Gobernador Propietario de la provincia.

Art. 7º — El coronel Don Hilario Lagos, queda encargado por el Gobierno de la Provincia, de hacer efectivo en la Campaña lo dispuesto en el artículo 3º del presente Tratado, respecto del licenciamiento de las Milicias, y de la recolección de su armamento.

Art. 8º — La Provincia de Buenos Aires concurrirá al Congreso en Santa Fe, con el número de Diputados que estime conveniente, no excediendo de la mitad de los que prescribe la ley de treinta de Noviembre de mil ochocientos veinte y siete; reconociendo igual derecho en todas las demás Provincias; y con el exclusivo objeto de dictar la Constitución de la República y demás leyes que se creyesen esenciales a este fin.

Art. 9º — La Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de examinar y aceptar la Constitución que sancione el Congreso Nacional; cuya reserva está prescrita por la ley de treinta de Noviembre de mil ochocientos veinte y siete. Igual derecho reconoce en todas las demás Provincias Confederadas.



Art. 10. — Interín la Constitución no esté aceptada por la Provincia de Buenos Aires, creada la Legislatura Nacional y elegido con arreglo a aquella, el Poder Ejecutivo de la República, dicha Provincia será sólo gobernada por sus propias constituciones y por los poderes públicos que ella tenga establecidos.

Art. 11. — La Provincia de Buenos Aires confiere por su parte al Excmo. Señor General Don Justo José de Urquiza, Director Provisorio de la Confederación Argentina, el encargo de conservar las relaciones Exteriores de la República, sin contraer nuevas obligaciones que ligen a la Provincia, a menos que proceda el acuerdo y consentimiento de ésta.

Art. 12. — Tan luego como sean canjeadas las ratificaciones del presente Tratado, el Director Provisorio de la Confederación Argentina, ordenará la devolución al Gobierno de Buenos Aires, de todos los buques que le pertenecían antes de la guerra; y el Gobierno de Buenos Aires, ofrece ponerlos a disposición de dicho Excmo. Señor siempre que necesite emplearlos, en objetos del Servicio Nacional y para ellos le fuesen demandados.

Art. 13. — Las autoridades legales de la Provincia serán garantidas por el Excmo. Señor Director Provisorio de la Confederación, auxiliándolas con toda la fuerza de que pueda disponer, siempre que ese auxilio le fuese demandado por aquellas, con estricta sujeción al Tratado de cuatro de enero de mil ochocientos treinta y uno.

Art. 14. — El presente Tratado será ratificado por el Excmo. Señor Director Provisorio de la Confederación Argentina, en el término de doce días contados desde la fecha; y por el Excmo. Señor Gobernador y Capitán General Provisorio de la Provincia de Buenos Aires en el de ocho, contados desde la primera fecha; y las ratificaciones serán canjeadas en esta Ciudad dentro de los veinte días a datar de la misma fecha.

En fe de lo cual firmamos el presente Tratado, en la Ciudad de Buenos Aires a los nueve días del mes de Marzo del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y tres.

Artículo reservado. — A fin de que las cuestiones internas de la República se hagan lo menos transcendentales que sea posible, en sus relaciones con las Naciones Extranjeras: consultando la dignidad y consideración de los Agentes pú-



blicos en el Exterior, S. E. el Director Provisorio de la Confederación Argentina, promete expedir patentes de Consules Nacionales, a los que han recibido nombramiento por parte del Excmo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto le serán comunicados a aquél los nombramientos hechos.

El presente artículo reservado formará parte del Tratado firmado en esta fecha.

“El General Urquiza se negó a aceptar semejante convenio, declarando que la comisión se había excedido en sus atribuciones, por cuanto algunas de sus disposiciones constituían un obstáculo casi insalvable para la obra del Congreso, ya instalado en Santa Fe, como lo era el aumento de la representación y el derecho de veto que se reservaba Buenos Aires. Estas disposiciones, por otra parte, constituían una transgresión flagrante a lo que se había resuelto en el Acuerdo de San Nicolás, que fijaba en dos Diputados la representación de cada provincia, como asimismo, de que éstas se obligaban a aceptar la constitución que sancionase el Congreso, sin más limitación que la de respetar el tratado de 1831, que se declaraba ley fundamental de la República.”

“No pudiendo llegar a un arreglo, Urquiza ordenó al Comodoro Coe que bloquease el puerto de Buenos Aires, al mismo tiempo que el Coronel Lagos mantenía el sitio de la ciudad; pero la escuadra se entendió con los hombres de Buenos Aires y el General Flores disperso a las milicias del sitiador.” (1).

*El Director Provisorio comunica al Congreso la imposibilidad de ratificar el tratado del 9 de Marzo de 1853.* — El general Urquiza, comunicó al Congreso Constituyente, el 19 de marzo de 1853, la imposibilidad de ratificar el Tratado, firmado por la comisión especial que fué a Buenos Aires, para negociar la paz con dicha provincia, porque anulaba el Acuerdo de San Nicolás.

La nota del Director Provisorio es la siguiente:

“Tengo el honor de poner en conocimiento de V. H. que para dar cumplimiento a la sanción de 22 de Enero úl-

---

(1) Eduardo A. Iherra. Antecedentes Históricos de la Constitución Nacional. Buenos Aires, 1930, pág. 71.



timo, acredité una Comisión cerca del Gobernador actual de Buenos Aires, dándoles las instrucciones que creí más convenientes para obtener la paz de aquella Provincia y su incorporación al Congreso.

Esta Comisión reunida a los Comisionados nombrados por aquel Gobierno, han concluido el 9 del corriente un Tratado, cuya copia es adjunta.

Pero él ha sido ajustado en términos tales, que no entra en las facultades del Director Provisorio el ratificarlo, ni puede solicitar del Soberano Congreso autorización para hacerlo.

Las estipulaciones contenidas en lo artículos desde el 3º hasta el finº son referentes a la incorporación de la Provincia de Buenos Aires a la Confederación. Pero queda por ellos anulado en toda la República el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, aceptado y ratificado por todas las Provincias: queda rota la unidad nacional: variada la base de la representación de las Provincias en el Congreso Constituyente; y colocados sus Gobiernos en la necesidad de proceder a nuevos convenios para arreglar las condiciones de esta nueva situación.

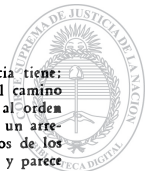
La experiencia reciente ha demostrado cuán peligroso sería arrojar a nuevas eventualidades, después que por los esfuerzos del patriotismo se ha arribado ya a la reunión de los Diputados de los pueblos y a la instalación de un Congreso Constituyente, con bases establecidas y aceptadas para conservar la autoridad nacional en el período necesariamente crítico, en que ha de discutirse y sancionarse la Constitución de la República.

El Acuerdo de San Nicolás es una Ley de la Nación, y el Director Provisorio no se cree facultado para variarlo ni enmendarlo. El ha sido el único lazo que ha mantenido a los pueblos unidos, el único refugio que han tenido para salvar de la Anarquía y la guerra civil, y hoy que los mayores obstáculos están vencidos, sería una grave imprudencia deshacer la situación creada por él, para buscar en nuevas combinaciones el acuerdo de todos los pueblos de la República. Estas son las razones por que el Director no pide a V. E. la autorización que le falta para ratificar el Tratado en la parte que se refiere a los intereses nacionales.

Esto no importa sin embargo, que deba renunciarse a la esperanza de traer a un desenlace pacífico y sincero, las cuestiones interiores de la Provincia de Buenos Aires.

La necesidad absoluta de Paz que esta Provincia tiene; y la convicción en que están ya sus hijos, de que el camino de la guerra civil sólo conduce a la ruina, y nunca al orden y a la libertad, me hacen esperar obtener bien pronto un arreglo satisfactorio y honorable para todos. Los trabajos de los Comisionados han adelantado la obra en este sentido y parece que bastarían algunas modificaciones en los artículos convenidos y restablecer la confianza entre los individuos de uno y otro bando, para que la paz ofreciera sólidas garantías a las personas y a las propiedades, alejara el predominio de un partido y reuniera a todos los porteños bajo la bandera de sus instituciones provinciales sincera y religiosamente observadas.

Mis trabajos se contraerán a conseguir este objeto por todos los medios posibles y en ellos satisfaceré los deseos manifestados por el Soberano Congreso y mis íntimas convicciones.



### CAPITULO III

Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales. — Proyecto de Constitución para la Nación Argentina. — Discusión sobre la oportunidad del proyecto de Constitución. — Lectura de un discurso del diputado doctor Facundo Zuviría. — Aprobación en general del proyecto de Constitución Nacional.



*Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales. Proyecto de Constitución para la Nación Argentina.* — El Congreso había nombrado el 24 de diciembre de 1852, la comisión encargada de redactar el proyecto de constitución para la república, compuesta por los diputados Leiva, Gutiérrez, Gorostiaga, Colodrero y Ferré. El número de miembros de esa comisión fué aumentado el 23 de febrero de 1853, integrándola con los diputados Zapata y Derqui, pero habiendo solicitado licencia este último fué nombrado en su reemplazo el diputado Campillo. Se argumentó para aumentar la expresada comisión, la necesidad de ilustrarla con el mayor número de miembros, como también de que así el proyecto de constitución tendría más apoyo.

La comisión de negocios constitucionales se expidió sobre el proyecto de constitución el 18 de abril de 1853, expresando en su informe:

La comisión de negocios constitucionales cumple con el deber que le fué impuesto, elevando al examen de vuestra honorabilidad; el proyecto de Constitución para la Nación Argentina .<sup>(1)</sup>.

Vuestra misión es arreglar la administración general del país bajo el sistema federal, según el artículo 2º del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, firmado a 31 de mayo de

---

(1) Véase en la página 356 el texto íntegro de la Constitución de 1853.



1852, de conformidad con el artículo 16 del tratado celebrado en esta ciudad de Santa Fe, el día 4 de enero de 1831. El sistema federal es, por consiguiente, la base del proyecto que la comisión ha concebido. Según él, conserva cada provincia su soberanía y su independencia; se gobierna según sus propias instituciones y la elección de magistrados y legisladores se verifica exclusivamente por la libre voluntad de sus habitantes. Los tratados invocados arriba han reconocido que estas soberanías independientes son, sin embargo, miembros de una misma familia y que deben tener un gobierno que las abrace a todas, las represente en el exterior como cuerpo de nación, vigile por su bienestar y su engrandecimiento y las proteja tanto en el goce de sus instituciones peculiares como en su seguridad e independencia. A este gobierno ha llamado la comisión gobierno federal, y le ha dividido en los ramos que la experiencia aconseja, para que pueda llenar con perfección y regularidad la misión benéfica de todo gobierno.

El cuerpo legislativo se compone de dos cámaras: una de diputados y otra de senadores, bajo la denominación de Congreso. Los primeros se eligen según la población de cada provincia y los segundos, según el número de éstas. Aquellas provincias cuyo censo es reducido, tienen en la cámara de senadores igual representación que las más populosas. Para que la Confederación obedezca a una ley del Congreso, es indispensable que concorra la sanción de ambas cámaras y el proyecto ha deslindado las atribuciones que corresponden a una y a otra, tratando de asegurar la madurez de las deliberaciones y el acierto de ellas en el sentido del bien general.

El presidente de la Confederación es electo por el pueblo: esta elección es indirecta, para evitar que sea tumultuosa y para facilitar la legalidad de acto tan importante, haciendo más sencillo el escrutinio. El presidente es responsable de sus actos, nombra los empleados principales de la administración federal, con intervención del senado; tiene para su despacho ministros también responsables y en caso alguno no puede asumir otras facultades que las que expresamente señala el proyecto. El término de su cargo es corto y está prohibida su reelección en el período siguiente.

El proyecto señala con minuciosidad los casos y la manera de acción del poder judicial, que lleva por título el de Suprema Corte de Justicia. Ella es la que ha de formar, por decirlo así, la jurisprudencia del código constitucional. El Presidente de la Confederación y el senado nombran sus miem-



bros; pero tanto en el número de los jueces, como en las calidades que han de acompañarles, para ser digno del cargo, hallará vuestra honorabilidad otras tantas garantías de rectitud y acierto en el desempeño de tan augustas funciones. A la penetración del Congreso no se ocultará, entrando en el mecanismo de este poder nacional, cuales hayan de ser para lo futuro los preciosos frutos que él ha de dar, cuando fuerte en la opinión que conquiste en el país, desenvuelva toda la esfera de su acción en servicio de los principios de justicia y de orden que necesitamos establecer tras tantos años de turbulencia y de irregularidad administrativa.

Se haría molesta la comisión, sin adelantar en claridad, extendiéndose más en delinear estos poderes cuyas atribuciones y funciones se ven por extenso en el proyecto. Ellos se forman de aquella porción de soberanía que de manera alguna podrían emplear bien las provincias confederadas, si parcialmente se la reservasen. Por otra parte, esos poderes nacen de la elección popular. El pueblo de la Confederación, republicano y representativo, nombra los miembros del Congreso y a la persona del jefe que pone en ejercicio las leyes, administra el país y sostiene la dignidad nacional.

La comisión confía en que vuestra honorabilidad hallará acertada la elección que se ha hecho de los ramos que han de formar el tesoro nacional, los cuales se reducen, casi exclusivamente, a las contribuciones indirectas de origen aduanero y el producto que proporcionan las tierras de propiedad nacional.

En esta parte el proyecto ha confirmado las disposiciones del Directorio, no por respeto ciego a sus medidas económicas, sino por cuanto aquella autoridad fué acertada en dictarlas y consiguió con respecto a ellas, plena aprobación de todos los pueblos. Si el gobierno federal ha de corresponder a los fines de su creación, es preciso que tenga en sí todos los medios de engrandecer el país, de defenderlo y de hacerle rico y feliz; es necesario que cuente con elementos pecuniarios abundantes y provenientes de ramos fáciles de arreglar, de vigilar y percibir.

Si se tiene en vista el cúmulo de atribuciones onerosas que se dan al gobierno federal y al mismo tiempo se forma balance exacto de los recursos actuales de la República, se verá que por mucho tiempo el tesoro federal ha de ofrecer un déficit considerable, el cual sólo podrá llenarse con los ramos que se le asignan, a fuerza de inteligencia, de constancia y de





la perfecta realización de las miras a que tienden las disposiciones del Código en proyecto. En nuestro país, donde el arte no ha puesta aún mano sobre los obstáculos naturales que demoran o embarazan el tránsito en la vasta extensión del territorio, mucho hay que gastar para aplicar los perfectos y adelantados medios de la época a la circulación de los productos de consumo y de exportación.

El personal necesariamente numeroso de la administración ha de ser rentado con largueza. Los agentes diplomáticos deben representar dignamente a la República y a su gobierno, en el extranjero. El ejército y la marina han de existir a expensas del mismo tesoro; con él ha de sostenerse el culto católico; y por último, el gobierno federal reconoce como uno de sus primordiales deberes, el igualar el déficit de toda provincia confederada cuya renta no alcanzare a satisfacer sus necesidades interiores.

Los medios de créditos de que puede valerse el Congreso para enriquecer el tesoro nacional, unos son extraordinarios y otros de premiosa urgencia por su utilidad actual. En cuanto a los primeros, ellos no podrán tener lugar sino para determinados objetos de seguridad, de utilidad, de engrandecimiento, como en el caso de abrir canales o establecer ferrocarriles. En cuanto a los segundos, que consisten en fundar un banco que haga presentes las promesas del porvenir, tomando prestado, por decirlo así, a las fuerzas productoras y a los agentes de riqueza que están dormidos hoy y que el régimen legal y orgánico despertará con todo su brío; esos medios son aconsejados en alto, por una buena política en países como el nuestro, en donde no hay que abrigar el temor de que la tierra se esterilice, ni flaquee el precio de sus exquisitas y demandadas producciones.

Bien conocerá vuestra honorabilidad que las contribuciones directas con que el gobierno federal puede gravar a la nación, no serán impuestas sino en aquellos casos en que la existencia independiente del pueblo esté en peligro, o cuando la opinión se adelante a ofrecer lo que una palpable utilidad llegasea exigir. Porque en este como en cualquier otro acto del gobierno creado por el proyecto, es preciso contar con que las personas que le componen en el Congreso y al frente de los demás poderes, son argentinos, conocen las necesidades del país, y están más que nadie interesados en no romper la armonía del movimiento de la máquina que se les confía.



La comisión se ha preocupado especialmente de la resolución de este problema ¿Cómo hacer para que el gobierno federal proporcione a la nación respeto y reputación exterior, paz intestina y desenvolvimiento del comercio, de la industria y la población? La comisión ha creído resolverlo por los medios consagrados en las "Declaraciones y garantías".

Nuestra situación es dolorosa por retrógrada. Es preciso que la práctica del régimen constitucional a que aspiramos, dé, cuando menos para nuestros sucesores, seguridad a la vida y propiedades, medios de trabajo, precio a nuestras tierras y productos y facilidades para comerciar con los pueblos extranjeros de cuyos artefactos y ciencias carecemos. Por eso la comisión, ahogando el rubor en sacrificio a la verdad, y en previsión de males ya sufridos, ha anatematizado la confiscación, los tormentos bárbaros y extravagantes, inventados por la guerra civil y la cobarde adulación de los que quisieron afean más la tiranía con esas prerrogativas llamadas facultades extraordinarias y suma del poder público, hijas del miedo y de la codicia sórdida, que se despiertan cuando la dignidad civil se relaja y los medios honestos de existencia escasean culpa de la perversidad e ignorancia de los que mandan.

Como cristianos y demócratas y teniendo noble emulación a los federales del Norte de América, modelo de engrandecimiento rápido y de libertad civil y política, los argentinos, en concepto de la comisión, deben mostrarse hospitalarios para con el extranjero y acordarle en este suelo favorecido, los derechos, prerrogativas y protección que ha conquistado el hombre donde quiera que existen la civilización y la caridad del Evangelio. Si declaramos libres nuestros ríos a las naves mercantes del globo, ofrezcamos nuestros territorios, desiertos hoy, a las simientes útiles de todos los climas y preparemos para nuestros hijos y compatriotas futuros, una dicha que basta quererla con sinceridad y buena voluntad, para alcanzarla.

El artículo 2º del proyecto acuerda la protección única posible al hombre, sobre la religión que hemos heredado. Por ese artículo es obligación del gobierno federal, mantener y sostener el culto católico, apostólico, romano, a expensas del tesoro nacional. Conciencias timoratas han aplaudido el pensamiento de la comisión, por cuanto esencialmente constitucional, se limita a imponer una obligación sin la cual se debilitaría el culto, aunque estuviere por otra parte amurallado con intolerantes barreras. Es necesario que la solemnidad



y decoro de nuestro rito, que la dotación del clero, sean deberes ciertos y obligatorios para el tesoro federal. Al conceder a todo habitante de la Confederación el ejercicio público de su culto, no se hace más que escribir en el proyecto lo que está solemnemente escrito en nuestro derecho obligatorio, para con las naciones extranjeras. El tratado de dos de febrero de 1825 acuerda a los súbditos británicos la libertad de la conciencia y el derecho de concurrir a sus ritos públicamente; y tanto esta facultad como las demás que encierra aquel tratado, se han realizado sin interrupción desde esa fecha, y también durante el aislamiento de los pueblos, cuando sólo existía un encargado de relaciones exteriores. Este es, pues, un derecho perfecto, conquistado bajo la fe de tratados solemnes, a cuyo cumplimiento no podía negarse el gobierno federal. Derecho, por otra parte, directamente protector de una de las miras que no ha perdido de vista la comisión, — la mira de atraer población activa, útil y moral al seno de la Confederación. El inmigrante por que aspiramos, no es el ser degradado que se embrutece, olvidando a su creador, sino aquél que aprendió a conocerle y adorarlo en el hogar de sus padres. Es el inmigrante cabeza o miembro de familia que, si abandona la patria de su nacimiento, no por eso enajena su conciencia ni su culto; y esta que es una propensión virtuosa, no se puede burlar sin sacrilegio y sin peligro, de poblar nuestro territorio con hombres ateos, incapaces de soportar el yugo saludable de las prácticas religiosas.

De otro punto importante debe ocupar la comisión a vuestra honorabilidad, empezando por declarar que no permite como posible el que la Nación Argentina pueda desmembrarse jamás; por cuanto ni los rencores civiles, ni la tenacidad de los caracteres que éstos abortan, son bastantes poderosos para romper el antiguo vínculo que une a las provincias confederadas. La comisión ha concebido su proyecto para que ahora y en cualquier tiempo abraza y comprenda los catorce estados argentinos. La ley orgánica que se acompaña, relativa al artículo 3º del proyecto, establece los términos en que la ciudad de Buenos Aires, se constituye en capital federal de la Confederación.

La residencia de las autoridades nacionales debe ser aquella en donde con mayor decoro y respetabilidad se presenten ante el extranjero; allí donde estén más en contacto con las potencias amigas; en donde sea más fácil compulsar los archivos y antecedentes diplomáticos, ilustrar la opinión gu-



bernativa y disponer de los elementos que la calidad de capital de hecho de la República ha dado a Buenos Aires desde la época más remota del régimen colonial. En esta parte, la comisión cede a una necesidad imperiosa de nuestra manera de ser.

No crea ni inventa; salva una dificultad de nuestra organización, del mismo modo y por los mismos medios que lo fué muchos años ha. Después de haber trazado un círculo vicioso con sangre y escándalos, perdiendo un cuarto de siglo en tan abominable tarea, volvemos en la materia de capitalización, al punto de partida. Esta circunstancia es elocuente.

Sin embargo, aun cuando el artículo 3º del proyecto haya de quedar como ley de la nación, no por eso se impone la obligación a la provincia de Buenos Aires, de ceder su capital al gobierno federal, hallándose sin representación en el Congreso. Vuestra honorabilidad verá, por la ley orgánica de su referencia, de que manera ha salvado la comisión esta dificultad transitoria, y espera que vuestra honorabilidad prestará sanción a sus ideas y aceptará la forma en que están presentadas. La mencionada ley orgánica va precedida de una declaración en que se invocan principios, convicciones y sentimientos patrios, porque la situación es excepcional, el caso único y única también la causa que embarazaría temporalmente la realización de la Constitución. Los esfuerzos del espíritu y del ánimo, los ha dirigido la comisión allí donde la dificultad existe; y, confiada en la buena estrella de la patria argentina y en la sanidad y desprendimiento de sus intenciones, espera que, por esta vez, se hará oír el Congreso de la ciudad de Buenos Aires, y que vendrá ella de buen grado, a tomar la parte principal que le cabe en la obra santa y suspirada de dar a la nación, orden, leyes y riqueza.

Por último, el proyecto que la comisión tiene la honra de someter a examen de vuestra honorabilidad, no es obra exclusivamente de ella. Es la obra del pensamiento actual argentino, manifestado por sus publicistas y recogido en el trato diario que los miembros de la comisión mantienen con sus dignos colegas. La comisión no ha hecho más que redactar la idea del Congreso constituyente, como habrá de probarlo, sin duda, la plena aprobación que de vuestra honorabilidad confiadamente espera.

A más de la ley orgánica a que la comisión se ha referido, somete dos a vuestra honorabilidad, sin las cuales quedaría incompleto el sistema del gobierno federal. La una es



la ley que crea una municipalidad para la ciudad de Buenos Aires; y la otra, la que, en cierto modo, reglamenta el principio reconocido en el proyecto, de la libre navegación de los ríos interiores y centraliza las rentas aduaneras. Ambas leyes se han tomado de las que dictó el Directorio en Buenos Aires, con algunas variaciones que, en concepto de la comisión, las mejoran, las generalizan y las hacen más aplicables. El sistema municipal, palanca del progreso material y de la buena policía de las ciudades, es de esperar que se extienda a toda la República y que sea consignado en las cartas provinciales. Por esta razón recomienda la comisión a vuestra honorabilidad una atención especial a la ley referida, acompañada en proyecto para que alcance la perfección posible, puesto que, probablemente, servirá de modelo para establecer municipalidades en toda la Confederación. Se permitirá observar la comisión que en la ley proyectada se ha cuidado de no dar a la municipalidad, ingerencia alguna en el gobierno político, para que esta institución permanezca siempre dentro de la órbita policial, en la cual ha de prestar servicios incalculables e indispensables, hoy que tan abandonadas se hallan las ciudades argentinas, reclamando urgentemente el bienestar, el ornato, la salubridad, que tanto halagan a los hombres en los tiempos actuales. Es cuanto cree la comisión de negocios constitucionales deber informar a vuestra honorabilidad, al elevar el proyecto de Constitución y de las leyes orgánicas, en desempeño de la obligación que vuestra honorabilidad le impuso con fecha 24 de diciembre de 1852.

Los señores Gorostiaga y Gutiérrez están encargados de sostener la discusión.

La comisión saluda respetuosamente a los señores representantes del soberano Congreso constituyente.

*Discusión sobre la oportunidad del proyecto de Constitución. Lectura de un discurso del diputado doctor Facundo Zuviría.* — En la sesión del 20 de abril de 1853, el presidente consultó al soberano Congreso si se hacía o no, conforme al reglamento, una nueva lectura del proyecto de Constitución, antes de pasar a su discusión en general. Los señores Seguí y Huergo pidieron que se excusase y, apoyados suficientemente, se procedió a votar, resultando aprobada la supresión de dicha lectura.



Pidió la palabra el señor Gorostiaga y dijo: Comenzamos hoy el trabajo que forma el principal objeto de nuestra misión. Está abierta la discusión del proyecto de Constitución, y demás leyes necesarias para ponerlo en ejecución, que ha presentado la comisión de negocios constitucionales. Después de la exposición que ésta ha hecho al Congreso en su informe y en la declaración que precede a la ley orgánica sobre capitalización, nada nuevo puede decir el miembro informante, en la consideración del proyecto en general. En esta discusión creo que sólo pueden examinarse dos puntos: primero, la naturaleza de la forma de gobierno que sirve de base al proyecto de Constitución; y segundo, la necesidad de su deliberación.

El primer punto está determinado por el tratado de 4 de enero de 1831, y por el acuerdo de 31 de mayo de 1852. La Constitución de la Confederación Argentina debe ser federal. La comisión ha observado estrictamente esta base, organizando un gobierno federal para la República, dejando subsistentes la soberanía e independencia de las provincias. Su proyecto está vaciado en el molde de la constitución de los Estados Unidos, único modelo de verdadera federación que existe en el mundo.

En cuanto al segundo punto, juzgo superfluo manifestar que la sanción de la Constitución es urgente y que los pueblos la reclaman con exigencia; porque el Congreso conoce muy bien que la Constitución es el más poderoso elemento de pacificación para los pueblos; el único recurso que nos queda para establecer el orden y salvar a la Confederación de la disolución y de la anarquía.

Es verdad que la provincia de Buenos Aires no está representada en el Congreso; pero el proyecto de Constitución que la comisión presenta, es para toda la Confederación Argentina, y no obligará a Buenos Aires sino después que a invitación del Congreso la haya examinado y aceptado.

Así no rompemos los vínculos de familia; así no hacemos pedazos la República, que, a pesar de su desorganización, ella existe en el profundo sentimiento de nacionalidad que abrigamos todos sus hijos, vive en todos los corazones, está en todas las cabezas, y es indivisible por pactos solemnes que a nadie es dado desconocer.

Estas consideraciones son las únicas que tengo que exponer en la discusión del proyecto en general. Cuando se discutan en particular los artículos, la comisión o se anticipará



a satisfacer las explicaciones que crea necesarias, o se limitará a satisfacer las objeciones que se opongan.

Pidió la palabra el señor Ferré, y expuso: Que, aunque como miembro de la comisión encargada de presentar el proyecto de Constitución lo había firmado no por eso estaba de acuerdo con todos sus artículos, lo que se creía en el deber de prevenir, para que no se extrañase si hacía después oposición a algunos de ellos.

El Señor Presidente dijo: Que, deseando emitir sus ideas sobre el grave asunto en discusión, pedía la palabra ante el Señor vicepresidente; y dejando aquél su asiento, que fué ocupado por éste, añadió: Que en la sesión anterior, al retirar su moción, había manifestado que su opinión era que se aplazase la sanción y promulgación de la carta constitucional, hasta esperar siquiera la completa pacificación de la República. Que si su indicación era aceptada por el soberano Congreso, ofrecía desenvolver su plan y dar sobre él las explicaciones que se pidieran; que si por el contrario, no lo fuese, no sólo protestaba su más profunda obediencia a cuanto sancionare el soberano Congreso a que tenía la honra de pertenecer, sino también su más leal y decidida cooperación en sus tareas constitucionales, y al mejor éxito de ellas, en cuanto le fuere posible; que las razones en que apoyaba su convicción eran muchas; y que las había consignado en un discurso escrito que ponía en manos del secretario y pedía fuese leído; que si el Congreso no tenía a bien permitir su lectura, tampoco obstaría esto a la obediencia que acababa de protestar.

El Señor Gutiérrez, dijo: Que pedía la palabra para apoyar la petición del señor diputado de Salta, y que, como había de votar por que le fuese concedida, quería explicar su voto; que en los momentos en que el Congreso daba principio a la urgente tarea de constituir la República, era necesario que no no apareciese ni la sombra de que se coartaba a nadie la libertad de expresar su opinión con absoluta y entera independencia; que por esto, y porque hubiese en el debate la más completa libertad, votaba por que se permitiese la lectura de la exposición presentada, aunque constaba de catorce pliegos; siendo así que habría pódido su autor expresar sus razonamientos de palabra, con la facundia que le es propia. Que se leyese, a pesar de ser una flagrante violación de un artículo reglamentario, bien y perfectamente calculado en todos los reglamentos de cuerpos colegiados, precisamente para casos análogos al presente; y por último, que los señores diputados de-



bían ser magnánimos y tener la suficiente prudencia y resignación para tolerar cualquier molestia.

El señor diputado Pérez, (Fr. Manuel) dijo: Que había manifestado en otra ocasión, que no creía llegada la oportunidad de dictar una constitución, porque el país debía constituirse antes prácticamente. Que, estando de acuerdo con las opiniones del señor diputado de Salta, pedía la lectura de su discurso.

El Señor Zenteno votó por su lectura, con otros varios señores diputados; y puesto a votación, si se leía o no el discurso escrito del diputado de Salta, y aprobada la proposición por la afirmativa en general, se procedió a su lectura.

“ Señor:

“ Hay momentos tan solemnes en la vida de los pueblos, y de los individuos, que el menor de ellos decide para siempre de su porvenir, como los irrevocables fallos del destino. En uno de esos momentos, creo se halla nuestra patria, al tratar de darle una Constitución, y sus representantes al dictarla.

Mas, antes de llenar por mi parte tan augusta misión y al exclusivo objeto de llenarla dignamente, me será permitido ventilar una cuestión sin cuyo previo examen no creeré corresponden a la alta confianza de mis comitentes. Al hacerlo, no escucharé sino la voz de mi conciencia y cerraré los ojos sobre los peligros de obedecerla. La patria me ha designado esa guía y en seguirla cumplo sus mandatos y mis juramentos.

Si esta marcha y la franca expresión de mis ideas me acarrearen molestias y aún desgracias, las acepto con patriótica resignación.

No desdeño ni la muerte, siempre que la soporte envuelta en mi humilde dignidad y cubierto con el manto de la libertad y del honor, que creo no haber manchado jamás. Los diputados de un pueblo libre deben a su patria sus acciones, su ser y su misma vida. Le deben también hasta el sacrificio de su crédito y popularidad, que es el mayor esfuerzo del patriotismo y el signo más elocuente de la propia convicción. Mas no le deben el sacrificio de su conciencia, si no es para servirla con ella por medio de la noble y leal expresión de sus dictados.

En cuanto a mí, resigno en aras de mi patria la franca manifestación de mis ideas y opiniones sobre su actual situación, sus desgracias, sus errores, sus peligros y los escollos que le ofrece el porvenir. Débole, pues, mis ideas: si son exactas, para ilustrar la opinión de mis compatriotas; y si erradas, para





afirmarlos más en las suyas por el contraste con las mías. En último caso, le servirán para presentar en sus dos extremos o fases, la más grave de las cuestiones que puede interesar su porvenir; para satisfacer a los pueblos, de la libre y seria discusión que hemos prestado al más vital objeto de nuestra misión: "constituir la República". Toda reserva, todo temor, en la franca expresión de nuestras opiniones, sobre tan grave asunto, comprometería, además, el crédito de nuestra libertad e independencia individual, tan necesarias a la legalidad de nuestros actos.

En uso, pues, y ejercicio de esa libertad, paso a llenar, por mi parte, el mayor de los deberes que me impone la misión de que estoy encargado, y creo llenarla no lisonjeando ni a mi misma patria; no disculpando sus errores, encubriendo sus faltas, alabando sus extravíos, ni disimulando con sombras, el lamentable cuadro de su situación. Lisonjear a los pueblos, como a los gobiernos, en vez de ilustrarlos en la marcha que deben seguir, antes que servicio, es una traición; porque sólo se les puede lisonjear con el objeto de seducirlos para corromperlos. También se les lisonjea prestándoles obediencia en algunos casos, para oprimirlos en otros, o hacerlos servir de instrumentos a intereses y pasiones personales.

Lejos de esto; yo quiero y creo servir a mi patria, ofreciéndole el verdadero cuadro de su actualidad, de los obstáculos que tiene que vencer, de los peligros que la amenazan y le presagian un funesto porvenir si no se ocupa de vencer aquéllos y prevenir éstos. Creo servirla con la expresión de la verdad, de que tanto necesitan los pueblos como los gobiernos, y que a los pueblos como a los gobiernos se les niega y oculta, como si con ocultarla o negarla pudiera ser destruída. Los pueblos, lejos de ofenderse con la verdad, respetan a los que se la dicen con nobleza. En esta parte son más tolerantes que los tiranos y demagogos, que no la soportan, porque la verdad es enemiga de ambos.

Si, pues, debemos a nuestra patria la verdad toda entera, sin disfraz ni reticencias, paso a decir la como la concibo y sobre los puntos que más le interesan saberla por contraria que ella sea a sus deseos, a sus opiniones, y aún a sus mismas órdenes. Como yo la sirva, aunque perezca víctima de éstas.

Se dice . . .

Que los pueblos desean constitución.

Que piden constitución.

Que la exigen de sus representantes.



Si esto es cierto, sin condición alguna, será porque en la Constitución creen ver el remedio de los males que los aquejan el término de sus prolongadas desgracias, el sepulcro de la tiranía y anarquía, que los han devorado, la fuente de un inmenso y feliz porvenir, el verdadero y único garante contra las revoluciones y crímenes que forman su sangriento cortejo.

Si, señor; porque en la Constitución creen ver todo esto. será que la desean y piden con anhelo. Mas, desde que en la Constitución que se dictare en las actuales circunstancias de la República, no vea yo tal suma de bienes, sino la continuación de los males que con ella se pretende curar y la fuente de otros nuevos y mayores para el porvenir, mi conciencia me ordena en alta voz que ante mi patria y sus representantes levante la mía para exponer las razones que tengo en contra de sus deseos; si es que subsisten, para oponerme a la sanción de una carta fundamental, y pedir, en consecuencia, su aplazamiento a un época más oportuna que la presente; a una época de paz, no de guerra civil; de calma y no de revoluciones; de orden y no de trastornos, como en la que hoy se halla la República; a una época, en fin, como la en que se hallaron los pueblos, cuando creyeron llegado el caso de constituirse, y nos encomendaron tan ardua tarea.

Paso a llenar la mía, en cuyo desempeño no podré ser muy lógico, por la naturaleza misma del asunto, pero procuraré ser exacto y no emitir sino principios y verdades comprobadas con los hechos y nuestra propia experiencia.

## INOPORTUNIDAD DE LA CONSTITUCION

La ciencia del legislador no está en saber los principios del derecho constitucional y aplicarlos sin más examen que el de su verdad teórica; sino en combinar esos mismos principios con la naturaleza y peculiaridades del país en que se han de aplicar; con las circunstancias en que este se halle, con los antecedentes y acontecimientos, sobre que se deba y pueda calcular; está en saberse guardar de las teorías desmentidas por los hechos, ya sea por la falsedad de ellas, o su mala aplicación. Está, también en conocer todos los elementos materiales y morales que encierra la sociedad sobre que va a legislar. Está, finalmente, en saber juzgar y combinar todas las pretensiones e intereses discordantes de los pueblos que constituyen dicha sociedad.



Si los principios y las teorías bastasen para el acierto, no lamentaríamos las desgracias de que hemos sido víctimas hasta hoy. Queriendo ensayar cuanto hemos leído y buscando la libertad constitucional en libros o modelos y no en el estado de nuestros pueblos y nuestra propia historia, hemos desacreditado esos mismos principios, con su inoportuna y hasta ridícula aplicación, porque aun el mérito y la virtud se desacreditan, desde que sean proclamados con exageración o inoportunidad. Quizá de esta causa, más que de otra, parte la ruina de nuestros malogrados ensayos. La experiencia, por lo común, no está de acuerdo con las verdades especulativas. El derecho público es muy extenso en los libros; pero, por desgracia, estos pocos enseñan sobre la aplicación de sus reglas y menos sobre la oportunidad de esta aplicación; una idea práctica vale por muchas teóricas. De esa inoportunidad, de esa latitud, de esa exageración en los principios, de esa exaltación y furor para proclamarlos, ha resultado que, siendo las constituciones la verdadera y sólida garantía de la libertad y derechos públicos, las mismas constituciones han sido, entre nosotros, el foco o pretexto de mayor anarquía, la positiva enseñanza de los trastornos y escándalos, empezando por la destrucción de los congresos, reunidos para evitarlos, y de las constituciones dictadas en garantía del orden y de la libertad.

Empíricos políticos, siempre hemos querido aplicar remedios pronto y heroicos, sin examen de la calidad de ellos y del estado del paciente. Los resultados han correspondido a nuestra imprudencia.

Constituciones que, dadas seis meses o un año después, quizá habrían salvado nuestra patria; dadas seis meses o un año antes, no han servido sino para hundirnos en un abismo de males. Apelo a nuestra historia, que vale por un ciento de razones y es más elocuente que un curso de política constitucional; apelo a nuestra historia en que los hechos han desmentido nuestras teorías y burlado nuestras esperanzas. Aún no han acaecido entre nosotros un cambio de gobierno que, quizá no haya sido sino de personas, no de ideas, principios ni costumbres, que no cambien en un día, cuando en el acto atribuyendo los males pasados a esas personas y no a causas reales, permanentes y ligadas a intereses de otro orden, se ha convocado un Congreso para que dictase una Constitución, quizá sin más variantes que los motivos prominentes, que han servido de causa o pretexto a la revolución a que debe su origen. Y ¿qué ha resultado de esta aberración, sino lo que está



consignado en nuestros fastos de sangre? ¿Ni que otra cosa podía resultar? Constituciones que, como dictadas a consecuencia de una revolución, vienen a ser el eco de ella, el resultado genuino del principio a partido victorioso y no de la nación que se compone de vencedores, vencidos y neutrales. ¿Qué, de una obra nacida del foco de las pasiones en ebullición y sin el apoyo de esa aquiescencia general de los espíritus sobre la que no se puede contar en medio de fuertes conmociones políticas, ni aún después de ellas, sin dar treguas a la calma, que sólo se obtiene después de corrido algún tiempo que pasó la tempestad? ¿Ni cómo suponer esa calma en los pueblos, cuando sus mismos conductores participan del fuego de la revolución, de que han nacido y a que quizá deban su existencia? Esto sería el efecto juzgar a su causa; el efecto contrariar la causa que lo produjo.

No siendo esto posible en la marcha de las combinaciones políticas, resulta indefectiblemente que toda Constitución dictada en medio de fuertes acudimientos o a consecuencia de ellos, participará de su extremada energía, de la energía de las revoluciones que, por justas que sean, siempre son el resultado de una violenta explosión, cuyos efectos serán revolucionarios por el espíritu que los anima y la violencia de su acción.

Es pues, indudable, que la Constitución que de ellos emane, no será sino la enérgica expresión de esas pasiones, de esos sacudimientos, que si fueron útiles para destruir lo preexistente no lo serán para desenvolver el caos que ellos dejan, para despejar el terreno del montón de ruinas que queda, y empezar a edificar con la calma de la razón y de la sabiduría, único molde en que deben ser vaciadas las leyes, y en especial las fundamentales. Siendo, pues, revolucionarios y violentos los actos que de dicha Constitución emanen, no será extraño que perezca al nacer, sin dar otro resultado que aglomerar materiales para nuevos y frecuentes incendios. De aquí resultan las incuestionables verdades siguientes, comprobadas con nuestra propia historia:

1º — Que toda Constitución inoportunamente dada, sólo sirve para forjar las cadenas del despotismo, o afilar los puñales de la anarquía, antes que para establecer el suave imperio de la ley.

2º — Que dar Constitución a los pueblos, fuera de oportunidad y sin los medios de asegurarla, es arrojar en su seno una tea encendida que los devore y consuma.



3º — Que, como cada desengaño y cada esfuerzo inútil alejan la consecución del objeto que uno se propone alcanzar, así cada Constitución frustrada hace retroceder a los pueblos más allá del punto de partida; siendo fácil deducir que una serie de constituciones rechazadas impunemente, es una mala tradición para la nueva que se dictare.

4º — Que aceptar la misión de constituir un país sobre montones de ruinas y cadáveres, sin previa preparación del terreno; o en medio de las tempestades y las olas embravecidas, sin esperar que ellas calmen, no importa otra cosa que aceptar la responsabilidad de la anarquía y del mayor de los escándalos que se puede ofrecer: “sacar el mal de la misma fuente del bien”.

5º — Que los ensayos de constituciones cuando los pueblos no están preparados para ellos, en vez de ensayos son catástrofes que los hundan en un abismo de males, son pararrayos mal contruidos, que atraen el fuego eléctrico, sin preservarnos de él.

6c — Que una Constitución, por lo mismo que es lo más sagrado que se conoce en el orden político, no debe ser expuesta a la profanación, sin aceptar todas sus consecuencias; porque cuanto más sagradas son las cosas, tanto más criminal y funesta es su prostitución; es convertir en veneno lo que debiera ser un antídoto o elixir de vida.

7º — Que cuando las pasiones están exaltadas, no hay leyes que impidan los trastornos, porque aquellos tendrán siempre más fuerza que éstas y que toda la razón de los legisladores; mucho más si alterada ésta aún por el excesivo deseo del bien, es arrastrada a los extremos que sólo están en la cabeza de los hombres y no en la naturaleza de las cosas.

8º — Que como donde no hay costumbres republicanas, la República es la peor de las formas, así también, cuando los pueblos no están preparados para recibir una Constitución, la Constitución es el peor de los remedios que se puede aplicar.

9º — Que esa preparación no ha de buscarse en la mente de los legisladores, sino en las costumbres, opinión, hábitos públicos y en la disposición de los espíritus para recibirla, observarla y acatarla, como el símbolo de su fe social y política.

¿Y nuestra patria se halla en tal estado?

Vamos a examinarlo con la austera lente de la imparcialidad que nos impone nuestra misión; y aunque no sea fácil



dar una idea exacta de nuestra situación, porque todo marcha en desorden, y el desorden carece de reglas y proporciones que se presten al examen, sin embargo, ligeras pinceladas sobre ella y los hechos que la constituyen, bastarán para probar "que el actual estado de nuestra patria no ofrece la oportunidad de darle la Constitución que se desea."

El hombre público y en especial el legislador, no puede dejar de prestar atención al tejido de antecedentes y circunstancias de que se compone la historia de cada país, de cada época y aun de cada individuo influyente en la sociedad. Sólo ese tejido revela el verdadero carácter de los pueblos, de los sucesos, de las épocas, de los individuos y de su influencia social. Sólo el conocimiento y examen de ese tejido puede avisar la oportunidad de constituir una nación y fijar su incierto y vacilante destino. Sin ese examen, todo será aventurado, todo será un ensayo y las Constituciones no son materia de ensayo, sino el término de ellos.

¿Y por ventura, el conocimiento de esos antecedentes de que se compone nuestra historia, y sobre todo, el de nuestra triste actualidad, nos indica acaso ser esta la ocasión oportuna de constituir nuestra desgraciada patria?

Yo no lo creo así, señor, por las razones que paso a exponer:

El objeto de toda Constitución y en especial la federativa, debe ser unir y conciliar los derechos, intereses y fueros de los pueblos e individuos, para que todos vivan en pacífica comunión. Pero la República no se halla en estado de que podamos llenar este objeto con un cuaderno escrito que, muchas veces, sólo ha servido de tea para la discordia y guerra civil. Porque es preciso no olvidar que el soberano Congreso al dictar una Constitución, resumen de las leyes que concurren al establecimiento, organización, funciones, modo de obrar y límites de los poderes sociales, tiene que medirse, no con tales o cuales hombres, no con tales y cuales obstáculos aislados y conocidos, sino con toda la revolución en la plenitud de su desarrollo, diseminada en casi todos los pueblos y una gran parte de sus habitantes. Tienen que luchar con todos los vicios acumulados en tantos años de anarquía y despotismo; con vicios elevados por el tiempo al rango de virtudes e instituciones; con intereses distintos y quizá encontrados, de los mismos pueblos que va a constituir, con justos o injustos derechos prescriptos por una larga y pacífica posesión.



Debe también advertir que va a dar una Constitución sin leyes preexistentes en que se apoye y le sirvan de base o escudo contra las pasiones desencadenadas y dueñas de todos los elementos del poder, y, lo que es más, señor, sin haber podido ilustrar a los pueblos con anticipación, sobre las más graves cuestiones y nuevos problemas que debe resolver la Constitución que se dictare. Llamo la atención del soberano Congreso sobre este vacío, que hará más incierto el éxito de nuestra obra.

Para creer llegada la oportunidad de constituirnos, parece que no hubiéramos contado con otro antecedente que haber triunfado del dictador, sin advertir que triunfando de él, no hemos triunfado de la dictadura. Aún pesan sobre nosotros, la dictadura de los vicios que él nos ha legado; la dictadura del crimen y de la corrupción; la dictadura de la anarquía y guerra civil, que con tanto furor han sucedido a su caída; la dictadura de la fuerza armada, que a falta de otros medios morales, decide entre nosotros de todo nuestro ser social y político; la dictadura, en fin, de la crisis y de la situación a cuyo nombre callan todas las leyes y se legitiman todos los abusos y excesos.

A más de estas y otras mil pequeñas dictaduras, que nos devoran con sus cien bocas y nos despedazan con sus cien brazos, peso sobre nosotros la más atroz de las dictaduras, que puede pesar sobre pueblo alguno y que con razón debiera llamarse la dictadura de la sangre; dictadura ejercida, no por un solo tirano, sino por nosotros mismos contra nosotros mismos. Hablo, señor, de ese espíritu de guerra, de sangre y exterminio que se ha apoderado de nosotros hasta no creer posible la solución de un problema político, social o económico, si no es por el ministerio del cañón y de arroyos de sangre. Apelo a la derramada después de la espléndida victoria de Caseros, que creíamos habérmola otorgado el cielo para restañar por siempre esa inagotable arteria de sangre argentina. ¿Pudo alguno creer que los años 52 y 53, años de promisión y esperanzas, fuesen más fecundos en desgracias que muchos de los precedentes, y todo en presencia del ínclito vencedor y del mismo soberano Congreso nombrado para constituir el país a consecuencia de tan próspero acontecimiento?

Y después de lo que ha pasado y pasa a nuestra vista, la sola caída del Director servirá de suficiente base para elevar



sobre ella un trono digno de la Constitución política de la República, sin consideración a su actual estado?

Los escándalos ocurridos después de aquel glorioso suceso y que han escapado de toda previsión, nos revelan demasiado, "que nuestra desgraciada patria aun no había acabado de recorrer los últimos períodos revolucionarios, y que los pueblos no estaban aun cansados de revoluciones y anarquía como se había creído, sin calcular en que las generaciones que se renuevan no se cansan con sufrimientos ajenos, porque las fatigas y los desengaños son personales. Nos revelan, en consecuencia, la inoportunidad de constituirnos sin una previa preparación que venga a completar los frutos de aquella victoria.

¿O creemos que bastará la Constitución que dictaremos, para salvar los pueblos de todas las ditaduras que he mencionado, para curarlos de los hábitos y vicios contraídos en tantos años de extravíos y para sofocar en ellos las anarquías, de que ni por cuatro meses ha podido preservarlos todo el prestigio de la mayor de nuestras victorias?

Las instituciones no son sino las fórmulas de las costumbres públicas, de los antecedentes, de las necesidades, carácter de los pueblos y expresión genuina de su verdadero ser político. Para ser buenas y aceptadas, deben ser vaciadas en el molde de los pueblos para que se dicten.

Y ¿cuáles son nuestras costumbres, nuestros antecedentes, nuestro verdadero ser político y normal, para que los traslademos a una Constitución, o que ésta sea vaciada en aquél? Si con ella pensamos crearlo o cambiarlo, padecemos una equivocación que la expiaremos, como nuestros predecesores expiaron las suyas viendo morir sus obras el día mismo de su nacimiento. Porque, señor, en política, los errores, las faltas, no se curan sino con la expiación que siempre es cruel. Nuestra obra, por más acabada que fuere, nunca será más elocuente que la victoria de Caseros, para llamar a los pueblos a la unión, a la confraternidad, al amor, a la paz y la orden, al respeto de la autoridad y de las leyes.

Sin embargo, lo ocurrido después de aquella victoria, nos revela también que aún subsisten la agitación en los espíritus, la discordia en las ideas y pretensiones, los vicios legados por el despotismo y que aún nos domina la fiebre de la anarquía, con otros elementos disolventes y corrosivos de toda Constitución.





A más de esto, nuestros pueblos, nuestros prohombres del orden civil y militar, acostumbrados por tantos años a ver en suspenso toda ley, toda garantía, durante el despotismo y guerra civil, ¿se rendirán sumisos, renunciarán a sus pretensiones, cambiarán sus hábitos y se crearán otros nuevos a la sola vista de una Carta constitucional, sea cual fuese su mérito y el heroico patriotismo de los hombres que la hubieran dictado?

Si sancionada la Constitución se calcula en hacerla aceptar y observar por la fuerza, es seguro que cuando no sea rechazada por la misma, le faltarán la voluntad y convicción únicas bases de estabilidad en que reside el poder de la ley y la autoridad que ella creare. No reposando sobre tales bases ni recíprocas conveniencias, único garante de aquellas, no pondrá fin a los celos, no calmará las venganzas, no extinguirá los odios, ni evitará las reacciones de un resorte comprimido que, para estallar, sólo espera el momento en que cese la compresión. Con la fuerza se conquista, no se convence; se domina, no se gobierna. Si ella ha obtenido algo en el orden político, es la conquista de uno u otro hecho que el tiempo haya elevado a principio; mas nunca una Constitución. Si el mérito de la inglesa está en que no reposa sobre teorías, sino sobre una reunión de hechos, es que esos hechos han sido conquistados de tiempo en tiempo; registrados y consignados a medida que se conquistaban. Por esta circunstancia, su Carta ha venido a ser la expresión del hecho, como debe ser toda Constitución, para que sea estable; mas no de hechos conquistados simultáneamente y mucho menos de teorías reunidas y desmentidas por los mismos hechos.

Casi todos los gobiernos antiguos y estables se han formado, no por actos simultáneos, sino sucesivos, que con el tiempo han venido a formar una Constitución. Las Capitulares de Carlomagno, la Gran Carta de Inglaterra, la Bula de Oro de Alemania, el poder papal y los códigos eclesiásticos; la antigua Constitución española, los fueros de sus provincias y reinos, todo ha sido el resultado de hechos sucesivos y no simultáneos.

Y ¿cuáles son los hechos que después de nuestras primeras glorias tenemos consignados en nuestros anales, si no son los de la anarquía y terror, con su cortejo de escándalos, de sangre y exterminio?

¿Qué época, ni qué período de paz, orden, libertad, respeto a la ley, a la autoridad, a los derechos individuales, a



la seguridad ni propiedad, nos ofrecen aquellos, para que tales hechos puedan servirnos de antecedente, de modelo o punto de referencia en la Constitución que sancionemos?

Este solo hecho, señor, convertido en argumento, responde a toda vana teoría, a todo discurso por recargado que esté de principios políticos. Este solo hecho confirma la verdad práctica, "que obrar con acierto, juicio y previsión, importa más que discurrir con talento y hablar con elocuencia"; y que el genio y el talento consisten menos en formar planes atrevidos y lujosos, que en preparar los medios de ejecutarlos.

Alquimistas de la política, dogmatizadores de ella en toda la América, somos los únicos que no hemos visto realizados uno solo de sus principios liberales. Estimándonos por sabios, políticos, diplomáticos y hombres de estado, somos los únicos que no hemos gozado una sola época de paz, de libertad práctica, de felicidad, de abundancia, de orden interior, ni de respeto exterior; los únicos que en toda línea retrocedemos cada día, en vez de progresar; somos, en fin, los únicos que, en vista de nuestro estado, la América y la Europa nos compadecen, nos desprecian o insultan... Y ¿por qué tanta desgracia? Porque de todos hemos abusado y más que de todo, de la oportunidad de nuestros ensayos. Aspirando siempre a la primacía, en estos, solo hemos obtenido amargos desencuentros y ser los últimos en las realidades.

Pero como toda superstición tiene por principio una cosa natural, así los errores nacen, por lo común, de una verdad de que se abusa en su aplicación u oportunidad. Sabemos que es bueno y necesario que un país inconstituído se constituya y de esta verdad ya deducimos: "luego debemos constituirnos en el acto". He aquí nuestro argumento y principal error; el abuso de la verdad es peor que la mentira, como el de la libertad es peor que la tiranía.

Muy satisfechos con la idea de Constitución y lo que ella importa, decimos voz en cuello: "la Constitución hundirá para siempre la anarquía y despotismo, remediará todos nuestros males y será la fuente de inmensos bienes"; sin fijarnos en que la anarquía y despotismo no se sofocan ni dominan con leyes escritas: que las hondas llagas que ellas abren, no se curan en un día ni con un remedio y que solo después de dominados aquellos monstruos por un poder fuerte, justo y vigoroso, es que se necesita de leyes fuertes, justas y vigorosas, para evitar su regreso.



La Constitución es planta nueva para el pueblo argentino; pide un terreno abonado antes por la paz y calma de las pasiones, por algunas leyes preexistentes, por algunos hábitos de orden y de una racional obediencia. Pide, sobre todo, miramientos prolijos y estación oportuna para plantarla.

¿Y esta planta nueva a que tantas veces ha resistido nuestro suelo, podrá aclimatarse de pronto en un terreno hoy convertido en un ciénago de sangre? ¿Podrá aclimatarse en él una Constitución, por su naturaleza suave, moderada y desnuda de otras armas que las de la voluntad y convicción nacional, cuando no ha podido existir entre nosotros gobierno alguno, si no es por la fuerza del terror, bajo el prestigio de la guerra y conquista incesante o de una gloria militar obtenida y renovada de tiempo en tiempo con la sangre de nuestros compatriotas? Apelo a la historia de la República y no a la de tal o cual provincia, en tales o cuales períodos excepcionales de su existencia.

He dicho "que sólo un poder fuerte, justo y vigoroso puede dominar la anarquía, para fundar sobre sus ruinas una Constitución y hacerla respetar como una religión". Si, señor, así lo creo.

Pero, supuesta la Constitución, ese poder no podría sino emanar de ella, so pena de ser arbitrario, ilegal, despótico y destructor de la misma Constitución a que deba su existencia.

Mas, si emana de ella tan fuerte y vigoroso, como lo demanda la situación, será tiránico y de tiranía permanente, como es permanente la Constitución que lo creare; en cuyo caso, ni la Constitución ni el poder creado por ella, serán aceptados y obedecidos por los pueblos.

Si huyendo de este mal, la Constitución crea un poder moderado y restringido, como debe ser en precaución del despotismo, ese poder moderado y restringido será débil e insuficiente para dominar la actual anarquía y hacer observar la misma Constitución.

Si con este santo objeto, ese poder moderado, excediere los límites que ella le ha fijado, vendrá a ser el primero que la viole con pretexto de sostenerla.

Y ¿qué remedio en esta alternativa?

¿Qué remedio para evitar que en precaución del despotismo, la Constitución cree un poder débil contra la anarquía, o que para sofocar ésta, cree uno tan fuerte que sea tiránico y destructor de las mismas libertades que garantice la Constitución.



No hallo otro, señor, sino que antes de dictarla, nos ocupemos por otros medios que la misma Constitución, de sofocar la anarquía, cortar la guerra civil y restablecer la paz en toda la República, si no queremos que una nueva anarquía y más sangrienta guerra civil sea el Te Deum que los pueblos canten a nuestra obra. Paso a demostrarlo.

## NECESIDAD PREVIA DE LA PAZ

En proporción a los muchos años que he vivido anhelando ver constituida mi patria, es el ferviente deseo que me domina al presente, por ver realizada mi esperanza, siquiera en el último período de mi vida. Sin tan poderoso estímulo, es seguro que hoy no me hallara ocupando este honroso puesto. Y debéis creer, señor, que no me será de pequeña amargura tener que llenar los deberes que él me impone, contrariando al parecer, lo mismo que he anhelado y que ha sido el objeto de mis votos y término de mis aspiraciones en el orden político.

Como simple ciudadano, puedo, sin responsabilidad, entregarme a los sueños de mi imaginación, a los impulsos de mi voluntad.

Mas, como representante del pueblo, no puedo ver la cuestión de constituir mi patria, ni con la voluntad ni con la imaginación; porque todo lo visto con ellas, pierde sus formas naturales, todo se altera, se crean bienes donde no existen, como los ojos se crean figuras en las nubes y celajes, o como los microscopios que aumentan los objetos, pero cambiándoles sus formas naturales y dimensiones proporcionales.

Como representante de mi patria, debo ver la cuestión con la lente del juicio, del raciocinio y de la previsión fundada en la experiencia que le sirve de antecedente. Pues, bien, señor: mi débil razón, ilustrada por ella, me enseña que sin previa paz en que se conquisten algunos bienes en el orden social que debe preceder al político, materia principal de una Constitución, es de todo punto arriesgado establecer ésta, que siempre supone la preexistencia de aquél y la posesión práctica de algunas garantías inherentes al hombre en sociedad.

Me enseña también que es peligroso darla en medio de las reacciones políticas que renuevan y envenenan las heridas en vez de curarlas; del estrépito de las armas, del estruendo del cañón, de los saqueos, persecuciones y matanzas que la



humanidad y la civilización deploran todos los días entre nosotros.

A más de esto, señor, ¿seremos del todo libres para darla en medio de tantos desastres?

¿Y seremos de todo punto imparciales para dictarla, cuando quizá no estemos exentos de las pasiones de la época y de las influencias de la atmósfera general que nos rodea?

Y cuando seamos tan libres e imparciales como debemos serlo, ¿los pueblos creerán que lo somos? ¿Aceptarán y acatarán nuestra obra como fruto de nuestra libertad e imparcialidad?

Los vencedores en nuestras luchas sangrientas, ¿recibirán sumisos la ley que les demos, si ella no halaga sus intereses personales, ni satisface los derechos que crea la victoria, rara vez de acuerdo con los de la ley, que establece la igualdad entre el vencedor y el vencido, entre el débil y el fuerte? ¿Se conformarán con la preferencia que da la fortuna, sin la superioridad que sólo concede la ley?

¿Daremos Constitución en los mismo momentos en que tenemos que tolerar, legitimar y aún aplaudir los excesos consiguientes al mismo estado de guerra, que es el peor de los hechos y el mayor de los males que ella envuelve?

Si antes de instalado el Congreso Constituyente, ya se le desconoció por una provincia que en población y riqueza se dice hacer la tercera parte de la República; si después de instalado, han ocurrido en su presencia revoluciones y guerras suscitadas en otras de las que le prestan respeto y obediencia, ¿qué será de la Constitución que diere, si ella no satisface las personales o provinciales aspiraciones? ¿Si les exige sacrificios indispensables a la organización nacional, pero que al mismo tiempo contraríen o cancelen pretensiones o derechos opuestos a aquella, aun cuando por otra parte llenen todas las exigencias de la justicia y nacionalidad argentina?

Algo más, señor: dar la Constitución en los mismos momentos en que la crisis y la situación han tomado sus mayores dimensiones y no ofrecen una sola intermitencia para dominarlas, equivalen a un gran golpe de estado. Pero, señor, un golpe de estado siempre es peligroso, es siempre aventurado en sus consecuencias; porque los golpes de estado, aún en el orden político y administrativo, tan subalterno del constituyente, piden, a más de saber, virtudes y talentos, genio, que marque la oportunidad de darlos, fuerza que se apodere de



ella y de otros elementos materiales y morales que los preparen y garanticen su éxito.

¿Y el soberano Congreso puede lisonjearse de contar con tales elementos? Por lo que hace a mí, señor, conociendo que carezco de todos ellos, no me atrevo a opinar por la Constitución, sin ver antes pacificada la República, restablecida la confianza en los pueblos, calmadas nuestras pasiones y ensayados siquiera, los primeros goces de la paz, de la seguridad y propiedad, bienes de todos desconocidos entre nosotros. Porque, señor, para que la honra, la vida, la hacienda y otros derechos del hombre, antes que del ciudadano, puedan ser consignados en una Constitución, es preciso que se empiece por respetarlos prácticamente, si no quieren que sean juegos violados con la carta que los consigne.

Sea por nuestro permanente estado de guerra o por otras causas que no es del momento examinar, es una amarga y desconsolante verdad "que entre nosotros se carece de toda idea práctica en orden y seguridad de las personas y respeto a las propiedades". O si no, dígame ¿qué ramo de nuestra industria agrícola o pastoril, único que constituyen nuestra propiedad y riqueza, es respetado ni garantido entre nosotros? Pero, ¿ni cómo ha de serlo, si de hecho y de derecho son declarados artículos de guerra y la guerra, y guerra civil, es nuestro estado normal y permanente?

¿Ni con qué seguridad personal se cuenta en tal estado si no es con la que quieran otorgar los beligerantes, o la que se busque en el extranjero, único asilo contra el poder absoluto que ha pesado sobre nosotros por décadas de años y que pesará mientras dure la guerra civil, corrosiva de toda seguridad?

¿Ni qué igualdad se conoce en nuestros pueblos, si no es en la pobreza, los padecimientos, las miserias en el interior y el descrédito en el exterior?

¿De qué derechos, de qué garantías, de qué bienes estamos en posesión durante la prolongada lucha que nos devora y bajo el peso del espíritu anárquico y sangriento que se ha apoderado de nosotros hasta convertirse, al parecer, en una segunda naturaleza?

¿De qué libertad podemos gozar donde las personal y propiedades están libradas a la merced del más fuerte y no al amparo de la ley?

¿Ni qué de libre hay entre nosotros si no es la fuerza material que se garantiza ella misma, que dispone de las demás fuerzas sociales, que pesa sobre los individuos, los pue-



blos, los gobiernos, y, sobre todo, cuánto no es ella misma o está subordinada a sus instintos?

¿Cuál es el destino político de los pueblos, sino el de ser oprimidos como súbditos, para que en provecho de sus opresores expresen su voluntad, como soberanos, y legitimen sus mismas cadenas? Pero, ¿ni qué otra soberanía real les ha quedado, que la de alternar entre la esclavitud apoyada en nuestra abyección, o la anarquía provocada con nuestras exageraciones de libertad?

Para abreviar: ¿cuál es, en fin, nuestro estado actual? Por amargo que sea confesarlo, no es otro, señor, que el de la anarquía y desorden constituidos, el de la expoliación y miseria constituidas; el del terror y la muerte constituidos, y todo puesto a la orden del día, a presencia de las mismas autoridades nacionales creadas para poner término a tantas desgracias. En vista del cúmulo de ellas, parece que nuestra patria encerrara en sus entrañas aquel *tonel* del mal que pinta Homero, lleno de lágrimas, de gemidos y de sangre.

Y en tal estado ¿será oportuno dictar una Constitución sin más apoyo que la débil esperanza de que ella cambie la faz de nuestros pueblos, que los regenere por el bautismo de la ley y del teatro de horrores, los convierta en una mansión de paz, de orden, leyes e instituciones liberales? Yo no lo creo así, señor, y por no creerlo, es con intenso dolor que insisto en el *aplazamiento* de la Constitución, siquiera hasta obtener la paz de la República, *siquiera* hasta que cese el estruendo del cañón y nuestra débil voz pueda ser escuchada para ser obedida.

Sí, señor; *siquiera hasta obtener la paz*, por que sólo a la sombra de la *paz*, calmarán las pasiones exaltadas; en cuya sola calma está el triunfo de la libertad y de la ley; renacerá la esperanza del orden, casi extinguida con tan crueles desengaños: sólo en la *paz* podremos meditar en nuestro amargo pasado, y recordar nuestros extravíos y sus causas, nos avergonzaremos de sólo haber obtenido con ellos la celebridad del escándalo, cuando creíamos haber merecido la de la gloria, que no se obtiene en guerras fratricidas. Se reanimará en todos los corazones el entusiasmo por la libertad, resfriado en unos, extinguido en otros, por los errores del despotismo y de la anarquía.

A los nombres de *paz* y *propiedad* renacerá el *orden moral* destruido con tantos crímenes y sin el que no puede exis-



tir ningún *orden político*; volverá la seguridad individual, a cuyo abrigo progresarán otras instituciones que faciliten el establecimiento de la Constitución.

En la paz, podremos ocuparnos de la República, activa, industriosa y productora, en vez de la teórica, escolástica, revolucionaria y puramente consumidora de que hasta hoy nos hemos ocupado con tanta ruina de la nación; buscaremos la libertad en la ley y no en la fuerza; la colocaremos en el hogar doméstico, en las ciudades y campañas, no en los campos de batalla, donde sólo se alimenta con víctimas humanas, ni en las lizas o torneos parlamentarios, donde los odios, la cábala, la intriga y otras viles pasiones, se disfrazan con el sagrado manto de la ley; meditaremos en la verdadera causa de nuestras desgracias y reflexionando sobre ella, daremos a nuestro carácter nacional la gran parte que él tiene en nuestros infortunios y no los atribuiremos a circunstancias, a incidentes y personas que apenas son efectos, son síntomas del grave mal que nos aqueja.

Sí; a la sombra de la paz, en vez de habitantes desgraciados, porque carecemos aún de los derechos de hombres, empezaremos a ser ciudadanos de nuestra patria, y gozar de las garantías de tales, de que hasta ahora hemos carecido. Desaparecerán por sí mismos, el poder de la osadía, la superioridad de la algazara, que han transformado en revoluciones de ideas y de principios los frecuentes tumultos y motines que por tantos años han funcionado entre nosotros como único poder soberano. La fuerza moral de las leyes y costumbres recobrará su imperio usurpado por la fuerza física, enemiga del orden cuando no emana de aquéllas.

Los mismos gobiernos no se verán obligados a servirse de muchos hombres ruines y perversos, cuya audacia es forzoso respetar, aplaudir y aun premiar durante la guerra, y que en la paz serían castigados con la última pena o relegados a la obscuridad de que sólo las tempestades políticas pudieran sacarlos, como las naturales hacen salir de sus cuevas a los más viles y ponzoñosos insectos; de donde ha resultado que muchas de las páginas de nuestra triste historia se vean manchadas con la historia de muchos hombres oscuros y viciosos, durante cuyo mando ellos han sido todo y los pueblos nada.

Sólo a la sombra de la paz podremos conocer la verdadera opinión de las provincias respecto a la Constitución y demás problemas que interesan a su adecuada organización. El metal derretido no toma su forma, sino enfriándose, ni la





aguja magnética señala su norte sino en quietud y en reposo; agitada, recorre en desorden toda su circunferencia.

Durante la guerra sólo una opinión se conoce en los pueblos y es por la paz, que prefieren a la libertad y a todo otro bien; porque es su primera necesidad, su primer deseo y porque conocen que sólo en ella podrán ser discutidos y examinados sus verdaderos intereses, cuyo choque les ha acarreado tantos males y sin cuya previa conciliación no habrá paz sincera, ni unión permanente. Sí, señor; los pueblos prefieren la paz a la libertad, porque sólo en la paz ven goces presentes que son por los que obra; el porvenir no les hace mucha impresión; poco se libran a promesas de cuya verdad desconfían, a fuerza de haber sido engañados tantas veces.

Sólo en la paz reconocerán que su aspiración debe limitarse al socialismo y centralización de las provincias y no al comunismo de ellas; que siendo contra la naturaleza de las cosas en los pueblos y los individuos, sólo conduce a la concentración de un abismo que absorbe a todos por igual.

Sí, pues, no esperamos que la paz nos venga por la despoblación e impotencia de pelear; la propiedad, por la falta de bienes, y la seguridad, por la fuga, forzoso es que nosotros las llamemos, las busquemos como precursoras de una Constitución, y no como resultados de ella, si no es para su estabilidad y consolidación.

Sólo en una época de paz y durante el aplazamiento que propongo, podremos tomar algún conocimiento de la situación, peculiaridades, intereses, comercio, rentas, industria, organización interior, población y demás elementos constitutivos de los pueblos que vamos a organizar. Sin este previo conocimiento, sin alguna estadística de aquellos, no concibo, señor, cómo podamos darles una constitución que presupone tales antecedentes, si no es que nos resolvamos a un procedimiento que no es político ni lógico, cual es, "acomodar y vaciar los pueblos en la Constitución, en vez de acomodar y vaciar ésta en aquéllos".

Sólo en la paz, allanaremos tantos obstáculos y salvaremos tantos inconvenientes que por ahora se oponen al lleno de nuestra augusta misión. Y por concluir, señor, sólo al abrigo de la paz cuyos bienes aún no conocemos, ésta, nuestra patria, que tantos sacrificios nos cuesta, volverá a ocupar entre los estados americanos el alto rango que antes ocupaba, y del que le han precipitado nuestros extravíos, hasta convertirla en objeto de compasión o escarnio.



No desconozco, señor, que, al ver el cuadro que acabo de ofrecer de la triste situación de nuestra patria, algunos me culparán de exagerado en sus tintes y quizás no falten quienes me acusen que la deprimó, la humillo, o, cuando menos marchito las esperanzas de mis compatriotas. No, señor, nada de esto. Los eminentes y esclarecidos norteamericanos, Hamilton, Madison y Jay, me relevan de toda nota, con el más obscuro y triste espectáculo que ofrecieron de su patria en circunstancias análogas a las en que nosotros nos hallamos y con el mismo noble, puro y patriótico objeto con que yo os he presentado el de la nuestra.

Porque, señor, en política, como en moral, ocultar la verdad, disfrazarla o negarla es perpetuar el error, alejando su remedio.

Tampoco desconozco que, a cuanto he aducido y aduzca sobre la inoportunidad de dar la Constitución, necesidad de previa paz y aplazamiento de aquélla, se me contestará con lo que expresé en mi exordio: "Que los pueblos desean Constitución; que piden Constitución, y que a darla nos han mandado a este recinto".

Sí, señor; todo será cierto; pero también lo es, que los pueblos la pidieron y exigieron a consecuencia de la victoria de Caseros, cuando la esperanza pública se reanimó con aquel suceso cuando toda la Confederación estaba en plena paz y animada de un solo sentimiento, de una sola idea; cuando libres del terror se entregaron a los delirios de la libertad: sin temor de las consecuencias que les traería su abuso. Sí, señor, entonces la pidieron.

También es cierto que, si por el acuerdo de San Nicolás nos mandaron los pueblos a darles Constitución, fué bajo el supuesto contenido expresamente en su artículo 2º "de hallarse todas las provincias en plena libertad y tranquilidad".

Y pregunto: ¿hoy se hallan todas en aquel caso? Respondan por mí y por nosotros los sucesos acaecidos en varias y que existen palpitantes en el corazón de todo argentino.

Pero quiero convenir, que, aún supuestos tales sucesos, los pueblos insistan en su mandato de Constitución, lo que ignoro si sea de todo punto cierto. Aún siéndolo, ¿su existencia destruirá en nosotros los derechos y deberes que tiene todo mandatario para exponer a su mandante los inconvenientes de llenar las cláusulas generales del mandato, en tal o cual oportunidad no designada, en tal o cual tiempo no prefijado? ¿No faltaremos más bien a su confianza si, por res-



peto al texto de las cláusulas del mandato, faltamos a su espíritu, al verdadero deseo e interés del mandante? Yo lo creo así.

La primera cláusula de nuestro mandato es obrar según los dictados de nuestra conciencia. Obrando cada uno según la suya, lo ha llenado. Pues bien: obrando yo según la mía, creo llenar el mío y cumplir el juramento que presté en este mismo recinto.

A mi patria he consagrado hasta hoy cuanto he podido consagrarle; todo he sacrificado en sus aras; le sacrificaré también mi vida, como en esta vez la ofrezco hasta el sacrificio de mi crédito y popularidad; el de mi conciencia ¡no!

*Aprobación en general del proyecto de Constitución Nacional.* — Concluida la lectura del discurso, se pasó a cuarto intermedio, habiendo pedido la palabra el Señor Huergo.

Vueltos a sus asientos los señores diputados, el señor Gutiérrez dijo: Me ha cedido la palabra el señor Huergo y hago uso de ella para contestar algunos argumentos del discurso que acaba de leerse. La rapidez con que se ha leído y la falta de lógica en que su mismo autor confiesa haber incurrido, hacen que no pueda contraerme a rebatir sino los argumentos que encierra el recitante de su última parte, en que se niega que la Constitución pueda producir los objetos para que ha sido formada según su misma declaración: "constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino". Sí, pues, la constitución que sienta estos principios, si el Congreso encargado de dictarlos, si la autoridad creada por él, para sostenerlos, no pueden dar a la República las ventajas de que carece, ni sacarla del estado en que la pinta el diputado por Salta, ¿qué otra cosa podrá volverla al goce de sus derechos, el orden constitucional y la paz de que carece? Hemos salido de la tiranía y conocido la paz que ésta nos garante; y esa es la paz de los sepulcros. Hoy que hemos triunfado de ella, ¿hemos de burlar a los pueblos en su anhelada esperanza, de que una Constitución liberal ponga fin a las desgracias que los aquejan? Esto sería abandonarlos, lanzándolos en caminos ignorados, de donde nadie po-



dría sacarlos más tarde; abismo a donde ni aún puede alcanzar nuestra vista.

El discurso del señor diputado de Salta se ha escrito o leído después de sometido a la consideración del Congreso el proyecto de Constitución; a él se refiere, y como miembro informante de la comisión que lo ha presentado, mi deber es explicarlo y defenderlo.

La Constitución es eminentemente federal, está vaciada en el molde de la de los Estados Unidos, única federación que existe en el mundo digna de ser copiada.

Muy al principio de este siglo, dijo un distinguido político que sólo había dos modos de constituir un país: tomar la Constitución de sus costumbres, carácter y hábitos o darle el código que debía crear ese carácter, hábitos y costumbres, si no los tiene. Si, pues, el nuestro carece de ellos, si, como el mismo señor diputado de Salta lo expresa en su discurso, "la nación es un caos", la comisión en su proyecto presenta el único medio de salvarla de él.

La Constitución no es una teoría, como se ha dicho, nada más práctico que ella; es el pueblo, es la nación argentina hecha ley y encerrada en ese código que encierra la tiranía de la ley, esa tiranía santa, única a que yo y todos los argentinos nos rendiremos gustosos. Los pueblos nos la piden con exigencia, porque ven en ella su salvación; y es, por otra parte, la oportunidad más aparente para dársela; debemos hacerlo sin pérdida de tiempo y pretender su aplazamiento es una acción que no me atrevo a calificar.

Creo bastante lo que he dicho sobre el punto de que me he ocupado. Abandono gustoso los demás del discurso, a los señores diputados que quieran contestarlos.

Obtuvo la palabra el señor Zavalía, y dijo: Después del discurso luminoso que acaba de pronunciar el señor diputado miembro informante de la comisión de negocios constitucionales, poco hay que agregar. El ha fundado de una manera incontestable la oportunidad de la sanción de la carta, y ha hecho una justa apología del proyecto de ella. Sin embargo, diré pocas palabras en contestación al discurso escrito que nos ha presentado el señor diputado de Salta, dirigido a manifestar "Que no es tiempo de dar la Constitución nacional".

Dejando a un lado el cúmulo de máximas políticas en que abunda, que, si bien son verdaderas, fuera de toda disputa, son al mismo tiempo incoherentes y ajenas del punto en



cuestión; encuentro en el escrito del señor diputado por Salta, cinco argumentos de fondo, sobre que giran todas sus reflexiones.

“La República, dice, no está en paz, y el orden no está bien establecido.

“No hay en nuestros pueblos costumbres republicanas sobre que pueda apoyarse la Constitución.

“No hay un poder político capaz de asegurar su observancia por los pueblos de la Confederación.

“Diferentes estados de Europa, hoy florecientes, se han constituido por actos sucesivos y no por una ley fundamental que abrace todos los ramos del gobierno.

“Aunque hemos recibido de los pueblos la misión de constituirlos, la situación ha variado y no estamos obligados al cumplimiento de un mandato que se ha tornado pernicioso a nuestros comitentes”.

A estos cinco puntos puede reducirse en substancia cuanto contiene la oración escrita del señor diputado por Salta, como prueba de la inoportunidad del proyecto de Constitución. Procuraré refutarlos por su orden.

El señor diputado de Salta nos ha pintado la actualidad de la Confederación con tintes exagerados; nos ha pintado tempestades políticas sobre todo nuestro horizonte, cuando sólo aparecen sobre un punto del territorio argentino, próximas a conjurarse. En fin, nos ha trazado un cuadro lúgubre del estado del orden público de las provincias, valiéndose para ello del brillo de su talento y de las ventajas de la calma del bufete; pero en ese cuadro hay más poesía que realidad. Con las imperfecciones propias de nuestro modo de ser político, existen los pueblos, por lo general, subordinados a sus gobiernos; y pueblos y gobiernos se muestran dóciles a las resoluciones del Congreso y del Director. No ofrecen resistencias a la organización nacional, antes, la piden a gritos. Y si el orden no es completo, si la paz no reina en todos los ángulos de la República, es porque no tenemos Constitución; es por eso mismo que debemos darla cuanto antes. La Constitución es el correctivo de esos males; ella es el mejor elemento de orden, porque señala a todos sus deberes y sus derechos. Y esperar, como quiere el diputado de Salta, a que los pueblos se pongan en perfecta paz y orden político, para dar la Constitución, es como esperar que se sane el enfermo, para aplicarle los remedios.



Lo mismo es aplicable el argumento de la falta de costumbres republicanas, como obstáculo para promulgar la carta. Por lo mismo que nuestros pueblos no están educados, es preciso ponerlos cuanto antes en la escuela de la vida constitucional; pues el reinado de la anarquía y el despotismo en que hemos pasado todo el período de la independencia, no es a propósito para formar buenos ciudadanos. Hay dos fenómenos notables que observar en la vida de nuestros pueblos, después de emancipados de la metrópoli; fenómenos que han existido juntos, y que, por lo mismo, deben comprenderse juntos, como está el efecto a su causa. Cuarenta años de inconstitución y cuarenta años de desórdenes políticos y depravación de costumbres, preciso es convencernos, ésto procede de aquéllo.

Una prueba flagrante de esta verdad tenemos en dos de las repúblicas hermanas, más cercanas a la nuestra. Chile y el Perú, marchan en prosperidad creciente por lo que hace a riqueza y civilización, mediante la Constitución política que los encamina y los sacó del estado miserable de anarquía en que yacían. Y esta es la mejor contestación que puede darse al otro argumento del señor diputado de Salta, deducido del ejemplo de aquellos estados europeos que se han constituido por actos sucesivos. Estos estados tienen, con el nuestro, muy poca analogía. Gran diferencia de origen, de raza y de antecedentes históricos, hace que no debamos aventurarnos a imitar su ejemplo, mientras que las repúblicas vecinas, de idéntico origen, con costumbres, religión, idioma y tradiciones análogas, suministran una experiencia más digna de examinarse e imitarse.

Hecha de menos el señor diputado de Salta un poder político suficiente a garantizar la observancia de la ley fundamental; y sobre este punto ha respondido bien el señor diputado miembro informante de la comisión. La Constitución crea un tesoro, un ejército nacional, y, sobre todo, crea un magistrado supremo con atribuciones detalladas y consagradas por la ley. Y yo añado: existirá ese poder y será robustecido por el poder incontrastable de la opinión nacional, que si en algún punto están acordes todos los pueblos y los gobiernos argentinos de la época, es en el deseo de la Constitución; a tal grado, que se perderá en política, cualquiera, por poderoso que sea, que se ponga en oposición con el pensamiento de organizar el país. A este respecto, la actualidad es bien adecuada para proceder a la grande obra. Recuérdesse que en



tiempos anteriores, la resistencia a la organización sólo ha emanado de los gobernantes y nunca de los pueblos; y hoy, señor, merced a la gloriosa jornada de Caseros, los gobernadores de provincia están todos dispuestos a recibir y jurar la Constitución que sancione el Congreso. ¿Y nosotros, enviados para darla, queríamos cargar con la grave responsabilidad de perder una coyuntura tan favorable?

No recuerdo lo demás . . . mis honorables colegas dirán mejor que yo lo que omito; porque ellos, como nuestros representados, están uniformes en el voto de constituir la República, lo que admira es que exista alguno que ponga en cuestión si debemos o no cumplir con nuestra obligación especial.

Obtuvo en seguida la palabra el señor Zapata, y dijo: Voy a hacer uso por algunos momentos, de la palabra que he pedido, porque creo, como diputado al Congreso general constituyente y como miembro de la comisión de negocios constitucionales que ha presentado el proyecto de Constitución para la Confederación Argentina, que está en discusión general, que no llenaría mi deber en esta ocasión, sino protestase expresamente contra la oposición que ha hecho el señor diputado por Salta, como subversivo de nuestro orden parlamentario, como atentatoria a nuestro principal o único mandato en calidad de representantes de los pueblos, y, lo que es más todavía, a la soberanía de esos mismos pueblos.

He dicho que esa oposición es antiparlamentaria, porque aunque en la discusión general de un proyecto pueda tratarse aún sobre la inoportunidad de la ley propuesta o su aplazamiento, esta teoría no puede aplicarse a la Constitución que nos ocupa.

La cuestión de si ha de dictarse o no la Constitución de la República está resuelta ya por este mismo soberano Congreso desde el 24 de diciembre último, en que nombró una comisión de su seno, encargada de presentarle un proyecto. Esta resolución es una sanción, una verdadera ley del Congreso, que, aún cuando fuese una ley revocable, que no lo es, no podría ser reconsiderada por el mismo, según el artículo 52 del reglamento de debates, sino por moción de alguno de los señores diputados, apoyada, al menos, por una cuarta parte de los presentes. Esa resolución, más que una ley del Congreso, es una ley anterior y superior a las facultades de nuestro mandato mismo; porque fué sancionada ya por los pueblos que representamos aquí. Esta ley, en fin, fué fir-



mada hace cerca de un año, en San Nicolás de los Arroyos, por los gobernadores de las provincias, autorizados competentemente por las legislaturas, que ratificaron después el mismo acuerdo.

Para dar cumplimiento a este pacto solemne, nos han mandado aquí, como sus representantes; para eso mismo se ha instalado este Congreso. ¿Con qué derecho podríamos hoy volvernos contra nuestros comitentes, contra los mismos de quienes recibimos los poderes con que ocupamos estos asientos para decirles con pretenciosa arrogancia:

“No os conviene la obra que nos encargastéis hacer, porque así lo creemos nosotros en nuestra sabiduría y previsión; queremos disponer de otro modo, de vuestros destinos: rompemos vuestros compromisos; despreciamos vuestros insensatos deseos; y en vez de todo eso, os imponemos la ley que se nos antoja daros, y os dejamos sumidos en el mismo caos de males de que queríais libertaros alguna vez”. ¿Está esto en la esfera de nuestro mandato? No sería este procedimiento una desertión injustificable de nuestros deberes, un ataque brusco e inaudito a la soberanía de los pueblos, que con el grito puesto en el cielo nos piden la carta constitucional que nos han mandado a hacer?

Cierto es que este mismo Congreso, no oficialmente, sino en la opinión privada de varios de sus miembros, reconoció, en algún modo, la necesidad o conveniencia de diferir un poco la sanción de la Constitución. Acababan de ocurrir acontecimientos graves cuyo pronto desenlace se esperaba; y ese desenlace podría traer al seno de la representación nacional, los diputados de la más importante de nuestras provincias que no está representada en ella. Esto habría hecho nuestra obra más fácil y evitándonos muchas dificultades y valía muy bien la pena de soportar una dilación de uno o dos meses. Pero aquellos acontecimientos se prolongaban indefinidamente y se complicaban y tomaban un carácter tal que la Constitución misma podría servir de enseña de paz, de medios de conciliación entre dos partidos encarnizados. La situación política de los demás pueblos, hacía, por otra parte, más premiosa la necesidad de la Constitución; y en tal estado de cosas, el Congreso se dispone a sancionar su obra, engastando en ellas esas mismas circunstancias excepcionales nacidas de lo anómalo de la situación; pero de manera que ellas no le quitan su generalidad ni se oponen al ejercicio práctico de sus disposiciones, en cualquier evento.





Empero, de esta corta y prudente postergación que ha sufrido la Constitución que va a sancionar el Congreso, al largo aplazamiento indicado por el señor diputado a quien contesto, hay una gran distancia que no podremos salvar sin una palmaria infracción de nuestro mandato, como antes he dicho y sin que demos el escándalo de un mandatario sublevado contra su propio mandante. Yo respeto mucho la sanidad de las intenciones y motivos que habrán movido al señor diputado por Salta a formarse esa opinión; pero respeto más los deberes de mi cargo que me hablan en alto contra ella, y por esto mismo me esfuerzo en examinarla con toda imparcialidad y calma.

¿Cuál es, me pregunto, la idea que envuelve tal opinión? ¿Cuál es el pensamiento que está detrás de ella? ¿Cuál es el bien que se ofrece a los pueblos en cambio de su anhelada Constitución de que se les quiere privar, con la misma crueldad con que se arrebataría un vaso de agua de los ardientes labios de un sediento? ¿Cuál es, en fin, la novedad que se nos ofrece en cambio de la carta fundamental...? El Señor diputado nos lo ha indicado ya en su discurso... un Directorio provisorio: lo que ya tenemos y conocemos hace cerca de un año. Algo menos todavía, para las esperanzas de los pueblos; y algo, mucho más serio, para agravar inmensamente nuestra responsabilidad para con ellos; una dictadura irresponsable, acaso, porque sobre este punto el discurso no ha sido muy explícito; una dictadura que nos traiga nuevos males que sufrir, como si no tuviéramos ya bastantes desgracias que deplorar.

Yo soy uno de los primeros en reconocer la conveniencia y necesidad del Directorio provisorio que creó el acuerdo de San Nicolás; porque las lecciones de nuestro pasado abogaban por la urgencia de una autoridad nacional provisoria, anterior a la Constitución que se diera al pueblo argentino, y encargada de hacer cumplir ésta, una vez sancionada, en fuerza de la obligación que allí mismo entregaron las provincias y sus gobiernos, de aceptarla y respetarla. Pero el único y grande objeto de ese Directorio provisorio, estará satisfecho, con la sanción y promulgación de la carta constitucional y la elección que con arreglo a ella, se haga del poder ejecutivo nacional permanente. ¿Para qué se quiere, entonces, prolongarlo?

La experiencia nos ha hecho ver que un gobierno provisorio no es suficiente, ni para satisfacer las muchas y vitales



necesidades interiores del país, ni para presentarlo con la dignidad que le corresponde, ante el extranjero que nos observa. Cada uno de los señores diputados tiene esta convicción en el fondo de su conciencia. ¿Se quiere dar motivo a los que imprudentemente y por infundados temores alzaron el grito contra el acuerdo de San Nicolás, para que ahora con más apariencias de razón lo alcen también contra este Congreso, resultado de aquél? ¿Se trata de hacer odioso el nombre del Directorio, prolongándolo sin necesidad, y contra el espíritu de ese mismo acuerdo, y con muchas facultades para exacerbar más los ánimos dispuestos a la anarquía? ¿Se quiere, en fin, echar nuevos combustibles a la hoguera de la guerra civil? . . . No, basta, por Dios! Nosotros no hemos venido aquí a poner y remachar cadenas a los pueblos, sino a dictar y sancionar el código constitucional por que ha de gobernarse, para obtener la prosperidad que han alcanzado todos los países cultos. Apóstoles de paz y de concordia, debemos cuanto antes ofrecer estos bienes por el único medio que tenemos, como sus delegados: la Constitución.

Nuestras provincias están cansadas ya de ser gobernadas por estatutos provisorios, por tratados provinciales, por pactos transitorios, y por encargo de relaciones exteriores. Cuarenta y tantos años de amarga experiencia, recibida entre lágrimas y sangre, les han enseñado bastante lo que todo esto importa. Ellas quieren una Constitución que ponga término, a todo eso; nosotros estamos obligados a dársela, y el Congreso debe también a la nación y al mundo civilizado la expresión completa de su pensamiento consignado en este Código.

Que no se nos hable más de inoportunidad, porque, como ha dicho muy bien otro miembro de la comisión, la Constitución es un medio poderoso de pacificación y de perfección para los pueblos. El Congreso, al discutirla, adquirirá la convicción de su practicabilidad; y al sancionarla habrá llenado dignamente su alta misión. La maldición de la patria y de la posteridad, caerá sobre los que promuevan obstáculos a su más pronto ejercicio.

Espero, pues, que los señores diputados se apresurarán a sancionar el proyecto en general.

Obtuvo la palabra el señor Huergo, y dijo: He oído, señores, con la más profunda sorpresa, el discurso del señor diputado de Salta, que acaba de leerse: con profunda sorpresa, digo, que no era de esperarse que después de tantos años de cruentos sacrificios, viniésemos a escuchar en el seno mismo



del Congreso constituyente, elevado sobre las ruinas de la dictadura, las palabras que ahora veinte años dirigía Rosas en su célebre carta al General Quiroga: "No ha llegado aún la oportunidad de constituir la República Argentina."

Yo no creía, señor, que pudiera lanzarse hoy, de nuevo, a la faz de los pueblos, el insulto grosero con que fueron escarnecidos por su tirano ¡"No ha llegado aún la oportunidad de constituir la República Argentina!"; toda la sangre derramada para conseguirlo es estéril, la voluntad de los pueblos es ineficaz, y las esperanzas fundadas en el orden son efímeras. Y el Congreso, señores, en quien están fijas las miradas de los pueblos, irá a decirles después de ocho meses de ansiosa expectación: el régimen constitucional es imposible, la República Argentina no puede ser gobernada por la ley; no puede salir del régimen de la arbitrariedad, para hacer alguna vez efectivas en su suelo, las verdades del orden social!!

No, señor; la República Argentina puede y tiene hoy más que nunca vital necesidad de constituirse. Así lo han creído los pueblos al otorgarnos sus poderes para representarlos, así lo ha creído cada uno de nosotros, al aceptar su mandato, así lo hemos jurado al tomar posesión de nuestro cargo, y así tenemos que cumplirlo si no queremos traicionar nuestros deberes como ciudadanos y nuestros juramentos como diputados. La augusta misión de que nos hallamos encargados, no puede retardarse un momento; la nación demanda imperiosamente su cumplimiento, y, cualesquiera que sean los desgraciados acontecimientos que hayan sobrevenido a nuestra instalación en Congreso, por más negro y exagerado que sea el cuadro que el señor diputado de Salta ha trazado de la situación de la República, eso mismo nos revela, elocuentemente, la violencia del mal y la urgente necesidad del remedio. Y el remedio eficaz, heroico, único, es la Constitución del país, porque ella sola puede ser el muro de bronce donde vengan a embotarse los esfuerzos impotentes de la anarquía y del despotismo. Una Constitución como la que aconseja el proyecto, que sea la verdadera expresión de las necesidades del país, donde pueblos y gobiernos aprendan a conocer sus derechos y sus deberes. Una Constitución, porque ella sola puede crear una autoridad fuerte y vigilante, pero una autoridad prudente dividida entre poderes de límites fijos, que, al mismo tiempo de hacer imposible su abuso, pueda garantizar a los ciudadanos en el goce de sus derechos. Yo sé bien, como ha dicho el señor diputado de Salta, que la República Argentina,



necesita un gobierno fuerte y vigoroso, pero quiere un gobierno nacido de la Constitución, armado con todo el poder que ella le dé, porque es mejor, como ha dicho muy bien un eminente publicista argentino, en vez de dar el despotismo a un hombre, dárselo a la ley. Aplacemos la Constitución por un tiempo dado. ¿Y quién nos responde que pasado ese período estarán los pueblos más dispuestos que hoy para recibirla? ¿Quién nos responde que las pasiones se habrán calmado en el suelo volcánico y siempre inflamable de la República Argentina y de que no tendremos que aplazar la Constitución indefinidamente? Cuarenta años hemos pasado buscando ese resultado que siempre nos huye, y hoy que está en nuestras manos queremos suicidarnos? La Nación puede acusarnos algún día de haber perdido el momento oportuno, y no creo que haya nadie que quiera aceptar esa responsabilidad ante su patria. La Constitución no puede retardarse, porque para hacerlo o tenemos que romper los únicos vínculos nacionales que la victoria de Caseros había anudado, o tenemos que continuar una autoridad nacional provisoria y personal, que, si bien fué útil e indispensable en un corto período de transición, no está en nuestras facultades el prolongar su duración. El poder nacional debe tener su origen y su fuerza en la libre elección de los pueblos confederados: a ellos, y no a nosotros, corresponde su elección por el acuerdo de San Nicolás.

Hemos perdido, tal vez un tiempo demasiado precioso en la prudente expectativa del desenlace de sucesos que han retardado el cumplimiento de nuestra misión; cumplámosla, pues, ahora, sin vacilar y con la mano puesta sobre nuestra conciencia. No hay temor de que ella sea efímera, porque tendrá en su apoyo la opinión de los pueblos, cuyos verdaderos intereses se hallan en ella consignados; porque tendrán en su apoyo la autoridad nacional que de ella va a surgir, y que, fuerte con el prestigio de la libre elección, sabrá hacerla obedecer y respetar. Yo sé bien que se agitan todavía alrededor de nosotros los intereses, las pasiones y los partidos: que la anarquía devora algunos puntos de nuestro territorio, pero la anarquía, como dijo muy bien el diputado de Salta en su discurso en la instalación del Congreso, y en los momentos críticos de la invasión al Entre Ríos: "la anarquía, no hay que temerla; ella muere y la nación queda, porque es inmortal. Sus esfuerzos impotentes son las últimas convulsiones de un moribundo, son las últimas olas de un mar



“agitado por la tempestad que ya pasó”. Y tuvo razón entonces, el señor diputado de Salta: No hay que temer la anarquía, porque las constituciones no siempre se han dictado en medio de la paz y de la quietud de los pueblos. Las constituciones son, unas veces, el resultado, y muchas otras, la causa del orden moral de las naciones. En Inglaterra, en los Estados Unidos, ella ha sido el resultado del orden y de las buenas costumbres. Entre nosotros, como en muchas partes, ella será la que causa, ella será la que morigere nuestros hábitos y la que eduque nuestros pueblos. Los trastornos que han incurrido en algunas provincias de la República lejos de ser un obstáculo, son un motivo más para apremiar la sanción de la Constitución. Y mi opinión va más lejos aún: aunque la Constitución hubiera de nacer en medio de las convulsiones de una revolución general en la República, yo sería de opinión de dictarla; porque si ella no podía servir en el momento para ser el regulador de una máquina agitada por las olas revolucionarias, quedaría ahí para servir como única prenda de paz como único resorte de orden, como poderoso centro de atracción para que los argentinos pudiesen salir del caos y vivir alguna vez bajo el régimen de la libertad y de la paz.

El señor Lavaisse pidió la palabra, y dijo: He oído combatir victoriosamente por mis honorables colegas, el discurso que se ha leído, del señor diputado por Salta, y a pesar de esto, quiero agregar dos palabras más, para llevar la cuestión al terreno práctico. Deseo que el señor diputado por Salta, al aconsejar en su discurso que nos presentemos como refractarios del mandato que nos han confiado los pueblos que representamos, puesto que quiere que se suspenda el proyecto de constitución por un tiempo indefinido, nos muestre alguna medida más aceptable y más conveniente que la Constitución, para presentarla a los pueblos en apoyo de una infracción, por otra parte tan injustificable. No creo que el señor Diputado de Salta quiera substituir a una Constitución ilustrada y liberal, como la que contiene el proyecto en debate presentado por la comisión, una dictadura irresponsable, en la que manifestemos a los pueblos nuestros mandantes, que les ofrecemos, en vez de un gobierno riguroso y fuerte por la razón, por la ley y por la justicia, algún gobierno despótico, armado de la suma del poder, burlando de este modo las esperanzas y el vehemente deseo de los pueblos, por recibir cuanto antes la ley fundamental, que asegure la prosperidad y el engrandecimiento de la República. Por úl-



timo, pido con encarecimiento al Señor Diputado de Salta que desarrolle y explane el proyecto que tiene para substituir a la Constitución con una idea más práctica y realizable, puesto que aquella, en mi concepto, no es sino una bella teoría; y si el señor diputado necesita presentar como una moción su proyecto, le prometo prestarle todo mi apoyo, porque quiero con sinceridad ser ilustrado en una teoría tan importante como ésta, y que importa nada menos que el aplazamiento indefinido de la Constitución.

El señor Zuviría dijo: Pido la palabra para explicar algunos conceptos de mi discurso, y desvanecer otros que se me han atribuido con falsedad e injusticia.

Y concedida que le fué, añadió: Se ha dicho, señor, que ataco el proyecto de Constitución, aseverando ser un resumen de teorías irrealizables. Falso. En mi discurso no me he dirigido a tal proyecto de Constitución, sino a probar en general la inoportunidad de dictar una Constitución, atendidas las circunstancias de la República y demás razones que he aducido, y pedir, en consecuencia, el aplazamiento de aquellas por el término que el soberano Congreso lo creyese necesario. Me remito a mi discurso. También se ha dicho que yo he redactado y presentado mi exposición escrita, después de haber leído el proyecto de Constitución que se discute. Falso. Tanto la moción que introduje y retiré al día siguiente, como el discurso que acaba de leerse, fueron presentados e introducidos aquí la noche misma, en el acto mismo que se introdujo y leyó el proyecto de Constitución. Por consiguiente, mi discurso o exposición no podía ser redactado ni dirigido al mérito o desmérito del proyecto presentado, sino a probar en general la insuficiencia de las constituciones dictadas en inoportunidad. Por lo demás, declararé que en la primera y rápida lectura que se ha hecho aquí del proyecto de Constitución, única vez que lo he oído leer, me ha parecido bueno, salvo varios artículos con que no estoy de acuerdo.

Tampoco creo haber faltado a mis deberes, a mis juramentos, ni al mandato de los pueblos, pidiendo un aplazamiento a la sanción de la carta fundamental por el tiempo que el Congreso lo creyere conveniente o necesario, atendidas las actuales circunstancias de la República, puesto que el mismo soberano Congreso, en atención a esas circunstancias y sin consideración a sus deberes, a sus juramentos y a su mandato, se ha creído con derecho para aplazar de hecho.



como lo ha verificado, por el término de cuatro meses, la sanción de esa misma Carta.

Mi petición al soberano Congreso, o, lo que es lo mismo, la expresión de mi opinión, se reduce a la continuación de ese mismo aplazamiento.

También se ha dicho que yo pedía un aplazamiento indefinido. Falso. Me remito al tenor literal de mi discurso, en el que ese término lo dejo a la libre designación del soberano Congreso. Cuando él sancionare el aplazamiento en general y se ocupare del término de ese aplazamiento, entonces yo desarrollaré mi idea y explicaré mi plan sobre el modo de ser político y gubernativo de la República, durante este aplazamiento. Entonces, según el término que se designe a éste, serán las ideas o los planes que yo desarrolle.

Los congresos constituyentes de 1816 y 1825 demoraron dos y tres años en dar la Constitución que se les pedía; y lo hicieron por circunstancias menos graves, que en las que hoy se halla la República.

Durante esta demora ambos proveyeron al modo de ser político de ella, hasta la sanción y promulgación de la carta fundamental. Tampoco a nadie ocurrió acusarlos de haber traicionado sus deberes, sus juramentos y el mandato de los pueblos.

También, algún señor diputado ha dicho que yo quiero destruir la libertad que tanto les había costado; que en vez de ella, quiero darles un dictador que los oprima y sacrifique, con otras cosas de este orden.

A esta inculpación sólo contestaré que en todo mi discurso que ahí existe consignado por escrito para evitar calumnias, no aparece una sola idea que autorice la inculpación que se me hace. El que por cuarenta años se ha sacrificado por la libertad, él que por cuarenta años le ha consagrado todo su ser, y sólo en servicio de ella ha podido arrastrarse hasta este sagrado recinto, no es el que puede emitir una sola idea que la empañe, ni conceder a nadie el derecho de mostrarle el camino y menos el de conducirlo por la mano al templo de la libertad!! A su par admite a todos, adelante a ninguno: sí, a ninguno!!

Pidió la palabra el señor Seguí, y dijo: Representante de una provincia en cuyo seno se formuló el tratado de 4 de enero de 1831, base fundamental del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, y ambos pactos, principio y causa del actual Congreso general reunido para constituir la República:



representante, repito, de una provincia en cuyo territorio han tenido lugar varios aunque infecundos ensayos constitucionales, y que cooperó la primera en la margen derecha del Paraná a la realización del pensamiento grande, vencedor de la tiranía y a quien debemos hoy la dicha de ver funcionando esta asamblea constituyente; faltaría, señor, al más sagrado de mis deberes, si no aclamara, como lo hago con entusiasmo, el proyecto de Constitución que en general se está discutiendo; si no se registrara mi voto vivo en el acta de la más interesante y gloriosa sesión del Congreso constituyente. Lo aclamo lleno del fervor santo que la justicia, la libertad, la paz y el engrandecimiento nacional encienden en el corazón de los verdaderos patriotas. Lo aclamo, y lo aclamaría también aunque en su fondo y en su forma no estuvieran, como lo están, perfectamente conciliados todas las exigencias, atendidos todos los intereses y satisfechos hasta las más exageradas esperanzas. Porque, señor, estoy dispuesto a suscribir una Constitución cualquiera, antes que conformarme con el modo de ser actual de la República, con la prolongación de un estado de cosas que el diputado de Salta ha pintado con la más lúgubre exactitud, aunque para sacar una consecuencia diametralmente opuesta a la mía. Difiriendo, como de corazón difiero, del pensamiento dominante en el discurso que se ha leído, me impongo la agradable tarea de rebatir las observaciones principales de ese escrito, que no trepido en llamar inoportuno y de las más perjudiciales tendencias. Seré breve.

El señor diputado de Salta ha delineado a grandes rasgos, el cuadro que ofrece la República Argentina, y después de pintar a sus hijos sin costumbres constitucionales, sin virtudes públicas, sin moralidad práctica, sin educación política y doblados bajo el odioso yugo de pasiones funestas, concluye por decir que darles hoy un código constitucional, es inoportuno; pidiendo al Congreso aplace para mejor época la sanción y promulgación de la carta fundamental. Esta es la observación jefe del discurso de la oposición, porque el resto de verdades generales, principios abstractos, nociones comunes y demás referencias, en parte no son del caso, y en parte pueden aplicarse a todas las situaciones, a todos los pueblos, aun a los más bien constituídos. De suerte que, a valer las opiniones y alcance de vistas políticas del señor diputado de Salta, sería necesario declarar a la faz de la América que los pueblos argentinos son inconstituibles — que los





pueblos argentinos son incapaces de gobierno fundado en leyes, y acreedores únicamente a ser dominados por la mano de hierro del despotismo. Porque los inconvenientes que se enuncian no pertenecen exclusivamente a la actual situación, sino a enfermedades crónicas encarnadas en la comunidad argentina desde la época colonial, a la que, sin duda, deben su origen; y el aplazamiento de la ley fundamental, lejos de curar esos males, contribuiría más bien a vigorizarlos, porque se ha observado que el desorden, la anarquía, la relajación de costumbres y la ignorancia, causa a la vez y efecto de estas aberraciones, están en la República Argentina, en razón directa del tiempo que hemos vivido sin leyes. No se pueden, pues presentar con razón como motivos de aplazamiento constitucional esas dificultades, que no hay posibilidad de superarlas, sino con el establecimiento de un código constitucional. Mas, si la mente del señor diputado de Salta ha sido referirse a los cambios administrativos ocurridos en algunas provincias, y a los sucesos que en la de Buenos Aires, han producido su situación, entonces hace más palpable la necesidad de una ley que haga, si no imposible, al menos difícil la reproducción de acontecimientos análogos.

Esas convulsiones locales, esos movimientos de círculos, esas revoluciones de intereses personales, en que se disputa el bastón del mando, porque todos se creen con derechos iguales para empuñarlo, no son más que el fruto del aislamiento provincial, y de la falta de una ley general que declare y haga efectivos los derechos y deberes de todos; que determine y marque las atribuciones y órbita del poder, así como los límites de la obediencia y las obligaciones que impone. Así es que una Constitución como la que en proyecto se discute, debe ser aclamada con enajenamiento patriótico por todos los que quieran mandar con dignidad a los pueblos y ser garantidos en sus altas funciones administrativas, así como por los que quieran ser mandados con arreglo a su calidad de hombres libres.

La situación actual de Buenos Aires, no es tampoco un motivo justificado de aplazar la Constitución de la República. Por el contrario, la esterilidad de los esfuerzos que se han hecho para vencer las resistencias de su capital, nos aconseja la adopción del último recurso; y el ensayo del medio más eficaz, en mi concepto, para conseguir el fin que la mayoría de la Confederación se propone, es la publicación de la carta fundamental, que aquel gobierno por una injus-



tificable anticipación de juicio no ha esperado de nosotros, creyendo, o aparentando creer que nuestra misión era formular el despotismo, y servir a las miras egoístas y personales intereses que gratuitamente han atribuído a las intenciones de un hombre ilustre.

Es llegada la oportunidad de dar un solemne desmentido a inculpaciones semejantes, de vengar, pero con nobleza, tamaño agravio, y de ofrecer a nuestros hermanos de la ciudad de Buenos Aires una oportunidad brillante de reconciliación nacional, y la clave para resolver el difícil problema de su porvenir. Y ojalá, señor, fuera posible desparramar en la Ciudad de Buenos Aires, medio millón de ejemplares de ese proyecto, para vulgarizar más y más los principios de eterna verdad que en él se contienen!

Sí, pues, la situación de Buenos Aires, lejos de ser obstáculo, reclama por el contrario, la más pronta sanción de la ley fundamental, ¿dónde está ahora esa inoportunidad que se ha empeñado en insinuarnos el señor diputado de la oposición? ¿Cuál es la paz que pide para que la República sea constituida? ¿Quiere virtudes públicas, patriotismo, ilustración y progreso? Es un contrasentido, señor, esperar que nos vengan estos bienes de otra fuente que de la ley constitucional.

Empeñado el señor diputado a quien me opongo, en basar sus observaciones en los pactos preexistentes de la república, ha citado el de 4 de enero de 1831, y el de 31 de Mayo de 1852, dando en mi concepto una exagerada interpretación a los artículos de su referencia. Porque en ambos documentos está previsto el caso de convulsiones locales, e indicado el medio de dominarlas, sin diferir por eso la promulgación de la carta que forma el principal objeto de esas convenciones provisionales. Y la República, señor, está en paz hoy en el sentido de esos tratados, porque no hay divergencias de opiniones en su mayoría sobre organización nacional, y porque esos motines, hijos del caudillaje moribundo ya, son pequeños accidentes ante los intereses nacionales que se promueven y ante las vastas miras de este soberano Congreso.

Para evidenciar mejor mis ideas sobre el asunto que se discute, yo me avanzo, señor, hasta decir que la situación presente es la única que en el período de 43 años ha ofrecido la República para constituirse. Lo creo así, desde que observo que los poderes personales han desaparecido del suelo



argentino. Hoy nadie puede encontrar prosélitos para oponerse a una Constitución generosa y libre, como la que se ha presentado al Congreso.

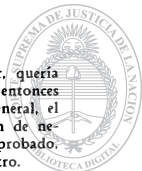
El pensamiento nacional se robustece de día en día; el sentimiento constitucional se agiganta, y sería inevitable la caída del que enarbolara una bandera de oposición a esa ley, en que se fundan las seductoras esperanzas de todos los argentinos. El mismo General Urquiza, con todo el poder y gloria que su inteligencia y su brazo le han conquistado, no sería el primer hombre de la República, como lo es, y está destinado a ser, sino por la cooperación que no dudamos prestará al triunfo de la ley constitucional que bajo sus auspicios va a sancionar el Congreso.

Estas son mis convicciones, señor, y de ellas deduzco; que la actual situación de la República es la más oportuna de todas para que la Constitución se promulgue, y veo también grabada sobre ella la mano de la Providencia, que por caminos misteriosos y ocultos nos conduce el término feliz de nuestras teorías, colocándonos en la más brillante de las situaciones para constituir nuestra patria!

Votaré, pues, porque se dé una Constitución cuanto antes, y votaré con entusiasmo por el proyecto que la comisión especial ha sometido a la deliberación del Congreso. Y pediré, como pido, señor, que, si soy suficientemente apoyado, autorice el Congreso a aquellos de sus miembros que estén por la aprobación del proyecto, para que puedan agregar al signo de afirmativa prescripto en el reglamento, la votación de viva voz y simultánea, o sea por aclamación.

Esta indicación fué aprobada por varios señores diputados.

El señor presidente puso en seguida a votación si el punto estaba o no suficientemente discutido. Resuelta la proposición por afirmativa general, se procedió a votar la indicación hecha por el señor Seguí, y fué aceptada por mayoría de sufragios. El señor Pérez (Fr. Manuel), obtuvo entonces la palabra, para pedir algunas explicaciones sobre la forma en que debía dar su voto, sobre el proyecto de Constitución, agregando que un señor miembro informante de la comisión redactora del mencionado proyecto había expresado poco antes, que la discusión en general de éste, abrazaba dos puntos: su mérito o demérito en general, y la oportunidad o inoportunidad de su sanción. Que él estaba muy conforme en cuanto al mérito del proyecto presentado; pero que creía inoportunamente



su sanción, y que el voto afirmativo que iba a dar, quería se explicara de este modo. El señor presidente fijó entonces la proposición que sigue: "Si se aprueba o no, en general, el proyecto de Constitución presentado por la comisión de negocios constitucionales", y resultó unánimemente aprobado, y aclamado por una mayoría de catorce contra cuatro.

"La entereza de carácter que distinguía a los ilustres autores de nuestra Constitución salvó de un desastre la organización nacional en ese difícil momento. Si su energía y la fe que tenían en la consistencia de su propia obra hubieran desfallecido, si hubieran resuelto aplazar la sanción del código soberano en la creencia de que era inoportuno, otra vez el país hubiérase encontrado en situación caótica y sufrido las terribles consecuencias del pasado. Al rechazar la moción del diputado Zuviría hacíanse merecedores de la gratitud de la Nación, que esperaba ansiosa la carta constitucional para poder normalizar su vida y proseguir la marcha hacia sus grandes destinos". (1)

## CAPITULO IV



Discusión en particular del proyecto de Constitución. — Aprobación del preámbulo y del artículo 1º. — Discusión y aprobación del artículo 2º. — Discusión y aprobación del artículo 3º. — Discusión y aprobación del artículo 4º. — Aprobación de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10. — Discusión y aprobación del artículo 14. — Discusión y aprobación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. — Discusión y aprobación de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. — Discusión y aprobación de los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, e incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 64. — Discusión y aprobación de los incisos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del artículo 64. — Discusión y aprobación de los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 e incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 83, y artículos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. — Discusión y aprobación de los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107.

*Discusión en particular del proyecto de Constitución. Aprobación del preámbulo y del artículo 1º. Discusión y aprobación del artículo 2º.* — El 21 de Abril de 1853, comenzó la discusión en particular del proyecto de Constitución, y habiéndose puesto en discusión y votación su preámbulo, resultó aprobado por unanimidad, así como el artículo 1º.

Leído el 2º, y puesto a discusión, observó el señor Zenteno que no registrándose en el proyecto presentado otro artículo sobre religión, que el que acababa de leerse, y creyéndolo insuficiente, presentaba como proyecto de adición, en su lugar, el artículo siguiente:



“Artículo 2º — La religión católica, apostólica, romana, como única y sola verdadera, es, exclusivamente, la del estado. El gobierno federal la acata, sostiene y protege, particularmente, para el libre ejercicio de su culto público, y todos los habitantes de la Confederación la tributan respeto, sumisión y obediencia”.

Obtuvo la palabra el señor Pérez (Fray Manuel), para proponer al artículo en cuestión, la siguiente reforma: “El gobierno federal profesa y sostiene el culto católico, apostólico, romano”. Agregó que en los estados federales no habría una religión que pudiera llamarse del estado; pues cada uno de ellos podía tener la que gustase, independiente de la del gobierno; pero éste, que era el único ser colectivo en el sistema federal, debía profesar algo.

El señor Seguí pidió que el proyecto de adición, presentado por el señor Zenteno, que era una moción, fuese fundada por éste, conforme al reglamento. El señor Gorostiaga cree que, conforme al reglamento, este proyecto no debía fundarse ni discutirse, sino en el caso que se deseche el artículo de la comisión.

Pidió la palabra el señor Leiva y expuso: Que aunque miembro de la comisión de negocios constitucionales, no estaba conforme con algunos de los artículos del proyecto que había suscripto, lo que prevenía, para que no se extrañase su oposición a ellos. Que uno de los artículos a que se oponía, era el artículo en cuestión; pues deseaba fuese más explícito y más al alcance del pueblo, y que el objeto de él se recomendase más a todos los habitantes, por su importancia y transcendencia; por lo que proponía un proyecto de adición en los términos siguientes: “La religión católica, apostólica, romana, (única verdadera) es la religión del estado; las autoridades le deben toda protección, y los habitantes, veneración y respeto”. Y terminó diciendo que ese artículo que recordaba a los pueblos la religión de sus padres, debía ser acogido con entusiasmo, no con el silencio que revelaba una minoría; y que tal cual estaba redactado en el proyecto de Constitución, ni aún sería, quizás, comprendido.

El señor Lavaisse fundó su oposición a las adiciones propuestas, en que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia, no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo sin que

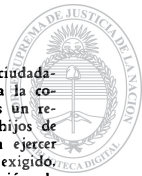


hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. Que era un ejemplo de ella, la Irlanda, en que el sentimiento católico encadenado, perseguido, había prosperado más y más hasta conseguir libertarse; y concluyó manifestando su conformidad al artículo en cuestión, tal cual estaba redactado, sin admitir la adición propuesta, que pertenecía, a su juicio, a aquellos artículos demera forma, que se consignan en todas las constituciones, sin examen ni criterio.

El señor Zenteno insiste en que dicho artículo sea más explicado y se declare en él la religión católica, apostólica, romana, como única verdadera; puesto que se reconocía que era ella el único y solo sentimiento dominante en la mayoría de los habitantes de la Confederación. Que esa declaración se había conservado íntegra en todas las constituciones de las provincias, a pesar de los cambios políticos que habían tenido lugar en ellas; y que, sin culpar la sana intención de los comisionados en la redacción del artículo, no lo creía por esto, bastante explícito.

Obtuvo la palabra el señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, y dijo: Que aún cuando algunos miembros de la comisión de negocios constitucionales, no habían estado conformes en el artículo en discusión, sin embargo, él había sido redactado y admitido por la mayoría de ellos. Que este artículo imponía al gobierno federal la obligación de sostener el culto católico, apostólico, romano, y esta disposición presuponía y tenía por base un hecho incontestable y evidente, cual es que esa religión era la dominante en la Confederación Argentina, la de la mayoría de sus habitantes. Que la cuestión de saber hasta qué punto un gobierno tiene derecho de intervenir en las materias que conciernen a la religión ha sido muchas veces discutida por los publicistas y los hombres políticos, habiendo los más distinguidos de entre ellos, sostenido que esa intervención del gobierno era un derecho y un deber. Que este derecho no podía ser contestado por todos aquellos que piensan que la piedad, la moral y la religión están íntimamente ligados al bien del estado, y que todo hombre convencido del origen divino del catolicismo, miraría como un deber del gobierno mantenerlo y fomentarlo entre los ciudadanos. Que estas breves observaciones fundaban, a su juicio, la justicia y conveniencia del artículo en cuestión.

Que la declaración que se proponía, de que la religión católica era la religión del estado, sería falsa, porque no to-



dos los habitantes de la Confederación ni todos los ciudadanos de ella eran católicos, puesto que el pertenecer a la comunión católica, jamás había sido por nuestras leyes un requisito para obtener la ciudadanía, y que ni a los hijos de los ingleses, que por el tratado del año 25 pueden ejercer libremente su culto en la Confederación, se les ha exigido, para ser ciudadanos nativos, que renieguen la religión de sus padres.

Que tampoco puede establecerse que la religión católica es la única verdadera; porque esto es un punto de dogma cuya decisión no es de la competencia de un Congreso político, que tiene que respetar la libertad de juicio en materias religiosas y la libertad de culto, según las inspiraciones de la conciencia. Que la obligación impuesta al gobierno federal, por el artículo en discusión, de sostener el culto católico, era muy diferente de lo que se llama derecho de obligar la conciencia de los hombres a adorar a Dios, de otra manera que la que ellos creen ser más agradable a la divinidad. Que se había dicho con razón: "Que la religión o nuestras obligaciones con el Creador, lo mismo que la manera de cumplirlas, no pueden ser dictadas sino por la razón y la conciencia, y no por la fuerza y la violencia." Que los derechos de la conciencia están fuera del alcance de todo poder humano; que ellos han sido dados por Dios, y que la autoridad que quisiese tocarlos violaría los primeros preceptos de la religión natural y de la religión revelada.

El señor Zapata pidió la palabra, y dijo: Que creía se había extraviado de la cuestión y llevádola al terreno de libertad de cultos; que se había dicho por el señor Lavaisse, diputado por Santiago, que hay ciertos artículos que se copian en toda constitución, sin examinar su exactitud y propiedad; que, en su juicio, pertenecía a esta clase la adición propuesta por el señor Zenteno.

Que la religión dominante y la de la mayoría del país era la católica, apostólica, romana; que este hecho que había reconocido la comisión, envolvía el derecho que tiene el gobierno de intervenir en su ejercicio y el deber de sostener su culto, que no es sino la expresión o manifestación exterior de esa misma religión. Que esto era lo único que el Congreso debía declarar, y lo único contenido en el artículo en discusión. Que toda otra adición o reforma sería inconstitucional; que por último, como había dicho muy bien el señor diputado por Santiago, con la competencia que





le daba su carácter sacerdotal, esa religión, hija del cielo, no necesitaba de la protección de los hombres, como éstos necesitan de la suya; y concluyó manifestando que no juzgaba propio, en materia tan sencilla, se hicieran comentarios que pudiesen alarmar las conciencias.

El señor Leiva dijo: que sentía no se le hubiese comprendido; que lo único que pedía era que el artículo en discusión fuese más explícito, y que el culto se recomendase, para que fácilmente estuviese a la inteligencia de todos, aún de los más ignorantes; que era un asunto grave, y podía, la falta de explicación y recomendación, ser interpretada desfavorablemente; que los términos en que había redactado su proyecto de adición, eran los mismos que se valían y usaban generalmente, y que ésta era la inteligencia vulgar y del modo como comprendían las masas, que la religión era la dominante y que debían acatarla y prestarle respeto; que no conocía ventaja alguna en la redacción del artículo en discusión, y que, al contrario, por la falta de explicación y de recomendación, podría quizás, ser mal interpretado y venir a debilitar el entusiasmo con que deseaban que se recibiese por los pueblos la Constitución; que si pedía la protección de las autoridades, era porque esa protección había dado muchos triunfos en favor del catolicismo, protección que no podía ser innecesaria, desde que era el primordial objeto de los concordatos con la Santa Sede. Que prescindía de que se pudiese obligar o no a los ciudadanos a profesar tal o cual culto, porque no era la ocasión de tratar de esto, sino cuando se discutiese sobre la libertad de cultos; y terminó su discurso, insistiendo en que el artículo en discusión se adicionase según su proyecto. Pidió la palabra el señor Seguí, y después de protestar la íntima adhesión, respeto y veneración que había profesado siempre y que profesaba al cristianismo, aseguró que, dispuesto como estaba en su carácter de hombre y ciudadano, a sostener estos principios sacrosantos, no lo estaba para suscribirlos como diputado, por ser el Congreso incompetente para fallar en materia de dogma. Que se opondría a los proyectos de adición, votando por el artículo tal cual estaba redactado. Que toda religión constaba de dos partes: *dogma* y *símbolo*. Que la primera no era materia de ninguna legislación humana, porque sería ridícula una ley sin la probabilidad de hacerla cumplir. Que en este sentido la religión no podía ser sostenida, protegida ni regularizada por ningún poder ni legislación humana. Que



bajo esta suposición, los concordatos de los gobiernos con la silla apostólica, a que se había referido algún señor diputado, serían nulos, si su objeto fuese sostener creencias ajenas o imponer deberes a los entendimientos y corazones sólo responsables por sus actos a la divinidad; nulos por falta de base, y porque contendría un vicio radical imponiendo obligaciones mutuas que no pueden ser cumplidas. Que no había podido, pues, la comisión de negocios constitucionales considerar la religión bajo este sentido, y mucho menos consignar una declaración sobre el particular, en el proyecto. Que se había fijado, únicamente, en el culto, y observando que el que se ejerce por la mayor parte de los argentinos, es el católico, apostólico, romano, había impuesto al gobierno federal la obligación de sostenerlo a costa del tesoro nacional, con toda majestad, pompa y decoro. Que en este deber estaba incluida la declaración de que la religión católica, apostólica, romana, es la de la mayoría o casi totalidad de los hijos de la República Argentina, y comprendía también la creencia del Congreso constituyente, sobre la verdad de ella, pues sería un absurdo obligar al gobierno federal al sostenimiento de un culto que simbolizase una quimera; que esta circunstancia no podía consignarse en un artículo constitucional, porque no podía imponerse como deber. Que el respeto y veneración de los habitantes de la República estaban comprendidos en el deber que se imponía al gobierno, de sostenerlo. Que votaría por el artículo tal cual estaba redactado, siendo su punto de partida el interés bien entendido de la religión católica, apostólica, romana, cuya divinidad reconocía y cuyo culto y prácticas respetaba.

El señor presidente pidió la palabra ante el señor vicepresidente, para hacer algunas observaciones sobre el punto en cuestión, que juzgaba de grave importancia, y dijo: Que había oído a un señor diputado opinar por que el inciso del artículo estuviese concebido en estos términos: "El gobierno profesa y sostiene el culto católico, apostólico, romano". Que, siendo el gobierno un ser moral, no podía profesar religión alguna: que como persona o gobernante, podía tener cualquiera, como gobierno, no...

El señor Pérez (Fray Manuel) pidió permiso al orador para explicar su pensamiento, y expuso: Que, al proponer la adición de que se trataba, no había hablado del gobierno como ser moral, sino del personal que le compone, esto es, del gobernante a quien en algún artículo del proyecto de



Constitución, se le concede el derecho de patronato, y que este derecho era correlativo de algún deber; pero que creía más propio reservar su indicación para cuando se tratase de gobernantes y de las calidades que deben reunir.

Después de un debate en que tomaron parte los señores Seguí y Pérez (Fray Manuel), el señor Zuviría dijo: Que sin continuar en su discurso interrumpido, lo terminaba votando por que se expresase en el artículo: "que la religión católica, apostólica, romana, era la religión del estado, o de la mayoría de sus habitantes". Que de este modo se satisfacía a los pueblos, sin embarazar la libertad ni imponer al gobierno una religión.

Se dió el punto por suficientemente discutido, y se procedió a votar; y el artículo en cuestión fué aprobado por mayoría de sufragios.

*Discusión y aprobación del artículo 3º.* — Se ordenó en seguida la lectura del artículo tercero. El señor Leiva pidió la palabra para expresar su disconformidad a dicho artículo, porque no creía que la designación de la residencia permanente de las autoridades en un punto dado ni la designación de la Capital correspondiese a una ley constitucional; y que, aún cuando fuese así, creía inoportuna la sanción del artículo que se discutía. Que la residencia de las autoridades nacionales no debía designarse permanentemente, ni lo designaba ninguna Constitución del mundo y mucho menos debiera hacerlo la nuestra en las actuales circunstancias; pues si hoy parecía conveniente esta residencia en un punto, mañana sería quizás necesario que se trasladase a otro, como había sucedido ya, que las autoridades se trasladasen a Córdoba; que, aun en el caso de que conviniese hoy que se sitúe en el punto señalado en el artículo en discusión para estar en mayor contacto con las potencias amigas y con el comercio extranjero, mañana quizás convendría situarla en otra parte más central de la República, porque estén allí más garantidas en el caso de un ataque exterior por el río, o por que convenga colocarlas más a las inmediaciones de las partes pobladas de la República, para que la influencia del poder nacional, estando más inmediata fuese más eficaz para atender más activamente a las necesidades y progresos de los pueblos; asegurar sus fronteras, garantir su tranquilidad y callar las tendencias de la anarquía que con frecuencia amar-



gan el sosiego público. Que, en su concepto, la inmediatez preferible y que debía atenderse primero, era la del que manda con la del que ha de obedecer; que ésto era más urgente entre nosotros. Que nada importaría mantener buenas relaciones con el extranjero, que se pueden cultivar a cualquier distancia, si por la que media entre las autoridades nacionales y los pueblos de la Confederación, las convulsiones políticas dividiesen a ésta y fuese ineficaz, por tardía, la acción del poder nacional encargado de sofocarlas y mantener el país en perfecta tranquilidad; y si por esa misma distancia los caudillos por la demagogía combinados, considerándose impunes, atacasen a las autoridades constituidas. Que era preciso recordar un momento lo pasado, para asegurarse respecto al porvenir.

Que toda ley constitucional debía ser estable y de fácil ejecución, y por esto debía contener sólo principios generales, y no artículos reglamentarios, como consideraba el artículo en discusión. Que el proyecto de Constitución probaba esto mismo, porque, después de establecer constitucionalmente la capital, o residencia de las autoridades nacionales, manifestaba en la ley orgánica la incertidumbre en que estaba de que aquel artículo tenga efecto.

Que, por otra parte, se disponía en él de una propiedad provincial, sin el consentimiento ni concurrencia de esa provincia a dicha sanción; que, respetando la soberanía de los pueblos, juzgaba esto un avance del Congreso, porque carecía de facultades para dar este paso.

Que era preciso, antes de declarar capital una ciudad o territorio perteneciente a una provincia, negociar con la interesada, y sólo con su consentimiento declararle propiedad nacional.

¿Qué se diría, añadió, si sancionado el artículo en discusión, y la ley orgánica de su referencia, nuestros negociadores no pudiesen entrar en esa ciudad rodeada de fortificaciones, para impedir el paso al ejército nacional, a su libertador el Director provisorio de la Confederación; si sostuviesen su no reconocimiento del Congreso, que insultan con desafuero; y si, allanado todo esto, las autoridades nacionales pidiesen otra residencia temporaria, por no tener Buenos Aires garantías bastantes para su estabilidad? Se diría que, en cuanto a éstas, sus temores eran fundados, y en cuanto a Buenos Aires, que usaban de sus derechos, declarados por el Congreso mismo, y que éste, en su sanción, se había anticipado en dar



este paso, sin consultar ni la oportunidad ni sus atribuciones, lo que sería vengonzoso y hasta ridículo.

Que el artículo en discusión, a más de no corresponder a una ley constitucional, pues no estaba escrito en ninguna Constitución de las muchas que había él registrado, era inoportuno por otros razones que pasaba a manifestar, por más sensible que le fuese su recuerdo.

Que la ciudad de Buenos Aires, pocos días después de la gloriosa batalla de Caseros, presentó fuertes oposiciones a su libertador: se opuso y negó su aquiescencia al acuerdo de San Nicolás, separándose del programa del 1º de Mayo y de la política adoptada por las provincias de la Confederación, se sublevó contra el Director, estableciendo una política alevosa que conocían todos y había sido el motivo por que se dividió la campaña. Que había procurado por todos los medios, aún los más reprobados, cruzar la organización nacional, redoblando sus esfuerzos de día en día y con una exaltación poco común. Que debía antes calmar esta exaltación y desaparecer el espíritu de partido, para que Buenos Aires nos pertenezca de buen grado, lo que no sería obra de poco tiempo, por lo que creía inoportuna, imprudente y peligrosa la sanción del artículo en discusión, aun cuando se tuviesen antecedentes de que ella costaría la guerra; porque en este caso se ofrecía otro inconveniente más a la ejecución de la ley de capitalización; y era la falta de garantía que ofrece Buenos Aires para la estabilidad de las autoridades nacionales, como nos lo había demostrado en cuarenta y dos años de revolución; que se le permitiese callar, a este propósito, una historia bien dolorosa y cuyos hechos nadie ignoraba; y terminó su discurso, preguntando: ¿qué necesidad tan urgente compele al Congreso a la sanción de este artículo en las actuales circunstancias y en las que se presentan graves inconvenientes como los que he demostrado? ¿Por qué no se faculta al Congreso de la nación para que él lo haga consultando la oportunidad mejor y allanando los actuales inconvenientes, en tanto que el Congreso constituyente se limita a proveer un lugar o ciudad donde interinamente residan las autoridades nacionales? Y concluyó manifestando que era indispensable se asegurase antes la ejecución de nuestras leyes fundamentales, la estabilidad de las autoridades nacionales, la tranquilidad de la República, la marcha del progreso, por la Constitución; y el tiempo enseñará el lugar



más conveniente para la residencia de las autoridades de la nación.

Después de estas observaciones, propuso un proyecto de adición, en los términos siguientes:

“Art. 3º — Por una ley especial, se determinará entre las trece provincias reunidas en Congreso, la ciudad donde deben residir las autoridades que ejercen el gobierno federal, hasta que el Congreso nacional nombre definitiva y oportunamente la capital de la República.”

El señor Gutiérrez, miembro informante de la comisión de negocios constitucionales, dijo: Que se había empezado por considerar inconstitucional el artículo en cuestión; que él no sabía de Constitución alguna en el mundo que señalase el tiempo y deliberación de un Congreso, el lugar donde habían de residir las autoridades nacionales; que éste era marcado en cada estado, desde el principio de su existencia, y enumeró varios; que, aun cuando así no fuese, que aunque para todos ellos fuese inconstitucional el artículo en cuestión, no lo sería para la Rep. Argentina en las circunstancias excepcionales en que se hallaba respecto a capital. Que el diputado preopinante deseaba que el gobierno estuviese amurallado en un punto céntrico del territorio, para preservarlo de los ataques que se le dirigían, siendo así que es un ente moral, cuya acción, cualquiera que sea el punto que él ocupe, se ejerce por igual sobre todos y cualquier punto de ese territorio; cuyo brazo, que es el ejército, se extiende tan pronto sobre las fronteras, para defenderla de los salvajes en tiempo de paz, como sobre el extranjero que provoque la guerra, o sobre las provincias para sofocar en ellas la anarquía y guerra civil, sin que veinte o treinta leguas de distancia importen nada para el tiempo de su acción.

Que el Congreso legislaba sobre Buenos Aires, porque no podía dictar una ley de decapitación, aunque los diputados de esa provincia no estuviesen en su seno; que su independencia estaba respetada, puesto que no se había de ir a golpear sus puertas y a mandar; que, siendo la Constitución un elemento de paz y de conciliación, como tal le sería presentada por una comisión del seno del Congreso; y si no era aceptada, se dictaría entonces una ley provisoria sobre capital, como era provisoria el estado actual de esa provincia. Que la campaña, enemiga de la ciudad, estaba en armas contra ella, en oposición al pensamiento de su gobierno. Que procurar su separación sin violentarlos, estableciendo en



la una las autoridades nacionales y erigiendo en la otra una provincia independiente, era lo único que se le pedía, lo que más le conviene y el único pensamiento que se encierra en el artículo en cuestión y la ley orgánica de su referencia.

Después de otras varias observaciones del señor miembro informante, se levantó la sesión, por ser avanzada la hora; habiendo quedado con la palabra el señor Zapata, y pendiente la discusión del artículo tercero del proyecto.

Al día siguiente (22 de abril), se continuó la discusión del artículo 3º del proyecto de Constitución, que había quedado abierta en la sesión precedente.

El señor Zapata pidió la lectura del artículo 3º del proyecto de Constitución y la ley orgánica sobre capital; concluida esta lectura, dijo: Es sobremanera sensible, 'que ciertos hechos de tal importancia y vitalidad para nuestro país que reasumen, por decirlo así, su suerte y su porvenir mismo, no sean debidamente conocidos y apreciados por todos los hombres que están llamados a influir más o menos directa o indirectamente en sus destinos; no obstante que toda nuestra historia bien estudiada y comprendida, no es otra cosa que la expresión detallada de esos mismos hechos. Pero es más sorprendente todavía que, aún conocidos por nosotros en la ocasión más solemne, cual es la de constituir la Confederación, no nos podamos poner fácilmente de acuerdo sobre su valorización práctica, a fin de que, aprovechándonos de la elocuente lección de nuestro pasado, hagamos que el país deje alguna vez de recorrer ese eterno y estéril círculo vicioso, y sea al fin lo que debe y puede ser: un país sólida y verdaderamente constituido.

Esos hechos son los que están reconocidos y concienzudamente apreciados después de largas meditaciones, en el artículo 3º del proyecto de Constitución, que establece: "que las autoridades que ejercen el gobierno federal, residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara capital de la Confederación por una ley especial". (que es lo que se ha leído). Ellos forman nuestro más serio problema social, y este problema está resuelto del único modo posible, con la organización práctica de toda la Confederación, y con sus más vitales exigencias de paz y de progreso, en el artículo constitucional que está en discusión y en la ley orgánica de su referencia.

Yo no hablo ahora de la simple conveniencia o necesidad de que la ciudad de Buenos Aires sea la capital consti-



tucional de la Confederación, porque lo haya sido siempre de hecho; porque, aun cuando nosotros no lo declaráramos, ya está esto sancionado por la naturaleza misma, como lo he dicho en otra ocasión en el seno de este Congreso, y por todo el curso de nuestra vida política y mercantil; porque esta sea una idea aceptada por nuestras más notables capacidades e ilustraciones políticas; porque en Buenos Aires existan nuestros archivos nacionales y sea más fácil compulsar todos los documentos de interés nacional; porque allí debe establecerse el centro administrativo de nuestra recaudación de rentas; porque allí pueden sentarse las autoridades con más decoro y con más medios materiales de ejercer su benéfico influjo en todas las provincias; porque allí pueden estar más en contacto con los gobiernos amigos y con la civilización europea que tratamos de encarnar en la vasta extensión de nuestro despoblado país por medio de la inmigración. Todos estos motivos, por obvios y poderosos que sean, están muy abajo de las altas y serias razones políticas en que está fundada la ley orgánica de capitalización, que completa el pensamiento del artículo en debate.

Tampoco hablo de la simple necesidad de crear una capital, cuyo territorio se declarase federal, para que residan en ella las autoridades nacionales; para satisfacer esta sola exigencia, bastaría formar una capital en cualquier pueblo o punto de la Confederación, desde que tuviésemos los medios pecuniarios de hacerlo. Cualquiera conoce, por otra parte, y a primera vista, que es quimérica una Confederación sin un territorio federal donde residan sus autoridades, para evitar el conflicto continuo en que estaría el gobierno federal o nacional, y el gobierno de una de las provincias soberanas en muchos respectos, si ambos hubiesen de tener su asiento en el territorio de cualquiera de ellas.

Hablo, señor, de otro hecho mucho más comprensivo, de un hecho profundamente histórico y elocuente en nuestro país que importa nada menos que la posibilidad o imposibilidad de constituírnos en República, y que, por lo mismo, debe preocupar seriamente nuestra atención en estos momentos solemnes. ¿La provincia y la ciudad de Buenos Aires, en las condiciones y carácter con que han existido hasta hoy, formando una parte integrante de la Confederación y la más importante de ella por su influencia y su poder físico y moral, son un elemento de constitución y de organización práctica y posible para la misma Confederación? ¿No son, por





el contrario, con esas condiciones y carácter, un principio de constante desequilibrio social, un germen continuo de acciones y reacciones en el país, un semillero eterno de dominación y resistencias, fecundas sólo en sangre y desgracias para toda la República; el antagonismo vivo entre dos poderes pésimamente comprendidos hasta ahora, y deplorablemente estériles para nuestra dicha, el de aquella heroica provincia y célebre capital y el de las demás provincias de la Confederación, un obstáculo perpetuo e insuperable de la organización general del país, a que todo argentino aspira? ¿No habría modo de alterar esas condiciones de existencia de la ciudad y provincia de Buenos Aires para que esa importante provincia se coloque dignamente en la Confederación de todas, y esa culta y populosa ciudad sea la cabeza de ella, desempeñe con majestad los altos destinos civilizadores a que es llamada? ¿Y este arbitrio que haría la ventura de la Confederación, que es de todos y para todos los argentinos, no haría también la de aquella provincia y ciudad entre las que ha habido igualmente otro antagonismo que revela toda su historia y que no ha dado hoy más frutos que la destrucción y empobrecimiento de una y otra?

Pues bien, señor: este vital e inmenso problema social para los argentinos, está resuelto con la única solución que tiene en el artículo 3º del proyecto y la ley orgánica que lo completa.

Este artículo y ley importan, en mi concepto, toda la Constitución que vamos a dar: suprimirlas sería matar la Constitución en su cuna, sería suicidarnos. Allí está nuestra profunda llaga política: es preciso poner sobre ella el dedo con valor y aplicarle el remedio. De otro modo, nos perdemos haciendo una obra raquítica destinada a perderse en su propia nulidad. No hacemos nada por el país. Vamos a sancionar una Constitución para toda la República; porque sería un egoísmo, y quizá un crimen, hacer otra cosa; pues bien dejemos en ella desocupados y dispuestos los lugares que han de ocupar la más importante provincia y la primera ciudad que tiene la Confederación, y tracemos las condiciones con que a ellas mismas les conviene ocuparlas, y con ventaja también del país en general. En las grandes y difíciles situaciones, es cuando los hombres públicos deben elevarse bien alto: dejémonos de términos medios, de remedios transitorios y paliativos; elevémonos del suelo de las miserias de nuestro país a la altura que nos conviene; y puesto que conocemos



el mal, por gigantesca que aparezca la causa de nuestras interminables guerras civiles, no le huyamos la vista aunque nos espante, y afrontémosla con valor y patriotismo; pero con la calma fría de la razón, para oponerle el único remedio y correctivo que tiene. Esto es lo que ha hecho la comisión de negocios constitucionales, aunque no haya tenido la honra de que el señor diputado por Santa Fe, que me precedió en la palabra, la apoyase con el peso de su opinión individual.

Decir que la designación de la Capital no es para nosotros un punto constitucional, es desconocer toda nuestra historia, es cerrar los ojos a los hechos palpitantes que ella pone a nuestra vista. La federación que muchas veces han proclamado las provincias, si en algunas ocasiones ha importado la defensa de su independencia y soberanía, la más de ellas han sido la expresión de justas resistencias al poder abusivo de algunos de los gobiernos de Buenos Aires. Cuando esta Provincia ha ido con sus valientes huestes a golpear la puerta del Río de la Plata, no ha ido, no, conducida por la sed de sangre de un pueblo hermano y de sus riquezas propias; ha ido como el hermano desheredado injustamente, a pedir a su hermano opulento participación en la común herencia. Y cuando el gobierno de Buenos Aires mandaba también sus huestes, que a su vez devastaban esta Provincia, no era tampoco por el solo deseo de arruinarla y empobrecerla más; no; era el tigre viril y bien nutrido, que pone su mano sobre el débil cachorro para que no adquiera brío y fuerza y vaya después a disputarle la presa. Los pueblos, y particularmente los pueblos hermanos, no se hacen la guerra por sólo sed de sangre y de destrucción; ellos tienen siempre sus motivos, aunque muchas veces no puedan darse cuenta. son poderosos porque se fundan en causas positivas de mal-estar. Todas nuestras guerras civiles de cuarenta años no son más que la expresión de estos dos hechos: "dominación o influencias, unas veces justas y otras injustas, del poder de Buenos Aires sobre las demás provincias, y resistencias, unas veces justas y otras injustas, por parte de éstas".

Esta es su historia, y estos dos hechos no han tenido otra causa que las condiciones inadecuadas con que las provincias y ciudad de Buenos Aires han funcionado en la República.

Consecuencia de este falso sistema, fué la desmembración que sufrió la República con la separación del Estado Orien-



tal, que se juzgó con mejores elementos para gobernarse por sí mismo.

No se diga que el artículo en discusión no es constitucional, porque las más de las Constituciones, o todas si se quiere, no lo tienen. Las Constituciones de las Repúblicas sudamericanas no hablan de su capital, porque antes de constituirse ya la tenían. Tampoco nosotros hablaríamos de ella si la tuviéramos; pero, como no la tenemos, o lo que hemos tenido de hecho no puede servirnos en un orden constitucional del modo que ha ejercido hasta ahora estas funciones, necesitamos fijar este punto vital en la Constitución. Se nos cita, por ejemplo, a los Estados Unidos del Norte, que no establecieron tampoco su capital en la confederación. Pero, ¿quién no reconoce la diferencia que hay entre uno y otro caso? Los Estados Unidos eran colonias independientes unas de otras, que se regían por sus respectivos gobiernos y que tenían costumbres, leyes e intereses diferentes. Al manciparse de la metrópoli y cuando trataron de constituirse en una sola nación, ninguno de ellos quiso, por esa misma diversidad de intereses y demás circunstancias, ceder a los otros el derecho de dar la capital, y fué menester formarla en un territorio que no perteneciese a ninguno y fuese al mismo tiempo de todos. Nosotros, por el contrario, formamos como colonia un solo gobierno tan central como monárquico, del que dependíamos. El antiguo virreinato de Buenos Aires se ejercía desde aquella ciudad y en toda la extensión de él, por el virrey. Nos emancipamos también de nuestra metrópoli; y los gobiernos de Buenos Aires, sin apercibirse del cambio político y social que esta nueva situación debía producir, continuaron el mismo sistema colonial, que ha terminado recién el año pasado y que nos produjo todas las guerras civiles que han despedazado el país desde nuestra independencia, a la que es preciso que los argentinos de corazón cooperen a poner un término radical.

Los Estados Unidos, pues, pasaron en su emancipación, de una completa separación a su unión por el vínculo federal; nosotros, por el contrario, pasamos de la unidad más absoluta, a la federación que vamos a constituir; y como esta forma de gobierno tiene por base el equilibrio de los estados federales, debemos propender a esto, evitando o curando la deformidad y vicio que para su propia vida y para la de la nación tiene uno de sus vínculos constitutivos.

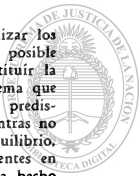


Veintitantos años hace que esta misma idea que debate hoy este Congreso, surgió en otro, promovida por un gobernante de Buenos Aires, por un hijo de aquella provincia, pero que era más argentino que provinciano, como debemos serlo todos. Esta idea, aunque aceptada entonces, no se llevó, desgraciadamente, a efecto, por circunstancias bien desgraciadas para el país. De esas circunstancias nació después el régimen terrorista del tirano don Juan Manuel de Rosas, que, gobernando despóticamente desde esa ciudad de Buenos Aires, comenzó por escarnecer y degollar a sus propios hijos y sofocar y destruir la riqueza de su campaña, y acabó por humillar a las provincias en veintidós años de abuso de un poder que debió ejercer de otro modo la ciudad víctima.

Hoy que la memorable jornada de Monte Caseros pone otra vez a la República en la posibilidad de constituirse, vuelve esa idea, ese problema social, a presentárenos palpitante. ¿Y qué quiere decir esto? Que su resolución es vital e inevitable; que es de vida o muerte para la organización del país. Y ya que el señor diputado por Santa Fe ha recordado la historia de los Estados Unidos en el punto que nos ocupa, permítaseme que la recuerde yo también sobre otro punto que puede relacionarse igualmente con la materia de esta ejecución. Cuando esos estados, independientes unos de otros, trataron de constituirse en una sola República, se encontraron, como antes he dicho, con intereses diferentes y aún opuestos.

Unos tenían esclavos, y querían que se continuase respetando este hecho, con todas las consecuencias y derechos que de él emanaban, en la Constitución que iban a darse.

Otros que no tenían, ni admitían la esclavatura, resistían, por su parte, lo que aquéllos pedían. ¿Qué hicieron entonces los legisladores norteamericanos en presencia de esta dificultad? Obraron con la misma circunspección con que se detuvieron al borde del abismo a que los había conducido la antigua confederación, para pasar a otra Constitución algo central, sin ser por eso menos federal. Hicieron una transacción sobre ese punto, de interés social y económico, y lo consiguieron en dos artículos constitucionales, en el que establece la población porque cada estado debe dar diputados al Congreso, contando en ella tres quintas partes de los esclavos, y en el que establece la extradición de los mismos esclavos a petición de parte cuando se refugian en otro estado. Y esta transacción sobre la libertad del hombre, la hacían



los legisladores más liberales del mundo, por armonizar los intereses encontrados de los diversos estados, y hacer posible su organización en la República. Nosotros, al constituir la Confederación, nos encontramos con ese gran problema que he indicado y que se nos presenta como un gigante predispuesto a destruir toda tentativa de organización, mientras no se le resuelva radicalmente, porque él revela un desequilibrio, una deformidad, y tal falta de condiciones convenientes en uno de los elementos que van a confederarse, que ha hecho hasta ahora, y hará, mientras subsista, completamente imposible la Constitución práctica del país. Pues bien, la Constitución que estamos discutiendo, consigna este hecho en el artículo 3º, con referencia a una ley orgánica de capitalización, en que se completa la resolución del problema y se detallan las condiciones con que la provincia de Buenos Aires y su actual capital pueden venir natural y convenientemente a formar de un modo digno la principal parte de la Confederación.

Se ha dicho también que, no estando la provincia de Buenos Aires representada en el Congreso, no podemos obligarla a ceder su capital a la Confederación, o disponer sin su consentimiento, de una parte de su territorio. No comprendo como pueda hacerse esta objeción por el señor diputado por Santa Fe, que ha oído la lectura que se hizo hace pocos días en este Congreso, de la ley orgánica de capitalización, y que antes de eso la había leído y examinado detenidamente en el seno de la comisión de que es miembro. El artículo que se debate no debe ser considerado aisladamente de la ley especial de su referencia, si se quiere proceder con verdad y exactitud en la discusión, porque sería truncarlo. El pensamiento expresado en él está completado y desenvuelto en esa ley que expresa las condiciones de esa cesión de territorio. ¿Dice ella, acaso, que se impone a la provincia de Buenos Aires la obligación de aceptar esta Constitución, y de ceder su capital? De ninguna manera. Dice, por el contrario, que será invitada por una comisión del seno del Congreso a examinar y aceptar la Constitución y la ley orgánica, y a constituirse en provincia en el territorio restante; y en todo esto nadie puede ver un ataque a su soberanía.

Se ha hablado, por último, de inoportunidad para tratar esta materia. Confieso, señor, que esta palabra empieza a sonar muy mal en mi oído, porque me parece que ella es la expresión disfrazada de la pusilaminidad. ¿Inoportunidad? Precisamente es hoy cuando debemos decir las grandes ver-



dades bien alto; precisamente es hoy la oportunidad de sancionar y proponer la adopción de esa ley orgánica. Actualmente se encuentra esa grande y desgraciada provincia, devorada por una horrible guerra civil, y presa de ese antagonismo de que antes he hablado, entre la ciudad y la campaña; ésta queriendo absorberse aquélla. La campaña ganará mucho constituyéndose en provincia en su inmenso territorio, estableciendo su capital en uno de los tantos pueblos que tiene, o en el punto más conveniente, creándose nuevos centros de civilización y haciendo que sus autoridades locales ejerzan una influencia más inmediata y benéfica en su vasta extensión, con el desenvolvimiento de su riqueza. La ciudad sería entonces, sólo lo que deba ser la gran ciudad: la ciudad civilizadora de la República. ¿Dejará el gran pueblo de Buenos Aires, de pertenecerse a sí mismo por desempeñar el digno rol de cabeza de la Confederación Argentina? No; por el contrario, garantida la paz y tranquilidad en su seno, y libre de los azares que la han atormentado hasta hoy, se levantará como un coloso, llena de gloria, de riqueza y de prosperidad. La provincia de Buenos Aires y sus ilustrados hijos, comprenden bien, hoy, sus verdaderos intereses y aceptarán la grande transacción que se les va a proponer, como un don bajado del cielo!

El señor Zavalía pidió la palabra, y dijo: Que había meditado mucho sobre la grave cuestión que hacía la orden del día, para formarse de ella un juicio claro y exacto, y tendría la sinceridad de confesar que no había opinado antes por la capital en Buenos Aires, sino, al contrario, trabajado bastante para que la ciudad federal se estableciese en otro punto; pero que poderosas razones habían obrado en su ánimo hasta uniformar su juicio con el de la comisión a este respecto; que, sin embargo, él propondría una ligera modificación al artículo, con la que creía se allanarían las dificultades que parecía ofrecer, como la de que la Constitución quedase a, merced de la aceptación o no aceptación de Buenos Aires. Que el texto del artículo era el siguiente: "Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara capital de la Confederación, por una ley especial".

Que era preciso no perder de vista que se legislabo por ese artículo sobre un territorio que no obedece ni reconoce al Congreso; que no aceptada la capitalización por Buenos Aires, habría en la Constitución un artículo sin efecto ni



aplicación, lo que se evitaría por la modificación que proponía, y era la siguiente:

“Las autoridades que ejercen el gobierno federal, residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declarará capital de la Confederación, bajo las condiciones establecidas por una ley especial”.

Que de este modo la Constitución tendría su efecto al otro día en que se promulgase, aun cuando Buenos Aires no admitiese la ley; por cuanto se estatuyó en el citado artículo tercero que, no siendo bajo las condiciones que la ley orgánica establece, Buenos Aires no sería la capital.

El señor Colodrero pidió la palabra, y expuso: que había oído decir al señor Leiva, miembro de la comisión de negocios constitucionales, que en el seno de ella hubo tres miembros en oposición al artículo que se discutía; que, si en este número se le incluía a él, protestaba en alta voz que había equivocación en esto, y quería que se le hiciese justicia sobre su modo de pensar a este respecto; que ya, en otra ocasión, había manifestado que Buenos Aires ha sido la capital de hecho de la nación, desde tiempos muy remotos, y que este hecho debía consignarse como una ley fundamental; que mal podía haber manifestado oposición al artículo, estando conforme a sus condiciones, y que votaría por él tal cual estaba redactado.

El señor Leiva obtuvo la palabra, y expuso: que habiéndose dividido la comisión en secciones, para el análisis del proyecto, una de éstas se componía de los señores Ferré, Colodrero y él (el señor Leiva); que, al llegar el artículo 3º, los tres se manifestaron en oposición a él, y cuando, reunida toda la comisión, se votó sobre dicho artículo, tuvo los mismos tres votos en contra. Que el señor Colodrero varió después de opinión, cuando leyó la ley sobre capital y declaración que la precede. Que apelaba al testimonio de los señores de la comisión y principalmente al del señor diputado por Catamarca. Que se contraería a las objeciones del señor Zapata. Que nada se le había dicho aún para probar que el artículo era constitucional; que él no se oponía a la idea de que Buenos Aires fuera la capital, sino a la oportunidad de hacer oír esta declaración, porque no había posibilidad de llevarla a cabo; porque no creía que el Congreso tuviera facultad para ello, por las razones que había ya antes expresado y excusaba repetir. Que se había dicho que ninguno de los estados americanos fijaba como artículo constitucional la



designación de su capital o residencia de las autoridades supremas, porque al constituirse se encontraron con el hecho de tener todas capital. Que él sólo manifestaría, en conclusión, que la República Oriental del Uruguay, al darse su carta fundamental, tenía a Montevideo por capital, y que, sin embargo, un artículo constitucional estatuyó que las autoridades nacionales residiesen donde fuese más conveniente. Que, en cuanto al estudio de la ley orgánica que se le atribuía, confesaba haberla leído una sola vez, por la precipitación con que se condujo la comisión, sin atinar con el motivo de ella; por lo que, tanto en la comisión, cuanto en la discusión en el Congreso, sus observaciones eran improvisadas, pues no había podido conseguir se diese el tiempo bastante para la meditación y estudio tan necesarios, por la gravedad de las materias que importa la Constitución.

Obtuvo la palabra el señor Lavaisse, y dijo: Que admiraba verdaderamente ver que un señor diputado, encanecido bajo el peso del infortunio y aleccionado por los padecimientos sufridos en la expatriación, fruto de la anarquía o de la tiranía, manifestase oposición al artículo en discusión, y que no hubiese comprendido que la capitalización de Buenos Aires era la solución del problema social que hasta ahora había complicado la organización de la República, produciendo las cuestiones políticas que la habían destruido y dilacerado.

Que la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, tal cual lo establece la presente Constitución por su ley orgánica era todo el fundamento de la organización nacional, como lo demostraría.

Que admiraba aún más ver que un hijo de la provincia de Santa Fe quisiese despojarse de la rica herencia legada a este suelo en sus resistencias, justas unas veces, injustas otras, contra el predominio de Buenos Aires. Que ese pingüe patrimonio de que el señor diputado quería desnudarse, para vivir cual hijo pródigo, manteniéndose de raciones pequeñas y mezquinas, y relegándose a un lodazal, después de haber disipado su opulencia, consistía en no recoger el valioso fruto de ese sistema de resistencias, conquistado por un guerrero a quien Santa Fe cuenta como uno de sus más ilustres hijos.

Que la experiencia demostraba que Buenos Aires, capital de una provincia inmensa y poderosa, y al mismo tiempo capital de la nación, como de hecho, lo había sido hasta hoy, era el origen de las eternas cuestiones que han dividido a los





argentinos; la causa de las resistencias de las provincias por una parte, y del predominio de Buenos Aires sobre ellas, bárbaramente perpetuado por Rosas. Que también era necesario conocer que la ciudad de Buenos Aires era la más aparente y la única digna de ocupar el rango de capital de una nación grande y próspera, si se quería constituir dignamente la República Argentina. Que no hubiese miedo en decir la verdad, porque no había en ello adulación ni lisonja: que Buenos Aires por su cultura, por sus ventajas demasiado conocidas, y hasta por su posición geográfica, colocada en la embocadura del gran Río de la Plata y a las puertas de la culta Europa, tenía que ser, necesariamente, la capital de la República Argentina. Pero que era preciso que Buenos Aires, capital de la nación, al mismo tiempo que de una provincia vastísima y rica de elementos de todo género, no presentase el fenómeno de un cuerpo monstruoso cuya cabeza se halla hidrópica y sus miembros raquíticos, como se había manifestado principalmente por el aspecto horrible e informe que el cuerpo social ostentaba en la Confederación Argentina durante la tiránica y despótica administración del general Rosas. Que de hoy para siempre, Buenos Aires entrase en las provincias y las provincias en Buenos Aires, perteneciéndose mutuamente.

Que para alcanzar este bien, no hallaba un medio más obvio y sencillo que el presentado por la comisión en la ley orgánica sobre capital, adjunta al proyecto de Constitución.

Que se hiciese de la ciudad de Buenos Aires la ciudad federal, la ciudad capital de la República; y entonces ella entraría en la asociación argentina, dando resultados benéficos y haciendo desaparecer los celos, las antipatías mutuas entre Buenos Aires y las provincias, consiguiendo también, de este modo, que la acción de Buenos Aires no pueda extenderse a dañarlas y dominarlas, sino más bien a ligarlas con ella por los vínculos de fraternidad y bienestar. Que así era como había de darse una solución completa a todas las dificultades que habían sido la causa de las rencillas, divisiones y miserias entre los argentinos. Que no se quiera ver colocado al Congreso en la triste necesidad de consignar el ridículo en una Constitución, estableciendo una quimera, como sería una capital pequeña y débil, que estuviese a merced de una sola provincia más poderosa que ella y que el resto de la nación, ni exponer a las autoridades nacionales hacer el juguete de los caprichos del más fuerte, señalándoles su residencia en algún lugarcillo débil e indefenso. Que era preciso utilizar



las lecciones del pasado. Que se acusaba a Buenos Aires de absorber en su inmensidad el resto de la República, y que se quería, sin embargo, dejarla en la posibilidad de que continuase esa absorción como en tiempo de la dominación de Rosas.

Que era preciso hacer de modo que ocupase el lugar que le cabía en la Confederación Argentina, y que se consignase en la Constitución un hecho que es y ha sido siempre el luminoso pensamiento de todas las notabilidades argentinas. Y, finalmente, que sólo así sería posible la organización nacional; sólo así, realizable, efectiva y duradera.

Que era preciso hacer todo esfuerzo para desarraigar todo sentimiento estrecho y de localidad, a fin de manifestar a los pueblos que, al dictar el Congreso la presente Constitución, sólo había sido animado de sentimientos puramente nacionales. Que era preciso extirpar las odiosas distinciones de *porteños* y *provincianos*, que, por desgracia, hasta hoy existen, mostrándose todos a la par de la nación, de los pueblos y de todo el mundo, con el nombre de argentinos antes que perteneciendo a esta o aquella provincia, como había dicho muy bien el señor diputado de Mendoza. Que, de este modo, los señores diputados habrían llenado completamente los votos de los pueblos y seguido fielmente las inspiraciones y dictados de su conciencia.

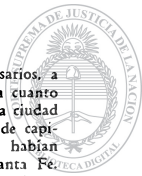
El señor Leiva dijo: que sentía que no se le comprendiese; que se le calumniaba atribuyéndole oposición a que Buenos Aires fuese la capital; que ya había repetido varias veces que su oposición era solamente a que esto fuera materia de la Constitución y de las presentes circunstancias. Que en el proyecto de adición que había tenido el honor de presentar, dejaba libre la elección de la capital para cuando el Congreso de la nación considerase oportuno establecerla, y que en todo cuanto se había dicho en favor del artículo en discusión, no se había deducido razón alguna ni probado que el artículo fuese constitucional ni oportuna su sanción, al menos que le satisficiera, que allanase los obstáculos, que ofreciese garantías de estabilidad de las autoridades nacionales. Que tampoco comprendía por que se le comparaba con el *hijo pródigo*; porque sosteniendo la justicia, la razón y la exactitud de las cosas, ni dilapidaba su herencia, ni el país perdía glorias, ni ocupaba aquel lugar, para defender localidades de provincia, sino el porvenir de la Confederación; que

no sabía la acepción de esta proposición con que se le calificaba.

El señor Huergo dijo: que el señor diputado de Mendoza había considerado la cuestión de capitalización de Buenos Aires bajo el aspecto político que la hacía necesaria para mantener el equilibrio federal de la República. Que él la consideraría ligeramente, ahora, bajo el aspecto de su conveniencia y de su oportunidad, que se había puesto en duda, atendidas las circunstancias especiales en que se hallaba la República. Añadió en seguida que las capitales no se improvisaban, que casi siempre la naturaleza o la fuerza misma de las cosas las había establecido espontáneamente, aunque algunas veces había sido necesario el genio para descubrir su más oportuna situación. Que así fué como Pedro el Grande había levantado sobre los pantanos del Neva, la soberbia capital de Petersburgo, y así también cómo los americanos habían levantado, para conciliar susceptibilidades, en un lugar tranquilamente elegido, la capital de Wáshington.

Que si el Congreso iría, a imitación de esos estados a, levantar con las piedras de Martín García el Argirópolis de Sarmiento, o para no ofender las soberanías provinciales y desmembras una ciudad de su territorio, a establecer su capital en el Chaco. Que el Congreso no tenía necesidad, ni recursos para crear lo que la naturaleza y la acción espontánea de los hechos habían creado. Que la geografía, la tradición y la conveniencia designaban a Buenos Aires como capital de la República, porque allí estaba todo el servicio público organizado en este sentido, allí estaba nuestra aduana principal, nuestro puerto más asequible al extranjero, y allí también el foco principal de la civilización argentina. Que la fuerza irresistible de los intereses comerciales había hecho de Buenos Aires el verdadero centro administrativo y económico de la República, y la hacían, a pesar de la apertura de nuestros ríos al libre comercio del mundo; porque por mucho tiempo éste no variaría su curso acostumbrado. Que el gobierno federal de Buenos Aires estaba a la puerta de nuestras aduanas y tenía la mano sobre la isla de Martín García, verdadera llave de nuestros ríos interiores. Que en Buenos Aires estaban acumulados los grandes capitales sobre los que el gobierno federal debía basar sus operaciones de crédito, indispensables para hacer efectivas a los pueblos las promesas de la Constitución, y que allí, por último, había atraído el comercio extranjero la población y la riqueza, y





con ellas los recursos, el poder y la civilización necesarios, a la capital de una República bien organizada. Que en cuanto a la oportunidad de establecer la ley de capital en una ciudad que resistía con las armas al voto nacional, la ley de capitalización respondía a todas las objeciones que se habían hecho a este respecto por el señor diputado por Santa Fe. Que la provincia de Buenos Aires no estaba representada en el Congreso, y que por eso tampoco el Congreso trataba de imponerle la Constitución que dictaba; que, por el contrario, la ofrecía como una garantía de orden a su espontánea y deliberada aceptación. Que, si Buenos Aires la rechazaba, el Congreso lamentaría que no hubiesen sido comprendidas sus buenas intenciones, pero que no por esto quedaría el resto de la República inconstituída y sin cabeza, como se había dicho, porque entonces dictaría el Congreso una ley de interinato, estableciendo otra capital; una ley de interinato, porque si las pasiones se sobreponían hoy en Buenos Aires a la voz del interés general, dentro de seis meses, de un año, de dos, reclamaría con entusiasmo lo que hoy rechazaba. Que, si los inconvenientes que pudiera ofrecer la ejecución de la Constitución, hubiesen de arredrar al Congreso, tendría que suprimir la tercera parte de sus artículos. Que, por último, no era este un pensamiento nuevo, que él pertenecía a los hijos más distinguidos de esa provincia. Que cuando el 8 de febrero de 1826, el ilustre y distinguido ciudadano don Bernardino Rivadavia prestaba, como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, su juramento ante el Congreso de ese tiempo, decía que al día siguiente (porque era preciso aprovechar el tiempo), presentaría una minuta de ley, y que aprobada ésta, la obra estaba hecha, y la organización del país asegurada. Precisamente, es la misma minuta que después de 25 años nos sirve hoy de orden del día. Que no era, pues, presumible, que Buenos Aires rechazara una ley que iba a salvarla con honor de la lucha en que se hallaba empeñada, y a elevarla al rango que le designaban su civilización y sus recursos; de una ley que tendría en su apoyo la sanción de dos congresos, que, partiendo de una base diametralmente opuesta para constituir el país, habían convenido, sin embargo, en la adopción de una medida verdaderamente salvadora para Buenos Aires y para la República en general.

El señor Colodrero pidió que se diese el punto por su-



ficientemente discutido, y siendo apoyado, se puso en votación el artículo, y fué aprobado por mayoría.

*Discusión y aprobación del artículo 4º.* — Puesto en discusión el artículo 4º, pidió la palabra el señor Leiva, y expuso que por este artículo se quitaba a las provincias los derechos de exportación e importación y demás con que contaban para atender a sus gastos ordinarios, no quedándoles más recursos que la contribución directa; que, además, por un otro artículo del proyecto de Constitución, el Congreso quedaba facultado para imponerla en ciertos casos y temporariamente. Que, por otra parte, el artículo en cuestión se oponía al artículo 19 del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que estatuyó que las autoridades constitucionales eran las únicas competentes para fijar definitivamente las rentas nacionales, y que el Congreso constituyente saldría de la esfera de sus atribuciones, alterando dicho artículo. Que él, (el señor Leiva), presentaba un *proyecto de adición* que conciliaba, en su concepto, este inconveniente. Que en su redacción se había valido de las mismas palabras del distinguido publicista Alberdi, y tomado asimismo las del artículo en discusión, y estaba concebido en los términos siguientes:

“Artículo 4º — El gobierno federal provee a los gastos de la nación, con los fondos del tesoro nacional, formados con impuestos soportados por todas las provincias, proporcionalmente”.

Que lo presentaba por si su perfecta conformidad con el acuerdo de San Nicolás era suficiente para su adoptación.

El señor Gorostiaga obtuvo la palabra, y dijo: Que, como miembro informante de la comisión, se contraería primero a demostrar algunos de los fundamentos y razones que aquélla había tenido para establecer el artículo en discusión, y que después contestaría a las aducidas por el señor diputado por Santa Fe.

Todo gobierno, dijo, debe tener poder bastante para dar entero cumplimiento a las obligaciones que se le imponen y de que es responsable. Las rentas son el principal resorte para llenar estos objetos, elemento sin el que la máquina del estado quedaría paralizada, porque sin la unión y consolidación de rentas, de ciertos intereses y medios, no puede haber en política, existencia nacional, y la creación de aqué-



llas en relación a las necesidades del país, y a sus recursos, es una parte esencial de toda Constitución.

Que se contraería a hacer el examen de las obligaciones que se imponían al gobierno, y manifestar si guardaban proporción con las rentas y recursos que se le asignaban. Que uno de los primeros deberes de la administración era el pago y consolidación de la deuda nacional, tanto exterior como interior, porque de ella dependía su crédito. Que la nación reconocía tres deudas exteriores: la del año 26, la del 51 y la que por autorización del soberano Congreso actual acaba de contraerse, cuyo capital ascendía a un total de más de trece millones de pesos fuertes, y cuya renta anual pasaba de setecientos mil duros. Que de la deuda interior, extensiva a todas las provincias, y de que la nación debía hacerse cargo sólo tenía conocimiento de la de Buenos Aires, por carecer de datos estadísticos respecto a las demás. Que la de Buenos Aires, entre papel moneda emitido y deuda particular, debía ascender a doscientos cuarenta millones, que pesaban exclusivamente sobre los impuestos aduaneros. Que a las rentas de estas inmensas deudas se reunían todos los gastos de administración, culto, ejército, armada, etc.: que después se vería si lo que se daba al gobierno general, para hacer frente a todas estas obligaciones, alcanzaba a cubrirlas; pero que antes expondría un solo dato, y era, que en la provincia de Buenos Aires, en tiempo de la administración Rosas, los gastos de la lista civil y militar, sin contar las de guerra, importaban cuarenta millones; y que la vez que más había producido su aduana, por derechos de importación y exportación, sólo había dado treinta y cinco millones, y esto el año 50, que fué el más productivo en todo el tiempo de aquella administración; por cuanto los gobiernos de las provincias del norte, por lisonjear a Rosas, las habían obligado a proveerse en el mercado de Buenos Aires, quedando por esta razón su aduana como única en la República, pues que si permitía, para las del litoral el trasbordo y reembarco, era con tantas trabas y derechos, que se prefería no hacerlo.

Que todo lo que se daba al gobierno, era lo que fijaba el artículo en discusión, y es como sigue: "El gobierno federal provee a los gastos de la nación, con los fondos del tesoro nacional, formado de los productos de importación y exportación de las aduanas, del de la venta o locación de tierra de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a

la población imponga el Congreso general, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso, para urgencias de la nación, o para empresas de utilidad nacional”.

Que examinaría estos recursos, principiando por el último de ellos: “Que el primero en este sentido: *empréstitos y operaciones de crédito* sólo era un recurso subsidiario, y únicamente a los fines para que ellos fuesen creados o decretados por el Congreso.

Que siendo el segundo: *de las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general*, uno de los recursos que quedaba a las provincias, era natural que no se echase mano de él sino en circunstancias muy excepcionales.

Que el tercero: *venta y locación de tierras*, era, por ahora, un recurso quimérico, pues por muchos años las tierras de propiedad pública nacional no tendrían valor alguno por falta de compradores y locatarios.

Que el cuarto: *renta de correos*, en lugar de ser un recurso que produjese algo a la nación, le demandaba considerables gastos en el sostén de postas y en mejora, y aún construcción de caminos.

Que el último: *derecho de importación y exportación de las aduanas*, era, pues, lo único que quedaba al gobierno federal, para hacer frente a todas las obligaciones que se le imponían, y que ya había demostrado lo que este recurso podía producir; de modo que, por mucho tiempo aún de régimen constitucional, los presupuestos arrojarán un gran déficit.

Que, a más de estas razones que probaban la justicia y conveniencia de establecer el artículo tal cual lo presentaba la comisión, recordaría que en los Estados Unidos los derechos de importación y exportación pertenecían al gobierno federal y no a los estados, sin que nadie hubiese puesto en duda la perfecta soberanía e independencia de ellos. Y que, por último, la aserción de que el artículo que se discutía estaba en oposición al artículo 19 del acuerdo de San Nicolás, era equivocada e inexacta, pues lo que el acuerdo estatuyó, sólo era hasta que las autoridades competentes dictasen la ley sobre la materia y que nadie podría dudar que lo fuese el Congreso constituyente.

Siendo las once de la noche, se levantó la sesión, quedando abierta la discusión del artículo cuarto.





El 23 de Abril, continuó la discusión de la sesión anterior, sobre el artículo 4º del proyecto, y el señor Gorostiaga, con la palabra que dejó la noche antes, por ser avanzada la hora, dijo: Que se le había preguntado: ¿qué rentas se dejan a las autoridades provinciales para atender a sus respectivos gastos? Que él respondería a la vez, con otra pregunta: ¿qué rentas se le dejan a la autoridad nacional, para hacer frente y responder dignamente a los altos deberes y penosos cargos que se le imponen? Y ¿qué gastos y pensiones quedan a las provincias confederadas después de los que asume el gobierno nacional y que se hallan consignados en la presente Constitución?

Agregó que sentía no conocer otra estadística que la de la provincia de Buenos Aires, de que se había ocupado ya, para hablar con igual precisión sobre las demás; pero que interpelaba al señor diputado de Santa Fe, para que, como ministro general de ella, ilustre la materia con datos estadísticos; que exprese las rentas que tiene fuera de los derechos de importación y exportación, y cuáles sus gastos fuera de los que asume sobre sí el gobierno federal. Que por los periódicos de esta ciudad, que había tenido a la vista, las rentas de esta provincia, incluyendo los derechos de patentes, papel sellado, corrales, impuestos sobre herencias, boletos de marcas, multas policiales y contribución directa, importaban, excluyendo los derechos de importación y exportación, la mitad de las rentas de la provincia; y que en su concepto, esta mitad era suficiente a cubrir los gastos de ella, deducidos los que quedan a cargo del gobierno federal, como administración de aduanas, culto, ejército, defensa de las fronteras, listas civil y militar, etc., etc.

Que para llenar tantos deberes, aún creía insuficientes las rentas que se le acordaban, puesto que ni era fácil negociar un empréstito cuya base era el crédito, marchito entre nosotros, con el monto de nuestras deudas por capital e intereses y por nuestra misma situación política: que tampoco podemos vender tierras con gran provecho nacional, sin dar, previamente, suficientes garantías al derecho de propiedad que se transfiera en ellas; *garantías* que penden mucho de la respetabilidad y desahogo del mismo gobierno.

Que se había dicho que el artículo 4º del proyecto estaba en contradicción con el 19 del acuerdo de San Nicolás, siendo así que cuanto se estatúa en éste era transitorio y sólo vigente hasta la instalación de las autoridades constitu-





cionales. Que lo que violaba el acuerdo de San Nicolás, era aquello que tendiese a desconocer la atribución 16 del artículo cuarto del tratado de 4 de enero de 1831, base fundamental del acuerdo de San Nicolás. Que aquél estatúa en dicho artículo que el Congreso general arreglase los derechos y gastos de la Confederación. Que se había citado al distinguido publicista Alberdi, a quien él tributaba sus respetos, y que, como un homenaje de su gratitud, deseaba rectificar la idea que se le atribuía.

Que era verdad que dicho señor Alberdi aconsejaba que el tesoro nacional se formara de derechos impuestos a las provincias, proporcionalmente; pero que, al emitir este consejo, había declarado también que sus trabajos eran abstractos; que con ellos hacía un molde en que creía debía vaciarse nuestro sistema político, pero no determinaba su magnitud y dimensiones; que aconsejaba al mismo tiempo, que la aduana fuese una, dando al Congreso la facultad de crear y suprimir otras.

Que creía haber dado suficientes explicaciones sobre el artículo en cuestión, y que ofrecía explayarlas más en el curso del debate.

El señor Leiva pidió la lectura del artículo 19 del acuerdo de San Nicolás, y del artículo 4º del proyecto de Constitución, pidiendo se fallase si estaban o no en abierta oposición y si el soberano Congreso se hallaba o no facultado para alterar un artículo de aquel pacto fundamental, de que había surgido el mismo soberano Congreso; que no era el Congreso constituyente sino el constitucional, el que por este acuerdo debía legislar sobre aduanas, como terminantemente lo decía. Expresó en seguida que se le habían pedido explicaciones como diputado por la provincia de Santa Fe y ministro general de ella, sobre sus rentas y gastos; que como diputado podría darlas; que como ministro no había derecho a pedírselas; que sólo por condescendencia las daría, con hechos y no con cifras. Que las rentas de la provincia de Santa Fe, desde que él las conocía, no habían alcanzado un solo año a cubrir sus gastos; que al presente el desarrollo de su comercio o la mejor administración de rentas, había ofrecido el ejemplo de un balance sin déficit, más todavía, sin sobrante; que por esto juzgaba, pues, que no podría marchar esta provincia sin sus ingresos naturales y ordinarios; y por último, que cuanto se había aducido en favor del artículo cuarto, no influía ni debilitaba en manera alguna su



oposición a él, pues la fundaba en el quebrantamiento del acuerdo de San Nicolás, en la falta de facultad, de parte del Congreso constituyente, para alterar esa ley fundamental que lo había creado, y en que el mencionado artículo privaba a las provincias de recursos indispensables para su subsistencia.

El señor Zavalía dijo: que creía falsa la interpretación dada al artículo 19 del acuerdo de San Nicolás, pues al establecer que las provincias concurrieran proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores a los gastos generales de la nación, establecía también que fuese hasta la instalación de las autoridades constitucionales, juzgando que en el período del Congreso constituyente y hasta que se llevasen a debido efecto las leyes sancionadas por éste en materia de impuestos, no habría de que echar mano para hacer frente a los gastos nacionales, sino de la renta creada por el acuerdo de San Nicolás; que esto no quería decir, pues, que el Congreso constituyente, que es la única autoridad competente, se excuse de determinar qué rentas y qué productos han de formar el tesoro nacional y de qué debía disponer el gobierno general para hacer frente a sus gastos, dejando al Congreso constitucional el deber de fijar definitivamente las tarifas y reglamentos para la recaudación de los impuestos y distribución de ellos.

El señor Seguí pidió la palabra, para apoyar las observaciones del señor Gorostiaga, y dijo: que conceptuaba de tan vital importancia el artículo en discusión del proyecto, que se atrevía a asegurar que, si él no se sancionaba tal cual había sido redactado por la comisión, sería inútil, sin resultado alguno, impracticable y hasta ridícula la constitución de los pueblos argentinos; y aclarando más su pensamiento, añadió: que el artículo sobre rentas generales, era la única base posible a la nación que se creaba, del gobierno común que se reducía a fórmula; y suprimido él o substituído con algún otro que la mutilase o cortara su extensión, no grande a la verdad, resultaría quimérica la formación del ejecutivo nacional, de las cámaras legislativas, del tribunal supremo de justicia, de los ejércitos de mar y tierra, seguridad de fronteras, construcción de ferrocarriles, apertura de canales, etc., tornándose imposible cualquier medida de adelanto intelectual o material que tratase de adoptar para cambiar, mejorando la tristísima y desconsoladora situación de ese número de provincias argentinas desparramadas sobre la superficie del suelo argentino, que después de su independencia, nunca fue-



ron sino por una impropiedad del lenguaje, ni provincias unidas, ni confederación, ni república, ni otra cosa (lo diré con franqueza) que catorce pueblos aislados, disconformes en todo, menos en hacerse la guerra sin misericordia y suicidarse sin repugnancia. Que uno de los miembros informantes de la comisión redactora del proyecto, había trazado, en la sesión anterior, detalladamente el cuadro financiero del país, y probado con el mejor de los argumentos que la razón tiene, con las cifras, con la lógica incontrastable de los números, que las rentas conferidas al gobierno federal por el artículo en discusión, no bastaban para llenar ni la mitad de las obligaciones que la Constitución le imponía. Que, en su opinión, siendo esto ya de por sí un conflicto económico, no era prudente ni acertado cerrarle ninguna de las fuentes rentísticas del país, cuyas dimensiones eran tan pequeñas comparadas con la inmensa cantidad que debía consumirse en provecho mismo de la nación que se instituía. Que sobre este punto creía que el mismo señor diputado opositor al artículo estaría conforme, porque él importaba un hecho serio, pedestal del edificio cuya construcción se había encomendado al Congreso; y que sobre un hecho de tan notoria exactitud, no podía haber divergencia de opiniones. Pero que el señor diputado autor del proyecto de substitución, mencionaba otro hecho atendible también, cual era el estado actual de algunas provincias y la probabilísima circunstancia de que, con los recursos que el artículo les dejaba, no podrían quizá cubrir sus ordinarias necesidades. El señor diputado pidió entonces se leyese por el señor secretario, como se hizo, la atribución 8ª del futuro Congreso legislativo, y dijo: que en la facultad concedida al Congreso para acordar suplementos del tesoro nacional a las provincias que los necesitasen, para llenar el déficit de sus rentas, estaba incluido el derecho otorgado a éstas de pedirlos oportunamente, con lo que aparecía prevista y resuelta cualquier dificultad financiera que ocurriese en los pueblos confederados.

Que, con respecto a las obligaciones impuestas al presente Congreso por el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, él no consideraba subsistente más que el deber de sancionar una Constitución federal, como estaba también consignado en el tratado de 4 de enero de 1831, y que este deber se hallaba religiosamente cumplido en el proyecto presentado y actualmente en discusión particular. Que a saber la interpretación dada por su honorable colega al artículo 19 del acuerdo



de San Nicolás, donde se sancionaba que sólo a las autoridades constitucionales competía el establecimiento de los impuestos nacionales, el señor Director provisorio sería el primero en haber violado ese artículo; pues había promulgado con universal aceptación una ley de aduanas, aunque con la cláusula de ser sometida, como la había sido, a la deliberación del Congreso constituyente, prueba inequívoca de que su mente y la del consejo de estado era, que legislar sobre hacienda es de la exclusiva competencia del Congreso presente. Y que sin embargo él (el señor Seguí), no creía que el Director provisorio había violado el acuerdo al dar provisoriamente una ley de aduanas, como tampoco al declarar libre la navegación de los ríos, concluir tratados y demás medidas que son del resorte de la representación nacional, desde que lo había hecho por notoria utilidad general, y *sub-sperati*. Que en esta virtud, en la parte que los pactos preexistentes eran leyes fundamentales de la República, la Constitución en proyecto los había tomado por base, y que, si se leía bien el artículo del tratado de 4 de enero, donde están consignados los objetos para que debían reunirse en Congreso las provincias signatarias con las demás invitadas a ello, se verá que el proyecto de Constitución que se discute, no es más que una fórmula detallada del mencionado artículo.

Finalmente, el señor diputado concluyó diciendo: que votaría en favor del artículo tal cual estaba redactado, y que lo haría como argentino, en nombre de la nación y como representante de Santa Fe, en nombre de los intereses bien entendidos de su provincia, la que, si al despojarse de sus derechos de importación y exportación, hacía, impropiaamente hablando, un sacrificio, sería, a no dudarlo, recompensada con usura con el engrandecimiento, prosperidad y riqueza que la Constitución nacional, una vez plantificada, derramaría a manos llenas en toda la extensión de su territorio.

El señor Lavaisse pidió la palabra, para expresar que tanto el tratado de 4 de enero como el acuerdo de San Nicolás, eran pactos transitorios, no permanentes, como lo había declarado el señor Leiva, diputado por Santa Fe: *transitorios*, porque eran creados en épocas de transición y al efecto de constituir el país, lo que no podía hacerse sino por medio de una carta fundamental; que, dictada ésta, terminaba el efecto de aquéllos; que era necesario sentar en claro este principio, para no dar después lugar a interpretaciones peligrosas.



El señor Leiva insistió en que el Congreso se pronunciase sobre si el artículo que se discutía y el 19 del acuerdo de San Nicolás estaban o no en contradicción. Después de un breve debate entre los señores Gorostiaga, Seguí y Leiva, se declaró el punto suficientemente discutido. Se votó el artículo, y resultó aprobado por mayoría.

*Aprobación de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10.* — Se puso en discusión el artículo 5º

Después de ligeras observaciones y explicaciones que pidieron los señores Zenteno y Seguí y que fueron satisfechas por los señores miembros informante de la comisión, se votó y resultó aprobado por unanimidad.

Se pusieron en discusión y se aprobaron los artículos 6º, 7º y 8º.

Puesto a discusión el 9º observó el señor Zavalía, que creía que la mente de la comisión en la redacción de este artículo era declarar que no habría más aduanas que las exteriores y fluviales, y que pedía se substituyese con estas palabras la expresión de *nacionales*, que la creía redundante; pues tal concepto se hallaba repetido en el artículo 15, donde se expresaba que no podían establecerse aduanas provinciales. Que la expresión *exteriores y fluviales*, comprendía aún las aduanas situadas en el interior de los ríos Paraná y Uruguay, que, aunque no eran exteriores, hablando geográficamente, lo eran, sí, en el lenguaje político.

Después de las explicaciones que los señores miembros informantes de la comisión dieron a las objeciones del señor Zavalía, el señor Seguí defendió el artículo tal cual estaba redactado, y, puesto a votación, resultó aprobado por unanimidad.

Se procedió a la lectura del artículo 10, y se abrió su discusión. El señor Zenteno pidió algunas ligeras explicaciones sobre él, que le fueron dadas. Puesto a votación, resultó aprobado por unanimidad.

El señor presidente observó entonces, que la hora era avanzada; que se hacía necesario suspender la sesión, y consultó al soberano Congreso si continuaría al día siguiente, a pesar de ser festivo.

El señor Seguí indicó, que en atención a la urgencia del asunto que se discutía, hubiese sesiones aún en los días festivos.



El soberano Congreso votó y aprobó la indicación propuesta, con lo que se levantó la sesión a las doce y media de la noche. (1)

*Discusión y aprobación del artículo 14.* — El 24 de Abril, el señor presidente declaró abierta la sesión y puso en discusión el artículo 14 del proyecto de constitución, que se mandó leer.

El señor Zenteno obtuvo la palabra y pidió explicaciones al señor miembro informante de la comisión sobre la libertad que en dicho artículo se concedía a los habitantes de la Confederación para profesar su culto.

El señor Gorostiaga contestó con la lectura del artículo, observando que era terminante su disposición, y no creía poder dar explicaciones más claras que su contenido literal.

El señor Zenteno expresó, entonces, que se opondría formalmente a este inciso del artículo, y que, para desarrollar su pensamiento de oposición, fijaría las dos siguientes proposiciones: Primera, si el Congreso constituyente puede o no sancionar la libertad de cultos, ya sea teológica, civil o política; segunda, si debía o no sancionarla como meramente civil o política. Que él estaba por la negativa de ambas proposiciones; que creía que el Congreso no podía sancionar la libertad teológica de cultos, porque tal sanción sería contraria al derecho natural, contraria al símbolo de la fe católica, apostólica, romana. Que tampoco podía sancionarla como meramente civil o política, por ser para ello el Congreso autoridad incompetente; que, aún en la hipótesis de tener facultad y competencia, no debía sancionarla, porque tal sanción no sería conforme a las necesidades y votos de la nación, porque sería contrariar el juramento solemnemente prestado en los momentos de instalarse el augusto Congreso, y opuesta, finalmente, a los dictados de la razón.

Y, desarrollando sus ideas sobre las proposiciones antes establecidas, agregó: que la sanción de la libertad teológica de cultos, sería contraria al derecho natural, porque violaba el

---

(1) Los artículos 11, 12 y 13 no aparecen consignados en las actas originales, en que se discutió en particular el proyecto de Constitución, y lo propio ocurre con el artículo 63, y el inciso 7º del artículo 83, pero no puedo ser sino una omisión de secretaría el no haber hecho constar su aprobación en las mismas.



primero de sus tres principios, que enseña al hombre como su primer deber, dar culto a Dios, el mismo que no se da ni puede darse de otro modo que el que enseña la religión revelada como única y sola verdadera; que otra cualquiera sería desagradable e injuriosa al mismo Dios. Que, así como un deudor no paga su deuda con moneda falsa, ni hay acreedor que la reciba, ni se da por satisfecho con ella, así también ningún hombre debe ajar el tributo de la adoración que le debe a Dios, con un culto falso, sino con el único y solo verdadero; ni al mismo Dios como acreedor a nuestras adoraciones, le será grato recibirlas de otro culto que del católico, apostólico, romano, que era el solo y único verdadero. Que la sanción de la libertad teológica de cultos era contraria al símbolo de la fe católica, apostólica, romana, y de consiguiente, herética, declarada como tal por la Iglesia, y condenada y reprobada con censura; que, para demostrar esta verdad, bastaba citar textualmente uno de los artículos del símbolo de la misa, que uniformemente resuena en las sagradas solemnidades de nuestros templos: *Et una sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam*, enseñándonos en ella, como un punto de fe, que la verdadera Iglesia es una sola y santa, que estableció Jesucristo, que enseñaron y fundaron los apóstoles; culto único que agrada a Dios, único con que los hombres le pueden pagar el tributo de adoración que le es debido. Que, por consiguiente, no era admisible en un país católico, ni por su gobierno, el ejercicio y libertad de otros cultos, que no pueden ser sino falsos y desagradables a la divinidad.

Que, siendo la libertad de cultos meramente civil o política un punto de disciplina eclesiástica en los países católicos como el nuestro, subordinados a la cabeza visible de la iglesia, que es soberano Pontífice de Roma, y por consiguiente, de la exclusiva competencia de aquella suprema autoridad eclesiástica; claro era que las potestades temporales no podían legislar válidamente sobre esta materia, acerca de la cual carecían de competencia, lo que haría malas sus acciones; que lo único que podía legalmente corresponderles, era el representar sus necesidades ante la sede apostólica, y recabar de su suprema autoridad la reforma de algunos puntos de disciplina eclesiástica, cuando lo exija una grave necesidad que interese a la misma religión, a la Iglesia o al estado. Que en uno y otro caso de libertad de cultos, ya teológica, política o civil, eran explícitas y terminantes las disposiciones canónicas y pontificias, como lo acredita el santo concilio de Trento, en el proe-



mio de la sección 7ª, Cons. 7º, 8º, 14; la cuarta decretal de Benedicto XI, la bula de S. S. Inocencio X, que empieza: *Telo Domus Dei*; la de S. S. Pío VII que empieza: *Authorem fidei*, y otros textos más que citó del derecho canónico.

Que la sanción de la libertad política civil de cultos sería en la Confederación Argentina contraria a las necesidades y votos de casi todos los pueblos que la componen. Que una ojeada sobre nuestra antigua y reciente historia nos haría ver claramente que desde el descubrimiento y conquista de esta parte de la América por la nación española, la unidad religiosa del catolicismo había sido exclusiva e inalterablemente profesada en nuestros pueblos argentinos, a excepción de Buenos Aires, en que, de pocos años a esta parte, había permitido el culto protestante y no más. Que, sin fijarse en la época colonial, sobre la que podían ponerse algunos reparos, llamaba únicamente la atención del soberano Congreso a la época que había transcurrido desde nuestra emancipación política, esto es, desde que los pueblos argentinos entraron en el goce de sus libertades y derechos. Que se observase desde entonces que entre los opuestos sistemas políticos que tanto los habían agitado, dividiendo pueblo de pueblo, familia de familia, comprometiendo la paz privada y pública, y poniendo en acción y juego los funestos gérmenes de la discordia que encendieron más tarde una guerra civil, fratricida y desastrosa; que en medio de tantas vicisitudes y cambios de partido y gobernantes, por ninguno de ellos se había visto alterado el culto católico en ninguna de las provincias argentinas, a excepción de Buenos Aires, y esto, a instancia y solicitud de muchos protestantes ingleses establecidos allí. Que, a pesar de esto, los hijos de esa provincia en su mayoría habían conservado los mismos sentimientos religiosos y el esplendor del culto católico que habían recibido de sus padres. Estos hechos que debían respetarse, probaban de un modo inequívoco cuán avenidos estaban los pueblos argentinos con su única y sola religión, que habían entendido y conocido; bien que sólo ella puede llenar sus necesidades temporales y espirituales, que es la consecuencia lógica y legítima de la verdadera creencia que profesa; que estos han sido y son sus votos y a los que debía acomodarse la misma Constitución y el dictamen de los representantes del pueblo argentino, en virtud del juramento que solemnemente tenían prestado y cuyas palabras textuales eran las siguientes: "Juro emplear todos mis esfuerzos para dar a la nación la Constitución más conforme a sus necesidades y a





sus votos" y agregó: que de nada necesitaban tanto las provincias argentinas como de paz duradera y del progreso. Que aquélla se aseguraba con la unidad de sentimientos políticos y religiosos, y éste con la posesión de aquélla. Que estas eran las prominentes necesidades y los votos de la Confederación Argentina; que lejos de llenarlo la sanción de libertad de culto, los contradecía y estaba en directa oposición a ellos.

Que la libertad de cultos era, por otra parte, contrariada por la razón, porque ésta aconsejaba claramente a los legisladores, no sólo promeвер en obsequio de la sociedad para quien legislan, toda clase de bienes, sino procurar preservarla de toda clase de males; que la paz pública era uno de los mayores bienes sociales, su contraria, la guerra, una de las peores calamidades públicas. Que, así como una nación que no tiene sino un solo sentimiento, una opinión, un sistema político, conserva natural y fácilmente el sumo bien de la paz, así también un solo sentimiento religioso, un solo culto, uniformando las creencias, tiende favorablemente a afianzar a aquélla.

Que la libertad de cultos, dividiendo las opiniones y los sentimientos religiosos, podía hundirnos de nuevo en la espantosa anarquía de que habíamos salido, causada por la diversidad de opiniones y sistemas políticos que habían dividido desgraciadamente la República Argentina y ocasionado la discordia y guerra civil en sus pueblos.

Que la historia y la experiencia venían en apoyo de sus opiniones, e hizo una reseña histórica de las fatales consecuencias que siguieron al indiscreto establecimiento de la libertad de cultos en Polonia, Hungría, Francia y Alemania. Que el mismo Rousseau, partidario exaltado de la libertad de cultos, al ver sus consecuencias llegó a decir: "Imposible es que vivan en paz personas que en materia de cultos y de religión piensan diversamente, y esto no lo conseguirán ni los ángeles". Que otro filósofo, Tomás Moro, decía: "Que era más feliz toda aquella nación que profesaba un solo culto".

Que, por último, la multiplicidad de cultos conducía ordinariamente al indiferentismo, luego al desprecio y apostasía de algunos o de todos ellos, y de aquí, por último, termina el ateísmo. Que, si la libertad de cultos de que hablaba el inciso, era teología, por el mismo hecho quedaba sancionado el indiferentismo, autorizada la apostasía del culto católico, apostólico, romano, absueltos los católicos romanos de la obediencia y respeto a las leyes y autoridades eclesiásticas, y disuelta la sociedad del cristianismo de la Confederación Ar-



gentina. Que todo católico nacional a nacionalizado quedaba libre para profesar el culto que quisiese y garantido para ello por la ley constitucional, pudiendo decir un hijo a sus padres católicos: “Yo no quiero seguir la religión que profesáis y me enseñastéis, quiero ser judío, mahometano o protestante, en uso de la libertad que me conceden las leyes patrias”. Que se juzgase de cuán profundo pesar sería para su padres tal declaración. Que, finalmente, no había razón para mezclar las aguas puras y saludables con las infectas y corrompidas, para beber de ellas simultáneamente, como no la había para sancionar la simultánea existencia de falsos cultos que proceden de un manantial de error y corrupción, cual es el hombre fallible sujeto al desorden de sus pasiones y extravíos, con el único y verdadero culto que trae su origen de la fuente pura de la revelación y la infalibilidad divina.

El señor Seguí obtuvo la palabra, y dijo: que había oído con sorpresa al diputado preopinante establecer que la libertad de cultos era contraria al derecho natural; que hubiera sido mayor su extrañeza si ni hubiese recordado que un tiempo fué conducido el célebre Galileo a los calabozos de la Inquisición por haber enseñado el movimiento de la tierra al rededor del sol, contra la aparente oposición de algunos textos sagrados, que después han conciliado perfectamente la razón y las investigaciones astronómicas, en defensa del ilustre sabio. Que no podía concebir cómo se llamase opuesto al derecho natural, lo que el preopinante hacía depender de un permiso del papa. Que debía distinguirse entre el dogma y el culto; que con respecto al primero, era incontestable la competencia exclusiva de la Iglesia. Que con respecto al culto, habían admitido su libertad las naciones más civilizadas del mundo lo que hubiera sido imposible si hubiese en ello infracción del derecho natural. Que no admitía las distinciones entre el derecho y el poder, hablando moralmente, porque era una misma cosa, porque la fuerza o potencia física no producía derecho, por lo que la conveniencia era, a su juicio, lá única cuestión. Que en Buenos Aires no había habido fusión de religiones, y que la tolerancia de los cultos que allí se había establecido, no había causado una sola defección de católicos, hecho que acaba de confesar espontáneamente el diputado preopinante, y que justificaba más el artículo en discusión, que cuantas observaciones había hecho en contra. Que era indispensable la tolerancia para el progreso del país, por la inmigración virtuosa que traería a nuestro suelo. Y



que no debía temerse, sin hacer injuria a nuestra santa religión, la competencia que se le ofrecería con las demás sectas disidentes; y que, además, serín una ocasión favorable para que los sacerdotes católicos ejercitasen su celo en la predicación evangélica, obteniendo para el catolicismo los mismos triunfos que éste obtiene en otras partes del mundo, aprovechando, además, del ejemplo que pudieran recibir de los ministros protestantes para la mejora de su moral y costumbres. Que en esta virtud, votaría por el artículo tal cual estaba redactado, porque la Constitución garantiza a aquellos su conciencia y su culto.

El señor Gorostiaga dijo: que la comisión no había creído que el Congreso fuese un concilio canónico, ni que los diputados viniesen a decidir puntos dogmáticos. Que en el artículo en cuestión sólo se hablaba de la libertad política para ejercer otros cultos; que era de la competencia del Congreso, en cuyo sentido había sancionado el artículo 2º de esta Constitución, que el Congreso tiene derecho y obligación de establecerlo, y que la comisión no había hecho otra cosa que consignarlo; que así estaba establecido en los tratados con Inglaterra, los que comprenden a todos sus habitantes y a todos los puntos del territorio; que los que se han hecho ciudadanos en virtud de ese tratado y los que hubiesen de obtener carta de ciudadanía, debían ser protegidos en el ejercicio de su culto; que en los casos de apostasía de un hijo de familia, conforme lo había propuesto el señor diputado por Catamarca, bastaba la autoridad doméstica del padre de familia para reprimirla. Que con respecto a la libertad de cultos y la de escribir por la prensa, sería reglamentado su ejercicio por una ley del Congreso, según la expresión textual del artículo en discusión.

El señor Lavaisse expresó: que votaría también por la libertad de cultos, porque la creía un precepto de la caridad evangélica en que está contenida la hospitalidad que debemos a nuestros prójimos; que al solicitar y sostener estas ideas como diputado de la Nación, no olvidaba su carácter ni las distintas aunque serias obligaciones que le imponía. Que, como diputado, debía promover para la nación las fuentes de su prosperidad, y que la inmigración de extranjeros, aunque de cultos disidentes, era, a su juicio, una de las principales; que como sacerdote, les predicaría después el Evangelio y a verdad de su religión, con calor y conciencia, como acostumbraba hacerlo en desempeño de sus obligaciones ministeriales.



Que el catolicismo nada tenía que temer de las otras religiones, ni tampoco sería poderosamente defendido con las armas de la censura, desgraciadamente tan gastadas al presente. Que en atención a estas razones, él votaría por el artículo en cuestión.

El señor Colodrero pidió la palabra, y dijo: que, aunque pertenecía a la comisión redactora del proyecto de constitución, no había estado conforme con el inciso "libertad de cultos", y que ahora lo repetía nuevamente, para que su oposición quedase consignada en el acta de esta sesión. Que la tolerancia de cultos podía considerarse de dos modos: teológica y civil. Que la primera era, por su naturaleza, herética, como diametralmente opuesta a la fe y doctrina de la iglesia católica, siempre que en este sentido estuviese concebido el inciso del artículo en discusión; y que la segunda, aunque no era herética, por ser sólo opuesta a la disciplina de la iglesia, no por esto dejaba de ser peligrosa y aún sospechosa de herejía. En seguida pasó a fundar su oposición, en varias razones: 1<sup>ª</sup>. Que el Congreso era el órgano por donde los pueblos manifestaban su voluntad; que él conocía el modo de pensar de ellos sobre la libertad de cultos, que en todos había una fuerte oposición. Que la prueba de esta verdad era que, mientras la provincia de Buenos Aires aceptaba el tratado de la Gran Bretaña, las demás lo rechazaban, habiendo permanecido aislado por espacio de veinticinco años, sin avanzar una cuarta parte de su recinto. Que esta cuestión, en las circunstancias actuales, era muy delicada, exponiéndose a que por su decisión fracasase la Constitución; que esta era obra del tiempo, para cuando los pueblos estuviesen suficientemente ilustrados, capaces de comprender sus verdaderos intereses, y que, siempre que esto no fuese así, se consultase a las legislaturas provinciales y que estaba seguro se negarían, a excepción de Buenos Aires. 2<sup>ª</sup>. Que no prestaría su voto al inciso sobre libertad de cultos, porque era contrario a la disciplina eclesiástica y como tal no se hallaba autorizado para hacer reformas, siendo una atribución esencial de la silla apostólica y de los concilios. Que era verdad que algunos príncipes católicos (según opinión de autores), podían adoptar este principio en caso de una necesidad extrema, pero siempre con anuencia de la Santa Sede, que de lo contrario dicho principio sería considerado como herético, según lo dice terminantemente S. S. Benedicto XIV contra el Padre Laborde y S. S. Pío VI en su bula *Authorem fidei*. Que por estos antecedentes, ni una ni otra tolerancia



debía adoptarse en la Confederación Argentina, que por un don del cielo se componía de pueblos católicos y no se hallaban en la fatal necesidad de llamar cultos extraños, ni permitirlos, para promover los bienes de la paz pública, conforme a la religión; que sería el mejor medio de perderlos, como lo había manifestado la experiencia en la Germania, Hungría, Polonia, Francia y otros estados, en los que después de admitidas las sectas heréticas apostataron ciudades y provincias, envolviéndose en guerras sangrientas, de que estuvieron exentas España, Italia, Portugal, Baviera y otros reinos que permanecieron fieles a su creencia. Que no desconocía las razones invocadas por los partidarios de la libertad de cultos, cifradas en la necesidad de poblaciones industriosas, que aumenten nuestros capitales, artes, ciencias, etc.; que esta necesidad la creía más bien consultada por la inmigración de extranjeros católicos, adornados de las mismas buenas cualidades que se requieren, y que no las creían exclusivas de los protestantes. Que si éstos inmigrasen al país serían recibidos fraternalmente, se les daría seguridad para sus personas y propiedades, quedando de este modo consultado el bien general; y resumió lo dicho, en las palabras siguientes; que, siendo la tolerancia civil de cultos, contraria a la voluntad general de las provincias, a la disciplina de la Iglesia, y peligrosa a la tranquilidad espiritual y temporal de los habitantes del país, no creía fuese lícito votar a favor del artículo, si al inciso no se le agregase esta adición: "previo el concordato con la santa sede apostólica romana".

El señor Gutiérrez expone: que, como miembro de la comisión, no ha podido creer que la discusión tomase el giro que se le daba. Que extraña que se arguya de incompetente a la autoridad del Congreso, cuando su deber primordial era el de declarar y reglamentar los derechos y garantías que han de hacer libres y felices a los hombres que habiten nuestro suelo, siendo inseparable de este objeto el respeto que se debe a sus creencias; que al gobierno temporal sólo le incumbía promover las conveniencias sociales de este mundo, y respecto al otro, garantizar la libertad de las conciencias y creencias de cada uno. Que, a más de estas consideraciones, no debía olvidarse un hecho que pertenecía a nuestro derecho público, y es el tratado celebrado con la Inglaterra, que el Gobierno nacional de aquel tiempo firmó como base esencial de su existencia, contrayendo compromisos que le hicieran respetar; que, celebrado por el gobierno nacional, obligaba a toda



la nación y no podía eludirlo so pena de correr el riesgo de ser compelido a cumplirlo. Que por esto no se podía, sin faltar al derecho público, despojar a nadie de la libertad que el artículo 14 confiere a los habitantes de la Confederación. Que, ¿cómo podía llamarse al extranjero a nuestro suelo, para negarle el derecho de adorar a su Dios como lo adoraba en el hogar de sus padres? Que ocurrir a la silla apostólica sería desconocer la autoridad de la nación y su competencia; consultar a las provincias, sería necesario, por nuestros pactos, por que la experiencia había desacreditado otras veces este expediente; y concluyó demostrando los intereses materiales que desarrollarían bien pronto en el país la inmigración y la tolerancia, e insistiendo, por último, en la adopción del artículo tal como estaba redactado.

El señor Seguí obtuvo la palabra, para pedir se diese el punto por suficientemente discutido; y en el momento mismo que fué apoyado, varios señores diputados pidieron la palabra (los señores Ferré, Leiva y Pérez). El señor presidente deseó saber qué número de diputados habían apoyado la moción del señor Seguí, y resultaron once.

El señor Leiva hizo presente que, habiendo pedido la palabra varios señores por la primera vez en la presente discusión, no podía cerrarse ésta sin que fuesen escuchados, mucho menos en un asunto de tanta gravedad, por lo que creía no debía hacerse lugar a la anterior moción.

El señor Seguí expuso: que cuando la hizo, ningún señor diputado había manifestado deseos de ser escuchado por el Congreso. El señor Gorostiaga repite esto mismo, y añade que desde que haya algunos otros señores que quieran hacer uso de la palabra, el retiraba el apoyo que había dado a la moción del señor Seguí.

Obtuvo la palabra el señor Leiva, y dijo: que hacía uso de ella como miembro de la comisión de negocios constitucionales, para oponerse al inciso que se discutía sobre la libertad de cultos y para pedir su supresión. Que se adhería a las observaciones hechas por los señores diputados de Catamarca y de Corrientes, que le habían precedido en la oposición al mismo inciso; que no desconocía que la libertad de cultos protegía el aumento de la población, de que tanto necesitaba la República, porque abría una ancha fuente a la inmigración extranjera, que trae la civilización, el fomento de la agricultura y de las artes, etc., pero que la supresión del inciso no privaba al país de su prosperidad y engrande-



cimiento, pues vendrían inmigrantes católicos, que las autoridades nacionales y provinciales solicitarían con iguales ventajas físicas e infinitamente mejores en el orden moral. Que no era el exclusivismo religioso lo que mantenía desiertas e incultas las campañas del suelo argentino, sino la falta de garantías sociales, que eran el verdadero estímulo para el aumento de la población. Que, si al aliciente que ofrece al extranjero la hermosura de nuestro clima, la fertilidad y riqueza de nuestro país, se agregase el de sólidas garantías sociales para la persona y la propiedad, la República Argentina tendría tanta inmigración cuanta quisiera admitir. Que en veintisiete años de libertad de cultos, no se había presentado al gobierno de Buenos Aires ningún solicitante para traer inmigrantes a su campaña, ni había allí una sola colonia establecida. Que, entre tanto, otros estados inmediatos al nuestro, sin admitir otro culto que el católico, apostólico, romano, habían florecido con asombrosa rapidez. Que la libertad de cultos traía, a su juicio, graves inconvenientes, y citó el ejemplo de Nueva Granada; que influiría poderosamente en la no aceptación de la Constitución por los pueblos y vendría a ser el origen de nuevas guerras y calamidades.

Adujo algunos ejemplos para fundar su voto en contra del inciso, y terminó pidiendo su supresión.

El señor Gutiérrez, miembro informante de la comisión, contestó: que el hecho aducido sobre la Nueva Granada, nada tenía de común en nuestro caso; que allí se habían propuesto reformas muy peligrosas, colocándose en la pendiente resbaladiza del comunismo y haciendo del matrimonio un nuevo contrato civil.

Que, por lo demás, no había negado Su Santidad a la Nueva Granada, lo que concede a la nación brasilera y otros países tolerantes, en buenas relaciones con la santa sede. Que Rosas había tratado con más audacia, al desconocer su autoridad; que si no había habido anatemas para ese tirano, habían debido ser otras las causas que arrastraron a la santa sede a proceder como lo había hecho contra la Nueva Granada.

Pidió entonces la palabra el señor Ferré, y dijo: que lo hacía para manifestar su oposición al artículo que se discutía, no tanto por el inciso "profesar libremente su culto", mirado aisladamente, cuanto por la generalidad que el mismo artículo le daba; pues desde que todos los habitantes de la República tuviesen, sin excepción alguna, este derecho, claro era que el presidente de la Confederación y sus demás auto-



ridades nacionales y provinciales podrían ser judíos, mahometanos o de cualquier otra secta. Que él encontraba en esto dificultades, inconvenientes y aun peligros.

Que por uno de los artículos del proyecto de Constitución se declaraba atribución del presidente de la República, el patronato y sostén del culto católico. Que ¿cómo podía esperarse que un presidente de secta judía, por ejemplo, protegiera las iglesias católicas, siendo enemigo de este culto?

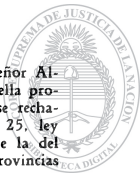
Que cuando, por algún acontecimiento feliz de la República, tuviesen los argentinos que ir al templo a dar gracias a Dios por medio de un Te-Deum, ¿cómo era posible que se les acompañasen sus magistrados, si eran idólatras? Que, por otra parte, con la sanción de este inciso se corría el peligro de que, resentidos los pueblos con estos escándalos, facilitasen el levantamiento de un caudillo que inscribiese en su pendón el lema: "Religión o muerte", para arrastrar las masas, derrocar gobernantes y echar por tierra la misma Constitución del estado.

Que esto lo habíamos visto ya, y que con su oposición al artículo trataba de evitar en adelante iguales males.

El señor Pérez (Fray Manuel) expuso en seguida: que votaría en contra del artículo en cuestión, por las razones que habían aducido los señores diputados que le habían precedido en la oposición, y a las que agregaría breves observaciones. Que el asunto de religión era, en su concepto del resorte especial de cada provincia; que los derechos de cada una de ellas no podían ejercerse por los diputados, sino en la parte que les hubiesen sido conferidos; que el que había recibido él, era el indispensable para formar la Constitución del país y para esto creía innecesaria la libertad de cultos que tendía, únicamente a promover un progreso ulterior, lo que no era del resorte del Congreso constituyente, sino de las futuras cámaras legislativas.

Que, por otra parte, siendo una medida calculada para el porvenir, no estaba en consonancia con las ideas y con los sentimientos actuales de los pueblos, lo que la hacía impolítica, pues ocasionaría una alarma general, precisamente sobre el punto en que se habían mostrado más susceptibles las provincias en otras ocasiones, en que, como había dicho un señor diputado, se levantaron banderas de rebelión que dieron por resultado una prologanda guerra civil que asoló nuestro suelo. Que al presente, en la provincia de Tucumán que tenía el honor de representar, había ocasionado una alarma





la sola aparición del proyecto de Constitución del señor Alberdi lo que hizo se dirigiese a los diputados de aquella provincia la ley sancionada en ella y vigente, en que se rechazaba el tratado celebrado con la Inglaterra el año 25. ley que tenía el derecho de establecer, a consecuencia de la del Congreso de aquel tiempo, que autorizaba a las provincias para aceptar o no las que emanasen de él.

Que por esta razón juzgaba inoportuna y acaso perjudicial la anticipada sanción de esta medida. Que era erróneo juzgar de la generalidad de los pueblos, por lo que eran diez o veinte hombres de las ciudades; que si éstos tienen simpatías por los extranjeros, las masas en lo general no la tenían y necesitan antes reconciliarse con este nombre a que tienen aversión, sin duda, por el poco conocimiento que tienen de ellos, diferencia de carácter, hábitos, etc. Que el tiempo, la experiencia y ventajas que más tarde reportase el país, de su moral, su industria y demás calidades que les honran, sabrían disipar estas prevenciones; que entonces sería llegado el caso de que por la afluencia de extranjeros, fuese necesario acordarles las prerrogativas de que habla el artículo; que entonces lo harían las provincias, invistiendo a sus diputados con facultades de que hoy carecen. Que en lo político como en lo físico, todo era sucesivo y gradual, y que al dar la Constitución no se debía olvidar esta regla; querer arreglarlo todo, aún lo que es del dominio del porvenir, y fijar lo que de suyo es contingente, sería falsear la Constitución misma que debe ser fija e inmutable.

Que arreglarlo todo en la Constitución presente, es exigir que los sucesos y circunstancias que sobrevengan se arreglen a sus disposiciones; y siendo esto aventurado cuando no imposible, esa Constitución estaría siempre falseada o sucumbiría. Que, a su juicio, debía limitarse a lo que indica el significado de la misma palabra que la expresa, "ley fundamental", esto es, el cimiento sobre que ha de levantarse el edificio de la organización nacional. Que establecer los principios políticos que han de regir al país, las relaciones de las provincias entre sí, las de éstas con los poderes públicos que se creen, era, a su modo de ver, todo lo que debía trazar la Constitución de que se trata. Que sobre este cimiento vendrían las legislaturas ulteriores del país a establecer lo que el tiempo, la experiencia y las circunstancias mostrasen convenirles más. Que apoyado en las razones aducidas, votaría en contra del artículo.



El señor Gorostiaga, dijo: que se habían expuesto varias razones, mirando el asunto bajo dos aspectos: teológico y político. Que era bajo este último que debía considerarse la cuestión, y contestando al diputado preopinante, agregó: que creía bastante recordar el tratado de la Gran Bretaña que estaba vigente y era obligatorio a toda la República, sin que ninguna provincia pudiera negarse a su cumplimiento ni ante el poder de la Inglaterra, ni ante el poder de la razón por ser un tratado ratificado por el jefe supremo nacional; que la ley de 23 de enero de mil ochocientos veinticinco, que se había invocado, sólo daba a las provincias el derecho de aceptar la Constitución, pero no las demás leyes y actos del Congreso; por lo que pedía la aceptación del artículo en discusión.

El señor Colodrero niega que deba darse importancia a este tratado de fecha reciente, en comparación con el concordato celebrado con la santa sede mucho siglos antes, en tiempo del régimen colonial. Que con respecto a la fuerza extranjera, Rosas nos había enseñado a perderle el miedo. Que el papa no tenía cañones, pero sí censuras, a las que él respetaba más.

El señor Gorostiaga extraña que no se quiera conocer por el diputado preopinante la validez del tratado con la Inglaterra, so pretexto de un concordato que no existe para la República Argentina desde su emancipación, pues la España, reasumiendo desde aquel tiempo sus derechos y deberes respecto a la santa sede, ha dejado a la que era su colonia, libre para negociar las grandes prerrogativas que fueron concedidas a aquélla por la sede apostólica, y establecer con ésta relaciones, celebrar concordatos, etc. Que no había tampoco estipulación ninguna contra la libertad de cultos, en el concordato con la metrópoli, por no existir entonces más que un solo culto, y concluyó su discurso haciendo una reseña sobre nuestras actuales relaciones con la santa sede.

Obtuvo la palabra el señor Zapata, y dijo: que había pensado no tomarla en la discusión del artículo, porque siendo éste tan constitucional, estando éste calculado por la comisión sólo en la mira del progreso del país y el establecimiento de las primeras garantías sociales, y siendo el inciso que había ocasionado dificultades, enteramente conforme a un tratado que es hoy de la nación, creía no ofreciese resistencia alguna su sanción; pero que se había proferido en el curso del debate la herejía política de poner en duda las fa-



cultades de este Congreso para estatuir en un punto tan peculiar en el derecho público, cual es la libertad en el ejercicio del culto de cada uno; y quería se registrase su nombre en esta sesión, protestando expresamente contra semejante idea, por el honor mismo del Congreso y por el crédito de cultura de nuestro país. Que no podía tampoco admitir la duda acerca de la insuficiencia de los poderes de los diputados sobre esta materia. Que ellos tenían por antecedente el acuerdo de San Nicolás, en que se previene que los diputados no traigan instrucciones ni limitaciones de ninguna clase, fiando a su conciencia, saber y patriotismo al sancionar con su voto lo que creyesen más justo y conveniente.

Que con la mano puesta en su conciencia, votaría por el artículo, así como había firmado el proyecto como miembro de la comisión.

A petición de un señor diputado, se dió el punto por suficientemente discutido, y se procedió a votar, resultando aprobado el artículo por una mayoría de trece votos contra cinco.

El señor diputado Seguí solicitó permiso del soberano Congreso para ausentarse por veinticuatro horas, y le fué concedido por unanimidad. Con esto se levantó la sesión a las once y media de la noche.

*Discusión y aprobación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.* — El 25 de Abril, el señor presidente declaró abierta la sesión, pidiendo en seguida al soberano Congreso autorización para nombrar uno o dos escribientes que auxiliasen los trabajos de secretaría por hallarse ésta recargada, y le fué concedida por unanimidad.

Se pasó a la lectura del artículo 15 del proyecto de Constitución que hacía la orden del día. Se puso a discusión, y no habiendo quién tomase la palabra, se procedió a votar, resultando aprobado por afirmativa general.

Puesto a discusión el artículo 16, el señor Zenteno dijo: que él no estaba de acuerdo en que se suprimiesen los fueros y mucho menos que se hallase comprendido en ellos el eclesiástico, que no procedía de autoridades temporales sino que reconoce su origen divino; que el artículo, pues, estaba en oposición a los sagrados cánones y a lo que declara y ter-



minantemente disponían los concilios de Trento y de Nicea. Que el primero, en la sección 25, capítulo 20 de reforma, declara ser de institución de derecho divino, como lo es también de derecho canónico, la inmunidad o fuero eclesiástico, por las palabras siguientes: "No permitiendo (al hablar de las supremas autoridades), que sus oficiales y magistrados inferiores violen bajo ningún motivo la inmunidad de la Iglesia ni de las personas eclesiásticas establecidas por disposición divina y por los sagrados cánones; sino que así aquéllos como sus príncipes, presten la debida observancia a las constituciones de los soberanos pontífices y concilios; decreta en consecuencia y manda que todos deben observar exactamente los sagrados cánones, y todos los concilios generales, así como también las demás consituticones apostólicas hechas a favor de las personas y libertad eclesiástica, etc."

Que el primer concilio general de Nicea dice acerca de lo mismo: "No es por las leyes públicas, no por las potestades del siglo, sino por los pontífices y sacerdotes, que quiso el Dios Omnipotente de la religión cristiana, que sean convenidos y juzgados los clérigos y sacerdotes."

Finalmente, que, apoyado en el tenor de los textos que acababa de citar, él votaría en contra del artículo en cuestión.

El señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, dijo: que se hablaba en ese artículo, de los fueros personales, no de los reales o de causa, que a éstos pertenecía el eclesiástico. Que en el sistema republicano representativo no había fueros personales, pues eran todos iguales ante la ley. Que en Buenos Aires, desde 1826 <sup>(1)</sup>, se hallaban abolidos, así como en otras naciones de América, y que sentía descender a explicaciones sobre materias tan claras.

El señor Lavaisse agregó: que el señor diputado por Catamarca no había interpretado bien las disposiciones del concilio; que, ¿cómo podía ser el fuero eclesiástico de origen divino, cuando podía ser allanado por una autoridad cualquiera eclesiástica, y después de esto, arrastrado ante un juez un sacerdote criminal? Que él votaría por el artículo, porque estaba cierto de que la religión no reprobaba estas máximas liberales, pues nada era más liberal que el Evangelio.

Pidió la palabra el señor Zavalía, y después de varias observaciones en apoyo de lo aducido por el miembro infor-

---

(1) Desde 1823 debió haber dicho.



formante, dijo: que, según acreditados canonistas, la Iglesia era una república completa, soberana, independiente; que giraba dentro de su órbita como nuestros estados temporales dentro de la suya. Que, así como el presente Congreso no podría dictar una ley que escudase al presidente de la República de la censura que mereciese un crimen cometido por él contra la Iglesia, así ésta no podía escudar tampoco a un sacerdote que cometa un crimen contra el estado o la sociedad. Que esto estaba perfectamente explicado con la palabra del Salvador: *Dad al César lo que el del César y a Dios lo que es de Dios.*

El señor Ferré dijo: que estaría conforme con el artículo en discusión, si entre los fueros suprimidos por él se exceptuase el eclesiástico.

Después de un breve debate entre los señores Zenteno y Gorostiaga, miembro informante de la comisión, se dió el punto por suficientemente discutido; se votó y aprobó por mayoría el artículo en cuestión.

Puesto a discusión el artículo diecisiete, el señor Zavalía pidió que en el inciso sobre confiscación de bienes, se dijese: "confiscación general", para que no se crea que se hablaba de comisos, multas y embargos, que eran también confiscaciones, y lícitas, cuando se suponen como penas con arreglo a la ley.

El señor Gorostiaga dió, como miembro informante de la comisión, algunas explicaciones reducidas a probar que, cuando las confiscaciones son particulares, tienen esos nombres especiales, como multas, embargos, comisos, etc., y que se entiende por general la confiscación, siempre que no lleva algunos de esos calificativos.

Puesto a votación el artículo, resultó aprobado por unanimidad, lo mismo que el dieciocho.

Puesto a votación el artículo diecinueve, expresó el señor Ferré que él votaría conforme con el artículo, con una ligera modificación, y era: que, en vez de decir "al orden público", se pusiera "a la moral y al orden público".

El señor Zenteno y varios señores diputados apoyaron la modificación propuesta, y el artículo fué aprobado con ella por unanimidad.

Se procedió a la lectura del artículo veinte.

El señor Gorostiaga, miembro informante, pidió la palabra para explicar el inciso en que se disponía que los extranjeros podían casarse y testar, y dijo: que se entendiese



que los extranjeros podían usar de esta facultad conforme a la ley, proponiendo se expresase esa condición en el artículo.

Apoyada generalmente la modificación propuesta, se redactó el inciso en estos términos: "testar y casarse conforme a las leyes". Hecho esto, se votó en esta forma el artículo y resultó aprobado por mayoría de votos.

En el artículo veintiuno, el señor Zenteno pidió que, en vez de diez años, durante los que se eximía a los extranjeros de armarse en defensa del estado, se fijaran sólo cinco, porque, puesto que gozaban de las ventajas, era natural soportasen las cargas del estado como los hijos del país.

El señor Gorostiaga contestó: que las ventajas que la Constitución que se decreta concede al extranjero, son las mismas que gozan en todo país civilizado; que en cuanto a las cargas, el extranjero no presta en parte alguna servicios militares, y en la Confederación está obligado por esta Constitución a prestarlos después de diez años. Sin más observaciones fué puesto a votación, y aprobado por unanimidad el artículo veintiuno.

Se leyó el artículo veintidós, y, después de una ligera modificación propuesta por el señor Zenteno y que no fué aceptada se votó y aprobó por mayoría de sufragios.

Los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fueron leídos, puestos a discusión y aprobados unánimemente.

Leído el artículo veintinueve, hizo moción el señor Huergo para que fuese votado por aclamación. Habiendo sido suficientemente apoyada su indicación, se sujetó a votación y resultó aprobado por mayoría de sufragios.

El señor Zavalía, muy conforme con la mayor parte del artículo, expresó que votaría por él y lo aclamaría, si se le quitaba el último inciso, fundándose en que los únicos que podían conceder las facultades extraordinarias, otorgar sumisiones e incurrir en la pena de los infames traidores a la patria, eran los diputados del Congreso o de la legislatura provincial, y que éstos, por el artículo cincuenta y uno del proyecto, eran inviolables, al desempeño de su mandato, lo que era una manifiesta contradicción.

El señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, observó: que la inviolabilidad de los representantes tenía límites, y no los autorizaba ésta a cometer crímenes; que por el artículo cuarenta y uno del proyecto de Constitución, el presidente, los ministros y los miembros de ambas cámaras,



podían ser acusados y penados por delitos de traición, violación de la Carta, etc.; y que en esta violación incurría el diputado o diputados que acordasen facultades extraordinarias y sumisiones o supremacías.

El señor Zapata dijo, en apoyo de estas observaciones, que los diputados eran inviolables desempeñando sus funciones de legisladores, en tanto que no se apartasen de las consideraciones de su mandato; que la norma de sus procedimientos era la carta constitucional, y que no podían echarla por tierra, destruyendo sus bases fundamentales, para entregar maniatados a los pueblos que les envían a garantizar sus derechos y a afianzar sus libertades.

Después de algunas observaciones más, de parte del miembro informante de la comisión e insistencia del señor Zavalía, en la supresión que propuso, se dió el punto por suficientemente discutido, se votó, aprobó y aclamó por mayoría el artículo en cuestión.

Se leyó el artículo treinta, y puesto a votación resultó aprobado por afirmativa general.

Leído el artículo treinta y uno, y puesto a discusión, el señor Ferré dijo: que él estaría conforme con su redacción si a la palabra *tratados* se acompañaba la de *legales*, es decir, conforme a las leyes; porque podía citar un tratado que no lo había sido.

El señor Zavalía contestó: que los tratados ni merecían este nombre. No habiendo quien tomase la palabra, se dió el punto por suficientemente discutido, y se procedió a votar, resultando aprobado por mayoría el artículo en cuestión, con lo que se levantó la sesión a las once de la noche, fijándose como orden del día para la siguiente la continuación del mismo asunto.

*Discusión y aprobación de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.* — El 26 de Abril, el señor presidente declaró abierta la sesión. Se dió cuenta en seguida de los asuntos entrados en secretaría, a saber: las credenciales del señor diputado electo d ela Provincia de San Luis, don Juan Llerena, y una nota del señor diputado por la provincia de Tucumán, señor Manuel Pérez, avisando al señor presidente su retiro del seno del Congreso. El señor presidente dispuso pasasen aquellos a la comisión respectiva.



Y en cuanto a la nota del señor Pérez, ordenó se archivase, en razón de haber un precedente en la que con igual motivo pasó el diputado por la provincia de San Luis, y sobre la que recayó igual resolución del soberano Congreso.

Pidió la palabra el señor Gorostiaga, y dijo: que la nota del señor Pérez merecía una consideración especial, pues estando el Congreso ocupado de llenar el primero y quizá el único objeto de su mandato, cual era sancionar la Constitución, no era posible dejar que un miembro de su seno se retirase, sin que otro diputado venga a llenar el vacío que deja. Que en esta virtud, era de opinión se pasase la nota del señor Pérez, a una comisión informante.

El señor presidente sujetó a votación la proposición siguiente: "Si la nota del señor diputado por Tucumán pasaría o no a una comisión encargada de informar sobre ella". Y resultando aprobada por mayoría, se procedió al nombramiento de sus miembros, que resultaron ser los señores Godoy, Campillo y Colodrero.

El señor Leiva pidió entonces se ordenase la lectura de un proyecto de adición que había introducido en secretaría concebido en los términos siguientes:

Art. 32. — Para obtener empleo alguno civil en la Confederación Argentina, se necesita que el individuo profese y ejerza el culto católico, apostólico, romano.

Apoyada esta moción por los señores Ferré y Zenteno, el señor Leiva, dijo: que eran tan claras y manifiestas las razones en que se fundaba su proyecto, que creía no necesitaba aducirlas para que el soberano Congreso acogiera el artículo, como indispensable en el cuerpo de la Constitución.

El señor Gorostiaga pide se guarde la unidad del debate y reclama del señor Presidente el cumplimiento del reglamento.

El señor Presidente observó: que no estando abierta aún la discusión sobre ningún artículo del proyecto de Constitución, y presentado este como artículo adicional a la parte sancionada en la sesión anterior, creía debía de dársele acogida, sin que se rompiese por esto la unidad de un debate, que no había principiado.

El señor Zapata opinó por que el proyecto presentado pasase a la comisión de negocios constitucionales, para que informe sobre él. Habiéndose el señor Leiva conformado con ésto, y quedando así resuelto, pasó a fundar su proyecto, y





dijo: Que en el artículo 2º, del proyecto de Constitución no se acogió la modificación propuesta por algunos señores diputados que pedían se dijese: "El gobierno federal profesa y sostiene" en vez de esta sola última palabra; que después se había sancionado sin alteración alguna el artículo 14 en que se declaraba que todos los habitantes de la Confederación pudiesen ejercer libremente su culto, y que todos los extranjeros de cualquiera creencia pudiesen nacionalizarse con residencia de dos años y aún menos; que después de tantas concesiones en punto a religión, era necesario, para satisfacer a los pueblos, y para hacer aceptable la Constitución, que se exigiese siquiera, que los empleados civiles fuesen católicos, apostólicos, romanos. Que esta condición debía requerirse tanto con los empleados superiores, como en los subalternos, y aún con más razón en éstos. Porque un comisario de campaña, por ejemplo, un juez de paz, autoridad inmediatamente encargada del mantenimiento del culto en la pequeña sociedad que tiene bajo su jurisdicción, no puede, si no profesa la religión católica, prestarle la protección debida, ni celar al párroco en el cumplimiento de sus deberes, ni a los fieles en el cumplimiento de los suyos, desapareciendo de este modo, bien pronto, la religión y las costumbres. Después de estas y otras observaciones sobre el mencionado proyecto de adición, se hizo la lectura del artículo 32 del proyecto de Constitución, se puso en seguida a discusión, y, no habiéndose observado nada sobre él, se procedió a votar, y resultó aprobado por mayoría.

Se ordenó la lectura del artículo 33. Después de una ligera modificación que propuso el señor Zenteno en la redacción del artículo, que no fué aceptada, y sobre lo que se le dieron explicaciones que juzgó satisfactorias, se votó y aprobó el artículo por unanimidad. Puesto a discusión el artículo 34, el señor Presidente dijo: que, habiendo notado que a la provincia de Salta se le daban por este artículo solo tres diputados, creía de su deber manifestar que esa provincia encerraba ochenta mil almas.

El señor Zavallía, aseguró que la provincia de Tucumán contenía también ochenta mil habitantes, y que, si él se había conformado con el número de diputados que se le habían designado por el artículo en cuestión, era sólo por no embazarar con sus reclamos la pronta sanción de la carta; pero que, si el soberano Congreso hacía lugar a algunos reclamos de



este orden, él interpondría los suyos respecto a la provincia que representaba, por creerlo de estricta justicia.

El señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, explicó que ésta, en la designación del número de diputados por cada provincia, había creído conveniente sujetarse al que se fijó por el Congreso de 1826, por no haber un censo que suministrase datos exactos sobre la respectiva población de las provincias, y en el interés de no proceder tampoco arbitrariamente. Que el aumento hecho en favor de algunas provincias, era porque se había reconocido en ellas un aumento notorio de población a datar de aquel tiempo.

El señor Lavaisse pidió la palabra para observar que en el Congreso del año 26, la provincia de Salta con la de Jujuy fueron representadas con tres diputados y hoy lo serían con cinco, por el mencionado proyecto de Constitución. Después de estas observaciones, el artículo 34 fué aprobado por mayoría. El 35 por unanimidad.

Hecha la lectura del 36, pidió la palabra el señor Huergo, y dijo: que él no estaba conforme con el último inciso del artículo en cuestión, sobre que los diputados al Congreso, para ser electos por una provincia, debiesen residir en ella el tiempo de su elección. Que después de los sacudimientos políticos que habían dispersado a los argentinos, por todo el continente americano, no era posible aceptasen la condición de venir hasta la provincia en que deber ser electos, para formar su candidatura y hacer como en Europa su profesión de fe. Que si estos puestos ofrecen allí halagos, en nuestros pueblos sólo ofrecen cargas; se aceptan, mas no se solicitan. Que la sanción del artículo tal como estaba concebido excluía a la culta emigración de Chile y privaba al país del auxilio de sus luces. Que muchos miembros del Congreso, en cuyo recinto hablaba, habían sido elegidos estando ausentes de sus provincias, y que, siendo la elección directa, era el pueblo quien debía juzgar mejor acerca de la idoneidad de aquellos individuos en cuyas manos ponían sus destinos. Los señores Zenteno y Lavaisse apoyaron la indicación.

El señor Leiva, como miembro informante de la comisión de negocios constitucionales, dijo: Que la razón por que él había opinado así en el seno de la comisión, era porque creía que para conocer la actualidad física y moral de su país, era indispensable residir en él; que los diputados, antes de venir al Congreso, era necesario que adquiriesen un conocimiento pleno de la naturaleza y condición del país que han



de representar, para poder legislar sobre él con acierto. Observó también, que había presentado antes un proyecto de adición, que deseaba se considerase para no presentarla a cada artículo; que en el que se discutía volvía a tener lugar, pues que él exigía como condición para ser diputado, el que profesase el culto católico, apostólico, romano, y que se salvarían estas mociones repetidas, si el Congreso tenía a bien considerar su moción y resolver lo que tuviese a bien sobre ella.

A petición de algunos señores diputados, se pasó a un cuarto intermedio. Vueltos los señores diputados a sus asientos, pidió la palabra el señor Lavaisse, y dijo: Que él encontraba justas las razones aducidas por el señor Leiva, autor del proyecto presentado; mas sólo en lo que toca al gobernante y altos funcionarios del estado, pues éstos era conveniente perteneciesen a la comunión católica, apostólica, romana, por la intervención que la misma Constitución les dá en la celebración de concordatos, mantenimiento de cultos y protección de la iglesia por el derecho de patronato, etc.; pero que no hallaba igual motivo para que se hiciese la misma exigencia a los empleados subalternos cuyas creencias, cualesquiera que fuesen, en nada perjudicaban la religión del estado. Que tampoco estaba de acuerdo con que se dijese "profese y ejerza", pues esto era dar lugar a indagaciones odiosas, para cerciorarse acerca de las verdaderas creencias del individuo, las que solo Dios alcanza a penetrar; que en esta virtud, él opinaba porque se exija sólo que pertenezcan a la comunión católica, apostólica, romana, y se fije el proyecto en estos términos:

"Los altos funcionarios que componen el gobierno federal de la República, han de pertenecer a la comunión católica, apostólica, romana."

El señor Leiva, insiste en que se sancione su proyecto tal como se halla concebido, y observa que, si para las autoridades superiores es indispensable la profesión del culto católico, para prestarle la protección debida, lo es aún más para algunos empleados subalternos de campaña donde las creencias, por lo mismo que son menos ilustrados, necesitan más celo y vigilancia de parte de la autoridad, para su conservación y progreso.

El señor Zapata dijo: que, desde que el autor del proyecto no se conformaba con las modificaciones propuestas por el señor Lavaisse, y que habiéndose, por otra parte, pasado dicho proyecto a la comisión de negocios constitucionales, él



opinaba por que se dejase la consideración de este asunto para cuando se expidiese dicha comisión.

El señor Leiva pide que se acoja o rechace el proyecto presentado; porque de otro modo, en la discusión de los artículos siguientes, le parecía oportuno no volverlo a presentar.

El señor Presidente dijo: que, habiéndose nombrado una comisión que informase sobre el proyecto, continuaba la discusión pendiente sobre el artículo 36.

Pidió la palabra el señor Zapata, y dijo: que como miembro de la comisión de negocios constitucionales, se adhería a la indicación propuesta por el señor Huergo, para que se suprimiese el último inciso del artículo 36.

El señor Gorostiaga dijo: que la comisión había estado de acuerdo con la redacción del artículo que se discutía, aun cuando algún miembro de ella se manifestase opuesto al último inciso; que las razones que había tenido en vista la comisión, eran que los representantes de los pueblos tuviesen conocimientos prácticos y exactos de lo tocante a ellos, puesto que son el eco, el intérprete de sus sentimientos, ideas y deseos: para obtener este fin, debía conocer sus necesidades y estudiarlas de cerca para saberlas explicar. Que, arreglado el país, el puesto de diputado sería más honorífico que el de gobernador y más apetecido y solicitado aquél que éste, no siendo entonces extraño que se emprendiese un viaje para obtenerlo. Que, suprimido el inciso en cuestión, llegaría el caso de que la representación nacional fuese compuesta de sólo los habitantes de Buenos Aires.

El señor Zavallía se adhiere al artículo tal como estaba redactado, y después de un ligero debate entre los señores Huergo, Zavallía y Zenteno, el artículo fué puesto a votación y aprobado por una mayoría de nueve contra siete.

Sucesivamente se pusieron en discusión los artículos 37, 38, 39 y 40, y resultaron aprobados por unanimidad.

Puesto en discusión el 41, el señor Martínez obtuvo la palabra, y dijo: Que entre las personas que según este artículo deben ser acusadas por la cámara de diputados, ante el senado, por los delitos que el mismo artículo designa, pedía fuesen incluídos los gobernadores de provincia; pues no viendo que en artículo alguno del proyecto de constitución se señalase el tribunal competente ante el cual se debía acusar para que fuesen juzgados, creía que la mente de los señores redactores del proyecto, había sido dejar este juicio a las legislaturas pro-



vinciales, con lo que él (el señor Martínez), nunca podría conformarse, por las razones que ligeramente pasaba a aducir. Que si el Congreso quería hacer desaparecer del suelo argentino esos bárbaros gobiernos irresponsables que han talado la República en veintidós años de absolutismo, y sancionar como garantía del respeto a las leyes constitucionales y derechos del ciudadano, el severo juicio de los gobernantes criminales, y recibir por ello mil bendiciones de los pueblos, era preciso que este juicio no quedase reducido a palabras vanas y a un mero fantasma teórico, que nunca se haga efectivo, como sería el enjuiciamiento de los gobernantes de provincia ante sus mismas legislaturas, porque éstas no habían sido ni podían ser por largo tiempo, — con cortas excepciones, — sino cuerpos compuestos de hombres en su mayoría asalariados del poder ejecutivo, de otros muy especialmente afectados a la persona de él y casi en su totalidad influenciados por el gobernante, e incapaces por consiguiente de un juicio recto, imparcial e independiente. Que no se pensase con ellas poner freno a los abusos del poder, a los avances de esos caudillejos arbitrarios, creados en la escuela de la barbarie y despotismo y garantizar así al ciudadano en el uso de sus sagrados derechos. Que ésta sería una ilusión: que no se haría de esta manera nada que responda a la confianza de los pueblos. Que el tribunal que necesitaban, debía ser fuerte, imparcial, libre de las influencias del poder e independiente en sus resoluciones. Que la que llenaría mejor estos grandes objetos y necesidades, era la cámara de senadores instalada lejos de esos gobernantes mismos, a quienes la mayoría del senado ni aún conocería quizá; que exentos de su odio y prevenciones, como de su amistad e influencias, e intérpretes de la voluntad y soberanía de los pueblos, formarían el tribunal que llene las importantes exigencias que el soberano Congreso debía tener en vista al sancionar el severo enjuiciamiento de los gobernantes criminales arbitrarios, y hacía respetar los derechos y soberanías de los pueblos, para que no queden abandonados como lo han estado a sufrir avances y vejaciones de sus mandatarios, alucinados aquéllos con aparatos y malas disposiciones, como comprendía fuese el juicio de los gobernante ante sus mismas legislaturas. Que proponía, pues, que se incluyesen a los gobernadores de provincia entre los funcionarios que por el citado artículo deben ser juzgados por el senado. El señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, dijo: Que ésta había estado toda conforme con la redacción del artículo.



Que la adición propuesta por el señor Martínez, incluyendo a los gobernadores de provincia entre los individuos que pueden ser acusados por la cámara de diputados, era un ataque a la tolerancia e independencia de cada provincia, base esencial del sistema federal que la Constitución establece.

Que se sujetaba de ese modo una autoridad soberana independiente, sin previo conocimiento de su legislatura, al juicio de un tribunal que no será superior sino en aquellos negocios que pueden llamarse nacionales, no en lo relativo a los negocios interiores de sus provincias; que para acusarlos están sus legislaturas provinciales; para juzgarlos, su respectiva cámara de justicia. Que los inconvenientes de que había hecho mención el preopinante, acerca de la influencia de los gobernantes, y de sus legislaturas, desaparecían con la Constitución, y que, robusteciendo el poder de la ley, garantía la libertad de los funcionarios públicos. Que en esta virtud, él estaría en contra de la adición propuesta.

Pidió la palabra el señor Zavalía, y dijo: que se proponía sostener la adición propuesta por el señor diputado por La Rioja, porque hacía mucho tiempo que estaba convencido de su alta importancia. Que empezaría por contestar a las objeciones que había presentado el señor diputado por Santiago, miembro informante de la comisión de negocios constitucionales, y deducir en seguida algunas observaciones en apoyo de la adición.

Que no encontraba ese ataque a las soberanías provinciales, que el órgano de la comisión encuentra en el sometimiento de los gobernadores al juicio del Congreso; que no era más que una de aquellas centralizaciones del poder, que son necesarias para constituirlo robusto y vigoroso, capaz de asegurar la felicidad y la soberanía misma de los estados confederados; centralizaciones que establecen no pocas veces, la misma carta de la Unión Americana, el gran modelo de las confederaciones, donde la comisión se ha inspirado en la concepción de su proyecto.

Que la obra de la comisión, de que se ocupaba, sin dejar de ser una Constitución verdaderamente federal, contenía artículos que dan al gobierno federal una saludable ingerencia en los negocios de las provincias. Que así, estaban los artículos 5º y 6º sancionados por el Congreso, que lo establece; que el primero declara que "el gobierno federal interviene, con requisición de las legislaturas o gobernadores provinciales o sin ella, en el territorio de cualesquiera de las provincias,



al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional, amenazada por un ataque o peligro exterior.

Que cualquiera vería en esas atribuciones la soberanía de la Confederación descollando sobre la soberanía de los estados, pero no para limitarlas, sino para ampararlas y asegurar su ejercicio.

Que en la complicada máquina de la forma federal de gobierno, había una soberanía federal de la Confederación, que se compone de aquellos ramos del poder que se refieren a los intereses de los estados componentes, y las soberanías particulares de éstos, compaginados de las atribuciones concernientes a la dirección de sus intereses locales y privativos; que, en cuanto a éstos, se consideran los estados como pueblos distintos, y en cuanto a los objetos generales, se miran como uno e idéntico pueblo. Pero que, para que estas dos soberanías no se encuentren en choque, estando fundadas sobre un mismo territorio y unos mismos individuos, era preciso que una parte se constituyera en protectora de la más débil. Este protectorado resalta en el espíritu de la Constitución norteamericana y en la que los ocupaba, que era tan buena como la mejor en su forma.

Que en los Estados Unidos, cuando ocurre cuestión entre la justicia federal y la de un estado, sobre a cuál de ellos compete el juzgamiento de una causa, la suprema corte federal dirime la competencia; y que la razón por que tal sucedía, siendo ambas justicias soberanas, era por una ley de la necesidad.

Que este ejemplo y de los que tenía citados en los artículos ya sancionados en los proyectos de Constitución, resultaba claro y de bulto el protectorado que la soberanía federal tenía que ejercer sobre las soberanías provinciales.

Que era explicación de este protectorado, el sometimiento de los gobernadores de provincia al juicio político por el Congreso nacional, que juzga al mismo presidente y demás altos funcionarios de la Confederación. Que había dicho bien el honorable miembro de la comisión que el juicio político es más una medida administrativa que un acto judicial, por cuanto el fallo se reduce a deponer al acusado de su empleo; pero que él diría más bien que es administrativo en sus resultados y judicial en las formas. Pues que esa calidad no quitaba que el juicio pudiese establecerse, puesto que no era menos administrativo y trascendental el acto de intervenir el Gobierno



federal en el territorio de un estado, para garantir su constitución acatada, su orden público alterado, aun sin requisición de sus autoridades, como sabiamente se ordenaba en las mejores constituciones federales.

Que la destitución de un gobernante, no era sino una disposición negativa, una facultad neutra, destinada a remover los estorbos con que la soberanía provincial pudiera troppezar en su camino. Que por ese medio no se le imponía a una provincia un gobernante; que siempre era ella la que lo elegía; pero que, si convenía al ejercicio de su constitución particular o de la Nación, la remoción de sus mandatarios, el Congreso Nacional lo removía y ella lo reemplazaba. Que siempre era, pues, la provincia la que nombraba sus mandatarios.

Que en lo que miraba al honorable diputado una infracción del principio federal, él (el señor Zavallía) encontraba su perfeccionamiento. Que era sabido que el juzgante debía ser superior en rango al juzgado, puesto que tenía que ejercer sobre éste su autoridad y tal vez aplicarle una pena. Que por esto era que las legislaturas de provincia, iguales en jerarquía a los gobernadores, no eran los tribunales adecuados para juzgarlos. Que, si en las Repúblicas se sometía generalmente a los presidentes al juicio de las asambleas legislativas, esto era imperfección, hija de la necesidad, un defecto originado de la falta de una autoridad más sublime que fallase sobre sus actos, y que bajo este aspecto, todas las formas del gobierno eran imperfectas.

En el sistema federal, existía, afortunadamente para los estados particulares, una potestad, que se eleva por sobre sus altos poderes políticos y al mismo tiempo les pertenece en el sentido nacional. ¿Por qué se ha de perder esa coyuntura de establecer para los gobernadores un Juzgado competente por su rango, por el acopio de sus luces y por la independencia de su posición; como lo era el soberano Congreso Federal? Que con esta medida se consultaba el orden público y la recta administración de justicia, el orden, porque sacando del interior de las Provincias el juzgamiento de su primer magistrado, se les ahorra los sacudimientos consiguientes y se ahorra la revolución que, a falta de un medio legal de deponer a un gobernador aborrecido, se hace muchas veces por hombres de corazón. Que se consulta mejor la justicia, porque las legislaturas provinciales unas veces son apasionadamente enemigas del jefe del ejecutivo; y las más,





en vez de representantes del pueblo, eran representaciones de los intereses del gobernador, y hechura suya; y que cómo podría esperarse de ellas tanta imparcialidad como la que el Congreso Federal ofrece.

Que por último, el mismo señor miembro informante de la comisión, reconocía la conveniencia del juicio político de los gobernadores, con la representación nacional; que la salud pública era la suprema ley y mucho más para los legisladores; que si, pues, todos estaban de acuerdo en punto a la utilidad de esa medida, deber de ellos era adoptarla. Que cuando se les presentaba una medida, ¿habrían de detenerse ante vanos escrúpulos de doctrinas? Que se verían privados de las ventajas de ella por respeto a sus posibilidades de controversia? Y concluyó diciendo: “hagamos una constitución práctica, contentémonos en lo posible, recordemos lo atrasado de nuestras costumbres republicanas, no sea que por dar a los pueblos una carta excesivamente federal, pasemos por el dolor de verla atacada por el imposible de observarla”. Verdad es que, como ha dicho el señor diputado órgano de la comisión, la Constitución norteamericana no contiene esta especie de centralización, pero tampoco están nuestros pueblos a la altura de los del septentrión en el orden social. Y además, ¿quién ha dicho que aquella célebre carta es el límite insalvable del centralismo en las federaciones? El verdadero límite, la verdadera medida, es la medida de las naciones. Votaré, pues, por la adición propuesta; porque estoy íntimamente convencido que ella es uno de los mayores beneficios que podemos hacer a nuestros pueblos.

El señor Zenteno se adhiere al pensamiento del señor Martínez, respecto al proyecto de adición presentado, y se funda en que, así como los ciudadanos son sediciosos a veces, y tienen por esto tribunales que los penen, los gobernadores suelen ser tiránicos y debieran tenerlo también a su vez; que opina por que los gobernadores de las provincias sean, como la autoridad nacional, juzgados por el senado.

Después de un largo debate entre el señor Gorostiaga y el señor Zavalía, se dió el punto por suficientemente discutido. Se votó y aprobó el artículo 41 con la adición propuesta por el Sr. Martínez, y por mayoría de sufragios; quedando el inciso redactado en esta forma: “A los miembros de ambas cámaras, a los de la corte suprema de justicia y los gobernadores de provincia, por delitos, etc.,” con lo que se dió por terminada la sesión, levantándose a las once de la noche.



*Discusión y aprobación de los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 64.* — El 27 de Abril, el señor presidente declaró abierta la sesión. Se dió cuenta por secretaría haberse expedido la comisión revisora de poderes con respecto a los presentados por el diputado de San Luis, señor Llerena, presentando el siguiente proyecto de decreto: "Artículo 1º — Dánse por bastantes y extendidos en debida forma los poderes presentados por don Juan Llerena como diputado por la provincia de San Luis al Congreso constituyente. Artículo 2º Archívese. Santa Fe, febrero dieciocho de mil ochocientos cincuenta y tres. Lavaisse. Zavalía. Campillo. Seguí."

Puesto en discusión el proyecto de la comisión, y no habiendo quien tomase la palabra, se procedió a votar, resultando aprobado por unanimidad.

Se presentó el señor Llerena a la sala del Congreso, y previo el juramento de ley, ocupó su asiento entre los señores diputados. Preguntó en seguida el señor Presidente, si se había despachado por la comisión de negocios constitucionales el informe relativo al proyecto de adición presentado por el señor diputado Leiva en la sesión anterior; y habiéndose contestado negativamente, expuso: que se creía autorizado por el artículo 51 del reglamento, para ponerlo en consideración de la sala, y que estaba, por lo tanto, abierta su discusión.

Obtuvo la palabra el señor Leiva, y dijo: Que poco tenía que adelantar en la fundación de su proyecto, sobre las razones que había aducido en la sesión anterior, y mucho menos cuando el silencio que observaba de los señores diputados, lo interpretaba favorablemente. Que se reservaba solo señalar el lugar en que debía colocarse el mencionado artículo, cuando hubiese obtenido la sanción que esperaba.

El señor Zenteno dijo: que, habiendo tenido el honor de apoyar la moción del señor Leiva, creía conveniente fundarla brevemente, lo que verificó, extendiendo las observaciones del miembro preopinante.

El señor Lavaisse expuso: que no obstante de hallarse de acuerdo con el espíritu del proyecto presentado, votaría en contra de él, por las generalidades del contexto, pues cerraba la puerta de todos los empleos civiles a los que no



profesen y ejerzan el culto católico, apostólico, romano, lo que era, a su juicio, motivo de interminables tropiezos.

Que no encontraba razón para excluir los disidentes de este culto que hubiesen obtenido, por otra parte, carta de ciudadanía, de todos los empleos, y mucho menos de aquellos en que sus servicios podrían ser tan útiles como en el Tribunal protomedicato, cuerpo de ingenieros, agrimensores, etc., puesto en que la República había utilizado tan ventajosamente las luces del extranjero, cuando había estado en guerra; que no era justo privarla, para en adelante, de este recurso. Que, por otra parte, debían evitarse indagaciones odiosas como las que tendrían lugar para cerciorarse acerca de la creencia de un individuo, indagaciones que ha querido evitar el Congreso cuando ha reservado sólo al juicio de Dios las acciones privadas del hombre. Que él (el Sr. Diputado) habría deseado que las autoridades federales, esto es, los altos funcionarios de la Confederación, perteneciesen al culto católico, pues que a ellos incumbe el derecho de patronato, presentación de obispos y celebración de concordatos que bajo este respecto estaba de acuerdo con el proyecto presentado, en su espíritu; pero que se reservaría a pedir la adición indicada, en la oportunidad que creyese conveniente, votando entre tanto, en contra del artículo propuesto.

El señor Leiva contestó: Que no sabía porque el señor diputado preopinante hubiese podido dudar de su deferencia a la modificación propuesta. Que cuando se le insinuó en la noche anterior, para que esta calidad solo se exigiese a los altos poderes, la aceptó, a pesar de que adujo razones que creía bastantes para que su proyecto se aceptase sin reformas; porque convenía también en que pudiesen ser de otra secta ciertos empleados, como médicos, agrimensores, etc., no obstante que en todo caso debían preferirse a los que perteneciesen a nuestra creencia.

El señor Lavaisse redactó el artículo del modo siguiente:

“Las personas que componen el gobierno federal de la nación, han de pertenecer a la comunión católica, apostólica, romana.”

Obtuvo la palabra el señor Leiva, y dijo: Que si se quería sostener el culto católico, apostólico, romano, conforme al espíritu del artículo 2º del proyecto de Constitución y a la importancia del objeto que contenía; que si al sancionar este artículo 2º el Congreso Constituyente había estado animado de sentimientos verdaderamente católicos y de que



el culto no sólo se sostuviese con la pompa y majestad que corresponde, sino que se propagase a todas las gentes el Evangelio; que si se consideraba, en fin, que los que habían de servir el culto y propagarle eran hombres débiles y frágiles, llenos de miseria y pasiones, era necesario que el Congreso allanase las dificultades que opone la corrupción y malas costumbres, empleando medios más eficaces allí donde los auxilios de la propaganda y de la predicación son más eficaces.

Que si, como se había confesado, los altos poderes de la Confederación debían ser católicos, para que no faltase la asistencia que debía a los ministros del culto, con más razón, debía exigirse esta calidad en los empleados subalternos, para que con su influencia, concurran a que las masas que gobiernan, presten el respeto debido al sacerdocio, proporcionándoles otros auxilios, que, si bien son menores, deben tenerse como de grande importancia desde que facilitan al Ministro del altar el desempeño de su misión santa. Que las capitales en que residen las primeras autoridades en que abundan los predicadores y donde son más frecuentes las prácticas religiosas, que tanto contribuyen a ilustrar a los pueblos y mejorar las costumbres, el contacto de los ministros del santuario con los altos poderes, la cultura del pueblo y la piedad cristiana, son otras tantas facilidades que hacen allí más eficaz la asistencia de los sacerdotes al desempeño de sus funciones y son el mejor estímulo para el progreso del culto.

Es tanto que, faltando en la campaña todos estos medios y recursos, pues no hay en ella ni cultura, ni ilustración, ni prácticas religiosas siendo, por esta parte, pocos sus templos y mal servidos en la generalidad, era indispensable que sus jueces o autoridades territoriales, profesasen el mismo culto, para coadyuvar, en lo posible, a su mejor ejercicio: que de otro modo se debilitarían las creencias religiosas, vendría la desmoralización, más tarde el indiferentismo, más funesto que una falsa creencia, políticamente hablando.

Que en una discusión sobre otro artículo del proyecto de Constitución, se había llamado la atención del Congreso a los primeros tiempos de la iglesia, a el de los apóstoles, al de los milagros y los mártires. Que esos tiempos habían pasado ya. Que era cierto que la predicación de Jesucristo, la de los apóstoles, los milagros y la sangre de los mártires, propagaron y afianzaron la religión y el culto católico, triun-



fando en todas partes; pero que hoy no veía ni el fervor de los discípulos del redentor, ni la fe de los mártires, ni repetidos los milagros; que lo que veía, era la Inglaterra, el pueblo más católico, abrazando el protestantismo, lo que temía sucediese a la Confederación Argentina si el Congreso desatendía la asistencia que debe a la religión que profesa el país. Que no quería hablar más sobre el punto en discusión, por lo que terminaba, proponiendo la aceptación de su proyecto sin modificación alguna que alterase su sentido.

El señor Gutiérrez, contestó: Que desearía como el preopinante, no hablar más sobre esta materia, pero que en breves palabras fundaría su oposición al artículo propuesto, conforme su redacción en la tendencia y razones de conveniencia que habían dictado la libertad de cultos. Que todos los argentinos estaban garantidos para votar, que el artículo 16 de la Constitución, abría la carrera de los empleos a todos los habitantes, sin otras consideraciones que la idoneidad; que era injusto que los que se acercaban a los comicios públicos a dar su voto, no pudiesen recibirlos en los mismos comicios. Que no sabía, por otra parte, como se amenguase el cumplimiento del artículo 2º, porque hubiese en la Confederación empleados de otra creencia, pues esto toca solamente a los actos internos del hombre no a los actos externos o políticos del funcionario. Que el sostenimiento del culto, el esplendor, etc., consistía en que se cubriesen los presupuestos que presentasen los obispos y cabildos eclesiásticos, y que el gobernante, al decretar su pago conforme al artículo constitucional que le prescribía este deber, no ejercía un acto de conciencia sino llenaba un deber de mandatario. Que, por lo expuesto, se veía claramente la compatibilidad que hay para un gobernante pueda profesar el culto que quiera y sostener el que la Constitución le mande que proteja. Después de otras varias observaciones, terminó su discurso, votando en contra del proyecto presentado.

El señor Zapata dijo: Que hacía uso de la palabra por unos pocos momentos, para que no se creyese que su silencio importaba la aprobación del proyecto de adición del señor diputado por Santa Fe, como este señor había interpretado el de todos los señores diputados, antes de iniciarse este debate; porque el silencio, en muchos casos, antes que aprobación, importaba una profunda reprobación. Que se oponía al artículo proyectado por inconstitucional, por inútil y por inusitado. Se refirió a que uno de los miembros de la co-



misión había aprobado lo primero, manifestando la oposición en que está con otros artículos terminantes del proyecto que ya estaban sancionados: y a esto agregó que, desde que el de adición abrazaba en su generalidad a todos los empleados civiles de la Confederación, se oponía, sin necesidad alguna, a la base federal de la Constitución, pues que, debiendo cada provincia dictar su constitución, en ella se fijarían las condiciones de elegibilidad de sus empleados respectivos. Que era también inconstitucional, porque habiéndose concedido a los ciudadanos el voto activo, cualquiera que fuese su creencia religiosa, no se podía privarles del pasivo sin una infracción del derecho natural, como sucedería si se les privase de representar a sus conciudadanos. Que, fundado en las razones aducidas, era inútil, si no se quería hacer un agravio a los pueblos; porque éstos conocían muy bien sus verdaderos intereses para elegir a sus representantes; y porque no había motivo alguno para abrigar los temores que se imaginaba. Finalmente, que era inusitado, porque en las Constituciones sudamericanas, que son bien católicas, apostólicas, romanas, no se encontraba semejante artículo, y que, al ponerlo en la nuestra, sería hacer un agravio al pueblo argentino, desconociendo de la firmeza de sus propias creencias. Que ya que el señor diputado autor de la moción descendía, para fundarla hasta citar que había recorrido una gran parte de la campaña, en que la palabra y acción de un solo cura era muy suficiente para mantener la fe de sus feligreses, manifestando temores de que ésta se entibiese con el contacto de un extranjero que por allí viviese, pedía le permitiese observar del mejor modo de contribuir al mantenimiento y brillo de la religión, no consistía en excluir otras religiones, sino en cumplir con los deberes de cristiano y como ciudadano y como magistrado, dotando a la campaña de suficientes, ilustrados y virtuosos párrocos que cumplan con los deberes de su sagrado ministerio, que consistía en que se cumpliese la Constitución que se estaba sancionando porque ella imponía al gobierno federal, todos los deberes que la religión dominante requería para su sostenimiento y esplendor, por todo lo que votaba.

El señor Leiva contestó: Que, desde que las autoridades no fuesen católicas, no se abonarían los presupuestos, o se demoraría su pago, citando de ello varios ejemplos. Que se había dicho que su proyecto era anticonstitucional, por estar en desacuerdo con otros artículos ya sancionados que conce-



días regalías a los extranjeros; pero que el proyecto de Constitución aún no estaba sancionado, y que si cuando se discutió el artículo 2º se hubiesen llevado a efecto las modificaciones que entonces propuso, no habría creído necesario el artículo que ahora proponía. Que donde hay libertad de cultos, era necesario establecer un artículo como el del proyecto de adición presentado.

El señor Ferré dijo: Que él había apoyado el artículo presentado, porque desde que se había abierto la puerta a los disidentes de nuestro culto, hasta la presidencia de la República, podría llegar a ocuparla un judío o un musulmán; que en este caso sería preciso variar hasta la fórmula del juramento, para saber si debía jurarse por los evangelios o por el Alcorán o por Mahoma.

El señor Zenteno citó el ejemplo de países protestantes, en que estando establecida la libertad de cultos, se prohíbe que puedan ser empleados los que no sean protestantes; mencionando a la Inglaterra a este propósito.

No habiendo otro señor diputado que tomara la palabra, se puso a votación si el punto estaba suficientemente discutido, resultando la afirmativa por 16 votos contra 2, se puso a votación el artículo, y resultó desechado por 13 votos contra 5.

El señor Presidente ordenó que se continuase la discusión del proyecto de Constitución; y en su consecuencia se leyó el artículo 42, y no habiendo sido discutido, se puso a votación y resultó aprobado por unanimidad.

Puesto a discusión el artículo 43, observó el señor Zenteno que, no habiendo tenido lugar el artículo que se había desechado en esta sesión, pedía para los senadores la condición de católicos. Que creía, por otra parte, excesiva la renta que se requería para obtener este empleo, porque la guerra y las calamidades habían destruído las fortunas, y que, aunque habían quedado personas idóneas para ocupar estos destinos, quedarían por el artículo inhabilitadas para ocuparlo; y pedía se hiciese una modificación a este respecto.

El señor Gorostiaga dijo: Que en el proyecto no se exigía a los diputados, y sí a los senadores este requisito de dos mil pesos de renta, porque en el sistema representativo, el Senado era un cuerpo moderador de las exigencias ardorosas del pueblo, que estaban representadas en la Cámara de diputados. Que la práctica sería que, cuando un hombre era patriota, virtuoso e ilustrado, el mismo Senado, que era el juez



de sus títulos, daría lugar a estas excepciones, sin necesidad de levantar un sumario para asegurarse de las condiciones de elegibilidad, que para los jóvenes estaba abierta la cámara de diputados. El señor Lavaisse expresó: Que votaría en contra del artículo, consecuente con lo que había expuesto anteriormente, si no se exigía a los senadores la calidad de católicos.

El señor Llerena pidió se tuviese presente las siguientes observaciones: que el Senado debía ser el templo de la gloria; que el dinero no llenaba sólo las calidades que debían tener los senadores; que allí debían ir a ocupar un lugar los que hubiesen merecido bien de la patria por sus anteriores servicios, y que aquellos no eran generalmente acaudalados. Que le parecía también excesiva la exigencia de 2.000 pesos de renta, que reputaba considerable aún en Europa.

El señor Zenteno apoyó también este pensamiento.

El señor Torrent propone la misma modificación, agregando que ni aún aquellas personas que pueden considerarse idóneas para ocupar un asiento en el senado, tienen en las provincias la renta que se exige; que se inutilizarían muchos por este motivo, que cree más oportuno tomar por base la propiedad de \$ 6.000 por ejemplo, que no una renta que es más difícil de avaluar; y concluyó pidiendo la modificación del artículo en ese sentido. Habiéndose declarado el artículo por suficientemente discutido; se puso a votación y resultó aprobado por 10 votos contro ocho.

Puesto en discusión el artículo 44, el señor Seguí propuso que la renovación del senado se hiciese por mitad, y después de una ligera explicación que hizo el miembro informante de la comisión, sobre la conveniencia de adoptar el artículo tal cual estaba propuesto, se declaró el punto por suficientemente discutido y fué aprobado enseguida por unanimidad de sufragios.

Igual sanción obtuvieron los artículos 45 y 46. Puesto en discusión el artículo 47, el Señor Seguí pidió explicación al miembro informante de la comisión sobre la presidencia del senado por el presidente de la corte suprema, en los casos de acusación al presidente de la Confederación; porque, aunque comprendía la razón que había para que no presidiese el vicepresidente; como interesado en los resultados del juicio, no debía, en su concepto, presidir un empleado sujeto a la influencia del presidente acusado; por haber obtenido de él su nombramiento. Que mejor conceptuaba en





este caso que se nombrase por el senado un presidente de su seno.

El señor Gorostiaga explica, de conformidad con el preopinante, las razones que habían decidido a la comisión a quitar, en este caso, al vicepresidente de la República, la presidencia del senado. Que el presidente de la corte suprema no debía considerarse bajo la influencia del presidente de la República, por ser un empleado inamovible, y no puesto por la voluntad sola del presidente de la República, sino con el acuerdo del senado, condiciones bastantes para garantizar su independencia. Que, por otra parte, era de preferirse este empleado a cualquier otro presidente que el senado eligiera, por cuanto en los casos de acusación, se erigía el senado en gran jurado, saliendo de las condiciones ordinarias de su ejercicio, en cuyo caso era evidente que el presidente de la cámara de justicia, prestaría mayores servicios por la analogía de las funciones ordinarias de su cargo.

El señor Seguí expone: Que estaba satisfecha su susceptibilidad republicana, y que votaría por el artículo después de haber oído las razones convincentes del miembro informante. Dado el artículo por bastantemente discutido, fué puesto a votación y aprobado por unanimidad de sufragios.

Igual resultado tuvo el artículo 48.

Fué puesto a discusión el 49, y el señor Llerena preguntó si era facultad exclusiva del senado, el declarar cualquier punto del territorio en estado de sitio, o si también participaba de ella, la cámara de diputados.

El señor Gorostiaga contesta: Que en caso de ataque exterior, se había conferido al senado solamente, procurando la brevedad y oportunidad de las medidas; que más adelante se vería que en caso de conmoción interior, era atribución del congreso. Con lo que se manifestó satisfecho el señor Llerena.

Y dado el artículo por bastantemente discutido, se puso a votación, y resultó aprobado por unanimidad.

Se puso en discusión el artículo 50, y el señor Zapata, como miembro de la comisión constitucional, propuso que se eliminase la palabra provincia, para proveer, de ese modo, al caso en que la vacante del senador perteneciese a la Capital, porque con la eliminación propuesta quedaba comprendido este caso. Admitida la enmienda por los demás señores miembros de la comisión, y no habiendo quien tomase la palabra, se dió el artículo por suficientemente discutido, y puesto a vota-



ción, resultó aprobado por unanimidad. Se puso en discusión el artículo 51 y después de una ligera explicación que hizo el señor Gorostiaga, a solicitud del señor Lavaisse, fué puesto a votación, y aprobado unánimemente.

Puesto a votación el artículo 52, capítulo 3º y después de breves explicaciones sobre la forma de citación para la convocación extraordinaria de las Cámaras, se puso a votación el artículo y resultó aprobado.

Fueron en seguida aprobados también, los artículos 53 y 54, y puesto en discusión el 55, observó el señor Lavaisse: Que juzgaba más justo que los miembros de las Cámaras pudiesen ser removidos por una simple mayoría, del mismo modo que estaba dispuesto para el caso de renuncia.

El señor Gorostiaga contestó: Que la razón para haber exigido dos tercios de votos; era porque en los cuerpos deliberantes eran muy frecuentes las prevenciones personales originadas de la discusión, y que para ocurrir a las injusticias que pudieran cometer, sería exigido mayor número que para las renunciaciones.

El señor Seguí se adhiere de tal modo a las explicaciones del miembro informante, y cree mejor establecer las tres cuartas partes adhiriéndose al principio que lo odioso debe restringirse y ampliarse lo favorable. No haciéndose más observaciones sobre la materia, se declaró el punto bastantemente discutido, y se puso a votación, resultando aprobado por unanimidad. Igual resultado obtuvieron los artículos 56, 57, 58, 59 y 60 y 61. Puesto a discusión el 62, pidió explicaciones el señor Zenteno sobre la exclusión de los eclesiásticos regulares. El señor Gorostiaga contestó: Que la razón para excluirlos eran las mismas palabras que había dicho el señor Zenteno en la discusión de otros artículos constitucionales, sobre la inmunidad de los sacerdotes y las funciones de su ministerio.

El señor Zapata extiende más las explicaciones del miembro informante, fundadando la exclusión de los regulares en la obediencia pasiva a sus preladados.

El señor Seguí la explica igualmente, en que no tiene intereses que representar desde que han renunciado al mundo.

El señor Zenteno pide explicaciones sobre la exclusión de los gobernadores, para pertenecer a las cámaras por las provincias de su mando.



El señor Seguí da las razones de esta exclusión, fundándose en la libertad del voto y en el temor de que, por obtenerlo, los gobernadores violentasen al pueblo.

El señor Huergo dijo: Que no votaría por el artículo en discusión, sino se excluía a los eclesiásticos seculares que tuvieran cura de almas, conforme lo establecía la Constitución de Chile, por razones tan obvias que creía inútil someter a la consideración del Congreso.

El señor Lavaisse dijo: Que se oponía a la enmienda por razones que creía mejor explicar con su silencio.

El señor Seguí dijo: Que las razones a que se aludía, no le inclinarían a votar en contra del artículo, porque los candidatos podrían renunciar sus beneficios; y no habiendo más observaciones a este artículo se votó y aprobó por mayoría.

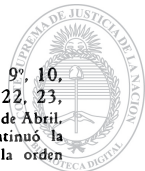
Puestas en discusión las 9 atribuciones primeras del artículo 64, el señor Zenteno, pidió explicaciones sobre si el Banco nacional comprendía la emisión del papel moneda.

El señor miembro informante de la comisión, expuso: Que el banco emitiría billetes, mas no de circulación forzosa, con cuya explicación se manifestó satisfecho.

El señor Seguí dijo: Que, consecuente con los principios que emitió en la discusión del artículo 5º del proyecto de Constitución, pedía la supresión de la segunda parte del período que marcaba la octava atribución del Congreso, porque le parecía nada generoso y hasta indigno exigir a los pueblos confederados, la devolución de subsidios que le eran debidos y los que ellos exigirían solo en el caso justificado de que las rentas locales no bastasen a cubrir sus necesidades; que tanto por esto, como por otras consideraciones de justicia, de conveniencia y de buena política, votaría contra el inciso contenido en la atribución octava del Congreso, y pondría una modificación una vez que ella fuese desechada.

Habiendo sido puestas a votación sucesivamente las ocho atribuciones, fueron aprobadas, unánimemente las siete primeras, y rechazada la octava.

Hecho ésto, se levantó la sesión, siendo las once de la noche.



*Discusión y aprobación de los incisos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del artículo 64.* — El 28 de Abril, el señor presidente declaró abierta la sesión, y continuó la discusión del proyecto de Constitución que hacía la orden del día.

Habiéndose leído de nuevo la atribución 8ª del Congreso, cuya redacción fué rechazada en la anterior sesión, el señor Seguí propuso que fuese redactada en los términos siguientes: "Acordar subsidios del tesoro nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos a cubrir sus gastos ordinarios".

Votada en esta forma, resultó aprobada por mayoría de sufragios. Igual resultado obtuvo la 9ª. Puestas a discusión las atribuciones 10, 11, 12 y 13, el señor Zenteno pidió explicaciones al señor miembro informante de la comisión, sobre si la atribución acordada al Congreso para hacer sellar moneda, se extendía a los gobiernos de provincia.

El señor Gorostiaga dijo: que creía que entre las atribuciones del gobierno federal extensivas al provincial, se hallaba la de sellar moneda conforme a los pesos y medidas designados por el soberano Congreso.

El señor Zavallía en contra de este aserto, invoca el artículo 105 del proyecto de Constitución, en que se prohíbe expresamente a los gobernadores de provincia sellar moneda, reservando, como en Estados Unidos, al soberano Congreso tan importante atribución.

El señor Zenteno obtuvo de nuevo la palabra, para preguntar si el soberano Congreso por esa atribución tiene facultad para permitir en alguna provincia la acuñación de moneda, o si ha de haber solo un banco o cuño en la capital.

El señor Gutiérrez, miembro informante de la comisión, explica que la casa o casas de moneda podían estar donde fuese más conveniente, o donde contasen con más facilidades y elementos para su creación, en las provincias o en la Capital, sin que por eso dejaran de ser nacionales; que si se encargan al gobierno federal, es sólo para que estén bajo su inmediata vigilancia.

Obtuvo en seguida la palabra el señor Zavallía y dijo: Que en la atribución 11 se daba al Congreso la facultad de dictar códigos para toda la Confederación: que tal atribución era propia de la legislatura de cada provincia, no del



Congreso; que esta restricción a la soberanía provincial era contraria a la forma de gobierno que establece la Constitución. Que las provincias con menos hombres de luces que pudieran ocuparse con suceso de la modificación, acogerían con prudencia los códigos que dictara el Congreso, así como la ley de municipalidades para Buenos Aires; pero que entre tanto, era necesario dejarles estas libertades, respetando su soberanía e independencia, garantidas por la misma Constitución; y agregó que en los Estados Unidos cada una se dictaba sus leyes.

El señor Gorostiaga, miembro informante, dijo que constataría al señor Zavallía remitiéndose al artículo 24 ya sancionado, y que no dejaba duda sobre la facultad del Congreso para promover la reforma de la actual legislación del país. Y añadió: que la mente de la comisión en este artículo, no era que el gobierno federal hubiese de dictar leyes en el interior de las provincias, sino que el Congreso sancionase los códigos civil y de minería, penal y demás leyes generales para toda la Confederación; que, si se dejaba a cada provincia esta facultad, la legislación del país sería un inmenso laberinto, de donde resultarían males incalculables. Que los códigos que dictase el Congreso serían, no lo dudaba, aceptados con gratitud por las provincias; pues el solo anuncio que hizo de ellos el general Urquiza, fué acogido con aplauso. Que era inútil probar la necesidad que tiene el país de una nueva legislación, después de los males experimentados en dos siglos que ha estado abandonado a las leyes españolas, confusas por su número e incoherentes entre sí. Que si en los Estados Unidos había códigos diferentes, era porque los americanos del norte, descendientes de los ingleses, habían formado como éstos un cuerpo de legislación de leyes sueltas.

El señor Zavallía obtuvo la palabra y dijo: Que el artículo 24 que se le había citado, no dice que el Congreso dictará esas leyes, sino que las promoverá; dos palabras de bien distinta aserción. Observó que en los pueblos argentinos no hay laberinto de leyes, pues en cuarenta y dos años habían estado en absoluta carencia de ellas. Que el gaje más importante de las provincias era, sin duda, la facultad de dictar leyes adecuadas a su organización, costumbres y peculiaridades, leyes menos fastuosas, más sencillas, y que consultasen mejor sus intereses.

El señor Gorostiaga, contestó a ésto: Que esas peculiaridades sólo tendrían lugar en un código de procedimientos de



que no se hablaba en el artículo en cuestión, y propuso como ejemplo, que, una vez organizado el poder judicial con sus diversas ramificaciones, quedaría a cada provincia la facultad de establecer en su territorio, conforme a sus facultades; pero sin romper por esto su unidad.

Después de un ligero debate entre el señor miembro informante de la comisión y el señor Zavalía, que dió su voto en contra del artículo en cuestión, pidió la palabra el señor Zenteno, y dijo que él opinaría con el señor Zavalía si no viese que la intención de éste estaba satisfecha en el tenor mismo del artículo, pues que siendo el Congreso una reunión de hombres de todas las provincias, ellos representaban su soberanía e intereses, y podían, por consiguiente, dictar leyes para toda la Confederación.

El señor Gorostiaga, como miembro informante de la comisión, para la mejor inteligencia del artículo, propuso la redacción del inciso en esta forma:

“Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, y especialmente leyes federales para toda la Confederación, etc.”

Votado de este modo el artículo, fué aprobado por mayoría de sufragios. Puestas a votación las atribuciones 12 y 13, fueron aprobadas unánimemente. Se ordenó la lectura de las siguientes, entre los números 14 y 17, inclusive.

El señor Lavaisse propone, respecto la atribución 15, invocando la caridad evangélica, y sus deberes como sacerdote, que no sólo se conserve el trato pacífico con los indios, sino que se procure su conversión.

El señor Padilla pide explicaciones sobre la atribución 17, que establece tribunales inferiores a la suprema corte de justicia, y pregunta si se habla sólo respecto a los de la capital, o a los que se establezcan en las provincias.

El señor miembro informante, señor Gorostiaga, dió las explicaciones correspondientes, remitiéndose al artículo 91 y siguientes, que explican el poder judicial.

El señor Zenteno preguntó: si las facultades de crear y suprimir empleos, que establece la atribución 17, comprende a los empleados de toda la República.

El señor Gorostiaga afirma que se habla de los empleados nacionales.

El señor Zenteno pide que se exprese así en el inciso en cuestión.



El señor Zapata remite al diputado preopinante al artículo 102, que explica más claro el pensamiento.

El señor Seguí, dijo: Que, en su concepto, la atribución 15 tal como estaba redactada, carecía de significación, y aparecía contradictoria en los dos principios que establecía, pues los medios de conservar el trato pacífico con los indios, son diametralmente opuestos a los que reclama la defensa de la frontera, amenazada siempre por ellos; que pedía explicaciones sobre el modo como se pensaba conservar ese trato pacífico y los esfuerzos que habían de hacerse para atraerlos y civilizarlos; porque, si ellos habían de ser ineficaces, él votaría su exterminio, sin comprometer sus sentimientos de caridad, y que él propondría el artículo en esta forma: "Proveer a la seguridad de las fronteras y procurar en cuanto sea posible el trato pacífico con los indios", dejando al saber y prudencia del Congreso los medios y oportunidad de practicar lo que se le prescribe.

El señor Gutiérrez, dijo: que la modificación propuesta establecía el mismo principio, con diferencia de palabras, que el que se hallaba contenido en la atribución 15, pues el Congreso por ella podía ensayar los medios que juzgue más convenientes para asegurar y conservar ese trato pacífico; que también tenía en su mano el recurso de la guerra, cuando se tratase de garantizar la frontera de los ataques de esos mismos bárbaros.

El señor Gorostiaga observa: Que en las expresiones "conservar el trato pacífico", están comprendidas las misiones evangélicas y demás recursos pacíficos; y en el segundo inciso, las hostilidades que el señor Seguí creía a veces indispensables para la seguridad de las fronteras; que él propondría, como miembro de la comisión de negocios constitucionales, la siguiente redacción:

"Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo."

Redactada en esta forma, obtuvo aprobación unánime la atribución 15, así como las 14, 16 y 17. Se procedió en seguida a la lectura de las atribuciones comprendidas entre los números 18 hasta 23 inclusive.

Obtuvo la palabra el señor Llerena, y dijo: Que la atribución 20 era, en su concepto, contradictoria con el principio de asociación establecido y sancionado ya en el artículo 14



del proyecto de Constitución, pues se establece en éste el derecho de asociación con fines útiles, derechos restringidos en la atribuciones que se da al Congreso de admitir o no otras órdenes religiosas a más de las existentes.

El señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, contestó: Que él no hallaba contradicción en que un artículo establezca como lícita la asociación con fines útiles, y otro prescriba la vigilancia y no admisión de las que pudieran no serlo; lo que sería fácil juzgar por los antecedentes de algunas como las de los jesuítas.

El señor Llerena, dijo: Que las razones aducidas no le satisfacían, que si la libertad de asociación establecida en el artículo 14, era absoluta, la atribución 20, la contrariaba; si no lo era, debía expresarse en el artículo que la consagra; que la libertad de cultos, sancionada ya, se hallaba también comprometida; desde que el poder legislativo tenía la facultad de negar el ejercicio en asociación de alguno de ellos. Que si había, pues, libertad de asociación y libertad de cultos, ambas estaban contrariadas con la mencionada atribución, sin que pudiese salvar la contrariedad el motivo especial que se hubiese tenido en vista para dictarla.

El señor Gorostiaga insiste en que no hay contradicción, pues en el artículo 14, se establece que todas las libertades y derechos que en él se acuerdan, han de estar sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio; que este es el objeto de la atribución 20, restringir una libertad que no sería benéfica si se hiciera absoluta. Que en 1835, se expulsó de Francia a los jesuítas, sin que se infringiese por ello la constitución, que consagraba la libertad de cultos y la de asociación.

El señor Lavaisse, dijo: que prohibaba las ideas emitidas por el señor diputado de San Luis y votaría por ellas; que él encontraba también contradicción en los expresados artículos; que opinaba por que se dejase a cada provincia el derecho de admitir o no las órdenes religiosas; porque de lo contrario, se inferiría un ataque a su soberanía e independencia. Que sabía también lo ocurrido en Francia cuando la expulsión de los jesuítas; que voces elocuentes, como la de Montalembert y otros, se habían elevado en defensa de aquélles, y en retribución del ultraje inferido a la religión y a las libertades establecidas en la misma Constitución francesa. Que él invocaba en contra de la atribución 20, los mismos principios de caridad evangélica que pesaban en su ánimo cuando votó la





libertad de cultos; que, ¿cómo si podían venir al país sin restricción alguna, los hombres de todos los países; de todas las repúblicas, se prohibía la admisión de algunos?

Después de otras varias observaciones, el señor Gorostiaga pidió la palabra para rectificar algunos conceptos, y dijo: que antes de 1835, época de la expulsión de los jesuitas de la Francia, había ya una ley preexistente que disponía no se admitiese más asociaciones que las establecidas; que, a pesar de ésto, los jesuitas crearon muchas por todo el territorio de la Francia; que el clero se halló agitado en esa situación; se demandaba en alto el cumplimiento de aquella ley; y si era cierto que se suscitaron fuertes polémicas y los jesuitas hallaron defensores en las cámaras, no por eso dejó de expulsárseles; que este era el hecho que él había sentado y que no veía contradicción.

El señor Llerena repuso: Que se había dicho que en Francia se faltó al principio de asociación atentando contra los jesuitas; que éstos no habían sido expulsados por promover asociación, sino como miembros demasiados influyentes en la política.

Después de haber hecho algunas reseñas históricas, para probar ésto, el señor Seguí obtuvo la palabra, y manifestándose conforme en todo con la opinión del señor Llerena, dijo: Que sería franco en confesar su poco interés en la propagación de las órdenes religiosas, en virtud de no creerlas necesarias, pero que creía que después de haber sentado un principio tan liberal como el que establece el artículo 14, debía desecharse la atribución 20, por la que tiene el Congreso la facultad de admitir las órdenes religiosas, sin excluir las ya establecidas; que ese artículo, en su concepto, no tenía más extensión que la que le daba la mente de la comisión. Que, respecto a los hechos citados por el señor diputado preopinante, opinaba como él: si las asociaciones se habían prohibido, no era por su carácter de tales, sino por otros motivos y razones que no eran del caso aducir. Que votaría en contra de la atribución 20, adhiriéndose en todo a los principios manifestados por el señor diputado de San Luis.

El señor Zapata dijo: que había escuchado las objeciones que se habían hecho por algunos señores diputados a la atribución 20, y las respuestas y luminosas explicaciones que se habían dado por uno de los miembros informantes de la comisión, que como a miembro de ella se le permitiese tam-



bién agregar una razón que se tuvo en vista al redactar esa atribución. Que jamás estuvo en la mente de la comisión limitar por dicha atribución el derecho de asociarse con fines útiles, que concede el artículo 14 a todos los habitantes de la Confederación, sin otra restricción que la que este mismo artículo indica generalmente.

Que si en la atribución que se discutía se particularizaba a las órdenes religiosas, que a más de las existentes quisieran introducirse en el país, era porque estas órdenes tenían su dependencia, comúnmente, de un general residente en Roma, y dependiente del Santo Padre, que es también soberano de un estado; que, a ejemplo, y por analogía de principios con los asuntos referentes al derecho de patronato, había querido la comisión encargar la vigilancia sobre este punto delicado, a uno de los altos poderes federales. Que era así indispensable, designar de un modo expreso esta atribución, como para poder excluirla en materia tan grave y trascendental, de las autoridades de provincias, según el artículo 105, por motivos tan poderosos y obvios que era inútil expresar.

El señor Seguí dijo: que las explicaciones que acababa de dar el señor Zapata no le satisfacían, pues aunque las órdenes religiosas de que se hablaba, dependiesen de un gobierno, si era perjudicial su admisión, no debía dársele, en ningún caso al Congreso la facultad de admitirlas; si conveniente, no debía restringirse.

El señor Lavaisse obtuvo la palabra y dijo: que se habían aducido en favor de la no admisión de órdenes religiosas, su dependencia o sujeción a un gobierno superior; que se permitía preguntar si había entre las sectas disidentes una que no reconociese un jefe, una autoridad; que la anglicana tenía la suya y así todas las demás; y si era lícita la admisión de éstas, no había razón que excluyese a las demás; que la única condición que puede oponerse a la introducción de órdenes religiosas, es la mayor o menor posibilidad de conservarlas; que sobre esto hay disposiciones canónicas bien explicadas.

Después de un sostenido debate en que tomaron parte los señores Gutiérrez, Seguí, Zapata y el señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, insistió el señor Llerena en que fuese desechada la atribución 20; que, si el soberano Congreso accedía a ello, él propondría en la sesión siguiente, un artículo que reemplazase la mencionada atribución.



El señor Zenteno apoyó su idea.

El señor Presidente sujetó a votación, si el punto estaba o no suficientemente discutido, y resultó afirmativa por mayoría. Se procedió a votar la atribución 20, y obtuvo igual resultado. Las atribuciones 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fueron sucesivamente votadas y aprobadas unánimemente; con lo que se levantó la sesión a las once de la noche.

*Discusión y aprobación de los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, e incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 83 y artículos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.* — El 29 de Abril, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados, el señor Presidente declaró abierta la sesión, dando cuenta de que faltaban con aviso los señores Ferré, Leiva, Pérez (Fr. Manuel), Delgado y Pérez. (D. R.).

Se puso en seguida a discusión el artículo 65, que fué votado y aprobado por afirmativa general, así como los siguientes hasta el artículo 69, en que el señor Seguí pidió explicaciones al miembro informante de la Comisión, sobre la votación nominal y publicación de los nombres de los diputados, para el caso de que un proyecto de ley desechado por el Poder Ejecutivo volviese a las Cámaras y fuese sancionado por una mayoría de dos tercios de votos; agregó que él creía que con aquella publicación se sujetaba a los diputados a compromisos individuales que pudiesen relajar la fuerza de sus votos; que él hablaba en nombre de las pasiones humanas y por lo que la experiencia nos enseña diariamente; que si era verdad que la inviolabilidad de los representantes los excusaba de los medios directos que pudiese emplear contra ellos el poder, no podría preservarlos de aquellos indirectos más temibles aún y que serían el resultado de tales votaciones nominales; que se había dicho y repetía, que en toda disposición era necesario tener en cuenta las debilidades humanas, en cuyo nombre hablaba; que para salvar este inconveniente, creía mejor que, estableciéndose en el artículo en cuestión que se exigiese una mayoría de dos



tercios de votos, no se reclamase que fuesen votos nominales ni pasasen a la prensa. Que la expresión de la mayoría de dos tercios constaría en el acta, así como el voto del diputado que, fuerte en sus convicciones, hubiese querido tomar la palabra para emitir su voto con firmeza y sin miedo; y finalmente, que proponía esta modificación sin ánimo de insistir sobre ella, ni dejar de votar por el artículo, aun cuando fuese rechazado.

Pidió la palabra el señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión y dijo: que la mente de ésta en la redacción del artículo, había sido establecer una especie de equilibrio entre ambos poderes, en lo tocante a la ejecución y sanción de las leyes; que el artículo en cuestión concede al poder ejecutivo un veto, pero limitado; puesto que un proyecto de ley que él rechaza, aún puede ser sancionado y ejecutado sin su asentimiento, y que para que ésto no ocasionase un conflicto, era necesario una nueva revisión del proyecto, una mayoría de dos tercios de ambas cámaras y la publicación de los votos de los diputados, los nombres de éstos y los fundamentos y razones que habían tenido para obrar en favor del proyecto desechado.

El señor Zapata agregó: Que la publicación es como una garantía dada al país respecto de los motivos y razones que habían pesado en el ánimo de los legisladores; una garantía de haber obrado bien, puesto que cada uno lleva sobre sí la responsabilidad de sus opiniones.

El señor Gutiérrez adujo en apoyo de estas mismas ideas: que, siendo independientes los poderes y marcados sus límites, cuando llegan los conflictos, deben presentarse ambos fuertes, ambos responsables, personificarse en cierto modo. Que, si el ejecutivo tiene prensa para ilustrar sus ideas, las cámaras por un medio más perentorio deben manifestar también la razón por que dictan sus resoluciones.

Puesto a votación el artículo 69, fué también aprobado unánimemente, así como los artículos 70, 71 y 72.

Puesto a discusión el artículo 73, obtuvo la palabra el señor Lavaisse, para pedir se agregase a las condiciones requeridas para ser presidente y vicepresidente, la de pertenecer a la comunión católica, apostólica, romana, fundándose en la atribución 8ª del artículo 83 del proyecto de Constitución, que concede al ejecutivo los derechos de patronato nacional; que en el artículo 2º se le impone la celebración



de concordatos, el pase de bulas, breves, rescriptos del sumo pontífice; y concluyó manifestando que el que tenía tales derechos por la Constitución y reconocía tales deberes en favor de la religión del país, no podía ser otro que un católico, apostólico, romano; que en esta virtud pedía se acogiese la adición propuesta.

El señor Gorostiaga dijo: Que no lo había creído necesario la comisión de negocios constitucionales, en razón de ser el país católico, apostólico, en su mayoría, y ser, por otra parte, popular la elección de aquellos funcionarios, los que nos daban bastante garantía de que no recayese en otro que en el que los pueblos encontrasen todas las condiciones necesarias para gobernar, y entre ellas las de que profesase la religión del país. Que, sin embargo, él se conformaría a la adición propuesta por el señor diputado de Santiago.

Obtuvo la palabra el señor Campillo, y dijo: Que estaba conforme con la modificación propuesta; que había deseado ardientemente que los altos funcionarios de la Confederación perteneciesen a la comunión católica, y que con respecto a los diputados y senadores, estaba tranquilo y satisfecho de que obtendría esa calidad, desde que se dejaba su elección al voto de los pueblos y de sus legislaturas, de cuyos sentimientos católicos no podía dudarse. Que no había admitido las indicaciones que se habían propuesto a este respecto anteriormente, por considerarlas innecesarias; del mismo modo que había rechazado las que se hubiesen propuesto sobre la propiedad, ilustración, patriotismo, etc., que, aunque esenciales, eran, por la misma razón, libradas siempre al buen juicio de los electores; que con respecto al presidente y vicepresidente de la República, había una razón de diferencia; pues aunque también estaba garantida esta calidad por la elección popular, era una sola persona que debía durar seis años en sus funciones y no sería demasiado solícito el Congreso en ocurrir a la eventualidad aunque muy remota, de que la elección fuese menos acertada, o que el presidente variase de creencias.

El señor Gutiérrez dijo: Que estaba conforme en que se hiciese al artículo la adición propuesta, más no por las razones que se habían aducido, sino porque creía que era ella un medio indirecto de reconocer que esa religión que se imponía al gobernante, era la religión a que pertenecía la casi totalidad de la Confederación Argentina; que las obligacio-



nes que le impone el derecho de patronato, no va a desempeñarlas con la fe sino con la razón. Que, sean cuales fueren sus creencias, el gobernante, así como sus ministros, son responsables ante la nación, de la infracción de la última de sus leyes, y que es ley fundamental de la República, que el gobierno sostenga el culto católico, apostólico, romano.

El señor Lavaisse expuso entonces: Que no había dicho que tal o cual creencia fuese un requisito indispensable en el gobernante, sino que conviene más al país, que el que lo gobierne profese su misma religión; pues, por más que se diga, no es posible apartar el corazón de la cabeza, ni prescindir de la fe cuando se trata de proteger alguna.

El señor Zenteno agregó a estas observaciones, que, si no se admitiese la adición propuesta, sería necesario cambiar hasta la fórmula del juramento, pues llegaría caso en que un ateo tuviese que jurar por los santos evangelios.

El señor Seguí dijo: Que estaría por la adición propuesta, pero que ella no estaba ni conforme con sus principios constitucionales, ni guardaba armonía con el plan de estructura del proyecto; que ella sería un lunar sobre el que se fijarían en el exterior los hombres de principios que leyesen la Constitución.

Pero que, desgraciadamente, se estaba legislando para pueblos muy bien intencionados, pero sujetos a la mala influencia, al proselitismo de ideas extraviadas, y a manejos siniestros que se ponían en juego, para sorprender su buena fe y alejarlos indefinidamente de su organización suspirada y por la que tanta sangre se había vertido. Que se analizaba la Constitución, como si ella fuese una cartilla de escuela, y se hacían los más absurdos comentarios sobre principios y verdades políticas muy superiores a la capacidad de los improvisados analíticos y estadistas de la calle. Que él (el señor diputado), había consagrado quince años al cultivo de su inteligencia, y, sin embargo, sabía muy poco sobre las altas materias que se discutían; y finalmente, que en las presentes alusiones no era su ánimo referirse ni al señor diputado, autor de la adición, ni al señor diputado de Córdoba que le había secundado.

A petición de varios señores diputados, se pasó a cuarto intermedio.

En segunda hora, se procedió a nueva lectura del artículo en cuestión, y no habiendo quien tomase la palabra,



se puso en votación con la adición propuesta: (pertenecer a la comunión católica, apostólica, romana) y resultó aprobado por unanimidad.

Obtuvieron igual resultado los artículos 74 y 75.

Leído el artículo 76, el señor del Carril propuso que se estableciese en él que, durante el período de su nombramiento, el presidente y vicepresidente de la Confederación no pudiesen ejercer otro empleo; y quedó el inciso redactado en esta forma: "Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Confederación ni de provincia alguna". Puesto a votación el artículo con la adición propuesta, resultó aprobado por unanimidad, igualmente que el artículo 77. Puesto a discusión el 78, el señor Seguí pidió algunas explicaciones sobre si el duplo del total de diputados y senadores de que se hablaba en dicho artículo, se refería al total de cada uno, o si el duplo debería recaer sobre el total de todos.

El señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, dió explicaciones satisfactorias a las objeciones del señor Seguí; así como a las que a la redacción del artículo hicieron los señores Huergo, Zapata y Seguí, después de lo que fué aprobado sin modificación alguna. Puesto el artículo 79 a discusión, el señor Seguí propuso una nueva forma de redacción en que se substituye la palabra Congreso a la de "ambas cámaras", fundándose en que cuando se tratase de hacer el escrutinio, no estarían éstas instaladas.

El señor Huergo apoyó la indicación propuesta.

El señor Zavalía observó: Que siendo dictado el artículo para una época permanente, era natural hablase de cámaras, y que la comisión con este inciso "la primera vez el Congreso constituyente", había salvado muy bien las exigencias del momento, encerrando dentro de un paréntesis lo que era de la actualidad.

Puesto a votación el artículo tal cual estaba redactado, resultó aprobado por unanimidad.

Obtuvieron igual resultado los artículos ochenta, ochenta y uno y ochenta y dos. Se procedió a la lectura de las cuatro primeras atribuciones del artículo ochenta y tres, y resultaron aprobadas por unanimidad. Puesta a discusión la quinta, obtuvo igual resultado. Leída la sexta, observó el



señor Gorostiaga, que la mente de la comisión había sido conceder al ejecutivo la facultad de conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal; que en esta virtud proponía substituir, en vez de las palabras: “cometidos contra la Confederación”, las de “sujetos a la jurisdicción federal”; puesto a votación en esta forma, resultó unánimemente aprobado. Puestas a discusión la octava y la novena, obtuvo la palabra el señor Zenteno, y dijo: que era de opinión, que se agregase a la octava, el siguiente inciso: “previo, para ello, un concordato, con la santa sede”; que, sin esta condición, creía que no podía hacerse uso del derecho de patronato; que ese requisito era practicado por todos los soberanos de las naciones católicas, desde muchos años a esta parte como se registra en las leyes de las partidas y Nueva recopilación de Castilla; y lo confirma en los tiempos de nuestra emancipación política y civil, el voto consultivo de la excelentísima cámara de apelaciones de Santiago de Chile, en treinta de enero de 1834, y el dictamen de don Nicolás Anchorena, dado en Buenos Aires, a veintidós de marzo del mismo año, sobre el memorial que, relativo al patronato, se ajustó en aquella época y fué puesto en consulta de teólogos, canonistas y juristas.

No habiendo quien observase más sobre el punto en discusión, se votaron y aprobaron por mayoría las atribuciones octava y novena, tales como estaban redactadas.

Las siguientes, comprendidas en la décima y veintiuna inclusive, fueron sucesivamente puestas en discusión y votación, y aprobadas por unanimidad.

En la atribución veintidos, el señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, propuso se reformase el segundo inciso de ella, del modo siguiente: “en el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia, por graves objetos de servicio público” y en esta forma fué votada por unanimidad. Igual resultado obtuvo la veintitres.

Puestos sucesivamente en discusión los siete artículos del capítulo cuarto y no observándose nada sobre ellos, se votaron y aprobaron unánimemente.

Con lo que el señor Presidente levantó la sesión, siendo las doce y media de la noche, y fijando como orden del día para la siguiente, la continuación del mismo asunto.





*Discusión y aprobación de los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107.* — El 30 de abril, el señor presidente declaró abierta la sesión y puso a discusión el artículo 91, sección 3ª, capítulo 1º.

El señor Zenteno obtuvo la palabra y pidió explicaciones a la comisión, sobre las atribuciones de los tribunales inferiores de justicia, que el Congreso podía por este artículo establecer en el territorio de la confederación.

El señor Zapata contestó: que esas atribuciones estaban detalladas en el artículo 97 del proyecto y atribuciones muy distintas a las de los tribunales provinciales. Que con el establecimiento de tribunales inferiores federales en las provincias, se quería evitar el perjuicio que tendrían que sufrir los interesados si tuviesen que recurrir a la capital, para hacerse oír en juicio en los asuntos de competencia exclusiva de los tribunales nacionales.

No habiéndose observado más sobre el artículo en cuestión, se puso a votación, y fué aprobado por unanimidad, así como los siguientes, hasta el 96 inclusive, no habiendo sobre ellos discusión alguna.

Leído y puesto a discusión el artículo 97 del Capítulo 2º, observó el señor Zenteno que votaría por que se adicionase este artículo, incluyéndose entre las causas que debían juzgarse por los tribunales federales, las que se suscitasen entre el gobernador de una provincia y un ciudadano de ella, dando por razón la influencia que podrán ejercer los gobernadores sobre los tribunales de su misma provincia, lo que no sucedería en un tribunal federal enteramente independiente e imparcial.

El señor Llerena apoyó la adición propuesta por el diputado preopinante, diciendo que en la mayor parte de los países había una autoridad que decidía en última instancia en los asuntos litigiosos. Que en las provincias, la ausencia de un tribunal superior fomentaba la chicana, y producía un malestar profundo. Que ninguna federación de América ni de Europa se había abstenido de crear tales tribunales, y con menos razón debía dejar de establecerlos la nuestra, donde la necesidad y la justicia lo exigían imperiosamente, para hacer reales las garantías concedidas al ciudadano en el proyecto de Constitución.



El señor Gorostiaga contestó: que las observaciones aducidas procedían de que no se había dado la verdadera inteligencia al artículo que se discutía. Que el sistema federal era la base obligatoria de la Constitución; que debía respetarse la soberanía e independencia de las provincias y cuidarse mucho de que el poder ya legislativo, ejecutivo o judicial del gobierno federal, no invadiese, aplicándolos a casos importunos, los respectivos poderes de las provincias. Que en el caso propuesto, de una causa suscitada entre el gobernador de una provincia y un ciudadano, el poder judicial federal nada tenía que hacer, porque el gobernador y el ciudadano eran iguales ante la ley, iguales ante el magistrado de esa misma provincia encargado de aplicarla, y sujeto, por consiguiente, a su jurisdicción, del mismo modo que estaría sujeto a los tribunales ordinarios, una causa suscitada entre el presidente de la República y un ciudadano. Explicó los diversos casos comprendidos en el artº, y manifestó los límites que se señalaba por ellos a la jurisdicción federal.

Los Sres. Zenteno y Llerena insistieron sobre sus anteriores observaciones, manifestando la necesidad de dar garantías al ciudadano en este caso, contra la influencia de un gobernador de provincia, ante un tribunal más alto y más imparcial.

Los Sres. Zavalía y Seguí, manifestaron su opinión de acuerdo con el art. 97, y, dado el punto por suficiente discutido, fué aprobado por mayoría. Fueron enseguida puestos a discusión y aprobados los arts. 98, 99, 100, 101, 102 y 103.

Sobre el artículo 104, propuso el señor Gorostiaga que se pusiese, de acuerdo con los demás miembros de la comisión, a discusión en los términos siguientes: "Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal, y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos, por leyes protectoras de esos fines, y con sus recursos propios". Puesto en estos términos a votación, fué aprobado por unanimidad.



Sobre el art. 105, el Sr. Gorostiaga, miembro informante de la comisión, observó: Que para ser consecuentes con la corrección hecha en la atribución 11, del art. 64, debía substituirse en este artículo, a las palabras: "ni legislar materia civil, etc., ni dictar los códigos civil, comercial, penal ni de minería, después que el Congreso los haya sancionado"; y que para evitar malas intiligencias, se quitase del inciso siguiente la palabra: "peajes y postas", para que no pueda ponerse en duda que las provincias, podían establecer las que creyesen necesarias para su administración, a más de las que estableciese el gobierno nacional. Puesto en votación el art. 105, con estas correcciones, fué aprobado por unanimidad, como igualmente lo fué el 106.

Puesto a discusión el art. 107, el señor Zapata propuso que se suprimiesen las palabras: "y los funcionarios que dependen de ellas"; porque el Gobierno federal debía entenderse únicamente con los gobernadores y no con sus empleados subalternos, para hacer cumplir la constitución y las leyes de la Cofederación.

Después de un ligero debate, en que tomaron parte los Sres. Zavalía, Gutiérrez, Huergo y Leiva, fué aprobado el artículo, con la supresión propuesta por el señor Zapata.

El señor Gorostiaga dijo: que, a pesar de haberse sancionado la Constitución, proponía al soberano Congreso que, reconsiderando la atribución 10º del poder ejecutivo, se le agregara el siguiente inciso " y demás empleados de la administración, cuyo nombramiento no esté reglado de otra manera por esta Constitución". Fué reconsiderado y aprobado con la adición propuesta.

El señor Seguí hizo moción enseguida, para que se reconsiderase el art. 36, y se sancionase en esta forma: "Para ser diputado, se requiere hacer cumplido la edad de 25 años y tener cuatro de ciudadanía en ejercicio; y fué aprobado en esta forma, por mayoría de diez votos contra ocho.

El mismo señor diputado hizo moción para que al día siguiente, aniversario de la revolución de mayo, de 1851 el soberano Congreso firmase la Constitución que acababa de sancionar. Fué apoyado por muchos señores diputados.

El señor Leiva observó: que no podía firmarse la Constitución antes de haberse leído y aprobado todas las actas.

El señor presidente fijó la siguiente proposición: “Si se tiene o nó mañana una sesión extraordinaria para firmar la Constitución, previa lectura de las actas”.

Fué aprobada por unanimidad.

Se levantó la sesión a las doce de la noche.





## CAPITULO V

El 1º de Mayo de 1853. — Sanción de la Constitución Nacional por el Congreso Constituyente. — Discurso del Presidente del Congreso Doctor Facundo Zuviria.



### *El 1º de Mayo de 1853. Sanción de la Constitución Nacional por el Congreso Constituyente. —*

“El 1. de mayo los diputados, prevenidos desde la víspera se presentaron de gala en el recinto del Congreso. Se trataba de suscribir y jurar obediencia a la Constitución por los mismos que la habían discutido y sancionado. La ceremonia revestía la más alta gravedad”. (1)

Pidió el señor Presidente la lectura de la carta original inscripta en el gran libro, y recomendó a los señores diputados prestasen atención para asegurarse de su conformidad con las sanciones parciales consignadas en las actas que se habían aprobado.

Concluida la lectura, se puso a votación la proposición que sigue:

“Si la carta que acaba de leerse está o no conforme con el proyecto de Constitución presentado, y las sanciones parciales hechas sobre él y consignadas en las actas que se han aprobado”.

Resuelta esta proposición por afirmativa general, pidió la palabra el señor Pérez (Fr. M.), y dijo: Que durante la discusión y la sanción de más de las tres cuartas partes de la carta constitucional, había estado fuera del Congreso, como era notorio. Que muy al principio de las sesiones, anunció al soberano Congreso que se retiraba de su seno por

---

(1) Mariano A. Pelliza. Historia de la Organización Nacional. Buenos Aires, 1897, página 123.



las razones que adujo entonces en una exposición; que, sometida ésta a una comisión especial y pendiente aún la resolución del soberano Congreso a este respecto, no había podido saber si era o no diputado. Que, sin embargo, citado por el señor presidente para concurrir a firmar la Constitución sancionada ya en su totalidad, no sabía si su firma podía legalmente tener lugar al pie de la carta que iba a suscribirse. Que sometía esto al fallo del soberano Congreso, y si lo que acababa de exponer no invalidaba su firma, él la prestaría, sujetándose a la soberana decisión.

El señor Presidente fijó la proposición siguiente "Si no habiendo el señor diputado Fr. M. Pérez, concurrido a la discusión y sanción de más de dos terceras partes de la Constitución, por haber tenido pendiente su renuncia o separación del seno del soberano Congreso, su firma en la carta constitucional será legal o no". Puesta en votación, resultó la afirmativa por unanimidad.

El señor Leiva tomó la palabra, y dijo: Que aun cuando él no se había hallado en la lectura de las actas, por indisposición, fiado en la fe del secretario y en la aprobación que había dado el soberano Congreso a todas las actas; él les daba también la suya.

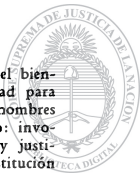
Cuando hubo concluido, el señor Gorostiaga propuso que las firmas de los señores diputados requieran el orden alfabético de sus respectivas provincias. Aceptada su indicación, el señor Presidente puso su firma, siguiéndole los demás señores diputados.

## CONSTITUCION DE LA CONFEDERACION ARGENTINA (1)

Nos los representantes del pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso general constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes; con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la

---

(1) Esta Constitución con las reformas introducidas en los años 1860, 1865 y 1898, que no alteraron en nada sus instituciones fundamentales, ni su estructura democrática, es la que nos rige actualmente.



paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Confederación Argentina.

## PRIMERA PARTE

### CAPITULO UNICO

#### *Declaraciones, derechos y garantías*

Artículo 1º — La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución.

Art. 2º — El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico romano.

Art. 3º — Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la Ciudad de Buenos Aires, que se declara capital de la Confederación por una ley especial.

Art. 4º — El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación de las aduanas, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general; y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional.

Art. 5º — Cada provincia confederada dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria gratuita. Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación. Bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Art. 6º — El gobierno federal interviene con requisición de las legislaturas o gobernadores provinciales, o sin





ella en el territorio de cualquiera de las provincias, al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición o de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior.

Art. 7º — Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás: y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estas actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.

Art. 8º — Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias confederadas.

Art. 9º — En todo el territorio de la Confederación, no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.

Art. 10. — En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas las clases, despachadas en las aduanas exteriores.

Art. 11. — Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados a tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Art. 12. — Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito.

Art. 13. — Podrán admitirse nuevas provincias en la Confederación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas, y del Congreso.

Art. 14. — Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del te-



territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Art. 15 — En la Confederación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas, es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice.

Art. 16. — La Confederación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra consideración que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Art. 17. — La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Art. 18. — Ningún habitante de la Confederación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de las jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políti-



cas, toda especie de tormento, los azotes y las ejecuciones a lanza o cuchillo. Las cárceles de la Confederación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que lo autorice.

Art. 19. — Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Confederación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Art. 20. — Los extranjeros gozan en el territorio de la Confederación de todos los derechos civiles del ciudadano: pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Confederación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicio a la República.

Art. 21. — Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio, por el término de diez años contados desde el día que obtengan su carta de ciudadanía.

Art. 22. — El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Art. 23. — En caso de conmoción interior o de ataque exterior, que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar



penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Confederación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Art. 24. — El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados.

Art. 25. — El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes.

Art. 26. — La navegación de los ríos interiores de la Confederación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.

Art. 27. — El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.

Art. 28. — Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Art. 29. — El Congreso no puede conceder al ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Art. 30. — La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, pasados diez años desde el día en que la juren los pueblos. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

Art. 31. — Esta Constitución, las leyes de la Confederación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y



los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales.

## PARTE SEGUNDA

### *Autoridades de la Confederación*

#### TITULO I

#### DEL GOBIERNO FEDERAL

##### SECCION PRIMERA

##### *Del Poder Legislativo*

Art. 32. — Un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la nación, y otra de senadores de las provincias y de la capital, será investido del poder legislativo de la Confederación.

#### CAPITULO I

##### *De la Cámara de Diputados*

Art. 33. — La Cámara de diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado, y a simple pluralidad de sufragios en razón de uno por cada veinte mil habitantes, o de una fracción que no baje del número de diez mil.

Art. 34. — Los diputados para la primera legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: Por la capital seis (6); por la provincia de Buenos Aires seis (6); por la de Córdoba seis (6); por la de Catamarca tres (3); por la de Corrientes cuatro (4); por la de Entre Ríos dos (2); por la de Jujuy dos (2); por la de Mondezo tres (3); por la de La Rioja dos (2); por la de Salta tres (3); por la de Santiago cuatro (4); por la de San Juan dos (2); por la de Santa Fe dos (2); por la de San Luis dos (2); y por la de Tucumán tres (3).



Art. 35. — Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años.

Art. 36. — Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, y tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio.

Art. 37. — Por esta vez las legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la nación: para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.

Art. 38. — Los diputados durarán en su representación cuatro años, y son reelegibles; pero la sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período.

Art. 39. — En caso de vacante, el gobierno de provincia, o de la capital hace proceder a la elección legal de un nuevo miembro.

Art. 40. — A la Cámara de diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

Art. 41. — Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente y vicepresidente de la Confederación y a sus ministros, a los miembros de ambas cámaras, a los de la Corte suprema de justicia, y a los gobernadores de provincia, por delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución, u otros que merezcan pena infamante o de muerte; después de haber conocido de ellos, a petición de parte o de alguno de sus miembros, y declarando haber lugar a formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

## CAPITULO II

### *Del Senado*

Art. 42. — El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia, elegidos por sus legislaturas a pluralidad de sufragios; y dos de la capital elegidos en la forma prescripta para la elección del presidente de la Confederación. Cada senador tendrá un voto.



Art. 43. — Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Confederación, y disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes, o de una entrada equivalente.

Art. 44. — Los senadores duran nueve años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará por terceras partes cada tres años, decidiéndose por la suerte, luego que todos se reunan, quiénes deben salir el 1º y 2º trienio.

Art. 45. — El vicepresidente de la Confederación, será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.

Art. 46. — El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerza las funciones de presidente de la Confederación.

Art. 47. — Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Confederación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

Art. 48. — Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Confederación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Art. 49. — Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Confederación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.

Art. 50. — Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia, u otra causa, el gobierno a que correspondía la vacante, hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro.

Art. 51. — Sólo el Senado inicia las reformas de la Constitución.

## CAPITULO III

### *Disposiciones comunes a ambas Cámaras*

Art. 52. — Ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde el 1º de mayo hasta el 30 de septiembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Confederación, o prorrogadas sus sesiones.

Art. 53. — Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes, a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá.

Art. 54. — Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra.

Art. 55. — Cada cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerle por inhabilidad física o moral sobreveniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renunciaciones que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Art. 56. — Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.

Art. 57. — Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Art. 58. — Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la cámara respectiva con la información sumaria del hecho.







Art. 59. — Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, por delito que no sea de los expresados en el Art. 41, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Art. 60. — Cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala, a los ministros del poder ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.

Art. 61. — Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del poder ejecutivo, sin previo consentimiento de la cámara respectiva, excepto los empleos de escala.

Art. 62. — Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.

Art. 63. — Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el tesoro de la Confederación, con una dotación que señalará la ley.

## CAPITULO IV

### *Atribuciones del Congreso*

Art. 64. — Corresponde al Congreso:

- 1º—Legislar las sobre aduanas exteriores, y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas.
- 2º—Imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Confederación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del estado lo exijan.
- 3º—Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Confederación.
- 4º—Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.
- 5º—Establecer y reglamentar un banco nacional en la capital y sus sucursales en las provincias, con facultad de emitir billetes.



- 6º—Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Confederación.
- 7º—Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Confederación, y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
- 8º—Acordar subsidios del tesoro nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
- 9º—Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes y crear y suprimir aduanas.
- 10.—Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la Confederación.
- 11.—Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería y especialmente leyes generales para toda la Confederación sobre ciudadanía o naturalización, sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del estado y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.
- 12.—Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí.
- 13.—Arreglar y establecer las postas y correos generales de la Confederación.
- 14.—Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Confederación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.
- 15.—Proveer a la seguridad de las fronteras; conservando el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo.
- 16.—Proveer lo conducente a la prosperidad del país al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y es-



tablecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.

- 17.—Establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales.
- 18.—Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República, y declarar el caso de proceder a nueva elección: hacer el escrutinio y rectificación de ella.
- 19.—Aprobar o desechar los tratados concluídos con las demás naciones, y los concordatos con la silla apostólica; y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Confederación.
- 20.—Admitir en el territorio de la Confederación otras órdenes religiosas a más de las existentes.
- 21.—Autorizar al poder ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
- 22.—Conceder patentes de corso y de represalias y establecer reglamentos para las presas.
- 23.—Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos.
- 24.—Autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias, o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Confederación, y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la Confederación, dejando a las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales y el cuidado de establecer en su respectiva milicia, la disciplina prescrita por el Congreso.
- 25.—Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Confederación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.



- 26.—Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Confederación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
- 27.—Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la Confederación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.
- 28.—Examinar las constituciones provinciales y reprobárlas, si no estuvieren conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución; y hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Confederación Argentina.

## CAPÍTULO V

### *De la formación y sanción de las leyes*

Art. 65. — Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el poder ejecutivo; excepto las relativas a los objetos de que tratan los Arts. 40 y 51.

Art. 66. — Aprobado un proyecto de ley por la cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Confederación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.

Art. 67. — Se reputa aprobado por el poder ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles.

Art. 68. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si solo fuere adicionado o corregido por la cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo de la Confederación. Si las adiciones o correcciones fuesen desechadas, volverá segunda vez el proyecto a la cámara revisora, y si aquí fueren nueva-



mente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto a la otra cámara, y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Art. 69. — Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al poder ejecutivo, para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por *sí*, o por *no*; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del poder ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Art. 70. — En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso, etc., decretan y sancionan con fuerza de ley.

## SECCION SEGUNDA

### *Del Poder Ejecutivo*

#### CAPITULO I

##### *De su naturaleza y duración*

Art. 71. — El Poder Ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Confederación Argentina".

Art. 72. — En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Confederación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilitación del presidente y vicepresidente de la Confederación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.

Art. 73. — Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Confederación, se requiere haber nacido en el territorio



argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; pertenecer a la comunión católica, opositiva, romana, y las demás calidades exigidas para ser electo senador.

Art. 74. — El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de seis años; y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período.

Art. 75. — El presidente de la Confederación cesa en el poder el día mismo en que espira su período de seis años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.

Art. 76. — El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el tesoro de la Confederación, que no podrá ser alterado en el período de su nombramiento. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Confederación ni de provincia alguna.

Art. 77. — Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del senado, (la primera vez del presidente del Congreso constituyente), estando reunido el Congreso, en los términos siguientes: "Yo N. N. juro por Dios, Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Confederación; y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Confederación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Confederación me lo demanden".

## CAPITULO II

### *De la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la Confederación.*

Art. 78. — La elección del presidente y vicepresidente de la Confederación se hará del modo siguiente: La capital y cada una de las provincias nombrarán por votación directa una junta de electores, igual al duplo del total de diputados y senadores que envían al Congreso, con las mismas calidades y bajo las mismas formas prescriptas para la elección de diputados.

No pueden ser electores los diputados, los senadores ni los empleados a sueldo del gobierno federal.



Reunidos los electores en la capital de la Confederación y en la de sus provincias respectivas cuatro meses antes que concluya el término del presidente cesante, procederán a elegir presidente y vicepresidente de la Confederación por cédulas firmadas, expresando en una la persona por quien votan para presidente, y en otra distinta, la que eligen para vicepresidente.

Se harán dos listas de todos los individuos electos para presidente y otras dos de los nombrados para vicepresidente con el número de votos que cada uno de ellos hubiere obtenido. Estas listas serán firmadas por los electores, y se remitirán cerradas y selladas dos de ellas (una de cada clase), al presidente de la legislatura provincial, y en la capital al presidente de la municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas; y las otras dos al presidente del Senado, (la primera vez al presidente del Congreso constituyente).

Art. 79. — El presidente del Senado (la primera vez el del Congreso constituyente), reunidas todas las listas, las abrirá a presencia de ambas cámaras. Asociados a los secretarios, cuatro miembros del Congreso sacados a la suerte, procederán inmediatamente a hacer el escrutinio y anunciar el número de sufragios que resulte en favor de cada candidato para la presidencia y vicepresidencia de la Confederación. Los que reunan en ambos casos la mayoría absoluta de todos los votos, serán proclamados inmediatamente presidente y vicepresidente.

Art. 80. — En el caso de que, por dividirse la votación no hubiere mayoría absoluta, elegirá el Congreso entre las dos personas que hubieren obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayoría que resultare, hubiese cabido a más de dos personas elegirá el Congreso entre todas éstas. Si la primera mayoría hubiere cabido a una sola persona, y la segunda a dos o más, elegirá el Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera y segunda mayoría.

Art. 81. — Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios, y por votación nominal. Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose la votación a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación, y si resultase



nuevo empate, decidirá el presidente del Senado (la primera vez el del Congreso constituyente). No podrá hacerse el escrutinio, ni la rectificación de estas elecciones, sin que estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros del Congreso.

Art. 82. — La elección del presidente y vicepresidente de la Confederación, debe quedar concluída en una sola sesión del Congreso, publicándose en seguida el resultado de ésta y las actas electorales por la prensa.

### CAPITULO III

#### *Atribuciones del Poder Ejecutivo*

Art. 83. — El presidente de la Confederación tiene las siguientes atribuciones:

- 1º — Es el jefe supremo de la Confederación, y tiene a su cargo la administración general del país.
- 2º — Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Confederación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
- 3º — Es el jefe inmediato y local de la capital de la Confederación.
- 4º — Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las sanciona y promulga.
- 5º — Nombra los magistrados de la Corte suprema y de los demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del Senado.
- 6º — Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de diputados.
- 7º — Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de montepíos, conforme a las leyes de la Confederación.
- 8º — Ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.
- 9º — Concede el pase o retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo





- Pontífice de Roma, con acuerdo de la suprema Corte; requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.
10. — Nombra y remueve a los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, con acuerdo del Senado; y por sí solo nombra y renueva los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares, y demás empleados de la administración, cuyo nombramiento no esté reglado de otra manera por esta Constitución.
  11. — Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras en la sala del Senado, dando cuenta en esta ocasión al Congreso del estado de la Confederación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
  12. — Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requieran.
  13. — Hace recaudar las rentas de la Confederación, y decreta su inversión con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.
  14. — Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianzas, de límites y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras, recibe sus ministros, y admite sus cónsules.
  15. — Es comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y tierra de la Confederación.
  16. — Provee los empleos militares de la Confederación, con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores del ejército y armada; y por sí sólo en el campo de batalla.
  17. — Dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución, según las necesidades de la Confederación.
  18. — Declara la guerra y concede patentes de corso y cartas de represalías, con autorización y aprobación del Congreso.



19. — Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Confederación, en caso de ataque exterior, y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23.
20. — Aun estando en sesiones el Congreso, en casos urgentes en que peligre la tranquilidad pública, el presidente podrá por sí solo usar sobre las personas, de la facultad limitada en el artículo 23; dando cuenta a este cuerpo en el término de diez días desde que comenzó a ejercerla. Pero si el Congreso no hace declaración de sitio, las personas arrestadas o trasladadas de uno a otro punto, serán restituidas al pleno goce de su libertad, a no ser que habiendo sido sujetas a juicio, debiesen continuar en arresto por disposición del juez o tribunal que conociere de la causa.
21. — Puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos son obligados a darlos.
22. — No puede ausentarse del territorio de la capital, sino con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves objetos de servicio público.
23. — En todos los casos en que según los artículos anteriores, debe el poder ejecutivo proceder con acuerdo del Senado, podrá durante el receso de éste, proceder por sí solo, dando cuenta de lo obrado a dicha Cámara en la próxima reunión para obtener su aprobación.

## CAPITULO IV

### *De los Ministros del Poder Ejecutivo*

Art. 84. — Cinco ministros secretarios, a saber: Del interior, — de relaciones exteriores, — de hacienda, — de



justicia, culto instrucción pública — y de guerra y marina, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Confederación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros.

Art. 85. — Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.

Art. 86. — Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones sin previo mandato o consentimiento del presidente de la Confederación; a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.

Art. 87. — Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Confederación, en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.

Art. 88. — No pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.

Art. 89. — Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar.

Art. 90. — Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallan en ejercicio.

## SECCION TERCERA

### *Del Poder Judicial*

#### CAPITULO I

#### *De su naturaleza y duración*

Art. 91. — El poder judicial de la Confederación, será ejercido por una Corte suprema de justicia, compuesta de nueve jueces y dos fiscales, que residirá en la capital, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Confederación.

Art. 92. — En ningún caso el presidente de la Confederación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes, o restablecer las fenecidas.



Art. 93. — Los jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores de la Confederación, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuída en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones.

Art. 94. — Ninguno podrá ser miembro de la Corte suprema de justicia, sin ser abogado de la Confederación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador.

Art. 95. — En la primera instalación de la Corte suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Confederación, de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte.

Art. 96. — La Corte suprema dictará su reglamento interior y económico, y nombrará todos sus empleados subalternos.

## CAPITULO II

### *Atribuciones del Poder Judicial*

Art. 97. — Corresponde a la Corte suprema y a los tribunales inferiores de la Confederación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Confederación, y por los tratados con las naciones extranjeras; de los conflictos entre los diferentes poderes públicos de una misma provincia; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas del almirantazgo y jurisdicción marítima; de los recursos de fuerza; de los asuntos en que la Confederación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; entre una provincia y sus propios vecinos; y entre una provincia y un estado o ciudadano extranjero.

Art. 98. — En estos casos, la Corte suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos con-



cernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, en los que alguna provincia fuese parte, y en la decisión de los conflictos entre los poderes públicos de una misma provincia, la que ejercerá originaria y exclusivamente.

Art. 99. — Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la Confederación esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando este se cometa fuera de los límites de la Confederación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.

Art. 100. — La traición contra la Confederación, consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos, prestándoles ayuda y socorro. El congreso fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado.

## TITULO II

### *Gobiernos de Provincia*

Art. 101. — Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal.

Art. 102. — Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal.

Art. 103. — Cada provincia dicta su propia Constitución, y antes de ponerla en ejercicio, la remite al Congreso para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º.

Art. 104. — Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios.



Art. 105. — Las provincias no ejercen el poder delegado a la Confederación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal; ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del estado; ni establecer derecho de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes religiosas.

Art. 106. — Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otro provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la corte suprema de justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.

Art. 107. — Los gobernadores de provincia, son agentes naturales del gobierno federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Confederación.

Dada en la sala de sesiones del Congreso general constituyente, en la ciudad de Santa Fe el día 1º de Mayo del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y tres.

Facundo Zuviría, Presidente y diputado por la provincia de Salta; Pedro Zenteno, diputado por Catamarca; Pedro Ferré, diputado por Catamarca; Pedro Díaz Colodrero, diputado por Corrientes; Luciano Torrent, diputado por Corrientes; Juan María Gutiérrez, diputado por Entre Ríos; José Quintana, diputado por Jujuy; Manuel Padilla, diputado por Jujuy; Agustín Delgado, diputado por Mendoza; Martín Zapata, diputado por Mendoza; Regis Martínez, diputado por La Rioja; Salvador María del Carril, diputado por San Juan; Juan del Campillo, diputado por Córdoba; Santiago Derqui, diputado por Córdoba; Ruperto Godoy, diputado por San Juan; Delfín B. Huergo, diputado por San Luis; Juan Llerena, diputado por San Luis; Juan Francisco Seguí, diputado por Santa Fe; Manuel Leiva, diputado por Santa Fe; Benjamín J. Lavaisse, diputado por Santiago del Estero; José Benjamín



Gorostiaga, diputado por Santiago del Estero; Fray José Manuel Pérez, diputado por Tucumán; Salustiano Zavallía, diputado por Tucumán.

José María Zuviría, secretario.

*Discurso del Presidente del Congreso Dr. Facundo Zuviría.* — Firmada la Constitución, el señor presidente dirigió al soberano Congreso la siguiente alocución:

“ Señor:

“ Permitidme empañar la majestad de este acto, con la débil expresión de algunos humildes sentimientos que me excita la profundidad de los misterios que él envuelve en su silenciosa y augusta solemnidad.

“ Acabáis de ejercer el acto más grave, más solemne, más sublime, que es dado a un hombre en su vida mortal: “fallar sobre los destinos prósperos o adversos de su patrio; sellar su eterna ruina o su feliz porvenir”. El cielo bendiga el de esta nuestra infortunada patria. Acabáis también, de sellar con vuestra firma, vuestra eterna gloria y la bendición de los pueblos, o vuestra ignominia en su eterna maldición. Dios nos salve de ellas siquiera por la pureza de nuestras intenciones.

“ Los pueblos impusieron sobre nuestros débiles hombres, todo el peso de una horrible situación, de un porvenir incierto y tenebroso. En su conflicto, oprimidos con desgracias sin cuento; nos han mandado a darles una carta fundamental que cicatrice sus llagas y les ofrezcan una época de paz y de orden, que los independice de tantos infortunios, de tantos desastres. Se la hemos dado cual nos la ha dictado nuestra conciencia. Si envuelve errores, resultado de la escasez de nuestras luces, cúlpanse ellos de su errada elección. Con la carta constitucional, que acabamos de firmar, hemos llenado nuestra misión y correspondido a su confianza, como nos ha sido posible. Promulgarla y ordenar su cumplimiento ya no es obra nuestra: corresponde el Director supremo de la Nación, en sello de su gloria, en cumplimiento de los deberes que ella le ha impuesto, y que él ha aceptado solemnemente. A los pueblos corresponde acatarla y observarla, so pena de traicionar su misma obra, de desmentir la confianza depositada en sus representantes y contrariarse a sí mismos, sentándose en ludibrio de las naciones que los rodean.



“Por lo que hace a mí, señor, el primero en oponerme a su sanción, el primero en no estar de acuerdo con muchos artículos, y sin otra parte en su confección que la que me ha impuesto la ley en la clase de presidente encargado de dirigir la discusión, quiero también ser el primero en jurarla ante Dios y los hombres, ante vosotros que representáis a los pueblos, obedecerla, respetarla y acatarla hasta en sus últimos ápices, en el acto mismo que reciba la última sanción de la ley. Quiero ser el primero en dar a los pueblos el ejemplo de acatamiento a su soberana voluntad, expresada por el órgano de sus representantes en su mayoría, porque, señor, en la *mayoría está la verdad legal*. Lo demás es anarquía, y huya ésta para siempre del suelo argentino; y para que huya de él, preciso es que antes huya de este sagrado recinto; que huya del corazón de todos los representantes de la Nación; que no quede en él un solo sentimiento que la despierte o autorice en los pueblos.

“Para esto, aún tenemos otra misión que llenar: difundir nuestro mismo espíritu en el seno de las provincias que nos han mandado. Ilustrarlas en el espíritu, en los objetos de la ley, que a su nombre hemos dictado: “Unir la convicción a la obediencia”; ved ahí nuestra misión.

“El 1º de Mayo de 1851, el vencedor de Caseros firmó el exterminio del terror y el despotismo. El 1º de Mayo de 1853 firmamos el término de la anarquía, el principio del orden y de la ley. Quiera el cielo seamos tan felices en nuestra obra, como él fué en la suya.





## CAPITULO VI



Lectura y aprobación de la minuta de declaración. — Lectura del proyecto de ley sobre capital. — Su discusión y aprobación. — Discusión y aprobación de la minuta de comunicación al Director provisorio haciéndole saber que el Congreso firmó la Constitución el 1º de mayo. La comisión da cuenta al Congreso Constituyente de una entrevista celebrada con el Director provisorio en su cuartel general de San José de Flores. — Acta de la entrega de la Constitución Argentina al General Urquiza por la Comisión del Congreso Constituyente. — Decreto del Director provisorio de la Confederación Argentina promulgando la Constitución. — El pueblo de la República jura respetar, obedecer y defender la Constitución Nacional. — Juramento del Presidente y Vicepresidente de la República. — Manifiesto del Congreso Constituyente al pueblo al clausurar sus sesiones.

*Lectura y aprobación de la minuta de declaración.* — El 3 de Mayo de 1853, el Presidente del Congreso Constituyente, ordenó la lectura de la minuta de declaración, que es como sigue

“El gran drama político abierto el primero de mayo de 1851, en las regiones del Plata, terminó para la República Argentina largos y desusados padecimientos y vengándola el tres de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de profundos agravios, le había legado un caudal de esperanzas reparadoras.

“El Congreso general constituyente fué convocado y encargado de realizarlas. No se había instalado aún y ya sobrevinieron acontecimientos que colocaron poco después a la autoridad soberana en una posición penosa y difícil.

“Hállase, al empezar las tareas de su mandato, en la tristísima necesidad de formular la organización nacional, dejando a un lado una porción demasiado importante de su población y territorio, o de decretar, como medio de compul-



sión, una nueva guerra fratricida de desgarrar el seno de la patria y quebrar la unidad nacional o de sancionar la disolución, entregando el país a la anarquía. En tan menguada situación, apenas se divisaba espacio en que moverse, entre el sacrilegio y un suicidio. Y, lo que es de admirar, no distaban los hechos que se deploran, sino unos pocos meses de la memorable jornada de Monte Caseros.:

“Tan pródiga es esta tierra desgraciada, de los marcados beneficios que la providencia dispensa de tiempo en tiempo a las naciones cansadas de sufrir!

“Quedó absorto el Congreso y pasmado, delante de los abismos que se presentaban a su vista. La demora y la postergación misma lo precipitaban en su sima. Pero el grito dolorido y penetrante de la nación, que corría los riesgos del naufragio, le restituyó sus débiles fuerzas, con la conciencia de su misión.

“El soberano Congreso constituyente, penetrado de pavor e implorando el auxilio de Dios, testigo de su patriotismo no trepidó más; y ha sancionado definitivamente la Constitución de la Confederación Argentina.

“Para edificar el Congreso se encontró con las manos libres y por materiales los escombros de la nación, aventados por los volcanes que habían trabajado sus entrañas. Nada existía, y le había precedido una tiranía feroz bajo la forma falaz y embrionaria de una federación turbulenta; sin paz, sin representación, sin libertad, sin igualdad entre sus miembros, sin prosperidad y sin tesoro, cosas que no pueden existir sino bajo un gobierno formulado.

“El Congreso ha consagrado la federación, en el pacto fundamental, no solamente porque la nación lo había aceptado como base en sus precedentes, sino también por la seria convicción que tiene, que ella es la única forma de gobierno posible para nuestra República, en el estado actual de la civilización.

“La ciencia política aplicada a la práctica, ha dado resultados tan prodigiosos, que se pueden envidiar las condiciones que los producen; pero que no permiten poner ya en duda que el gobierno del pueblo por el pueblo, el gobierno de sí mismo, es el mejor de los gobiernos.

“La República una e indivisible de Venecia, fué el tirano de sus provincias hermanas de tierra firme; y las otras repúblicas italianas no trataron con más unidad a los pueblos

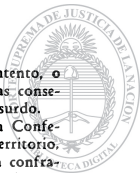


que les estaban sometidos fuera del recinto de sus capitales. La República unitaria francesa dos veces ha terminado en el imperio. Y ¿quién no descubre en los últimos tiempos de nuestro tirano unitario, un designio de esta misma naturaleza? Los pueblos no se hacen postrar como los elefantes, sino cuando un hombre quiere subir encima de ellos y sentar su trono sobre la ancha espalda de la bestia.

“El Congreso, con claras nociones, ha formulado al fin la federación, quitando a esta voz lo que tenía de peligroso en la vaga y absurda significación, vulgarmente recibida. Ha respetado la independencia provincial hasta donde alcanza la acción del poder local, conciliable con un gobierno general; y del excedente de las soberanías provinciales, formando un haz, ha organizado los poderes que deben representar una nación compacta a perpetuidad.

“La federación será bien entendida, si se comprende como en los Estados Unidos del Norte, única federación modelo que existe en el mundo civilizado, puesto que la helvética es artificial y permanentemente anárquica; y tampoco ha debido tomarse en consideración la caduca Confederación Germánica, que ha acumulado y consagrado en aquel suelo antiguo, tantos abusos, que el sublime pensamiento, alemán tiene que posarse en las nubes a falta de patria sobre la tierra. Será, por el contrario, pésima, si se creyese que podía resolverse en una oligarquía regularizada con una neutralización relativa, en la que predominaran las conveniencias de los que se apoderasen del poder, sacrificándole sin protección los intereses esenciales de los pueblos. Pero aún sería intolerable si, descendiendo en esta escala retrógrada, se la redujese a un pacto de conservación entre capitanejos. El pueblo argentino no ha interesado al mundo con su demasiada célebre ilustración, para ir a tomar el modelo de su gobierno en las pampas del sud, pobladas por hombres primitivos.

“La soberanía política absoluta no pertenece ni puede pertenecer de derecho a ninguna de las provincias argentinas; porque todas conquistaron el territorio en común; porque son solidarias en sus reveses y en sus glorias, y porque el martirio las ha fraternizado. Esta es su historia, y ella dice que es inverosímil que el pueblo argentino que ha hecho más que los contemporáneos para alcanzar a ser una nación, que, sin duda, podría presentarse grande, gloriosa y espectable, sin sus manchas y extravíos, haya podido conceder a cada una de



las provincias el derecho de burlarla en este noble intento, o qu no lo haya logrado por habérselos concedido. Las consecuencias dejan de ser legítimas desde que tocan el absurdo.

Es por estas razones que la Constitución de la Confederación Argentina abraza toda la extensión del territorio, vinculada por los lazos de tan íntima y bien pagada confraternidad, ella encierra y ciñe así toda sus ventajas y todos sus escollos; todas las condiciones de su existencia y las vastas necesidades que tiene que llenar.

“Una nación debe estar cierta de sus medios de defensa, para que, cuando el clarín anuncie una agresión o un insulto del extranjero, todas sus partes puedan venir con un solo espíritu en auxilio de su independencia territorial. Precaria sería su existencia si en su seno mismo pudieran los enemigos encontrar las eventualidades de una alianza. La autoridad de los gobiernos y la libertad misma de los pueblos, nada ganarían al lado de gobiernos rivales e independientes dentro del mismo territorio.

“Así, ha parecido natural y forzoso seguir en la Constitución una serie de consecuencias que se encadenan. Unidad e independencia del territorio nacional; libertad y garantías de los hombres que la habitan; libertad e independencia provincial; gobierno federal, garantía del libre ejercicio de los derechos y funciones de todos los poderes organizados.

“Tales son los motivos que ha tenido para proceder y el camino que ha seguido el Congreso constituyente de la Confederación Argentina, en las especiales circunstancias que lo han rodeado.

“La Constitución obligará a todas las provincias que están bajo la ley del Acuerdo de San Nicolás, desde su promulgación. Pero no ligará a la de Buenos Aires, antes que por aquella provincia sea examinada y aceptada. El Congreso declara que no se la impone: no quiere darse cuenta tampoco si tendrá el derecho de mandar en este caso. Se ha levantado delante de su vista la augusta imagen de la patria atormentada, y en su presencia no vacila en despojarse de su autoridad y del prestigio del poder, para pedir a Buenos Aires la aceptación del pacto fundamental, para suplicarle que se salve al amparo del orden constitucional, salvando así al país de males ciertos y de un porvenir espantoso.

“Si la Constitución impone sacrificios considerables a Buenos Aires, la heroica provincia es muy digna y capaz de



hacerlos. De otra manera faltaría a su destino aquel pueblo, y abdicaría su misión civilizadora en esta región.

“Si la Constitución la concierne distinguiéndola y asegurándole honorables ventajas, el Congreso se las difiere espontáneamente. Si su concurrencia trajese recargos e inconvenientes a la asociación argentina, el Congreso los acepta en nombre de la familia y de la nación. Finalmente, si la combinación que a Buenos Aires se refiere en la Constitución y en la presente ley orgánica hubiese de producir recursos, medios y facilidades para robustecer la existencia de la Confederación y promover sus mejoras materiales y morales, el Congreso está en el deber de no repudiar ninguno de estos elementos, en nombre del país, de su gloria y de su civilización.

“Intereses de todo género constituyen a Buenos Aires una especialidad de la familia argentina. Antes de la revolución y después, se han ejercido allí y desde allí, el poder general de la colonia y de la nación. Buenos Aires es por esto la más alta expresión de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestros caprichos, de nuestra política, de nuestra fuerza intelectual, poder y genio. El Congreso ha engastado este hecho múltiple en la Constitución, con las esperanzas legítimas que haya alimentado, con los derechos que haya producido, y aun con los abusos que a su arrimo se hayan creado. Si no es justo que una Nación rompa abiertamente con su pasado, no es prudente que lo continúe con las mismas formas que una larga experiencia ha probado que son disolventes y perturbadoras.

“En estas materias, ligar el pasado al presente, con las modificaciones y cautelas que la razón aconseja, es haber encontrado la solución propia de nuestro problema social.

“El Congreso se ha abstenido de cometer el crimen de decapitar al Estado; pero no ha querido reincidir en el error de hacer cabeza de la Confederación a la más fuerte de sus provincias. Por lo demás, el gobierno federal reconocerá a todos los gobiernos que le han antecedido, porque la autoridad es una y solidaria en todos los tiempos; así como es una y eterna la soberanía absoluta de la razón, en virtud de la cual mandan, y obedecen los que obedecen o son obligados a obedecer.

“Veinticinco años han corrido ya desde que un ilustre hijo de Buenos Aires, con una voz autorizada por el saber y la experiencia, dijo en el seno de la representación de esta mal-



aventurada nación:: “Es necesario que los señores representantes no se escandalicen y que no crean que se habla de aquella influencia que pueda ejercer un pueblo sobre los otros, para dominarlos y hacrlos servir a sus propios intereses, a sus pasiones y a sus caprichos.” “Pasó, señores, el tiempo en que un hombre, un pueblo, pudiera ejercer sobre los demás esta influencia.”

“En estas frases había, evidentemente, una reparación y un consejo contra las tendencias y conatos a reproducirse del fenómeno maldecido, y que con tanta razón preocupaba al sabio ministro.

“Ha transcurrido un cuarto de siglo, y en él, la República Argentina ha apurado hasta las heces los extremos de los mismos males que el orador patriota quería alejar con su voz, si hubiera podido darle la omnipotencia de los hechos; ¡ojalá que al revolver de igual período de tiempo, la Confederación no oiga pronunciar las mismas frases, como una reconvencción inútil y severa, reducida a formular el mismo reiterado deseo!

“Si la marcha del Congreso parece incoherente, y su obra original, es, precisamente, porque es idéntica, es porque, debiendo ser la expresión de una combinación de circunstancias, de hechos, de hombres y de cosas, de ella debe reflejar la fisonomía que todas estas especialidades tienen en el país. ¿Se rechazará el vínculo de paz, la garantía de la unión, el principio regenerador del orden y de la justicia, por el respeto consagrado a las interpretaciones arbitrarias de fueros mal definidos y de instituciones incompletas? No es concebible sin despecho y sin rubor, que la guerra de los fueros, mal copiada de la España, prive dos veces del orden constitucional, alejando sin término, de esta tierra envidiada, el trabajo, el reposo, la población, la riqueza y la prosperidad, el imperio de la ley que garante todos estos bienes, y la conciencia de la seguridad en su posesión, que sólo constituye la felicidad pública.

“Si al extremo de tantos conceptos y al cabo de hechos tan lamentables, viniese la cuestión pública a dar como última fórmula, que la Constitución se rechaza por eliminar una candidatura, entonces el Congreso hundiría su presente en el polvo y con la desesperación en el alma exclamaría al cielo: ¡Señor, exterminádnos, porque somos incorregibles! Reúnanse todas las fuerzas constituyentes activas y pensadoras del país;



jamás darán una Constitución, si se admite que es lícito rechazar una Constitución para rechazar una candidatura. Consultad a los sabios, y responderán que esto sería dar un reto absoluto a la anarquía contra el orden y hacerlo del todo imposible; recoged el voto del vulgo, y dirá que primero es hacer la liza para correr después la carrera. Basta, basta. ¡La sangre, el escándalo y el oprobio ahogan la voz del Congreso. Y ciertamente, teniendo a nuestra vista los cuarenta y dos años de nuestra historia, no se pueden encerrar los sentimientos que la actualidad subleva, en los límites de una discreta moderación.

“El Congreso no duda de su obra: ella tiene todas las condiciones de la ley. Las de vitalidad y ejecución deben venirle de los pueblos, de la obediencia que le presten, de la aceptación que les merezca, del acatamiento con que se reciba y del esmero con que la cultiven. No dudo tampoco del buen sentido del país, amaestrado por tan crueles desgracias. Arroyos de sangre no le han hecho alcanzar lo que deseaba: una sola gota de buen juicio hará prevalecer las buenas opiniones y aún podrá ser compensado. Pero, en todo caso, el Congreso tiene la consoladora convicción de que se ha elevado muy alto y ha descendido muy abajo para poder emplazar y responsabilizar delante de la historia y de la posteridad, a todos los que, hombres, pueblos o gobiernos, embaracen y frustren al país esta vez más, la deseada organización nacional. Hecha esta declaración, “El Congreso general constituyente ha sancionado . . . etc.” (Véase ley sancionada en págs. 244-45).

Cuando hubo concluído la lectura de este documento, el señor presidente abrió su discusión en general.

Obtuvo entonces la palabra el señor Llerena, y observó: Que por el tono declamatorio de esta pieza, le parecía impropia su colocación, formando un cuerpo con la Constitución, donde todo debe ser circunspecto como los preceptos que encierra. Que los términos en que estaba concebida, parecían antiparlamentarios e impropios por esta razón, para asociarse a los serios y graves trabajos del Congreso. Que opinaba, pues, por que se le diese otro lugar, en el que resaltaría su mérito incuestionable en relación a la Constitución, pero sin hacer parte de ella.

Ee señor Seguí agregó: Que, aunque de acuerdo en el todo y las partes de este documento, que juzgaba un trabajo de importancia, no quería, sin embargo, verlo delante de una





Ley, sino en forma de manifiesto que acompañase la Constitución y le sirviese de considerando, puesto que se ocupaba más de los preceptos contenidos en ésta, que de la ley de capital que le sigue y a que sólo se refiere en su última parte.

El señor Zavallía manifiesta igual opinión y explana las ideas del proponente.

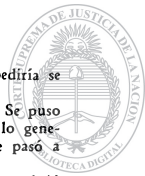
Los señores Derqui y Zapata se oponen a que se dé a la declaración otro lugar que el que ocupa, fundándose en que la ley sobre capital necesitaba de un documento como ese, que la explicase y recomendase a la aceptación de Buenos Aires sin lo que sería obscura e incompleta.

El señor Lavaisse y el señor Huergo expresan igual opinión.

Obtuvo la palabra el señor Gutiérrez, y dijo: Que parecía haber quedado reducida la cuestión sólo al lugar que debía ocupar el documento de que se hablaba. Que la comisión de negocios constitucionales no se negaría a hacer sobre esto alguna reforma, pero que su mente había sido que esa minuta de declaración sirviese de preámbulo a la ley sobre capital, aunque su contenido analizase también todo el cuerpo de la Constitución.

El señor Gorostiaga agregó: Que la minuta no formaba un solo cuerpo ni con la Constitución que la precede, ni con la ley que la sigue, pues hacía mención tanto de la una como de la otra, lo que la hacía más bien un manifiesto sobre ambos documentos.

Que se había dicho que eran antiparlamentarios los términos de la declaración, por la vehemencia de algunas de sus frases; que era preciso recordar las condiciones muy especiales en que se hallaba el país; que el Congreso habíase instalado en medio de la revolución y que era preciso no exigirle la frialdad y circunspección que le caracterizarían en épocas normales; que las ideas que desarrollaba la declaración, debían tener el tinte que les daba la actual situación de la República. Y añadió: que parecían estar todos conformes en el fondo y con la declaración, aunque no con el lugar que ocupaba, por creer más conveniente que se emplease como manifiesto a los pueblos. Que este deseo quedaría satisfecho, dirigiéndose por separado con un manifiesto a las provincias y una nota al Director provisorio que encerrasen en sustancia las mismas ideas que contiene la minuta



de declaración. Que, en atención a estas razones, pediría se conservase en el lugar que ocupa.

Se dió el punto por suficientemente discutido. Se puso en votación, y resultó aprobado unánimemente en lo general, la minuta de declaración, después de lo que se pasó a cuarto intermedio.

Vueltos a sus asientos los señores diputados, se abrió la discusión en particular de la minuta de declaración, dividida en fracciones.

Obtuvo la palabra el señor Zavalía, y dijo: que se había ocupado antes en elogiar la redacción y bellos conceptos de este documento, pero que no estaba conforme con el párrafo que empieza: "Si al de tantos conceptos," etc." Que pediría su supresión, porque veía en él algo de impaciencia o reniego, cuando se pedía al cielo el exterminio de los habitantes del país. Que podía esta parte ser redactada de nuevo por la misma comisión de negocios constitucionales, empleándose en ellas frases más suaves y propias del Congreso, al que debían caracterizar la majestad, la paciencia, una vista larga como la vida del pueblo y una fría reflexión sobre sus destinos.

El señor Gutiérrez contesto: "Que toda reforma en la redacción, cambiaría el concepto. Que las ideas de esa declaración resumían nuestra historia, y ésta no podía expresarse de otro modo que en los términos de aquélla. Que ¿cómo no pedir exterminio sobre los habitantes de un país que había vivido hasta hoy peleando por saber quién es el que manda, no por saber qué ley es la que se obedece?"

El señor Lavaisse agrega: Que, lejos de ser el lenguaje de la redacción de impaciencia y reniego, era el lenguaje del peniten, el de la Biblia con frecuencia, y del profeta Elías, cuando pedía fuego sobre la ciudad culpable.

Añadió el señor Seguí que no se hablaba de un exterminio real, porque en este caso no se conformaría él con la minuto de declaración en la parte que se trata; que él sólo la consideraba como una valiente frase, como una imagen aterrante de las que suelen emplearse para corregir.

Después de ligeras observaciones que hicieron a este respecto los señores Derqui, Zavalía y Seguí, pasando este último a considerar otro punto de la minuta en discusión, pidió se suprimiesen las palabras: "Hecha esta declaración", que ligaba la minuta a la ley sobre capital, fundándose en que



no debía existir un vínculo entre las palabras de ambos documentos, cuando no lo había tan inmediato en las ideas que encerraba uno y otro. Que, una vez separados, si se realizaba la ley, quedarían en pie la declaración y los principios emitidos en ella.

El señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, se manifestó conforme con la supresión que propuso el señor Seguí; mas no hubo igual conformidad de parte de los demás señores de la comisión.

Se procedió en seguida a votar si el punto estaba suficientemente discutido, y resultó la afirmativa general.

Se pusieron en votación sucesivamente las tres fracciones en que se dividió para su consideración en particular la minuta de declaración. Obtuvieron las dos primeras aprobaciones unánimes, y la tercera por mayoría de once contra siete.

*Lectura del proyecto de ley sobre capital. — Su discusión y aprobación.* — El señor Presidente ordenó en seguida la lectura del proyecto de ley sobre capital, y abrió su discusión en general. No habiendo quien tomase la palabra, se procedió a votar, y resultó aprobado en lo general unánimemente.

Leído el artículo 1º y puesto a discusión, el señor Seguí dijo: Que, dispuesto como estaba a votar en favor del artículo en cuestión, quería explicar su voto y la razón por qué lo había dado en contra del artículo 3º del proyecto de Constitución que establece la capital. Que siempre había creído que la capital de Buenos Aires era una necesidad o una condición esencial de nuestra organización política; pero no opinó por que se estableciese como artículo constitucional; que hoy que veía establecido el principio en una ley orgánica que fijaba las condiciones de esa capitalización, él votaría por ella.

Se puso a votación el artículo 1º y resultó aprobado por unanimidad.

Puesto a discusión el 2º el señor Seguí pidió se reductase en esta forma: "Todo el territorio comprendido entre el Río de la Plata, el de Conchas y puente de Márquez siguiendo la línea paralela al del Plata, hasta encontrar su



perpendicular tirada sobre ella desde el puerto de la Ensenada, hasta radas", etc.

El señor Gutiérrez, miembro informante de la comisión, aceptó las observaciones hechas para fundar su proyecto el preopinante, y propuso a su vez la siguiente redacción: "Todo el territorio que se comprende entre el Río de la Plata y el de las Conchas hasta el puente de Márques, y desde aquí, tirando una línea al S. E. hasta encontrar su perpendicular desde el río de Santiago, encerrando la Ensenada de Barragán, las dos radas, Martín García", etc.

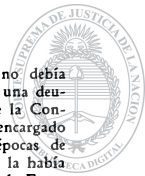
Conforme el señor Seguí con esta redacción, y votado en esta forma el artículo 2º, resultó aprobado por unanimidad.

Al día siguiente (4 de Mayo), se procedió a la discusión del artículo 3º de la ley de capitalización, que hacía la orden del día; y no habiendo quien observase nada sobre él, se puso a votación, resultando aprobado por unanimidad, igualmente que el artículo 4º.

El señor Presidente dijo entonces: Que deseando tomar la palabra sobre la ley en discusión, pedía al señor vicepresidente primero, que ocupase su asiento.

Obtuvo entonces la palabra el señor Zuviría, y dijo: que pedía en este artículo la supresión del último inciso "y garante su medio circulante", por inútil y alarmante: *inútil*, por hallarse sustancialmente contenido en la parte anterior del mencionado artículo, que esperaba la aceptación de las acciones, no menos que los deberes contraídos por la provincia de Buenos Aires. *Alarmante*, porque siendo notoria la circulación en la ciudad de Buenos Aires de más de doscientos veinte millones papel moneda, bastaría que los pueblos se apercibiesen que pudiera extenderse hasta ellos, para que resistiesen o recibiesen con frialdad la Constitución, la ley sobre capital y cuantas más emanen del soberano Congreso, lo que podía evitarse con la supresión propuesta.

Ele señor Gorostiaga, miembro informante de la comisión, dijo: Que no consideraba inútil el inciso cuya supresión pedía el preopinante, porque, debiendo contener el artículo en cuestión todas las cargas que han de pesar sobre la República, aceptada la ley sobre capital, ese inciso se contraía a fijar clara y terminantemente una de ellas, cual es que la nación garante el medio circulante de la provincia de Buenos Aires, lo que no importa decir que ese papel moneda



será de circulación forzosa en la República. Que no debía tampoco parecer *alarmante* a las provincias, garantizar una deuda contraída en gran parte por Rosas, a nombre de la Confederación y para objetos nacionales. Que, como encargado de las relaciones exteriores, había mantenido en épocas de paz, agentes en el extranjero, y en tiempo de guerra la había sostenido contra el Estado Oriental y Bolivia, contra la Francia y la Inglaterra. Que doscientos millones de pesos papel era una deuda insignificante, cuando al amparo de la Constitución se instalasen las autoridades generales y se estableciese un banco nacional; y, que, por último, no debía salir la alarma a los pueblos, del seno mismo del Congreso. Que creía bastante lo aducido para explicar la mente de la comisión, en la redacción del artículo de que se trataba.

Pidió la palabra el señor Llerena, y dijo: Que la supresión propuesta por el señor diputado de Salta, le parecía un punto serio y digno de la consideración del Congreso, pues consideraba de justicia y derecho que la República en masa no debía responder de los compromisos monetarios contraídos por una sola provincia, bajo su exclusiva responsabilidad, y sin compensación de ningún género; pues era bien notorio que los valores monetarios a que se hacía alusión, emitidos profusamente, habían sido invertidos en su mayor parte, no en gastos nacionales, los cuales han figurado siempre, en el período anterior, por muy poca cosa en los presupuestos del gobierno general, sino más bien en gastos que podían muy justamente considerarse como exclusivos de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, porque en su inversión no habían tenido la menor influencia ni parte el resto de las otras provincias confederadas. Que él no creía debiera excusarse por alarmante ninguna cuestión de cuya ventilación pudiera resultar alguna luz para los altos intereses nacionales, sobre todo cuando las dilucidaciones eran llevadas con la mesura y tino característicos del cuerpo representativo de la nación, de cuyas ilustradas decisiones dependía el porvenir de ésta. Que, en consecuencia de lo expuesto, él se adhería a la moción hecha por el señor diputado por Salta.

El señor Gorostiaga dijo: Que ésta había sido mal interpretada por el preopinante, porque el señor diputado de Salta no había dicho que la nación no debiese cargar con la deuda que pesa sobre Buenos Aires, sino que se supri-



miera el último inciso del artículo, por hallarse sustancialmente contenido en el primero. Que, a pesar, pues, de que sólo se pedía una supresión de palabras, él sostendría el artículo tal cual estaba redactado, porque el pensamiento de la comisión estaba claramente expresado en él, y porque el Congreso debía ser terminante y explícito en sus declaraciones.

El señor Desquí observó: Que el hecho de la garantía no importaba la amortización del papel moneda. Que si esa no podía efectuarla la República, por lo menos podía garantizar ese medio circulante, puesto que hoy lo garante la provincia de Buenos Aires. Que no entraba a considerar si esos valores emitidos han servido o no a objetos nacionales, sino que era de justicia y necesidad que la nación reconozca como suya la deuda y cargas de su territorio; que le entregaba su capital con todas sus ventajas, acciones y derechos, dando de este modo la solución más propia a nuestras interminables cuestiones políticas. Que creía, pues, inconducente la cuestión en el terreno a que se había llevado.

A lo cual contestó el señor Llerena: Que no juzgaba del mismo modo que el preopinante, pues que las consideraciones por él aducidas, tendían únicamente a hacer presente al Congreso su modo especial de considerar una cuestión tan vital para los intereses nacionales; y, por último, que el señor diputado por Salta fundaba su moción sobre consideraciones, que eran las que habían motivado la expresión de su disenso. Que el país se hallaba interesado en que sus representantes fundasen sus opiniones en razones sacadas del estudio de sus verdaderos intereses, y que en este sentido pedía al Congreso lo excusase si siempre continuaba expresando con igual franqueza sus convicciones.

El señor Seguí observa: Que el giro de la discusión originada del pensamiento expresado por el diputado por Salta, contrariaba el espíritu de éste, el cual, reconociendo el principio, trataba de modificar la redacción, mientras que el señor diputado por San Luis cuestionaba el deber de la nación a reconocer la deuda de Buenos Aires; que este reconocimiento, en su concepto, era un acto de justicia, desde que Buenos Aires haga la cesión de sus derechos, y con este recurso salve el país.

Se puso a votación si el punto se hallaba o no suficientemente discutido, y resultó la afirmativa por unanimidad.



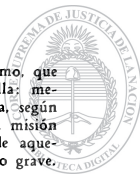
Puesto a discusión el artículo quinto, fué aprobado por mayoría; discutido y votado el sexto lo fué por unanimidad.

Se puso en seguida en discusión el artículo séptimo.

Obtuvo la palabra el señor Zuviría, y dijo: Que, sancionado el artículo tercero de la Constitución, y los seis primeros de la presente ley, nada podía decirse ni en pro ni en contra de él; que hacía veintiseis años que se dictó por primera vez la ley de capitalización, y que desde entonces le había acompañado la convicción de su utilidad, conveniencia y quizá necesidad nacional; mas nunca de la justicia o derecho de dictarla sin el libre consentimiento de la provincia de Buenos Aires. Pero que, felizmente, la comisión había salvado este inconveniente en el artículo anterior, dejándole la libre admisión de la presente ley. Que, con el sincero deseo de que ella tenga su debido cumplimiento, deseaba se evitasen todos los inconvenientes que contrariasen su mejor éxito. Que en el artículo en cuestión, contrabía algunos puntos de gravedad y quería exponerlos ante la comisión y el soberano Congreso, para que, si los reconocía tales, procurase salvarlos. Que no era reconocido en el soberano Congreso el derecho de nombrar una comisión de su seno, sin entenderse previamente con el ejecutivo nacional, único encargado de la ejecución y cumplimiento de las leyes que dicte el Congreso, conforme lo prescriben algunos de los artículos del acuerdo de San Nicolás; que todo otro procedimiento lo creía inconstitucional y depresivo de las atribuciones del ejecutivo. Que todas las leyes que emanen del soberano Congreso sólo podían ser presentadas al supremo Director, para que éste les dé el curso conveniente y conforme al acuerdo de San Nicolás. Que presentarlas a la ciudad de Buenos Aires por medio de una comisión del soberano Congreso, importaba cumplirlas y ejercitarlas por sí mismo, lo que estaba fuera de sus atribuciones.

Que aún era más grave inconveniente el que fuera a presentarlas a una ciudad sitiada y hostilizada de su orden, a su nombre, o con su autorización; a una ciudad cuyas autoridades eran desconocidas por el mismo soberano Congreso, como él lo era desconocido por ellas; que aún eran desconocidas por su misma campaña, que había retirado sus diputados. Que todas estas circunstancias envolvían la nulidad de los actos o los exponía a ello para lo sucesivo.

Que tampoco podían ser presentadas tales leyes, sin previa suspensión de hostilidades, medida que no podía pro-



ceder del soberano Congreso, sino del Director supremo, que sitiaba la ciudad y desconocía las autoridades de ella: medida que podría exponer el éxito de la actual guerra, según las circunstancias en que se tomasen. Que esta sola misión del Congreso importaba el reconocimiento tácito de aquellas autoridades, pues se dirigía a ellas con un objeto grave.

Que tampoco creía político ni oportuno que una comisión del soberano Congreso fuese a sujetar la remisión de la Constitución y demás leyes, ante las autoridades no reconocidas y disidentes de una ciudad o provincia, sin conceder o reconocer igual derecho en las demás de la Confederación, o darles pretextos para que ellas reclamen, en premio de su obediencia y subordinación a las autoridades nacionales, lo que se concede a la otra por disidente y hostil: agregó que cuál sería el éxito de la Constitución y demás leyes orgánicas, para las demás provincias, en caso de ser aceptada por Buenos Aires con tales y cuales reformas y supresiones; que cuál sería el éxito de las mismas, si con aquel precedente se dejaba a las provincias el mismo derecho concedido a Buenos Aires. Y concluyó pidiendo al supresión del artículo citado, o su modificación por la misma comisión, de conformidad con las ideas emitidas en su precedente exposición.

El señor Gorostiaga dijo: Que había dicho el señor diputado por Salta, que el Congreso carecía de derecho para nombrar una comisión de su seno, sin entenderse previamente con el ejecutivo nacional. Que a esto contestaría: primero, que no había estado en lo mente de la comisión redactora del artículo, que la comisión que por él deba nombrarse cerca del gobierno y autoridades provinciales de Buenos Aires, pase por sobre el Director, sino que, llegándosele antes, y uniformando sus miras con las de él, procure hacer valer su influencia, poder, recursos para el mejor éxito de la misión que lleva, esto es, invitar a Buenos Aires en la forma posible a aceptar la Constitución y leyes orgánicas sobre capital. Que, aunque no fuera esto así, no creía que el Congreso careciese de facultades para enviar comisiones de su seno, pues el del año veintiseis, teniendo un ejecutivo, mandó comisiones a las provincias; y la sala de Buenos Aires, en mayo de mil ochocientos cincuenta y dos, sancionó un voto de gracias y lo llevó al vencedor una comisión de su seno, sin previa consulta del ejecutivo. Que se había dicho por el señor diputado proopinante, que no era político





ni oportuno se sujetase la revisión de la Constitución y demás leyes, ante Buenos Aires disidente, sin conceder igual derecho a las provincias obedientes y sujetas. A lo que contestó que la razón por que se presentaba a Buenos Aires la Constitución y leyes orgánicas, era sólo porque, no habiendo enviado al Congreso sus diputados ni tomado éstos parte alguna en la sanción de aquéllas, era indispensable le fueran ofrecidas a su aceptación *in integrum*, a lo que estaban obligadas de antemano las demás provincias. Pero que ni a éstas ni a Buenos Aires se había concedido el derecho de *revisión*, al que aludía el señor diputado de Salta; y terminó su discurso remitiéndose a una minuta de comunicación que acababa de introducir en secretaría, y que explicaba, a su juicio bien claramente, los objetos de la comisión que debía nombrarse una vez sancionada la ley sobre capital, y los medios que debía emplear para el lleno de su misión.

El señor Derqui dijo: Que la Constitución sancionada era ley para las provincias ligadas por un pacto anterior, como el de San Nicolás; pero que, no habiendo sido aceptado éste por Buenos Aires, la Constitución no podía ser remitida al Director para que la haga cumplir respecto de aquella provincia, y era indispensable la previa invitación y en la forma dispuesta.

El señor Zuviría dijo: Que, buscando el acierto, no excusaría su idea por humilde que fuese; que le había sido grato oír que la comisión debe entenderse antes con la autoridad ejecutiva nacional; pero insiste en que, siendo este el pensamiento de la comisión, se exprese así en el artículo en cuestión.

Dióse el punto por suficientemente discutido, previa una votación de que resultó afirmativa en general.

Puesto en votación el artículo 7º, resultó aprobado por mayoría. Puesto a discusión y votación el 8º, obtuvo igual resultado.

Quedó sancionada la ley, en los siguientes términos:

“El Congreso general constituyente ha sancionado, bajo la condición expresa que ella contiene, con fuerza de ley, lo que sigue:

Artículo 1º — Conforme al artículo 3º parte 1º de la Constitución, la ciudad de Buenos Aires es la capital de la Confederación.



Art. 2. — Todo el territorio que se comprende entre el Río de la Plata y el de las Conchas, hasta el Puente de Márquez, y desde aquí tirando una línea al S.E. hasta encontrar su perpendicular desde el río de Santiago encerrando la Ensenada de Barragán, las dos radas, Martín García y los canales que domina, corresponden a la capital, y quedan federalizados.

Art. 3º — La capital y el territorio señalado en el artículo anterior, quedan bajo la inmediata y exclusiva dirección de la legislatura y presidente de la Confederación.

Art. 4º — Todos los establecimientos públicos de la capital son federales.

Art. 5º — La Confederación se sustituye en todas las acciones, no menos que en todos los deberes y empeños contraídos por la provincia de Buenos Aires, y garante su medio circulante.

Art. 6º — La provincia de Buenos Aires será invitada a instalarse y constituirse con arreglo a la Constitución, en el territorio restante de la misma provincia.

Art. 7º — La provincia de Buenos Aires será invitada en la forma posible, por medio de una comisión del seno del Congreso, a examinar y aceptar la Constitución de la Confederación y la presente ley orgánica.

Art. 8º — En el caso inesperado de que la provincia de Buenos Aires rehusase aceptar la Constitución y la presente ley, el Congreso general constituyente sancionará una ley de interinato para suplir la capital de la Confederación.

Art. 9º — Comuníquese al Director provisorio".

Se pasó a cuarto intermedio, y vueltos los señores diputados a sus asientos, el señor Gorostiaga pidió se resolviese sobre tablas la minuta de comunicación al Director provisorio, que había introducido en secretaría, fundándose en la urgencia de su remisión con la Constitución y leyes orgánicas.

Después de un breve debate, se puso a votación, "si se había o no de resolver sobre tablas la minuta presentada". Resuelta esta proposición por la afirmativa por mayoría, el señor Gorostiaga observó: Que podía pasar como orden del día para la sesión siguiente y permanecer en secretaría para que tomasen conocimiento de ella los señores diputados, sin que dejase por eso de ser considerada sobre tablas como se había dispuesto. El señor Presidente ma-



nifestó que debían nombrarse los individuos que debían integrar la comisión, y el señor Gorostiaga añadió: Que a la de negocios constitucionales tocaba indicar su número; que en calidad de órgano de ella, indicaba el número de tres; y el soberano Congreso aprobó unánimemente el número señalado. El señor Presidente, previa votación, en virtud de ser avanzada la hora, levantó la sesión; aplazando para la siguiente el nombramiento de la mencionada comisión, y la consideración de la minuta de comunicación.

*Discusión y aprobación de la minuta de comunicación al Director provisorio, haciéndole saber que el Congreso firmó la Constitución el 1º de Mayo.* — En la sesión del 5 de mayo se abrió la discusión en general sobre la minuta de comunicación al Director provisorio, que hacía la orden del día y es como sigue:

Señor:

“El Congreso general constituyente convocado por vuestros esfuerzos y reunido en Santa Fe por el voto espontáneo de la nación, ha firmado el primero de mayo de este año la Constitución de la Confederación Argentina. La encierra y contiene el código auténtico, con la firma autógrafa de todos los diputados presentes en Congreso, igual a la Constitución matriz que se halla firmada y refrendada desde fojas diez hasta fojas veinte del gran libro de acuerdos, leyes y decretos del Congreso general constituyente, en su sala de sesiones en la ciudad de Santa Fe.

“El Congreso os remite este código, para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del acuerdo de 21 de mayo de 1852, dispongáis que se expidan inmediatamente las órdenes a fin de que la Constitución que contiene, sea debidamente promulgada y jurada con solemnidad en toda la extensión del territorio, pueblos, distritos y comarcas que abrazan las trece provincias representadas en Congreso.

“El Congreso ha declarado que esta Constitución será presentada al examen y libre aceptación de la provincia de Buenos Aires, por el órgano de las autoridades que actualmente existen en ella o por las juntas o convenciones que se formen al efecto.



“El Congreso os remite igualmente, señor, los códigos auténticos que contienen la “declaración de las leyes orgánicas de capitalización, de aduanas y municipalidades”. Estas leyes deberán someterse del mismo modo, al examen y libre aceptación de la provincia de Buenos Aires, porque sancionadas para facilitar y atender a todo el país, el pacto fundamental de la Confederación que constituye de todo el territorio una nación compacta a perpetuidad, la libre aceptación de la provincia de Buenos Aires suplirá su lamentada ausencia del Congreso general constituyente.

“El Congreso queda profundamente convencido que la Constitución sancionada con las leyes orgánicas que la completan, encierra en sí la solución propia de nuestros más difíciles problemas sociales. Y, penetrado de vivísimo deseo de hallar un remedio para la ominosa actualidad de esa provincia de Buenos Aires, no puede dejar de expresar su convicción y su esperanza de que en estos mismos actos del Congreso se encuentra la más poderosa y eficaz transacción, buena para el presente, y como justa e inalterable, buena para mañana y para todo tiempo.

“El Congreso ha determinado mandar una comisión de su seno, para que proceda a realizar la presentación de la Constitución a la provincia de Buenos Aires y recabar su aceptación en la forma posible. Toda consideración es debida a la distinguida provincia de Buenos Aires; y el Congreso en circunstancias difíciles y serias, no ha debido negárselas, ni dar el ejemplo de mostrar su patriotismo agotado, cuando para conseguir la unión hace sacrificio y abnegación de todo, excepto de su conciencia de legislador, que se resume en hacer justicia a todos, armonizando las cosas y los principios.

“Han merecido ser nombrados para desempeñar esta misión de suma importancia, los señores diputados nacionales...

“El Congreso espera que les daréis crédito, que les facilitaréis los medios necesarios y conducentes al buen desempeño de su misión, y que vos mismo, señor, haréis concurrir a este objeto toda vuestra influencia y poder, disponiendo las circunstancias de manera que la comisión sea recibida sin repugnancia, en el silencio del estrépito de la guerra y del tumulto de las armas. Así la comisión podrá prestar también un oído atento y solícito a las inspiraciones del patriotismo de la provincia de Buenos Aires.



“La comisión lleva el encargo especial de expresar los sentimientos y votos del Congreso hacia vuestra persona en las relaciones con el grande acto cuya ejecución se prepara fijar los destinos de la Confederación.

“Desde luego, empezará por agradeceros, señor, la completa independencia en que habéis dejado al Congreso constituyente para meditar, combinar y sancionar la Constitución, que su ardiente patriotismo, su conciencia y su leal saber y entender le han inspirado. Este hecho modesto, legado a la historia por esta franca y verídica confección, ha de formaros en el porvenir el más precioso timbre de vuestra gloria.

“Los contemporáneos imparciales, y la patria constituida, cuando mediten los hechos, nuestro punto de partida y las circunstancias cuya presión hemos sufrido, echando una vista retrospectiva y haciendo una apreciación sana y sesuda del presente, dirán como el Congreso dice y siente hoy: Que jamás héroe alguno hizo más grandes promesas a los pueblos y que nunca fueron cumplidas con más lealtad. El primero de mayo de 1853 contiene los fastos memorables que justifican esta verdad.

“Vuestra es, señor, la obra de la Constitución, porque la habéis dejado formar sin vuestra influencia ni concurso; y es por esto que podéis libremente sacudir las hojas de su libro, para calmar todas las pasiones, y levantarla en alto como enseña de la concordia y fraternidad alrededor de la cual se reunirán los patriotas de todas las opiniones, los que tengan un honrado celo por el bien público y todos aquellos que, susceptibles de este sentimiento que hermosea los primeros días de la patria, sean capaces de sacrificarle las preocupaciones de partido y las mezquinas adhesiones de localidad.

“El Congreso, obligado por la naturaleza de sus graves tareas, a meditar sobre el destino de las sociedades y sus revoluciones, se ha imbuído de la idea de que las revoluciones sólo son legítimas cuando salvan las ideas, los pueblos, sus intereses esenciales, la honra entre ellos y los derechos que la humanidad, emancipada por el cristianismo, ha afirmado por la civilización. Nuestro lúgubre pasado antes de mayo de 1851, justificaba una revolución, si hay alguna que pueda ser necesaria; pero legitimarla sólo podía el intento y la reparación. El Congreso encontró igual en el válido programa del primero de mayo de aquella fecha. En el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos ha visto el medio; y el Congreso instalado, reunido



al fin y objeto el poder, debió hacer que la obra correspondiese al designio y la ejecución al instante. La Constitución, señor, de la Confederación Argentina ha legitimado nuestra revolución. El Congreso os defiende la gloria de Washington. No podéis aspirar a otra.

“Un mediano talento y un alma tenaz y perversa bastan para hacer triunfar el error en el poder, la tiranía en el mando. Mas para afirmar y consagrar en las costumbres públicas los principios eternos de la justicia, se necesita del genio que los comprenda, destello de la Divinidad que los implantó en el hombre.

“Las convulsiones de los pueblos, cuando terminan en el traspaso del poder irresponsable de una mano a otra, son usurpaciones execrables; porque, no aventajando en nada la condición de la sociedad, le añaden el trastorno y sus consecuencias, que siempre son un cortejo más o menos lleno de lágrimas, de sangre y de crímenes.

“También quedáis a cubierto de esta maldición.

“La historia, con la pluma mojada en tinta de oro, ha escrito ya vuestro pronunciamiento del 1º de mayo, la célebre e inmortal victoria de Monte Caseros, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, y con reciente data, la Constitución de la Confederación Argentina. ¡Notable página! ¡Serie admirable y única en nuestros anales! Puede desafiar antecedentes seculares, y desesperar a la imitación! La crítica encontrará en todos estos sucesos, hechos y actos, algo que conservar como obra humana. La observación y la filosofía descubrirán en ellos el dedo de la Providencia.

“Pero la malignidad más suspicaz no señalará en el conjunto de su armonía, ni extraviada la ambición del libertador, ni la influencia de la personalidad del general Urquiza, quedando de bulto, sola, la más grande gloria del pueblo argentino, a la que saluda profundamente el Congreso, porque ante ella puede inclinarse la nación con dignidad.

“El Congreso prevé que la sabiduría del mal consejo, y la prudencia que disfraza a la debilidad, han de reprochar a la Constitución los defectos de su mérito. Poniendo en contraste la ignorancia, la escasez de población y de riqueza y hasta la corrupción de los pueblos y provincias que componen la Confederación, con las exigencias de la Constitución, deducirán de aquí su inoportunidad y su impertinencia, y muy listos la condenarán como inadecuadas. El tirano ponderó y



exageró estos mismos pretextos; ¡y por ventura él, con su omnipotente mano de hierro, ha devuelto a los pueblos mejorados, después de veinte años de martirios? ¡Decepción y escándalo! Aun cuando esta desgraciada y misera situación fuera natural a estos pueblos, aun cuando tuviéramos a la vista la especie social que se supone desgraciada e ineducable, el legislador no podía ni debía emplear su ciencia para disimular y confirmar este monstruo social; antes debiera consagrar el arte y el poder contra la misma naturaleza, para corregirla. Decepción y escándalo, señor. Dios creó al hombre bueno y sociable bajo todas las latitudes. El argentino lo es, y por serlo, su sangre generosa ha corrido a torrentes. El sentimiento de lo justo le ha hecho reclamar, tal vez con exageración, la justicia, el sentimiento de su dignidad, los derechos de libertad, seguridad y propiedad. Los instintos de progreso le hacen reclamar con impaciencia todas las mejoras y todas las reclamaciones morales, intelectuales y comerciales. La Constitución llena estos conatos. Y porque los atiende cumplidamente, el Congreso espera que la Confederación Argentina, restituída al goce de todos sus derechos, por medio de una Constitución que garantice todas las aspiraciones, todos los intereses, todas las ambiciones y partidos legítimos, bajo la sumisión a la ley y a las autoridades que los moderan, imprimiéndoles su acción legal y útil, puede y debe bajo tales condiciones entrar en la carrera de los pueblos democráticos y civilizados.

“El Congreso os dirige, señor, sus íntimas felicitaciones y os saluda respetuosamente.

“Todo lo que, por orden del soberano Congreso constituyente me cabe, señor, el alto honor de comunicaros.”

No habiendo quien observase nada sobre la minuta, el señor presidente la dió por suficientemente discutida en lo general, y puesta a votación, resultó unánimemente aprobada.

El señor Seguí propuso que una nueva lectura de toda ella bastaría para su consideración en particular, ahorrándose de este modo tiempo y su división en partes, que sería impropio por la naturaleza del documento. Puesta a votación esta indicación, resultó admitida por mayoría de sufragios, y la minuta de comunicación aprobada por unanimidad.

Se procedió al nombramiento de los individuos que debían componer la comisión que llevase a la provincia de Buenos Aires la Constitución sancionada, y resultaron nombrados los señores del Carril, Gorostiaga y Zapata.



***La comisión dá cuenta al Congreso Constituyente de una entrevista celebrada con el Director provisorio en su cuartel general de San José de Flores.*** —

Los diputados nombrados a fin de llevar la Constitución a la provincia de Buenos Aires, y al Director provisorio, dieron cuenta en una nota enviada al Congreso, fechada el 20 de julio de 1853, de una entrevista celebrada con el general Urquiza el 22 de mayo, en su residencia de San José de Flores. Los comisionados refieren al Congreso el resultado de la entrevista en los siguientes términos:

Partiendo de Santa Fe el quince de mayo último, llegaron el veintidós del mismo por la noche al lugar de la residencia de S. E. el Director Provisorio en su cuartel general de San José de Flores.

No es ciertamente propio anotar en una exposición oficial las observaciones íntimas que los Comisionados consignarán en este párrafo. Pero les ha parecido que hay una necesidad de oportunidad, como medida de justa apreciación para los contemporáneos y de instrucción para los venideros en no defraudar a unos y otros de su conocimiento.

S. E. recibió con la más completa complacencia a los comisionados. “Me traen Uds. la Constitución — dijo. Ya la conozco; no la juzgo menos buena, regular, mala; una constitución necesitaba el país para empezar su vida política, su vida de orden y de progreso. El Congreso ha colmado mis deseos. No aspiro a mandar: la condición social de las Provincias Argentinas es en la actualidad infelizmente tal, que solo un tonto o un pícaro pueden pretender el mando de ellas. Quiero por esto mismo la Constitución, por egoísmo. Tengo familia, propiedad y un nombre que poner bajo el amparo de la ley; y como toda persona que tiene un bien que conservar, tengo interés en que estos bienes sean garantidos.” Decía esto S. E. con tal abandono y acento de verdad que añadían una fuerza irresistible a la exactitud de su reflexión.

En seguida agregó: “el 25 de Mayo expediré el decreto de promulgación, para que la Constitución sea la ley de la Confederación Argentina; y así la memoria de los ilustres varones que el 25 de Mayo de 1810 concibieron el proyecto atrevido de emancipar estos países, recibirán un homenaje que correspondiendo a sus intenciones, nos lave delante del mundo de la mancha de degradación que nuestros extravíos de cuarenta y dos años nos han merecido.”





Los comisionados suplicaron a S. E. que les concediese una audiencia oficial, para que tuviese lugar la presentación y solemne recepción de la comisión y leyes del Soberano Congreso, a lo que tuvo a bien acceder señalando el día 24 de Mayo para este acto.

*Acta de la entrega de la Constitución Argentina al General Urquiza por la Comisión del Congreso Constituyente.* — En San José de Flores, a veinte y cuatro de Mayo de 1853, recibidos en audiencia pública e introducidos a la presencia del Excmo. Señor Director los Sres. Diputados Comisionados del Soberano Congreso Constituyente, D. Salvador M. del Carril, D. José Benjamín Gorostiaga y D. Martín Zapata y el oficial de la secretaría del Congreso, portador de la cartera, D. Pedro Carril, con la venia de S. E. tomó la palabra llevando la voz de la comisión, D. Salvador M. del Carril, y dijo:

Señor:

Honrados por el Soberano Congreso Constituyente con la comisión de presentar oficialmente a S. E. el Señor Director Provisorio la constitución de la Confederación Argentina, llenamos tan respetuosamente nuestro distinguido encargo depositando en las manos de V. E. el contenido de la cartera, de que hemos sido fieles conductores, a saber: la constitución de la Confederación Argentina sancionada por el Soberano Congreso Constituyente el 1<sup>o</sup> de Mayo de 1853, en la Ciudad de Santa Fe, rubricada con la firma autógrafa de todos los Señores Diputados presentes en Congreso, un Códice von la declaración y leyes orgánicas de centralización de Aduanas y Municipalidad. Autorizadas y refrendadas por el Sr. Presidente y Secretario del Congreso. Acompaña a estas piezas la Nota misiva del mismo Cuerpo Soberano que tenemos el honor por último de entregar en las manos de V. E. Los Comisionados añadiendo a este acto sus particulares agradecimientos y congratulaciones podrían terminarlo: pero animados por la bondad de V. E. se permitirán manifestarle la esperanza consoladora que ha sostenido al Congreso en sus penosos trabajos, y es que esta Constitución aceptada francamente por V. E. y mandada ejecutar con la lealtad que el cuerpo Soberano ha reconocido en todos los altos hechos de V. E., encierra asimismo los medios más eficaces para resta-



blecer la paz en toda la República, para afianzar la unión y para hacer la ventura de la Confederación en una época muy próxima.

No obstante esto, el Congreso sabe, que en la Confederación Argentina como en todos los pueblos nuevos, las leyes no pueden desarrollar su benéfica influencia por sí mismas, ni sacar todo su valor práctico del mérito de su letra muerta, y que las instituciones no obrarán con toda su fuerza y vigor por su sola estructura y combinación en los pueblos, en que el sentido moral y político no está suficientemente desenvuelto y experimentado; la sociedad y sus instituciones necesitan abrigarse bajo el ala de una ilustración gloriosa que las comprenda y las apoye con el prestigio de su nombre, hasta que, encarnadas en las costumbres del pueblo, ellas mismas fecundándose reproduzcan los grandes hombres que deben guiarlo.

No estaba en las atribuciones del Congreso dar un conductor a la Nación, pero en su nota misiva no ha ocultado que ve al conservador de la constitución en su creador y ha señalado a la Confederación Argentina la gloria, la Ilustración y el nombre que deben servir de escudo, de campeón guardián fiel a su Constitución.

Señor gracias os sean dadas. Dios os tenga en su santa guarda y proteja a los Argentinos todos, bendiciendo las sanas y rectas intenciones del Congreso.

El Excmo. Señor Director contestó en los términos siguientes:

Señores: Veo por lo que me decís que están colmados mis deseos, puesto que me presentáis la ley constitucional de la Confederación Argentina. Como muchos otros patriotas que me son queridos y que me honro en llamar mis amigos, he consagrado mi vida entera al triunfo del sistema Federal, proclamado por la gran mayoría de la Nación. Hoy que ese sistema deponiendo sus banderas de partido, se ha hecho ley de la República por medio del congreso constituyente que representáis aquí, podéis creer que a nada más aspiro que a verla religiosamente cumplida. Deseo que me acompañen en esta esperanza, todos los que han trabajado por tener instituciones y todos los que han luchado para que esas instituciones fuesen federales. Alcese, pues, bien alto la ley nacional y sea de todos profundamente respetada, puesto que a mí me ha cabido el deber de hacerla ejecutar, os aseguro que lo haré



comprimiendo con vigor las aspiraciones subversivas de los anarquistas: al mismo tiempo con el desinterés y la calma de mis esfuerzos sabré traer al terreno tranquilo del orden constitucional que habéis creado los buenos sentimientos extravíados por falta de datos y de experiencia.

Para constancia se acordó levantar ésta que fué firmada en la fecha arriba indicada.

*Decreto del Director provisorio de la Confederación Argentina promulgando la Constitución.* —

Vista la presentación de la Constitución federal de la República, que el Congreso general Constituyente le ha hecho por medio de una Comisión especial mandada de su seno; y en cumplimiento de la estipulación duodécima del Acuerdo celebrado en San Nicolás de los Arroyos en 31 de Mayo de 1852:

DECRETA:

Artículo 1º — Téngase por ley fundamental en todo el territorio de la Confederación Argentina la Constitución federal sancionada por el Congreso constituyente el día primero del presente mes de Mayo en la ciudad de Santa Fe.

Art. 2º — Imprímase y circúlese a los gobiernos de provincias, para que sea promulgada y jurada auténticamente en comicios públicos.

Dado en San José de Flores, a veinticinco días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y tres.

*El pueblo de la República jura respetar, obedecer y defender la Constitución Nacional.* — La Constitución sancionada por el Congreso de Santa Fe, fué recibida con entusiasmo jubiloso por el pueblo de la República.

Los Gobernadores de las provincias, de acuerdo con las disposiciones del general Urquiza, fijaron el día 9 de Julio de 1953, aniversario de la declaración de nuestra independencia, para hacer jurar por el pueblo la Constitución Nacional, de conformidad con la fórmula que les enviara y que decía así: "Nosotros, ciudadanos argentinos, juramos por la Santa Cruz en que se inmoló el Redentor del Mundo, respetar, obedecer y defender la Constitución política de la Confederación



Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente el 1º de Mayo de 1853."

La Constitución fué jurada con patriótico entusiasmo, y las gloriosas estrofas del himno, hermanadas a ese juramento, dieron a la ceremonia la emoción de las grandes solemnidades, en ese día doblemente célebre para los argentinos.

Entre las oraciones patrióticas para festejar tan fausto acontecimiento, no podemos menos que citar el sermón que Fray Mamerto Esquiú pronunciara en la iglesia Matriz de Catamarca, y que la valió por sí solo para ocupar un lugar prominente entre los grandes oradores argentinos, pues como se ha dicho con razón "su voz fué tan poderosa que no obstante el lugar en que, habló se oyó en todos los ámbitos de la República". Dijo: ... "Argentinos! Es por esto, que al encontrarse en la solemne situación de un Pueblo que se incorpora, que se pone de pie, para entrar dignamente en el gran cuadro de las naciones, la Religión os felicita, y como Ministro suyo os vengo a saludar en el día más grande y célebre, con el doble grandor de lo pasado y de lo presente, en el día en que se reúnen la majestad del tiempo con el halago de las esperanzas."

"Con sus felicitaciones, os traigo también sus verdades".

"Cuando cesáis de ser vaporosos y fugitivos, todo es grave y solemne: cuando entráis en un camino de verdad, todas las realidades deben concurrir y desaparecer utopías y vanas peroratas. Más feliz y mejor avisado que los que siempre os quieren hallar en 1810, me cabe la suerte de admiraros en el Nueve de Julio de Mil Ochocientos Diez y Seis y Mil Ochocientos Cincuenta y Tres. Yo no haré más que reflectar sobre vosotros, los rayos de gloria y principalmente las verdades que arroja este día sublime y magnífico."

"La independencia de la antigua metrópoli, el sacudimiento de ese yugo que era por desgracia el cimiento del orden y el hierro de los tiranos, esa libertad, que ha resonado en los campos de batalla, y se ha mecido sobre las reuniones populares, que ha sido hasta aquí el eterno y único emblema de nuestra vida social, es preciso reconocerla como el árbol del bien y del mal, como una aureola, pero como una aureola de fuego que ha secado, calcinando la cabeza que orlaba. ¿Por qué, nosotros, que ahora cuarenta años teníamos la bondad y sencillez de un niño, con el valor de un adulto, hemos sido por casi medio siglo la presa de todas las pasiones políticas, el



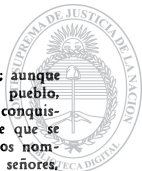
campo de todos los partidos, un teatro vasto de guerra y de desolación? ¿Por qué hemos mimado los tiranos que se señorearon de nosotros, provincial y nacionalmente? Entrad con toda la luz de vuestra inteligencia en los laberinos de este problema, y no hallaréis más causa que la independencia. Ella rompió, es verdad, el lazo que nos unía al usurpador; pero también engendró la desunión entre nosotros, y esa sola ruptura con su triste consecuencia fué nuestro estado normal, la ensalzamos sobre la Patria misma, sobre todo Gobierno y buenas costumbres, y nos lanzamos con el ardor de las fieras al combate del egoísmo individual: la libertad seca y descarnada como un esqueleto, ha sido nuestro ídolo, en sus aras hemos hecho hecatombes humanas!"

"Enjugemos las lágrimas, y alejando la vista de lo pasado, tendámosla por el porvenir de la gloria nacional, que el 9 de Julio ha creado en su doble acontecimiento."

"La libertad sola, la independencia pura no ofrecían más que choque, disolución, nada; pero cuando los pueblos, pasado el vértigo consiguiente a una transformación inmensa, sosegada la efervescencia de mil intereses encontrados y excitados por un hombre de la providencia, se aunan y levantan sobre su cabeza el libro de la Ley, y vinen todos trayendo el don de sus fuerzas, e inmolando una parte de sus libertades individuales, entonces existe una creación magnífica que reboza vida, fuerza, gloria y prosperidad: entonces la vida se espacia hasta las profundidades de un lejano porvenir".

"Tal es el valor del acta de nuestros Padres, reunidos en Tucumán, y de su complemento, la Constitución hoy promulgada y jurada. Descansen ellos rodeados de gloria. ¡Gratitud eterna al amigo fiel dela Patria! Urquiza, ilustre ciudadano! Tu nación te debe la vida!"

"La vida ,señores! Porque las naciones no la tienen en la demarcación de un territorio, ni en un cierto número de individuos encerrados en ese espacio. Será todo esto los primeros elementos de que se forman; pero así como el filósofo antiguo no veía en su negro caos que contenía en horrible movimiento las moléculas eternas, nada del pasmoso Universo, nada de ese gran libro que encierra todas las ciencias: del mismo modo, señores, por más que tracéis una línea, que naciendo en el cabo del continente americano, corra sobre la nieve de los Andes, atraviase con el trópico, y bajo con las aguas del Plata y del Océano hasta las escarchas del Polo; por más



que señaléis los puntos poblados de este suelo querido; aunque descorráis el tiempo y me mostréis la historia de un pueblo, que gimiendo trescientos años bajo las cadenas del conquistador, en un día solemne las sacudió tan reciamente que se pulverizaron en más de mil leguas; aunque mentéis los nombres venerados de San Martín, de Belgrano! todavía, señores, si este pueblo no ha correspondido a sus principios, si no ha tenido leyes, si sus formas de gobierno son las de la revolución, si sus miembros eran arrebatados por el huracán del capricho y de la arbitrariedad, si ese tiempo y ese espacio sólo brotan guerra, sangre, desolación; ¿en qué queréis que vea una nación, mi alma afligida? ¿Dónde está su vida, si la muerte se encuentra por todas partes? ¿Dónde ese suelo, si nuestro pie siempre se hunde? ¿Dónde los gobiernos, que son la expresión social, si el derecho público sancionó la revolución?"

"Pero llega la Constitución suspirada tantos años de los hombres buenos; se encarna ese soplo sagrado en el cuerpo exánime de la República Argentina! Nuestro pasado refleja ya sobre nosotros todas sus glorias; y lo presente abre en el porvenir un camino anchuroso de prosperidad. A mis ojos se levanta la patria radiante de gloria y majestad."

"Sin embargo, el inmenso don de la Constitución hecho a nosotros, no sería más que el guante tirado a la arena, si no hay en lo sucesivo inmovilidad y sumisión: inmovilidad por parte de ella y sumisión por parte de nosotros."

"La vida y conservación del Pueblo Argentino depende de que su Constitución sea fija; que no ceda al empuje de los hombres; que sea un ancla pesadísima a que esté asida esta nave, que ha tropezado en todos los escollos, que se ha estrellado en todas las costas, y que todos los vientos y todas las corrientes la han lanzado. Renunciamos con justicia a nuestra primera metrópoli; descabezamos después la República, y todos los Pueblos se precipitan a apoderarse de la presa: conquistamos la Soberanía Nacional, después la Soberanía Provincial, y si no es la debilidad de nuestras campañas, habríanse erigido en nuestro suelo desierto, cien estados soberanos: destruimos la monarquía, fuimos republicanos, ora unitarios, ora federales, reacción, anarquía, gobierno de un año, de dos años, triunviratos, dictaduras, oligarquías..."

"No rechazo modificaciones en las leyes por sus órganos competentes, los tiempos, las circunstancias, el interés co-



mún tal vez lo reclamen; pero si es para ensanchar la órbita de nuestra libertad, por contemporizar intereses particulares cualesquiera, fácil es prever la eterna dominación de dos monstruos en nuestro suelo: anarquía y despotismo."

"Sumisión universal que abraza todos los puntos de la ley sin exceptuar ninguno. No hay un hombre, que no tenga que hacer el sacrificio de algún interés; y si cada uno adopta la Constitución, eliminando el artículo que está en oposición a su fortuna, a su opinión, o a cualquiera otro interés, pensáis que quedaría uno sólo ¿quedaría fuerza ninguna, si cada una retirara la suya? ¿quedaría en la carta constitucional la idea de soberanía que supone, si cada individuo, hombre o pueblo fuese árbitro sobre un punto cualquiera que sea?"

"Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad: existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina: y concediéndonos vivir en paz, y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el Cielo de la Bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, por quien y para quien viven todas las cosas."

*Juramento del Presidente y Vicepresidente de la República.* — El Congreso General Constituyente se reunió el 20 de Febrero de 1854 a fin de practicar el escrutinio de la selecciones presidenciales verificadas de conformidad con la Constitución Nacional, y declarando en esa sesión nombrados respectivamente Presidente y Vicepresidente de la República a los ciudadanos Justo José de Urquiza y Salvador María del Carril, señalando el 5 de Marzo para la recepción oficial de los electos. Ese día el Presidente del Congreso manifestó que el objeto de la sesión era recibir el juramento constitucional al Presidente y Vicepresidente electos de la Confederación que habían llegado ya a la ciudad de Santa Fe, y muy luego se presentarían en la sesión; disponiendo en consecuencia, que una comisión compuesta de los señores diputados Godoy, Padilla y Torrent saliesen a recibirlos y los condujesen al salón de las sesiones, pasándose a un cuarto intermedio, mientras se anunciaba su llegada.

Habiéndose dado el aviso de su venida, volvió a continuar la sesión, presentándose pocos momentos después en el



salón de las sesiones, el presidente y vicepresidente electos, guiados por la comisión predicha y acompañados de los miembros del gobierno nacional delegado, del encargado de negocios de S. M. B., del de igual clase de S. M. Fidelísima y de los miembros del gobierno de esta provincia.

Después de ocupar sus respectivos asientos y leído el decreto de nombramiento, su excelencia el señor presidente electo prestó en manos del presidente del Congreso, el juramento constitucional, en la forma siguiente:

“Yo, Justo José Urquiza, juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Confederación, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Confederación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Confederación me lo demanden.”

A su vez lo prestó en los mismos términos su excelencia el vicepresidente electo, doctor don Salvador María del Carril.

En seguida el presidente de la Confederación puso en manos del vicepresidente de la misma, el siguiente manifiesto, que éste leyó en alta voz:

Al Soberano Congreso y a la Nación:

El blanco más hermoso de la ambición del hombre es merecer la estimación de una nación valerosa y libre. Ved ahí porque es altamente satisfactorio y glorioso haber obtenido el nombramiento de la Confederación Argentina para la presidencia, durante el primer período constitucional.

Esta elección que habéis declarado intachable, revela los sentimientos y las necesidades de los pueblos; me colma de honra y obliga mi gratitud tanto, cuanto esta generosa afectación de las almas nobles puede contenerse en el corazón humano.

La historia de esta República heroica por sus hechos, ilustre por su inteligencia y meritoria por sus vicisitudes y padecimientos, cautiva la admiración de los hombres sensibles, y fija, sin duda, la atención y el estudio de las naciones de uno y otro continente.

Desde las márgenes del Plata hasta el Tupungato, y desde allí hasta el Chimborazo, hay una serie continua de marcas de sangre, que como una línea telegráfica señalan el paso y las hazañas que acabaron sus héroes en los llanos y en los valles, que se derraman de las montañas de los Andes, de un lado hasta los grandes ríos, y del otro hasta el mar Pacífico.





El Estado Oriental, el Paraguay, Chile Bolivia y el Perú recibieron de ella la revolución, el impulso de su pensamiento, la forma y la substancia de las instituciones que las ilustran. Y cuando este pueblo hubo acabado tan gigantes obras, recogido dentro de sus propios límites, la concentración de tanta vida y de una expansión tan habitual, debió producir lo que fatalmente produjo por falta de dirección conveniente a fuerzas tan activas, rompiéronse las arterias de este pueblo sin asiento, entre las convulsiones que lo han agitado para encontrarlo; rompiéronse, y es doloroso decirlo, la sangre que de ellas ha vertido ha sido suficiente para empapar la inmensa extensión de su territorio.

Aun había mucha vida, en el marasmo mortal que terminó el 3 de febrero de 1852.

En aquel día el pueblo argentino resucitó como siempre grande, como siempre glorioso y como siempre desventurado.

Quedan, por tanto, como alto patrón de su existencia en su breve historia, páginas en que el buril acerado de la gloria ha grabado hondamente los títulos de la nacionalidad y de la majestad del pueblo argentino; al paso que hay otras en que sus extravíos, sus errores y sus infortunios de todo género rodeando de obscuras sombras aquel magnífico diseño, hacen resaltar de bulto la noble y varonil figura de la nación argentina.

Un pueblo de esta fisonomía exige en los que la providencia y su propia elección llamen a presidirlo, la conciencia de la dignidad necesaria para representarlo, y la firme voluntad de moderarlo y preservarlo.

El mando de la República Argentina es hasta hoy el propósito más serio, más difícil y más digno de absorber la inteligencia del hombre más privilegiado, por la grandeza de sus pensamientos y la elevación y nobleza del corazón.

Yo deseaba exonerarme del mando, porque sus condiciones no pueden ser destemidas por los que no se sientan animados por un genio superior: los hombros más robustos no pueden cargar con su peso y andar con paso breve y des-  
embarazado. Quería exonerarme del mando, porque no tengo ambición, y en esto la opinión de mis amigos y la de mis enemigos está de acuerdo con las revelaciones íntimas de mi conciencia. Conociendo la magnitud del compromiso, puedo hacer esta franca confesión, sin que se interesen en ello ni mi vanidad ni mi modestia.



Para dar libertad al pueblo argentino en Caseros, bastante era prestarse dócil a ser el humilde instrumento de la providencia; para gobernarlo se necesita entrar un poco en sus designios, y conocer profundamente la naturaleza de las leyes y tendencias de las sociedades. Para dar cabo al honroso programa de mayo de 1851, suficientes eran las cualidades que conducen a la adquisición de la gloria. Para acometer el que ha abierto a los pueblos de la Confederación el libro de mayo, se necesita la virtud que da apoyo a la gloria.

Contando todo: tengo el ardiente patriotismo que ha guiado todas mis acciones en la carrera activa de la vida. Conservo claro y vehemente el instinto del orden que me lanzó a servir a la política de don Juan Manuel de Rosas, cuando todo el país, cansado de la anarquía, juzgó como yo, él debía ponerle término, constituyendo el orden general bajo las bases de la igualdad democrática, asentadas en los pactos federales. No he perdido aún, gracias a Dios, la voluntad firme de hacer prevalecer aquellas sanas opiniones, aquellos instintos y sentimientos santos que me decidieron a castigar la Tiranía y a reivindicar para las provincias argentinas la parte de herencia que les cupo en la revolución, y para el honor argentino la constitución de su nacionalidad.

Con estas insuficientes calificaciones quería exonerarme del mando y, sin embargo, tengo que dar cuenta de los motivos que me han decidido a aceptarlo.

He estudiado la cuestión del veto a mi candidatura, con aquella ansiedad del que espera encontrar en su solución la salida del mayor conflicto en que puede encontrarse mal puesto el hombre entre sus deberes y sus predilecciones privadas.

El Congreso la había previsto, y hallándola colocada en las regiones de lo absurdo, la estigmatizó, lanzándole las maldiciones del cielo y de la tierra, para evitar su aparición.

No obstante, el fantasma temido de la discordia apareció, y la cuestión se promovió por una de sus inspiraciones apasionadas, sin duda, como puede colegirse por el extremo alcance que dió con poquísimo tacto a sus fórmulas perentorias la facción dominante en Buenos Aires. Penoso es decirlo; pero me siento precisado a reconocer la crueldad exquisita de mis enemigos, en la obligación que tengo de hablar en esta materia; que si por un aspecto es puramente per-



sonal, enrola en ella misma las cuestiones políticas de la más alta transcendencia.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en actos y declaraciones oficiales, en protestas que se han divulgado delante del mundo; en sanciones que llevan la forma de leyes, ha declarado que se niega a dar cumplimiento a los pactos federales de antigua data, ya frustrados otra vez, por don Juan Manuel de Rosas; que desconoce el último tenido en San Nicolás para preparar el cumplimiento de los anteriores, aunque a él había concurrido con la misma representación que las provincias copartícipes en el primero, de concurso con las del resto de la Confederación. Mandando retirar sus diputados del Congreso general constituyente, desconoció su autoridad soberana; declarando que por aversión al hombre que había promovido la organización nacional, Buenos Aires no aceptaría ninguno de los hechos preparatorios, ni su forma definitiva; que presumiendo que las provincias argentinas darían su voto para presidir la Confederación al general Urquiza, Buenos Aires por rechazar esa candidatura, rechazaría la Constitución y quebrantaría la unidad nacional. Añadiendo en seguida el hecho a las declaraciones, aquel gobierno ha condenado a la Confederación Argentina a una interdicción política, con riesgo de traer consigo la interdicción mercantil.

Justo es observar que estas demasías, menos notables por el fondo que por las formas; sin modelo, de cualquier modo en la historia contemporánea, no han tenido lugar sin que contra ellas se hubiese protestado solemnemente. Veinte mil hombres de la campaña de Buenos Aires, apoyados en una porción considerable de los más distinguidos ciudadanos de la capital, levantaron su voz y sus brazos contra una política que, no sofocada prontamente en su cuna, robustecería las dificultades creadas ya, para restablecer la concordia entre pueblos hermanos, y para reconstruir la nacionalidad argentina, cruelmente fraccionada por las armas de la pasión y del interés. El patriotismo no se ha extinguido hasta tal punto en Buenos Aires, que pudiera dejar de sentirse y comprenderse esta simple noción del sentido común, que no competía a ninguna fracción del pueblo de aquella provincia colocar en uno de los brazos de la balanza la suprema suerte del país y en el otro un nombre más o menos simpático; sino que debían todos propender a colocar a Buenos Aires



con el resto de las provincias en estado de dar su sufragio y hacerle respetar la voluntad soberana de la nación.

No es de mi propósito recordar las causas que frustraron esta patriótica pretensión; pero no debo privar a la porción sensata de los habitantes de Buenos Aires, de la gloria y de la gratitud que los argentinos de todas partes les han de deferir por un pronunciamiento que concuerda más con su aventajada inteligencia y el conocimiento de los mejores intereses de aquel pueblo. Saben todos que Buenos Aires tiene mucho que ganar, por la modesta igualdad que ostente entre sus hermanas, por el espíritu de justicia que les manifieste y por los sentimientos de fraternidad y de conciliación con que retribuya el homenaje de respeto que todas rinden a su importancia y antecedentes.

Desairadas las provincias y el Congreso general constituyente, no pudieron resolverse a entregar de nuevo sus destinos a las agitaciones palpitantes del aislamiento y de la tiranía anárquica de que acababan de librarse. Ni tampoco debieron dejarse imponer la supremacía exorbitante que denuncian las pretensiones oficiales de Buenos Aires. Ellas tienden a establecer que el voto de uno tiene contra todos los asociados los efectos de la nulidad que los condenaría a la sumisión, a la muerte, a la inacción. Que el número menor debe prevalecer contra el mayor. Y que finalmente, ni los principios, ni las instituciones son aceptables, siempre que las personas que las han proclamado o les han prestado su influencia con justo y legítimo interés en promoverlas, no sean personalmente agradables y simpáticas a cada uno y a todos los que tienen necesidad y obligación de recibirlas y de dárselas. Ni son estas todas las consecuencias absurdas que se siguen a tales pretensiones; pero en rigor, no se puede afirmar que la facción dominante de Buenos Aires acepte la responsabilidad teórica de sus actos. Las pasiones no tienen lógica en sus impulsos y las más exaltadas se concretan, por lo regular, en la fórmula extrema del desprecio o de la ira. Esto quiero, porque así lo quiero. Eclipses de razón que responsabilizan a los pueblos delante del criterio del mundo y lo sujetan al fallo tremendo de la historia.

Bien; no altera esta conducta en nada nuestra alta misión. El país, el Congreso y yo, hemos jurado sostener la Constitución misma en que demostramos a los pueblos civilizados del universo el respeto que tenemos por la unidad



nacional; y al mismo tiempo, que nuestros sentimientos de confraternidad y de justicia por la provincia de Buenos Aires, no han sufrido la menor mengua. Con la conciencia de la verdad y de la razón en que se funda el derecho y de la resignación que extirpa los rencores más profundos, hemos tomado una gota de agua de la herencia común para apagar nuestra sed de bienestar, y pedimos paz a nuestros hermanos para gozar un momento de reposo, en que podamos con nuestros propios recursos y a virtud de nuestros esfuerzos, repararnos de cuarenta años de desastres, de barbarie y discordias.

Sancionada la Constitución, con el éxito que se ha visto, para Buenos Aires, las provincias la aceptaron con amor y con juramentos. Juraron ellas sostener y aceptar en su creencia política, los principios de la igualdad democrática entre los miembros de la sociedad de que se compone la Confederación, y las doctrinas económicas que sancionadas por ley han dado, por fin, solución a las cuestiones sangrientas que han dividido a estos pueblos desde su emancipación. Natural era que, tratándose de constituir la autoridad, cuando los principios de la Constitución eran contestados por la oposición de Buenos Aires, los pueblos procediesen en consecuencia de sus opiniones y sentimientos. Aquella resistencia les advirtió que no era simplemente el magistrado que eran llamados a elegir, era además el campeón y el guardián en quien habían de depositar su confianza y la defensa de los hechos y de los principios de que estaban en posesión, que eran invitados a designar. Constituir una autoridad, es declarar un principio reconocido por una mayoría de razón y encargar quien lo sostenga para el bien social como un dogma y una base del bienestar de todos. La persona investida de esta autoridad, debía ser la personalidad de los derechos y de los principios sancionados por la Constitución. Los pueblos me han deferido este honor. Yo, el inaugurador del programa de Mayo de 1851, el libertador en Caseros y el proclamador de la Constitución, podía rehusarlo? No podía.

También digo, con la misma franqueza, que si Buenos Aires hubiese aceptado la Constitución, yo me habría anticipado a sus antipatías y dirigiéndome a los comicios públicos, habría dicho al país: "No poseo, para un simple magistrado, las cualificaciones necesarias. Aceptada la Constitución de Mayo por todas las Provincias de la Confederación Ar-



gentina, las libertades públicas no necesitan de un campeón especial que las defienda. Quedan bajo la custodia de la razón pública y de la aprobación general. Descargo a todas las conciencias, de la gratitud que por mis anteriores servicios crean deberme, y por única recompensa solicito que se me permita envanecerme de ser el primero que rechace mi candidatura. No insistáis, porque a ningún precio conseguiréis doblar mi irrevocable determinación." Los que puedan poner en duda esta resolución hipotética, no conocen, sin duda, la dignidad de ciertas posiciones, ni la importancia social que ellas confieren, ni la severidad de los deberes que imponen. La conducta pública del hombre es regida por reglas muy distintas de las que odebece en privado. Yo sé bien que por estas leyes, la sociedad sería inexorable en condenarme severamente, si hubiese insistido en imponerme sobre una población cuyo odio no hubies epodido vencer y cuyas simpatías no hubiese podido conquistar. No me perdonaría la sociedad la falta de contemplación y de condescendencia por las susceptibilidades recelosas de un pueblo que se había permitido declararse ingrato a su libertador, por horror de la monstruosa y extravagante tiranía de don Juan M. de Rosas, y por lo mismo que se reconoce culpable de haberla, creado con sus inconsideradas deferencias y sus propios exagerados aplausos.

He dicho los principales motivos que me han determinado a encargarme del mando de la Confederación. La voluntad nacional y la extrema e inconveniente oposición de los disidentes, me han forzado a aceptar un compromiso, que cualquiera que sean mis disposiciones individuales, no podía rehusar sin deshonor. Soldado y jefe de la revolución de mayo, no podía negarle mi concurso cuando era llamado a prestárselo en garantía de sus esenciales intereses. Argentino y muy lastimado por nuestras vergonzosas discordias, he hecho la paz e ntodas partes, acabando la guerra, y no haré si no en defensa del territorio y del honor nacional; entre hermanos, no se renovará sino en el caso extremo que lo requiera la propia defensa, conformándome en esto con los deseos tan idénticos a mis personales opiniones, de todos los pueblos de la Confederación.

Debo ocuparme ahora del programa del gobierno que me habéis impuesto, y de las más prominentes consideraciones que tendré en vista en el desempeño de la presidencia de la República durante el primer período constitucional.



El programa qu prescribí al gobierno nacional delegado, mereció justos aplausos de todas las provincias; y puedo afirmar con entera satisfacción, que la conducta del gobierno delegado ha sido notable por la moralidad de sus disposiciones y por la transcendencia inmensa de actos a que habéis prestado vuestra sanción. Continuaré, paciente, activando el desarrollo de aquellas prescripciones.

Muy luego procederé a convocar los cuerpos colegisladores y al establecimiento de la alta corte de justicia federal. Rodeado del consejo del país legal, será fácil allanar los inconvenientes que oponen los malos hábitos y desuso a la aplicación de la Constitución, y al general reconocimiento del principio de la autoridad en sustitución del de la fuerza bruta y material del poder.

La fuerza que no apoya, destruye y aniquila, y para que llene el primer objeto es condición necesaria que la ley autorice su intervención, porque entonces hay seguridad de que la razón gobierna elementos mortíferos cuando quedan entregados al capricho o al ímpetu de las pasiones. La verdad, la buena fe y la justicia altamente profesadas por la autoridad, reducen a raros casos el empleo necesario de la fuerza.

La libertad civiliza y fecunda.

La libertad sin la moderación es una odiosa algazara.

La libertad sin las costumbres y la religión, carece de garantías.

La libertad sin el trabajo y la industria, no tiene ocupación digna.

Anunciaron estas verdades, es decir que tenemos otras tantas necesidades que demandan en la práctica su aplicación.

Estoy resuelto a no dejar privar a la Confederación de su hermosa Constitución, acordando pusilánimes respetos a los que quieran abusar de la Constitución para destruirla.

Procuraré, en los límites de la ley, animar la propagación del espíritu religioso; porque la religión guarda al hombre, donde la ley lo abandona.

El trabajo encontrará donde quiera el capital que lo alimenta. Habéis sancionado el estatuto para la administración de la hacienda y crédito público, y con ello se ha resuelto la explotación del suelo argentino, por el propio crédito y la vigorosa actividad del pueblo que lo habita.

Dormíamos indigentes en el seno de inmensas riquezas y nos despedazábamos en las agitaciones del malestar, por



no saber qué hacer con tan exuberante vitalidad sin ocupación ni empleo. En adelante, el crédito habilitará el trabajo, despertará la industria y estos agentes puestos en movimiento, multiplicarán la producción y realizarán las anticipaciones del crédito. El gobierno dará el impulso, primero a las mejoras materiales, y es de esperarse que la gran masa de inercia que estos trabajos disloquen, ha de imprimir su acción en circunferencias céntuplas. El crédito y el trabajo no pueden vivir sin la seguridad, sin el orden, sin la ley. Más interesados todos en el trabajo y en el crédito que lo habrá creado, la consecuencia necesaria es que el país quedará verdaderamente constituido y afirmado por la fuerza de los intereses materiales y el apoyo de las fuerzas racionales directivas.

Este porvenir está cerca de nosotros: las emociones de nuestros pechos anuncian su proximidad y la fuerza del patriotismo y la gravedad del propósito que nos reúne aquí, delante de Dios y de la patria argentina, es una revelación del seguro y futuro destino que nos aguarda.

Nuestras relaciones con los estados vecinos llevarán siempre el sello de la benevolencia y de la amistad lealmente cultivadas. Las nacionalidades independientes del Estado Oriental y del Paraguay han de obtener constantemente de nuestro gobierno la declaración y el reconocimiento del principio en que se ha basado su existencia y la necesidad de conservarla.

Respecto de las otras naciones extranjeras amigas, pondremos de nuestra parte el más esmerado anhelo para conservar con ellas una amigable y cordial inteligencia y esperamos que, por su parte, esta conducta leal, sea sinceramente retribuida. El derecho público argentino sancionado en la Constitución, ofrece la más amplia seguridad de que estas importantes relaciones puedan conservarse con utilidad recíproca, y que el gobierno argentino tendrá por máxima de práctica útil, apoyarlas con todas ellas por tratados solemnes.

Señores diputados del soberano Congreso general constituyente: He recibido de vuestras manos el depósito sagrado de la Constitución que he jurado sostener y hacer ejecutar y cumplir. Con este acto solemne habéis dado fin a un importante y glorioso trabajo. Para vuestro honor tenéis suficiente recompensa con los numerosos testimonios de aprobación que habéis recibido de todas partes y con las bendiciones de que os han colmado todos los pueblos. Mas, para vuestra satisfacción y la mía, quiero obser-





varos que hemos realizado una obra que tiene consigo los caracteres de oportuna y estable. ¿Qué es la voluntad del hombre cuando los tiempos no han llegado? Consultad a los ancianos de estos pueblos y ellos os dirán lo que no cesan de repetirse con asombro y gratitud. "Estas mismas cosas queríamos en tal o cual época; pero las deseábamos por instinto y combatíamos por ellas sin conocerlas sino en embrión; y hoy se nos presentan claras, distintas y formuladas". Es, señores, que la providencia se ha revelado a la inteligencia de todos y esto es un síntoma infalible de que los tiempos han llegado; que la organización de la Confederación es hoy una evolución fatal de los tiempos, que se cumplen. ¿Quién ha sostenido vuestro patriotismo? ¿Quién ha comunicado firmeza a vuestras resoluciones, en las angustias, en los conflictos, en el desamparo y privaciones que habéis soportado constantes, durante el largo período constituyente? Vuestra fe inconstable, sostenida por el conocimiento claro de las necesidades de los pueblos.

Señores: nos hemos reunido por la primera vez, en el mismo día en que termináis con felicidad y con gloria vuestra alta misión. Yo me congratulo de ello, porque puedo aprovechar esta ocasión única de haceros la justicia de reconocer que en vuestras obras no queda el menor vestigio de que hayáis cedido a ninguna influencia, si no es a la del patriotismo más puro y desinteresado; así como en vuestros actos todos, se revelan las solas inspiraciones de la prudencia y de la firme voluntad de hacer el bien que puede sostener la prueba de muchas edades. Demos gracias a Dios porque hemos podido realizarlo, librándonos de nuestras propias pasiones que nos hubieran sugerido una obra flaca y perecedera.

Concluída la lectura, el presidente del Congreso, contestó en los términos siguientes:

Señor Presidente:

El Congreso constituyente acaba de depositar en vuestras manos el poder ejecutivo de la República. Después de haber dictado la ley aceptada y jurada con entusiasmo, bajo cuyos auspicios la Nación ha de vivir libre y feliz, termina su misión dejando esa ley bajo la poderosa custodia del vencedor de Caseros. Se han cumplido los votos del pueblo argentino y de sus representantes. Se ha llegado al grande objeto de la ambición legítima de los pueblos, y el Congreso, con la conciencia de su lealtad y el conocimiento de la vo-



luntad de sus comitentes, cree ha llenado su mandato. Dios, señor, ante quien habéis jurado con el corazón del verdadero soldado de la libertad, ser fiel a la Nación y a la ley, os ayudará a realizar sus esperanzas!

Os agradezco, señor presidente, en nombre del soberano Congreso, las honrosas clasificaciones que habéis hecho de sus tareas constituyentes. Vuestra aprobación es una de las recompensas dignas del patriotismo ardiente y puro de sus miembros.

Y a continuación, declaró:

“El presidente y vicepresidente de la Confederación están en el ejercicio de sus funciones constitucionales.”

Dándos con esto por terminada la sesión.

*Manifiesto del Congreso Constituyente al pueblo al clausurar sus sesiones.* — El 7 de Marzo de 1854, el Congreso General Constituyente celebró su última sesión, aprobando antes de su disolución el siguiente manifiesto dirigido al pueblo :

El Congreso acaba de recibir el juramento de ley al primer presidente constitucional de la Confederación y al vicepresidente de la misma. Sus sesiones están cerradas.

Las últimas palabras del Congreso serán dirigidas a los pueblos ,así como han sido consagrados a ellos todos sus pensamientos.

El Congreso no os hablará de sus sacrificios. ¿Quién puede estar exento de éstos, siendo hijo de un país tan perseguido como el nuestro por la desgracia?

Pero, si los tiempos pasados fueron lamentables para la República, el porvenir que empieza desde hoy, está cargado de promesas de felicidad.

Para que estas promesas se realicen, no hay necesidad de grandes esfuerzos.

Los pueblos argentinos están destinados por la providencia a ser felices, sin más condición que la de vivir en paz y sometidos a la ley.

Este fué el convencimiento del Congreso cuando se decidió a dictar la Constitución, y a presentarla como medio de alianza, entre las opiniones divididas, como apoyo a los esfuerzos de la industria, y como garantía para la libertad y para el orden.



El entusiasmo con que los pueblos la han jurado, es una prueba de que las primeras necesidades del país han sido consultadas en ella, y de que está vaciada en el molde de la opinión.

El Congreso no ha limitado a esto sólo su acción; por- que fué su encargo coordinar todos los elementos de la vida política del pueblo argentino.

Dictó la ley de 4 de mayo de 1853, capitalizando la ciudad de Buenos Aires. Esa ley es reglamentaria de un artículo constitucional sancionado, no por voluntad caprichosa, sino por los antecedentes históricos y económicos de la República, para resolver un problema difícil, y para conciliar los intereses de toda la Confederación con los de la provincia de Buenos Aires. Si aquella ley no ha tenido efecto, saben los pueblos que no ha sido por defecto de justicia ni de esfuerzos patrióticos, por parte de las autoridades que dirigían la política de la Confederación; y como el Congreso no quiere ser juez en cuestiones en que la pasión ha tomado parte tan activa, entrega su fallo al juicio del pueblo argentino, descansando en la alta sinceridad de sus intenciones.

Ha dado su sanción en nombre del país, a los tratados celebrados para garantir la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y para asegurar para siempre los beneficios del comercio y de la civilización, tanto en el litoral como en el interior de nuestro territorio, rico de productos demandados en los grandes mercados del mundo.

El Congreso está seguro de que la posteridad bendecirá a los redentores de ese cautiverio federal a que estuvieron condenados aquellos grandes canales que nos dió la providencia para nuestra prosperidad y engrandecimiento; cautiverio a que estuvieron reducidos, por errores de economía y de gobierno, transmitidos en herencia, por el régimen metropolitano, cuyas cadenas quebrantamos a costa de tanta sangre argentina; derramada en la gloriosa lucha de la independencia.

¿Qué habría conseguido el Congreso creando un ser sin vida y sin acción?

Uno de los elementos de existencia indispensables para el país es la Hacienda, la cual, puesta al servicio de los poderes nacionales, según las disposiciones de la Constitución, ha de llevar la prosperidad a todos los ángulos de la Con-



federación, satisfaciendo sus necesidades e impulsando la explotación de sus riquezas.

Por esta razón, y después de maduras deliberaciones, sancionó con breves reformas el estatuto de hacienda y crédito público y la tarifa de aduanas, presentados en proyecto por el gobierno delegado. Con estas leyes protectoras de nuestras nacientes industrias, hemos echado una verdadera base de oro a nuestra prosperidad futura; y sin recurrir a empréstitos extranjeros, desventajosos en nuestras actuales circunstancias, hemos de crecer por esas mismas leyes, en industria y en capitales, hasta dónde sólo la imaginación puede alcanzar.

El Congreso ha tenido por una de sus reglas de conducta el ceñirse todo lo posible en la esfera de sus atribuciones, que, por otra parte, era bien extensa, y se ha abstenido de ser juez y de tomar ingerencia en los desacuerdos parciales que han turbado la paz de la Confederación durante los trabajos constituyentes. Se ha dolido de aquellos males; pero ha confiado siempre en que una vez puestas en ejercicio las autoridades nacionales, se establecería definitivamente el orden, y que los pueblos y gobiernos, guiados por la ley común, que señala derechos y obligaciones racionales, no podrán menos que contribuir a la felicidad de la patria.

El Congreso ha tratado de dar ejemplos de tolerancia, de espera y de moderación, de que necesita la República. Sus discusiones han sido templadas, reflexivas, sin que sus miembros aspirasen a otra fama que a la de buenos patriotas.

Su independencia ha sido absoluta de toda influencia, pero se ha mantenido siempre, sin violencia, en armonía con los otros poderes llamados a gobernar durante el período constituyente, porque ha reinado en ellos la misma moderación y patriotismo.

El Congreso no ha olvidado que el Director provisorio era el libertador de la patria, y que si la nación se hallaba en aptitud de darse leyes según su voluntad, era a los esfuerzos de aquel digno ciudadano a los que se debía una felicidad ambicionada y perseguida durante tantos y tan enlutados años.

La nación acaba de exigirle un sacrificio más. La nación se lo hará menos pesado, mostrándole que no ha sembrado sobre suelo ingrato los principios de su programa de mayo, convertidos hoy en ley en el código fundamental de nuestro nuevo pacto.



El Congreso tiene que hacer una solemne recomendación a sus compatriotas.

Una sola recompensa que pedirles en premio de sus desvelos por el bien común.

En nombre de lo pasado, y de las desgracias sufridas, les pide y aconseja: *obediencia absoluta a la constitución* que han jurado.

Los hombre se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos!

---

# INDICE





# INDICE



## CAPITULO I

Congreso Constituyente de 1852: Antecedentes. — La ciudad de Santa Fe: su ambiente. — Sesiones preparatorias del Congreso Constituyente. — Instalación del Congreso Constituyente. — Discurso inaugural del Congreso Constituyente enviado por el general Urquiza. — Discurso del Presidente del Congreso Constituyente, doctor Facundo Zuviría . . . . .

Pág.

7

## CAPITULO II

Sesión extraordinaria del Congreso Constituyente. — Nombramiento de dos comisiones especiales. — Contestación del Congreso Constituyente al general Urquiza. — Comunicación del general Urquiza al Congreso Constituyente agradeciendo la ley sancionada el 1º de diciembre de 1852 y la nota de su referencia. — Proyecto del diputado Gondra proponiendo la mediación del Congreso para resolver la cuestión de Buenos Aires. — Despacho de la comisión nombrada para informar sobre el proyecto del diputado Gondra. — Discusión del despacho de la comisión. — Proyecto del diputado Leiva autorizando al general Urquiza para que en nombre de la Confederación ofrezca su mediación en la cuestión de Buenos Aires. — Informe de la comisión encargada de dictaminar sobre el proyecto del diputado Leiva. — Ley autorizando al Director provisorio para que haga cesar la guerra civil en la provincia de Buenos Aires. — Minuta de comunicación. — El Director provisorio comunica al Congreso el envío de una comisión para resolver la cuestión de Buenos Aires. — Tratado del 9 de marzo de 1853. — El Director provisorio comunica al Congreso la imposibilidad de ratificar el tratado del 9 de marzo de 1853 . . . . .

25

## CAPITULO III

Despacho de la comisión de Negocios Constitucionales. Proyecto de Constitución para la Nación Argentina. — Discusión sobre la oportunidad del proyecto de Constitución. Lectura de un discurso del diputado doctor Facundo Zuviría. — Aprobación en general del proyecto de Constitución Nacional . . . . .

65



## CAPITULO IV



Discusión en particular del proyecto de Constitución. — Aprobación del preámbulo y del artículo 1º. — Discusión y aprobación del artículo 2º. — Discusión y aprobación del artículo 3º. — Discusión y aprobación del artículo 4º. — Aprobación de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10. — Discusión y aprobación del artículo 14. — Discusión y aprobación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. — Discusión y aprobación de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. — Discusión y aprobación de los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 64. — Discusión y aprobación de los incisos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del artículo 64. — Discusión y aprobación de los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 e incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 83 y artículos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. — Discusión y aprobación de los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107....

112

## CAPITULO V

El 1º de Mayo de 1853: Sanción de la Constitución Nacional por el Congreso Constituyente. — Discurso del Presidente del Congreso, doctor Facundo Zuviría .....

201

## CAPITULO VI

Lectura y aprobación de la minuta de declaración. — Lectura del proyecto de ley sobre capital: Su discusión y aprobación. — Discusión y aprobación de la minuta de comunicación al Director provisorio haciéndole saber que el Congreso firmó la Constitución el 1º de Mayo. — La comisión da cuenta al Congreso Constituyente de una entrevista celebrada con el Director provisorio en su cuartel general de San José de Flores. — Acta de la entrega de la Constitución Argentina al general Urquiza por la comisión del Congreso Constituyente. — Decreto del Director provisorio de la Confederación Argentina promulgando la Constitución. — El pueblo de la República jura respetar, obedecer y defender la Constitución Nacional. — Juramento del Presidente y Vicepresidente de la República. — Manifiesto del Congreso Constituyente al pueblo al clausurar sus sesiones .....

229

